

ALBERTO VALENCIA GUTIERREZ [EDITOR]

Exclusión social y construcción de lo público en Colombia



COLECCIÓN SOCIEDAD Y ECONOMÍA N°2



CIDSE



CEREC

Una frágil configuración de lo público va de la mano en Colombia con múltiples formas de marginalidad, discriminación, segregación y exclusión social. El Estado es por definición un espacio público, pero lo público no se reduce a lo estatal; tiene que ver también con los intereses colectivos de una sociedad, y en ese sentido tiene una presencia significativa en todo tipo de acontecimiento social.

El análisis de ambos aspectos de nuestra realidad, fue el propósito del VII Coloquio Nacional de Sociología de la Universidad del Valle, cuyas ponencias se reúnen en este volumen. Todas ellas ofrecen novedosos análisis del problema propuesto, y construyen miradas sobre la precariedad y los retos de la construcción de lo público en el Pacífico colombiano, las prácticas de la guerrilla y su relación con el funcionamiento de la política y de la vida social en una localidad determinada, el papel de los medios de comunicación en ambos temas, u las dimensiones regionales y nacionales del conflicto social y político que nos domina, entre otros.

Sus autores aportan y ofrecen al lector elementos de juicio para el análisis de las relaciones entre exclusión social y espacio público en Colombia, tema central en los retos sociales y políticos del país y de América Latina en las próximas décadas.



ALBERTO VALENCIA GUTIERREZ
EDITOR

**EXCLUSIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN
DE LO PÚBLICO EN COLOMBIA**

Cidse
Universidad
del Valle



© Centro de Estudios de la Realidad Colombiana – CEREC-
Carrera 22 No. 36-63 (301)
Santa Fe de Bogotá – Colombiana
Tels: 268 01 19 – 368 38 89
Fax: 368 46 39
Correo electrónico: cerec@colnodo.apc.org

© Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
CIDSE – Universidad del Valle
Ciudad Universitaria – Meléndez – Edificio 387
Cali – Colombia
Teléfono: 331 52 00
Fax: 339 32 21
Correo electrónico: cidse@chasqui.univalle.edu.co

Bogotá, octubre del 2001

ISBN: 958-8101-08-5

Edición: Martha Cárdenas y Hernán Darío Correa
Diseño y diagramación: Boris Cárdenas/Cerec
Carátula: Camila Cesarino Costa
Ilustración de carátula: Alejandro Mancera
Impresión: Nuevas Ediciones Ltda.

Cerec: Serie Textos No.37 (STO 37)
Cidse: Colección Economía y Sociedad No.2

PRESENTACIÓN

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Exclusión social y construcción de lo público en Colombia Alberto Valencia Gutiérrez	11
Género y exclusión social Dolores Juliano Corregido	27
Democracia, exclusión y construcción de lo público en Colombia Alvaro Camacho Guizado	51

TERRITORIO Y SOCIEDAD

Acerca de la fragilidad de los espacios públicos Odile Hofman	73
Exclusión social y gestión urbana: a propósito de Cali Fabio Velásquez Carrillo	97

IDENTIDADES Y EXCLUSIÓN

Ser hombre, negro y joven. Construcción de identidades masculinas entre sectores populares excluidos en Cali Pedro Quintín Quílez Fernando Urrea Giraldo	159
Los desplazados en Colombia: violencia y exclusión Nora Segura Escobar	199
Salsa, Ruma y creaciones culturales negras en las lógicas sociales de identidad y exclusión de la ciudad de Cali Elías Sevilla Casas	221

VIOLENCIA, CONFLICTO Y POLÍTICA

Procesos sociales y violencia en Colombia:
el caso de Urabá 255
Carlos Miguel Ortiz

Hobbes, el conflicto y los juegos evolutivos 265
Boris Salazar Trujillo

A propósito de la guerrilla: simetrías políticas
y exclusiones recíprocas 291
Mario Luna Benitez
José Fernelly Domínguez

MODELOS DE DESARROLLO Y EXCLUSION

Modelos de desarrollo y exclusión 341
Gabriel Misas

Opciones de desarrollo y exclusión social 355
Carlos Humberto Ortiz Quevedo

Modelos de desarrollo empresarial, organización
del trabajo y exclusión social 369
Carlos Alberto Mejía Sanabria

EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN

Integración social, exclusión y movilidad social:
los difíciles caminos de la educación 387
Dolores Juliano Corregido

Hacia una búsqueda del interés público
en la comunicación masiva en Colombia.
Criterios y líneas de acción 401
Fabio López de la Roche

La violencia y la memoria colectiva 417
Alberto Valencia Gutiérrez

Exclusión social y construcción de lo público en Colombia

Alberto Valencia Gutiérrez,¹

El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle (Cali, Colombia) organiza periódicamente un encuentro de investigadores en ciencias sociales de diversa procedencia (sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, entre otros) para discutir temas relacionados con la situación por la que atraviesa el país en el momento de cada convocatoria, y para hacer un balance informal y no exhaustivo (pero que se busca sea muy rico y productivo), de la manera como las ciencias sociales responden al reto de investigar e interpretar nuestra realidad.

La primera versión de estos encuentros se presentó en 1981 como conversaciones informales en un remoto salón de la Universidad, sin bombos ni platillos. Un grupo de profesionales en las ciencias sociales, sociólogos en su gran mayoría, nos reunimos durante varios días (con sus noches y su bohemia) para responder, desde la posición de cada cual, a la pregunta sobre el sentido de “hacer sociología” en

¹ Profesor Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Coordinador del VII Coloquio. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de dicha institución.

ALBERTO VALENCIA GUTIERREZ

Colombia. Veinte años después podemos afirmar que se trataba de un tema fundador de lo que iban a ser los seis coloquios siguientes. En 1985, con más ritual y ceremonia, en amplios escenarios y con participación abierta de estudiantes y un buen número de ponentes, la orientación del coloquio giró alrededor de un interrogante sobre lo que la sociología que hacíamos aquí podía decir sobre la Colombia del momento (*La Colombia de Hoy*, fue el nombre del evento). Dos ponencias acogieron plenamente la convocatoria y se refirieron a la coyuntura que entonces se vivía (la apertura democrática y el auge de la violencia) y las demás trataron temas relacionados con el mundo rural, la cuestión urbana, la relación entre la sociología y la literatura, las recientes tendencias demográficas y la Investigación Acción Participativa (IAP).

A partir de entonces el coloquio se convirtió en un ritual universitario, con discurso inaugural, escarapelas y cóctel (pero con aspiración a mantener un alto nivel intelectual), y llegó a ser un eje fundamental de la vida académica del Departamento de Ciencias Sociales. El objetivo primero de “hacer sociología” y de “medirle el aceite” a la investigación sociológica se fue volviendo cada vez más ambicioso y exigente.

En 1987, el fracaso de los regímenes militares en América Latina y el crecimiento desmesurado de la violencia en nuestro país, habían puesto sobre el tapete el problema de la democracia como una preocupación de alta prioridad para las ciencias sociales. El tema escogido para el encuentro de ese año fue, entonces, la relación entre democracia y sociedad. La idea era que todos los temas que se trataran se interrogaran, desde su perspectiva particular, por el problema de la construcción de la democracia. Esta coherencia nunca se logra plenamente en un encuentro académico de esta naturaleza, pero se hizo el intento con temas como la iglesia y la religión, los nuevos movimientos sociales y el poder local, la familia y la mujer, el trabajo de niños y jóvenes, la pobreza, el sindicalismo, la salud, la colonización, la violencia y el Estado.

Tres años después se lleva a cabo otro coloquio, en 1990, año crucial, a nivel mundial, por la crisis del socialismo y las grandes transformaciones geopolíticas, que en nuestro país coinciden con el cambio de modelo económico y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la “reforma” de la constitución, cuyos alcances aún no alcanzábamos a vislumbrar totalmente en ese momento. La propuesta en este nuevo encuentro era pensar hacia adelante (“predecir el futuro”), y hacer un balance de la investigación en cada campo de conocimiento, *ad portas* del siglo XXI. Las predicciones no fueron seguramente muy abundantes o acertadas, pero quedó un buen balance de lo que se hacía en ese momento en campos como violencia, narcotráfico, mujer y sociedad, democracia local, descentralización, amén de otros trabajos específicos en otros temas.

En el año 1993 convocamos de nuevo a nuestros colegas de las ciencias sociales para pensar en la relación entre territorios, regiones y sociedades, problema crucial en una sociedad donde “Estado y territorio nunca han coincidido”, según rezaba la convocatoria de aquel V coloquio. La colonización de zonas de frontera, la “contra reforma agraria resultado de la conversión de un sector de narcotraficantes en nueva clase terrateniente” y los cambios en las “formas de la vida urbana” (aparición de nuevos grupos sociales, nuevos usos del espacio urbano y nuevas demandas), entre otros aspectos, habían dado lugar a acelerados procesos de reconstrucción del territorio y a una especie de “re fundación de la sociedad”. Además, la constitución de 1991 había llevado a un primer plano el problema de la reorganización territorial del país, y había introducido con más fuerza que nunca el problema de la democracia social, la participación y la descentralización. Once ponencias –esta vez sí muy estrictamente– asumieron la orientación del coloquio desde muy diversos problemas (etnicidad, violencia, narcotráfico) y teniendo en cuenta la situación de regiones cruciales en la vida nacional: Urabá, Guajira, Amazonía, Sumapaz, Bajo Cauca Antioqueño, Sur Occidente colombiano y regiones de implantación guerrillera.

En el año 1996, en pleno auge de la crisis del modelo de gestión del narcotráfico imperante hasta ese momento, en vísperas de la mayor recesión que el país haya conocido en toda su historia, y en el umbral del agravamiento definitivo del conflicto de violencia en que aún estamos, se llevó a cabo el VI Coloquio con el tema *Cambios crisis y alternativas en la sociedad colombiana*. La propuesta era llamar a atención sobre “la creciente complejidad que la sociedad colombiana había adquirido en los últimos tiempos” en todos los órdenes. Con mayor fuerza que antes se dio participación a ponentes venidos de todas las disciplinas de las ciencias

sociales y se contó con el aporte de dos invitados de Chile y Argentina con el fin de dar mayor énfasis a la comparación entre Colombia y los países de la América Latina. Temas recurrentes se volvieron a plantear desde otros puntos de vista (violencia, conflicto, etc.) pero se introdujeron otros que nunca se habían formulado: política, ética y sociedad, globalización, etc. La IAP fue objeto de examen una vez más.

De cada uno de estos encuentros ha quedado una publicación que representa sin lugar a duda un importante patrimonio intelectual de nuestro departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle². Hoy en día podemos decir, con orgullo, que nuestro coloquio es una institución reconocida en el país. Ante la desaparición de otros congresos de sociólogos, es uno de los pocos lugares de encuentro a nivel nacional con que contamos hoy en día los que trabajamos en las ciencias sociales. Las memorias que hemos publicado quedan como testimonio para investigadores que quieran plantearse en el futuro, como tema de investigación, la pregunta fundadora, que formuló el primer encuentro: ¿qué es hacer sociología en Colombia?. Estos coloquios constituyen una parte fundamental de nuestro aporte al desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país.

El Séptimo Coloquio, cuyas memorias recoge este libro, se llevó a cabo en mayo de 2000. Las difíciles circunstancias que vive Colombia, y la crisis por la que atraviesa la Universidad del Valle desde mediados de 1998, daban a este encuentro un especial significado para nosotros. Cuando las circunstancias son adversas es necesario mantener muy en alto la exigencia del diálogo y la discusión, que es la razón de ser de la Universidad como institución productora de conocimiento. Los investigadores en ciencias sociales tenemos en este momento una inmensa responsabilidad frente a la situación nacional y la organización de un

² Las publicaciones han sido las siguientes: I Coloquio: Hacer Sociología en Colombia (Monografía No. 3, Cidse, Universidad del Valle, 1982); II Coloquio: La Colombia de Hoy (Cidse, Cerec, Bogotá, 1986), III Coloquio: Colombia: Democracia y Sociedad (Cidse, Fescol, Bogotá 1988); IV Coloquio Boletín Socioeconómico del Cidse Nos. 24-25; V Coloquio: Territorios regiones y sociedades (Departamento de Ciencias Sociales, Cerec, Bogotá, 1994); y VI Coloquio: Boletín Socio-económico del Cidse No. 31.

coloquio de esta naturaleza hacía parte del cumplimiento de nuestras obligaciones en este sentido.

El tema del encuentro fue la exclusión social y la construcción de lo público, que son asuntos centrales a los que las ciencias sociales en América Latina dan una importancia cada vez mayor. Los procesos de democratización que hemos conocido en las dos últimas décadas, el desarrollo de múltiples formas de participación e intervención ciudadana, la globalización, el auge de concepciones que ponen su acento en las bondades del mercado como forma suprema y exclusiva de regulación económica y social, han puesto sobre el tapete -positiva o negativamente- el problema de cómo articular el juego de intereses particulares, propio de toda sociedad, con la construcción de consensos inspirados en la búsqueda del bien común.

En Colombia la cuestión tiene un especial significado dada la inmensa dificultad que hemos tenido para construir un orden democrático. Las bases de legitimidad del régimen político han sido frágiles y el Estado no ha sido el garante y el representante de una unidad nacional. No sólo carece de una presencia física en el conjunto de la sociedad y del territorio sino que, aún teniéndola, su autoridad como tal no es reconocida. No ha logrado tampoco el monopolio efectivo de las actividades que definen su naturaleza: la violencia es ejercida por los grupos privados con gran autonomía; el clientelismo, el patrimonialismo y el mercantilismo han sido la regla cuando se trata de administrar o distribuir los recursos colectivos; la gestión económica ha estado casi siempre en manos del sector privado en detrimento del sector público; la ley no es más que un mero instrumento negociable al servicio de los intereses políticos del momento; lo legal y lo ilegal no están separados por un umbral nítido que los delimite. Los partidos han definido las formas de identificación y pertenencia colectivas, asumiendo el papel del Estado, hasta el punto de que los colombianos en lugar de un sentido de nacionalidad apelan a una identidad liberal/conservadora, como subculturas políticas de larga duración.

Una frágil configuración de lo público va de la mano en Colombia con formas múltiples de marginalidad, discriminación, segregación y exclusión en diferentes planos de la sociedad, que nos indican que las formas societales de gestión de los asuntos públicos son igualmente precarias: el incremento de los índices de pobreza e indigencia en los últimos años en ciudades y campos; la desigualdad en el acceso y el disfrute de los bienes y servicios producidos por el crecimiento económico; la discriminación de que son víctimas las minorías socio-raciales, las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los niños; la segregación socio-espacial característica de nuestras ciudades, etc.

Las relaciones sociales carecen, además, de mecanismos de regulación y de mediación hasta el punto de que las confrontaciones quedan abocadas a su propia suerte, como es el caso por excelencia de una violencia que, a pesar de su omnipresencia durante los últimos cincuenta años, no ha significado necesariamente la ruptura del orden institucional sino, por el contrario, ha llegado a constituir incluso un factor de estructuración de las relaciones sociales y políticas.

Todas estas razones hacen, pues, que el tema de la exclusión y de lo público tengan hoy en día una especial relevancia en nuestro medio nacional y subcontinental, en países que aún están en proceso de conformación de sus estructuras sociales y políticas y de creación e invención de los valores fundamentales de la convivencia y de la democracia.

La elaboración del concepto de lo público, y la generalización de su uso para orientar trabajos empíricos, es una de las principales tareas de la sociología contemporánea y uno de los mayores retos conceptuales y políticos frente al nuevo milenio.

El concepto de lo público tiene su origen en el derecho y, más específicamente, en el derecho romano. Lo público, en aquella acepción primitiva, era todo aquello que tuviera que ver con la relación entre el individuo y el Estado; y, lo privado, con la relación entre los individuos entre sí.

El concepto se mantiene durante siglos como patrimonio del derecho y la filosofía política, posteriormente lo asumen las ciencias políticas, y luego se difunde y se extiende a las ciencias sociales en general. Los debates actuales acerca del papel del mercado como regulador de la economía y las relaciones sociales lo han puesto en el orden del día.

Pensado en el marco de la sociología el concepto de lo público no se puede circunscribir a lo que tiene que ver con el Estado. El Estado es por definición un espacio público, pero no necesariamente lo público se reduce a lo estatal. Lo público tiene que ver también con lo que podríamos llamar los “intereses globales o colectivos de una sociedad” y, en ese sentido, tiene una presencia significativa en todo tipo de acontecimiento o movimiento social. La sociedad tiene intereses colectivos y formas propias de deliberación y decisión que no pasan necesariamente por las instancias del Estado. Lo público tiene, incluso, una decisiva presencia en el ámbito de las relaciones privadas, como forma de mediación o de regulación, de forma tal que por momentos es difícil definir el umbral que separa esos dos ámbitos de la vida en sociedad.

El desarrollo de las ciencias sociales no es ajeno a las concepciones políticas que en un momento dado predominan. En algún momento, hace treinta años, las expectativas puestas sobre la construcción del socialismo marcaron, positiva o negativamente, su desarrollo. Hoy en día asistimos en el mundo entero a un proceso generalizado de democratización de las relaciones sociales y políticas; los totalitarismos de derecha o de izquierda, y las dictaduras militares, quedaron afortunadamente atrás y la democracia está fuera de discusión, hasta el punto de que constituye el horizonte común sobre el cual tienen que definirse necesariamente las nuevas posiciones políticas en cualquier sentido que sea. El hecho de que las ciencias sociales se formulen el problema de la construcción de lo público, como lo están haciendo ahora, es, precisamente, un indicativo de que el problema de la construcción de una sociedad democrática se encuentra ahora a la orden del día. La construcción de lo público es la construcción de una sociedad democrática.

En épocas anteriores manejamos una imagen de la sociedad como resultado de una contraposición irreconciliable de intereses, entre los cuales había lucha, pero no puntos de encuentro.

Hoy en día sabemos que una sociedad como tal tiene intereses propios y globales que no se reducen a intereses de clases o de grupos. Y es precisamente alrededor de esos “acuerdos mínimos” como se construye una sociedad democrática y alrededor de los cuales se debe llevar a cabo, además, la deliberación y la adopción de las decisiones que afectan a la colectividad en cuanto tal.

Una democracia significa la definición de un estatuto del poder y una forma de descifrar las relaciones sociales. El poder en una democracia es revocable, temporal, está sometido a unas normas, su origen no está en la fuerza ni en la religión sino en aquellos sobre los cuales se ejerce y ante los cuales debe responder y sustentar racionalmente sus imperativos. La existencia de una sociedad democrática significa, igualmente, que el conflicto no es el resultado de una oposición con un enemigo externo o con un pretendido “mal” interno, sino un elemento constitutivo de las relaciones sociales y, como tal, un componente insuperable e, incluso, deseable de la vida social.

Y para que el conflicto pueda desenvolverse pacífica y creativamente, es indispensable que estemos de acuerdo en unos puntos comunes; hay que suponer unos intereses globales en la sociedad; hay que construir un “espacio tercero” que sirva de mediación para que la relación entre tu y yo logre escapar a la confrontación excluyente (“si tu eres, yo no soy; si yo soy, es porque tu no eres”) en cuyo marco se desarrolla y se despliega la violencia en todas sus formas. La exclusión no es sólo la segregación y la marginalidad; es un tipo de relación social que no reconoce al otro un derecho de existir.

La propuesta del VII Coloquio consistía en que cada uno de los participantes, desde la perspectiva en que trabaja, nos presentara su propia versión sobre la exclusión social y la construcción de lo público en Colombia de tal manera que se enriqueciera el debate sobre el tema propuesto, en sus dos vertientes y, en la medida de lo posible, en su doble dimensión, teórica y empírica. Se presentaron diez y nueve ponencias, contamos con la participación de dos invitadas extranjeras e invitamos a un alto funcionario del Departamento Nacional de Planeación para nos presentara los resultados del *Informe de*

desarrollo humano para Colombia preparado por esa entidad. Todos ellos hicieron aportes fundamentales a la discusión propuesta³.

Cuando se lleva a cabo la convocatoria de un coloquio no es fácil que los ponentes se refieran necesariamente al tema de la convocatoria, por razones diversas, que tienen que ver muchas veces con las características mismas de las ideas con que se convoca. Pero creo que en esta ocasión logramos que todas las intervenciones giraran alrededor de los temas propuestos, con énfasis en el uno o en el otro. En pocos momentos, hay que decirlo, nos encontremos frente a un intento por articularlos.

La referencia a la construcción de lo público aparece de manera explícita en la ponencia de Odile Hoffmann, una de nuestra invitadas internacionales, que muestra cual ha sido el proceso de conformación de un espacio público en una región del pacífico colombiano. A pesar de tratarse de un zona donde el Estado ha estado crónicamente ausente desde siempre, la autora nos muestra que la construcción de lo público ha sido una preocupación recurrente y permanente de los distintos actores sociales, que se ha tratado de impulsar y desarrollar desde tres frentes complementarios: desde el ámbito microsocio y territorial, desde las instituciones, y desde la acción colectiva (movimientos sociales y participación ciudadana). Sobre la base de casos concretos, pero rebasándolos, Odile nos propone pensar el problema de lo público en un esquema triangular en cuyos vértices habría que colocar el territorio, el actor y las instituciones; lo público funciona en cuanto tal “cuando existe cierta adecuación entre los tres puntos de anclaje”. Se trata, pues, de la elaboración de carácter general, más compleja y elaborada que, acerca del tema, encontramos en el coloquio.

³ De las ponencias presentadas no se han incluido aquí la ponencia presentada por Mauricio Cuervo, por que ya ha sido publicada en las memorias de otro coloquio. Ver *Memorias I Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura*, octubre 1999, Abayla, Quito, Ecuador, 200. Igualmente, contamos con la presencia de Alfredo Sarmiento, quien nos hizo una presentación del Informe de Desarrollo Humano para Colombia. Dada la dificultad de transcribir el tipo de conferencia presentada no lo hemos incluido en este volumen. Remitimos al lector al Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia, 1999, Departamento Nacional de Planeación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Misión Social.

Una indagación por el mismo tema de la construcción de lo público, o una reflexión sobre las consecuencias de su crónica ausencia, lo encontramos también en las ponencias relacionadas con la violencia, el conflicto y la política. Boris Salazar, utilizando la moderna teoría de juegos, describe y analiza la manera como se construye y reconstruye, por parte de una población compuesta por “agentes depredadores desigualmente dotados para sobrevivir y mantenerse”, un pacto social hobbesiano en las zonas de violencia, guerrillera o paramilitar. En la ponencia de Mario Luna y Fernelly Domínguez el tema de lo público está implícito en la reflexión que los autores nos presentan acerca el carácter político de la guerrilla o en la descripción que llevan a cabo de las estrategias que han utilizado las FARC para establecerse y manejar la vida de la población en la vereda de San Antonio en Palmira (Valle). Carlos Miguel Ortiz, por su parte, nos muestra cómo se han establecido históricamente los actores de violencia en la región de Urabá, donde existía (o existe aún) una absoluta ausencia del Estado, apelando al recurso de ofrecer, a los más diversos protagonistas, los “servicios” y las funciones propias de la acción estatal, en el marco de una “privatización de la función pública”, de la cual hacen parte los mismos funcionarios oficiales de la región.

El problema de la construcción de lo público aparece igualmente en la invitación que Fabio López nos hace en su ponencia a dar toda la importancia que se merece al papel que cumplen los medios de comunicación en la determinación de los intereses públicos o colectivos y a investigar los múltiples intereses que se mueven detrás de ellos (intereses estatales, privados, políticos, clientelistas). La opinión pública se ha vuelto un actor central en el conflicto de violencia que padecemos y los medios, como formadores de opinión, tienen unas tareas específicas que cumplir y unas normas que acatar en el manejo de la información que suministran. Hacia la definición de estas normas apuntan las propuestas que nos presenta el ponente al final de su texto.

No obstante la centralidad del tema de lo público en cinco del total de las ponencias, la gran mayoría de los participantes ha puesto el acento en procesos de exclusión social. Es cierto que el tema de la exclusión y el tema de la construcción de lo público se interrelacionan internamente, y que al hablar de la exclusión se hace referencia, necesaria e implícita, a la dimensión de lo público.

Pero el hecho real que hay que constatar en este conjunto de trabajos es que la exclusión se convirtió en el tema privilegiado y explícito de la mayor parte de las ponencias, aún sin establecer una relación directa con la otra dimensión del problema.

A partir de una bibliografía erudita y de la referencia a múltiples situaciones de segregación (los judíos, los homosexuales, los grupos raciales, etc.) Dolores Juliano, a cuyo cargo estuvo la conferencia inaugural, nos presenta importantes precisiones acerca de conceptos como marginalización, exclusión y violencia tanto sobre la historia de su desarrollo como sobre sus relaciones recíprocas (en el extremo de la marginalización está la exclusión y, en algunos casos, la violencia que elimina la diferencia). Nuevos temas han obligado a “complejizar” los modelos de análisis tradicionales de las ciencias sociales contemporáneas pero es sobre todo la categoría de género la que ha dinamizado la investigación. Introducir el tema del género en la reflexión sobre la exclusión social, con todas sus peculiaridades, es, pues, el principal aporte de nuestra invitada de España.

La ponencia de Fabio Velásquez, presentada en la mesa territorio y sociedad, se propone tratar el tema del carácter excluyente de nuestras ciudades a partir de la presentación de la situación de la ciudad de Cali, apelando al recurso de indicadores como desempleo, pobreza, acceso a la salud y a la vivienda, violencia, etc. En su presentación el autor articula con éxito la dimensión empírica y teórica del problema, y en este marco nos presenta un importante balance de las teorías de la exclusión. En el debate contemporáneo de las ciencias sociales en América Latina, nos explica Fabio, se pueden distinguir, al menos, tres enfoques: exclusión como marginamiento voluntario; exclusión como privación económica de bienes fundamentales; y exclusión como no pertenencia a una comunidad política. Cada uno de los enfoques ofrece una dimensión del problema y es de su combinación en los trabajos empíricos, y no de su unilateralización, de donde procede la mayor riqueza del concepto.

El tema de la exclusión aparece también en primer plano en una mesa dedicada especialmente al tema de la relación entre las identidades y la exclusión. Nora Segura, antigua colega del Departamento de Ciencias Sociales, nos presenta las características del drama del desplazamiento de población que ha vivido Colombia en los últimos años, que ya ha superado la cifra del millón quinientas mil personas. Fernando Urrea y Pedro Quintín nos describen la manera como grupos de jóvenes negros menores de 25 años construyen sus identidades masculinas en barrios populares de Cali, caracterizados por formas múltiples de segregación espacial y socio-racial y altísimos niveles de violencia. Elías Sevilla, en una ponencia que pretende estar a mitad de camino entre la sociología y la literatura, nos ofrece un panorama de la rumba y la salsa en Cali, como componentes de la manera como los habitantes “construyen la ciudad”, así “el fenómeno de la salsa pueda leerse como una instancia de exclusión racista” y no necesariamente como una práctica de integración ciudadana.

La exclusión es vista, también, en relación con los modelos de desarrollo y con las nuevas formas de organización del trabajo y la tecnología. Gabriel Misas nos describe con precisión las características de los modelos de sustitución de importaciones, imperante por más de cuarenta años, y el nuevo modelo de la apertura económica, desarrollado desde comienzos de los años noventa; mientras el primer modelo era excluyente por su manejo pero no por definición, el segundo es excluyente tanto en la práctica como en su definición misma. Carlos Humberto Ortiz, haciendo uso de la teoría de las ventajas comparativas, nos hace una presentación de los efectos excluyentes del nuevo modelo de apertura y nos muestra cómo su implantación se ha traducido en la reafirmación de la antigua vocación del país hacia la producción de bienes primarios y en una desindustrialización que ha significado un menor crecimiento económico y un atraso en la modernización. El Estado nunca se ha preocupado por la educación de la gente, porque esta opción no se ha considerado necesaria en el desarrollo de las actividades básicas de la economía. Y esta desidia estatal alimenta una forma suprema de exclusión social. Carlos Alberto Mejía, por su parte, sobre la base de una muy buena descripción de los cambios en los modelos productivos ocurridos en las últimas décadas, nos muestra el efecto que las nuevas tecnologías, tanto las duras (basadas en equipos y maquinaria) como las blandas (basadas en un rediseño de las estructuras organizacionales de las empresas) pueden

tener sobre el llamado desempleo tecnológico (aquel que no se debe simplemente a la recesión económica), y, por ende sobre una mayor exclusión social, en el sentido económico del término. Todo ello se produce en el marco de la llamada “crisis del trabajo” (o del salariado) en las sociedades modernas.

El problema de la exclusión aparece también en la reflexión que se lleva a cabo sobre la educación y la cultura. Alberto Valencia, sobre la base del supuesto de que la actual situación de conflicto y violencia sólo tiene salida en el largo plazo, a través de la educación y la cultura, enfoca el tema de la memoria colectiva que se construye en Colombia a partir de la “Violencia” de los años cincuenta, para mostrar cómo está se encuentra atravesada por un sentido fundamental de exclusión, presente en la forma misma que asume la construcción de las identidades en un país como el nuestro: “si tu eres, yo no soy; si yo soy, es porque tu no eres”. Dolores Juliano enfoca directamente el tema de la educación y, en una crítica muy argumentada a las teorías “reproductivistas” en boga en los años setenta (Althusser, Foucault, Bourdieu), muestra cómo la educación es un espacio que se puede utilizar en términos productivos, creativos y conflictivos (no meramente reproductivos) a través de mecanismos de control y de participación por parte de quienes la sufren y la disfrutan. La educación no debe ser vista simplemente como un espacio de reproducción de las desigualdades o de capacitación técnica sino de construcción de identidades. Y en este sentido puede llegar a ser un espacio potencial y fundamental de inclusión y no de exclusión. El tema de la identidad, como señalaba Valencia, es altamente sensible en la situación que vive Colombia en este momento.

Un intento de articulación entre los temas de lo público y lo privado lo encontramos en la ponencia de Alvaro Camacho, antiguo colega del Departamento, fundador y co-fundador de la serie de coloquios descritos. El autor considera que dos exigencias son básicas para el futuro de esta sociedad: el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población y la construcción de un espacio público democrático; no obstante, la realización de estas dos condiciones se encuentra obstaculizada por una serie de prácticas que, inscritas en una tensión entre el Estado y la sociedad, encarnan tendencias estatistas o antiestatistas o reproducen las dos tendencias: el clientelismo y la corrupción; el rebusque; la desigualdad y la violencia; y el narcotráfico.

La confrontación entre Estado y sociedad constituiría, pues, el espacio en que Camacho nos invita a pensar los dos temas básicos del coloquio.

La importancia de un libro como este es precisamente el hecho de que constituye también un documento para la posteridad, no solo porque da cuenta de un momento particular de la situación colombiana, sino también porque se convierte en un insumo para la construcción futura de una “sociología de la sociología” en Colombia. Dentro de algunos años podremos investigar en estas páginas la manera como pensábamos los investigadores en ciencias sociales y en un momento dado y los problemas que nos formulábamos.

La convocatoria del coloquio era una invitación a pensar la exclusión social y la construcción de lo público en Colombia. El énfasis que los ponentes han puesto en el tema de la exclusión social se puede deber a las características mismas de la convocatoria, en la que seguramente aparecía más acentuado este aspecto. Pero es también posible que se trate de un rasgo que nos diga muchas cosas sobre la sociología colombiana. Nos encontramos frente a múltiples formas de exclusión y a una precaria consistencia de lo público. Somos sensibles frente al primer problema, pero no lo somos tanto frente a la fragilidad de las instituciones básicas que definen el sentido y la razón de ser de nuestra vida colectiva. En otros lugares del planeta no ocurre lo mismo. La tendencia que ha mostrado este coloquio nos invita a reflexionar con mayor detenimiento en el problema de nuestras propias carencias en la manera de pensar la sociedad que nos ha tocado vivir, sufrir y pensar.

A nombre de la Universidad del Valle y de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas quiero agradecer a todas aquellas personas que con su generosa participación hicieron posible la realización de este encuentro.

Hago mención especial de las profesoras Dolores Juliano, de Barcelona y Odile Hoffman, de París, que han hecho el viaje desde sus países de origen para estar con nosotros. Agradezco igualmente a todos los ponentes que nos

acompañaron y a las personas que aceptaron la difícil tarea de moderar las mesas redondas.

Quiero agradecer igualmente a las instituciones y a las personas que han hecho posible la financiación de este evento. A la Dirección universitaria (Dr. Oscar Rojas, Dra. Martha Pérez, Dr. Alvaro Guzmán) que ha hecho lo imposible porque se realice a pesar de la crisis; a la Fundación Carvajal y su presidente Dr. Luis Fernando Cruz; a la gerencia regional del Banco de la República y su director el antropólogo Fernando Barona; a la empresa Harinera del Valle y su gerente el Dr. Carlos Arcesio Paz; a la Fundación Fescol y su presidente el Dr. Hans Blumenthal; a la Fundación Foro y su directora la socióloga Esperanza González; a la Cámara de Comercio su presidente Dr. Julián Domínguez y el director de la Oficina de Convivencia, Dr. Oscar Echeverry. Al ICETEX y su directora Clara María Navia y su directora de relaciones internacionales Dra. Ruth Giraldo Diez. Cada uno de ellos ha contribuido con generosidad y entusiasmo, conscientes de que el apoyo que nos prestaban era igualmente un apoyo a la Universidad pública y, más en particular, a la Universidad del Valle en este difícil momento de su historia.

Quiero reconocer igualmente la colaboración y la labor del Comité Organizador: los profesores Fabio Velásquez y Pedro Quintín. La gratitud se extiende, igualmente, al personal administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; los estudiantes del plan de socióloga que han colaborado y, además, movilizado sus pares en todo el país; nuestra diligente colaboradora la estudiante de sociología Erika Duque; y los estudiantes y profesores de Manizales, Pasto, Bogotá, Medellín y Popayán, que nos honraron con su presencia.

La edición final de este libro se debe a la colaboración la Universidad del Valle, Fescol y Cerec. Agradecemos muy especialmente a Martha Cárdenas, Hernán Darío Correa y todo el equipo del Cerec por el interés y el extraordinario empeño que han puesto en su publicación.

GÉNERO Y EXCLUSIÓN

Dolores Juliano¹

INTRODUCCIÓN

Podría parecer que presentar una ponencia sobre “género y exclusión” en un coloquio sobre “exclusión social y construcción de lo público en Colombia” implique un triple desplazamiento, casi se podría decir una triple herejía: porque la perspectiva de género resulta marginal en el contexto de violencia que azota este país; porque la aproximación desde la antropología resulta más o menos heterodoxa en un simposio de sociólogos; y porque una aproximación desde marcos teóricos generales puede parecer demasiado distante con relación a la problemática concreta en que se centran las participaciones.

Sin embargo, los organizadores del Coloquio han estimado oportuno incorporar esta heterodoxia, y yo les agradezco profundamente que me hayan invitado a desarrollar este tema, que creo pertinente por varios motivos.

En primer lugar, por simples criterios de justicia. La histórica marginación social, económica y política de las mujeres, que pese a constituir la mitad de la población y aportar las dos terceras partes de las horas de trabajo que se realizan en el mundo y sólo disponen de una décima parte de los recursos económicos, ya de por sí justifica dedicarles un ámbito específico en un análisis sobre exclusión social.

¹ La autora, de origen argentino, es profesora de antropología social de la Universidad de Barcelona, ciudad donde vive desde 1977. Es investigadora también del institut de Recherche pour le Developpment (IRD) de París.

Pero este criterio se refuerza con consideraciones sobre la pertinencia epistemológica del tema, desde dos vertientes: la relevancia de la dimensión de género en la génesis teórica del problema y el aporte de la epistemología feminista en la construcción de los actuales marcos de interpretación. El caso de las mujeres resulta, entonces, especialmente interesante porque ilustra y permite, por extensión, entender otros procesos (aporte empírico) y porque cuestiona explícitamente los modelos de interpretación más reduccionistas y lineales (aporte epistemológico).

Además, si el resultado de los análisis teóricos se dirige, como creo, a la propuesta de estrategias y soluciones posibles, la incorporación de la perspectiva de género hace posible analizar y recuperar prácticas incluidas en la “memoria colectiva” de las mujeres que permiten postular vías alternativas en la negociación y la solución de conflictos.

Si esto es así, una aproximación general, realizada desde la antropología que tradicionalmente se ha ocupado del estudio de las culturas entendidas como ámbitos de generar significados, nos permite aproximarnos a la exclusión social como un fenómeno leído socialmente y construido como significativo a través de mecanismos complejos, que enriquece nuestra interpretación con las perspectivas y experiencias de los “nuevos actores sociales” que, como en el caso de las mujeres, resultan nuevos solamente desde la reciente atención que se le presta a sus tradicionales estrategias de interacción social.

Marginalidad, exclusión y violencia

Desde la mirada de la economía mundializada, los excluidos se caracterizan por no tener un papel en la sociedad global. No son tenidos en cuenta como productores (ni siquiera potenciales al estar excluidos del mercado laboral) ni como consumidores (por carecer de recursos). Desde este punto de vista son considerados población sobrante.

Los análisis demográficos que hablan de “exceso de población” ven desde esta perspectiva una parte importante de la población mundial, calculada en un tercio, que se mantiene (o es mantenida) fuera de los circuitos económicos mundiales. Sobre estos sectores se planean o toleran políticas de “ghetización” o de exterminio. Históricamente los grupos cazadores-recolectores, o las poblaciones indígenas cuyas tierras se codiciaban, han sido objeto de campañas de exclusión total y sistemática, mediante matanzas masivas. En la actualidad la violencia ejercida sobre los “menhinos da rua” en Brasil, las masacres de los “desechables” en Colombia, o la indiferencia mundial sobre las hambrunas o las guerras en Africa, ilustran el mismo fenómeno.

Pero estas políticas de exterminio se legitiman previamente mediante discursos discriminatorios. Arantzazu González (2000) señala que en el siglo XIX había tres grupos que eran objeto de una ideología discriminatoria equivalente: los judíos, las mujeres y los homosexuales.

La ideología preparó el campo e hizo posible que se materializaran políticas específicas, entre ellas las excluyentes de la “solución final”. El análisis de estas estrategias de exclusión ha centrado desde mediados del siglo XX la atención de las investigadoras. Arendt (1998) desarrolla como eje de su trabajo más importante (*Los orígenes del totalitarismo*, publicado en 1950), la idea de que los regímenes totalitarios se constituyen y legitiman a partir de la exclusión ideológica, económica, social e, incluso, de la eliminación física de sectores previamente catalogados como “otros” irreductibles. El ejemplo de las matanzas de judíos durante la segunda guerra, sirve de base a su argumentación, que es la primera en resaltar los vínculos entre políticas de exclusión y organización y reproducción de sistemas políticos concretos. Sin embargo, la correlación entre exclusión social y Estados totalitarios es sólo una de las formas posibles que puede tomar este fenómeno. Cualquier sector social que se apoye en una categorización rígida y excluyente de la pertenencia, puede demonizar al clasificado como “otro” y tipificar la convivencia como imposible. Así las prácticas violentamente xenófobas, las limpiezas étnicas, la eliminación de los que difieren en materia religiosa, social o política, pueden ser

encaradas desde distintos sectores sociales, siendo los más activos los que por su mayor proximidad social o económica pueden encontrar más amenazadora la existencia del otro, para la conservación de su propio estatus².

Sin embargo, no con todos los grupos estigmatizados se sigue el mismo proceso. En el caso paradigmático de los judíos, a la estigmatización siguió la práctica excluyente de la “solución final” (también intentada con algunos sectores de homosexuales). Se empleó, entonces, la violencia para eliminar la diferencia. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la estigmatización derivó, no hacia la exclusión sino hacia la marginalización, a través de la violencia simbólica o el maltrato, utilizándose la violencia como un reaseguro de que se mantendría la diferencia, y no para eliminarla.

El concepto de “marginación social”, pese a que se refiere a fenómenos tan antiguos como a los de exclusión, tiene una aparición mucho más tardía en las ciencias sociales y se vincula a sectores, como las mujeres, que tienen una presencia forzosa, aunque desvalorizada en la estructura social. Lo incorpora la escuela de Chicago a finales de la década de los sesenta en trabajos como los de Park (1967), que se centra en los desplazamientos, o el de Dickie Clark (1966) que analiza la exclusión en las relaciones sociales. Según lo propuesto por Teresa San Román (1990) la marginalización tiende a colocar a ciertos colectivos o sectores sociales en posición desventajosa con respecto a aquellos que detentan el poder. Tal sería el caso de los campesinos, minorías étnicas o mujeres (en general todo lo que se suelen denominar subculturas). Miranda (1988) propone que la incorporación del concepto de marginación implica una reformulación y una extensión al ámbito de las relaciones sociales de los conceptos de “pobreza” y “pauperismo” ampliamente utilizados por los reformadores sociales del siglo XIX. Esta conceptualización cubría el vacío teórico que producía la división del mundo en clases sociales y centraba el interés en un sector que el marxismo no había legitimado.

² La presencia de blancos pobres entre los miembros del Ku-Klux-Klan en EE. UU. o de sectores de clases medias entre los fundamentalistas islámicos, así como la existencia de visiones rígidas y demonizadoras de los adversarios en distintos sectores de la sociedad colombiana (González 1999) pueden ilustrar la utilización de estrategias excluyentes en sectores no estatales.

La utilización ideológica del concepto de pobreza (como equivalente de la marginación económica) ha sufrido por su parte un desplazamiento: de una idea de pobreza como marca divina (estigma o señal de salvación) en la que ser pobre era formar parte de una lógica religiosa del mundo (Himmelfarb) se pasa a ver los pobres como subculturas específicas, más o menos estáticas (Lewis), para terminar construyendo agrupaciones categoriales discontinuas en las que la marginación se categoriza con relación a descensos en la estructura social, subrayando las relaciones jerárquicas, más que los lazos horizontales entre los pobres. Este énfasis en las relaciones verticales vuelve a centrar los marginados económicos en el ámbito de la cultura, aunque desde una perspectiva diferente a como lo planteaba Lewis. Si para él lo interesante era descubrir a partir de qué estrategias relacionales y qué implicaciones emocionales los marginales asignaban significado a sus experiencias, en la actualidad el interés se ha desplazado a tratar de entender los mecanismos mediante los cuales sociedades fuertemente jerarquizadas, y con una creciente desigualdad en la asignación de recursos entre sus miembros, legitiman esa asimetría a través de la asignación de características especiales a los discriminados. Esta orientación ha permitido poner de relieve el hecho que coinciden las franjas poblacionales con acceso diferencial a los recursos (o con deprivación de los mismos) con rotulaciones raciales, étnicas o de género.

Biologizar estas interpretaciones como hacía el viejo racismo, o asignarlas al campo de las diferencias culturales “racializadas”³ a su vez como esenciales y permanentes, como hace el multiculturalismo diferencialista⁴, cumple en la práctica la misma función: rotular como “otros” inasimilables a aquellos que han resultado desposeídos. Desde el punto de vista del "sentido común" (Gramsci 1985) estas rotulaciones "explican" la marginación. El hecho que las mujeres, que constituyen la mitad de la población del mundo, dispongan solamente de una décima parte de los recursos, o que los negros africanos tengan las mayores tasas de desnutrición y mortalidad por hambre, o que los indo-americanos constituyan en cada uno de los países en que habitan los sectores más privados de recursos, aparece a los ojos de mucha gente como una consecuencia natural de diferencias físicas y culturales.

³ Ver al respecto el análisis de Allegret (1994)

⁴ Para un buen análisis del diferencialismo cultural y sus correlaciones con el racismo de bases biológicas ver San Román (1995) y Taguieff (1987). Stolcke(1995) ha desarrollado la misma idea bajo el rótulo de “fundamentalismo cultural”.

Pero en las últimas décadas se han hecho algunos esfuerzos por afinar más las conceptualizaciones, a fin de poder analizar mejor las articulaciones internas. En las sociedades complejas modernas se ha hecho visible la interrelación de los dos tipos de procesos: los de marginalización y los de exclusión. El resultado de las prácticas de marginalización es un acceso menor a los recursos económicos y al poder. Lecturas desvalorizadoras y prácticas discriminatorias tienden a hacer ver esta situación como normal. Sobre los marginados se aplica sistemáticamente la violencia simbólica de asignarles la responsabilidad de su precaria situación. En el extremo de los procesos de marginalización nos encontramos con la exclusión social.

Si bien el marxismo señalaba la importancia de la violencia para el mantenimiento y la aceptación de la desigualdad social, tendía a limitar su acción a las áreas periféricas del capitalismo o a la “acumulación primitiva”, considerando que en su interior los mecanismos económicos eran suficientes para garantizar su continuidad y expansión. El término de “violencia simbólica” fue acuñado por Bourdieu para denunciar las presiones y manipulaciones no físicas que forman parte constitutiva del entramado social. Ambas vertientes de la violencia, la física y la simbólica, coexisten en todas las sociedades jerarquizadas y Harvey y Gow (1994) señalan que los análisis sobre este tema se han ido desplazando desde la perspectiva funcionalista que las consideraba un fenómeno periférico y ocasional, un “colapso del orden social”, a la visión actual que la considera parte integrante de la estructura. Las obras de Foucault son significativas de este cambio de orientación.

Tanto en el caso de la marginalización como en el de la exclusión, la violencia juega un papel crucial en su mantenimiento y aceptación; pero este papel es distinto.

En el primer caso tiende a lograr que los marginalizados acepten su situación subalterna⁵ y se incrementa cuando hay movimientos reivindicativos o cualquier tipo de contestación; en el segundo se dirige a la eliminación de los excluidos y se legitima por su presunta imposibilidad de integración. Esta es la violencia a la que se refiere Restrepo (1997) cuando la define como “*intolerancia frente a la diferencia y resistencia a permitir su aparición y crecimiento*” (p.105); pero es sólo una de las caras de la moneda, la excluyente, la que se materializa en actitudes tales como las “limpiezas étnicas”. Por su parte, la violencia marginalizadora, actúa sobre todo en el plano de lo simbólico y tiende a preservar las diferencias mediante la asignación de puestos sociales diferentes y jerarquizados.

CORRIENTES QUE CONFLUYEN

Hasta mediados del siglo XX las ciencias sociales, siguiendo el modelo de las naturales, se empeñaron en la tarea de descubrir leyes generales. Incluso la antropología, caracterizada por su fascinación por los casos particulares, los analizaba con el objetivo – indefinidamente pospuesto, pero no abandonado - de establecer a partir de ellos propuestas de validez general. La ahistoricidad del funcionalismo se relaciona con este proyecto. Pero los “eventos” reclaman con fuerza su lugar en la generación de teoría a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento particular, el exterminio de los judíos, producido sobre un sector marginal de la población (y más concretamente la política que transformaba ese sector marginal, en sector excluido) influye por dos vías en los análisis sociales: en

⁵ Guillemin (1997) analiza cómo, durante la Revolución Francesa, se alternaron las medidas políticas y el uso de la fuerza para impedir que el poder escapara de manos de los propietarios y fuera a parar a sectores carentes de recursos (estrategias de marginalización). Aunque en su análisis hay omisiones, pues no señala que durante ese proceso las mujeres fueron excluidas de los derechos civiles, muestra claramente la correlación entre marginalidad económica y marginalidad política, aún en los casos en que teóricamente se están produciendo revoluciones sociales, es decir procesos de reacomodación de los sectores marginales.

primer lugar deslegitimando las interpretaciones de base racial⁶ con lo que produjo una reformulación de la discriminación en términos culturalistas; y en segundo lugar, obligando a incluir en los análisis las consecuencias generales de las políticas realizadas sobre sectores marginales. Esta inclusión de lo que hasta entonces habían sido “corrientes subterráneas de la historia” (Arendt 1998: 17) se realiza, sin embargo, dentro del marco de los paradigmas previos, aunque manifestando una creciente incomodidad por las limitaciones que imponían sus conceptos claves: clases sociales, progreso, anomia, estructura social.

La gran reformulación teórica que en las últimas décadas del siglo está sacudiendo las ciencias sociales (autocrítica, descentralización del objeto, conocimiento posicionado, reconocimiento de la condición de artefactos construidos de los informes científicos), no se ha producido, entonces, sólo a partir de preocupaciones teóricas del mundo académico, sino que también es la consecuencia de demandas y presiones externas. Se genera a partir de la incomodidad que producía la distancia entre la nitidez de los marcos teóricos y la imprevisibilidad de los eventos y por la actividad de sectores a los que se había visto como "objetos" de la investigación, y que, al reclamar su condición de "sujetos", reformulaban, y obligaban a reformular, la misma base teórica desde la que eran leídos.

Estas presiones combinadas producen un giro en lo que Foucault denomina "sistema general del pensamiento". El feminismo, en primer lugar, pero también voces que hablan desde los marginados por rótulos étnicos o raciales, generaron demandas de interpretación que han obligado a complejizar los modelos de análisis de la realidad social, aceptando no sólo la incorporación de nuevos actores, sino también la posibilidad de visiones múltiples. Esto es lo que Geertz conceptualiza como "collage cultural" pero que también puede entenderse de una manera más dinámica, en lo que Clifford llama “interpretación polifónica de la cultura”.

⁶ Lévi-Strauss, C. 1952, Gordon, M. M. 1964, Littlefield, A.; Lieberman, L. y Reynolds, 1982.

Las corrientes productivistas, los estudios de sectores marginales, el énfasis en el rescate de las experiencias individuales para entender mejor los procesos sociales y el nuevo desarrollo de los *Cultural Studies*, confluyen con corrientes ya apuntadas en las décadas anteriores, como el análisis sistémico, la teoría del caos y la sociología dinámica. Complementariamente, desde la década de los 70, la categoría de género ha comenzado a utilizarse de una manera habitual en los estudios históricos y sociales (Scott 1986, Harvey y Gow 1994).

Con el derrumbe de las viejas certezas que, según O. Harris, caracteriza el postmodernismo, hay cierta tendencia a desistir de encontrar significados y refugiarse en un esteticismo individual. Pero el colapso de nuestros modelos interpretativos no certifica el fin de los problemas sociales, muy al contrario son estos precisamente los que están presionando desde abajo para obligar a construir nuevas y más flexibles interpretaciones.

Si bien a nivel mundial la corriente reivindicativa que ha tenido más peso en el replanteamiento epistemológico ha sido el de género, en América Latina este papel dinamizador lo han cumplido las reivindicaciones indígenas y las de otros grupos étnicos. En Colombia, además, el desafío teórico ha estado en entender la presencia continuada del fenómeno de la violencia. La necesidad de buscar explicaciones no deterministas y de desarrollar modelos complejos que tengan en cuenta los factores históricos y las condiciones económicas, pero también los condicionamientos locales y las opciones de distintos actores sociales, ha dado impulso a investigaciones que se realizan a partir de las nuevas propuestas de las ciencias sociales⁷.

En todo el continente, la atención de las ciencias sociales se dirige crecientemente hacia la articulación de los procesos de marginalización con los procesos de exclusión social.

⁷ Ver González 1999, Zuleta 1994, Camacho y Guzmán 1990, Pecaut 1988 y Franco 1999.

Esto no es sólo la consecuencia del cambio de los marcos interpretativos, a partir de la crisis de paradigmas que han originado las tendencias posmodernas, con su énfasis en el análisis de los límites de los sistemas. Es también, y principalmente, la consecuencia de los cambios en las políticas sociales que se han dado en las décadas de los ochenta y de los noventa, que han tenido como consecuencia objetiva un aumento considerable de la marginación, que a su vez ha generado bolsones significativos de población excluida. Como señala Valencia (1999), ha cambiado radicalmente el modelo de crecimiento y acumulación implementado en el continente, que ha pasado de un estilo de desarrollo basado en la exportación de recursos naturales, la industrialización sustitutiva de importaciones, el apoyo del gasto privado y una política redistributiva apoyada en el gasto público, al modelo neoliberal apoyado en las empresas privadas y la lógica del mercado, lo que ha implicado en la práctica una reducción del gasto público, baja de los salarios, aumento del riesgo de despido y menor protección ante las enfermedades y la vejez, es decir, un aumento de la vulnerabilidad social⁸. Esto ha hecho que aunque la última década sea de progreso económico global, se haya incrementado la informalización de la economía, precarizado la situación económica de grandes sectores de población⁹ y se haya acentuado la discriminación de determinados grupos, entre los que se encuentran las mujeres.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, aún más interesante que analizar los mecanismos a partir de los cuales una sociedad margina, o directamente excluye a una parte de su población, es ver que tipo de estrategias de supervivencia desarrollan estos sectores y que influencia tienen sus prácticas en la redefinición de la sociedad como un todo. Luego del auge y la crítica de las corrientes funcionalistas, incluso en su vertiente reproductivista, en la actualidad se tiende a recuperar la dinámica social que se origina desde los márgenes.

⁸ Un proceso semejante ha sido descrito, para Africa, por Pérez de Armiño (1999)

⁹ Como indicadores de esta situación suelen señalarse los datos referentes al mantenimiento de altas tasas de desempleo, la informalización creciente de la economía, el aumento de la disparidad de ingresos y el debilitamiento del poder de los sindicatos.

Moore (1997) subraya las posibilidades que abren las nuevas interpretaciones hermenéuticas para analizar las re-definiciones, la contestación y el cambio social, al incluir entre sus variables de definición la contradicción y el solapamiento entre discursos múltiples coexistentes, que a su vez pueden ser asumidos o rechazados por cada uno de sus actores, tanto a nivel teórico como en su actualización cotidiana, produciendo todo tipo de concreciones posibles. Pero de alguna manera, el modelo funcionalista de consenso social y sus críticas reproductivistas (Bourdieu y Passeron, Foucault) marcan la mirada que las ciencias sociales lanzan sobre la sociedad, y lleva a priorizar interpretativamente los mecanismos de reproducción sobre los de cambio social. Aunque los antropólogos asumen actualmente el cambio como auto-evidente (Harris p. 12), hay una tradición mucho mayor de analizar los elementos que permiten el mantenimiento de las pautas sociales. Así el discurso científico tiende a centrarse en los fenómenos de reproducción social, priorizando el análisis de mecanismos tales como la interiorización de las normas por parte de los subordinados, las presiones sociales y el recurso esporádico a la violencia.

Sin embargo, la realidad misma de las nuevas estructuras de globalización en las que todos estamos insertos, nos obligan a poner en el centro de nuestro análisis el cambio tanto como la permanencia. El desarrollo de la capacidad productiva propia del capitalismo avanzado y la imposición a nivel mundial del neoliberalismo, determina modificaciones técnicas, económicas, demográficas, sociales y culturales.

Esto es aún más evidente si lo que se analiza es el conjunto del sistema. La globalización es el resultado de una fuerte concentración del poder económico y político y tiende a producir una sociedad jerarquizada a nivel mundial. Los sectores dominantes cuentan, entonces, con posibilidades reales de difundir (e imponer) sus estrategias de poder en una escala que no tiene parangón con las posibilidades de que ha dispuesto ningún otro grupo a lo largo de la historia. Pero la mundialización misma genera sus propias contradicciones. La brecha entre los que tienen acceso a los recursos y los que carecen de ellos (entre los positivos y los negativamente privilegiados en términos económicos, como diría Max Weber) se acrecienta continuamente y esto produce conflictos sociales, guerras y desplazamientos de población.

En el ámbito de los discursos, a partir de los cuales se "explican" y legitiman las prácticas hegemónicas, se generan contradicciones entre las propuestas humanistas desarrolladas desde la Ilustración (libertad, igualdad, fraternidad) y la necesidad de justificar unas prácticas de mercado que implican enormes costos sociales y humanos. El discurso hegemónico, entonces, presenta fracturas internas que, además, se incrementan en los intentos por adecuarse a cada capa de consumidores potenciales. Pero como ya subrayaba en un trabajo anterior (Juliano, 1985), también los otros sectores sociales, los marginales y los excluidos, los que no disponen de privilegios económicos ni sociales, son activos en generar discursos e interpretaciones de la realidad. El resultado es un complejo entramado de representaciones, de diverso alcance y potencial explicativo, que puede utilizarse conflictiva y contradictoriamente como guía de acción.

El proclamado "fin de las ideologías" no tiene entonces que ser visto como el fin de los intentos de cambio social (cada vez más necesarios y urgentes), sino como el derrumbe de los modelos simples y deterministas, que veían este cambio como fundamentalmente económico (ciertas versiones del marxismo dogmático) o fundamentalmente moral o religioso (idealismo y fundamentalismos). El cambio social se produce en la práctica cotidiana (que es también, como muestra Foucault, un espacio donde se reproduce la estructura del poder) y en éste ámbito el papel de cada sector, y de las estrategias organizativas que genera, es determinante. Es en las interacciones múltiples donde se desarrollan las propuestas organizativas alternativas a partir de las cuales se socavan las "verdades hegemónicas" y se construyen interpretaciones alternativas.

El género de la exclusión

En el caso del género es claro que las mujeres, como conjunto, no son un sector del que se pueda prescindir.

La discriminación va frecuentemente en este caso en el sentido de marginalizarlas de los ámbitos de poder y del acceso igualitario a los recursos. La violencia ejercida sobre ellas transforma, como lo analiza Toren¹⁰

(1994) para el caso particular de las islas Fiji, relaciones de diferencia laboral, potencialmente simétricas, en relaciones jerárquicas. Pero que la estrategia global sea la de marginalización, no significa que no existan exclusiones puntuales (como la señalada de los derechos civiles durante la Revolución Francesa) o sectores excluidos, sobre los que se ejerciten estrategias aún más duras de aislamiento o eliminación. Así en ciertas sociedades en que los recursos económicos están monopolizados por los hombres, las huérfanas, las viudas o las divorciadas suelen encontrarse sin acceso a fuentes legítimas de recursos y reciben una fuerte desvalorización social que puede llegar a su eliminación física. Procesos de este tipo, en que la exclusión social y económica puede desembocar en la eliminación física, han sido estudiados para las acusaciones de brujería entre los siglos XIV y XVIII en Europa (Sallman 1992), o analizados para una época más reciente por A. Sen (1990) en Asia y Africa, a través de la desatención sistemática de la salud de las niñas, el infanticidio selectivo o los accidentes provocados. El conjunto de estas prácticas de exclusión consiguen como resultado una fuerte disminución del número de mujeres previsible por criterios estadísticos, con lo que se consume en la práctica la lógica genocida latente en todo proceso de exclusión.

Pero la violencia material, que incluye los maltratos cotidianos y los asesinatos de mujeres por sus compañeros sentimentales, que tan frecuentemente aparecen en las crónicas policiales, no podría aceptarse socialmente si no estuviera acompañada de una desvalorización previa, de una violencia simbólica ejercida sobre los sectores marginalizados, y que revierte sobre ellos la responsabilidad de las carencias que padecen. Esta es la estrategia más sistemáticamente ejercida sobre las mujeres. La presentación de su posición subordinada como consecuencia natural de sus características físicas y psíquicas tiende a desculpabilizar a la sociedad marginadora.

¹⁰ El artículo señala que los golpes (por celos o por mal servicio) con que los maridos agreden a las mujeres en los primeros años de matrimonio, transforman las relaciones igualitarias previas, materializadas en bromas y complicidades entre novios, que son a su vez primos cruzados, en una relación jerárquica.

Para que este discurso pueda funcionar con eficacia es necesario previamente deslegitimar las propuestas surgidas desde las propias mujeres y reemplazar sus discursos por los elaborados desde los sectores marginalizadores. Esta estrategia de poder se ve facilitada por el hecho de que las elaboraciones de las mujeres de sectores populares no se apoyan normalmente en discursos explícitos sobre sus opciones y valores, sino que utilizan lo que Carrithers (1995) denomina *pensamiento narrativo*. Esto significa que actúa a partir de analogías, se apoya en relaciones sociales concretas, y se preocupa más de la efectividad, que de la coherencia lógica que caracteriza el pensamiento *paradigmático*, propio este último de los sectores dominantes y de sus equipos de intelectuales. Así la invisibilización de sus demandas se apoya en las diferencias de sus estrategias expresivas.

El problema consiste, entonces, en revertir las lecturas y entender cómo, a través de cierto tipo de rotulaciones y asignaciones de particularidades específicas, se legitima pagar a los marginados salarios menores por el mismo trabajo¹¹, excluirlos de la propiedad de la tierra y de otros medios de producción¹², o considerar trabajo no cualificado aquel cuya especialización se realiza fuera de los canales institucionales, como es el caso de los trabajos considerados femeninos o el de cualquier tipo de artesanías. Así, ciertas conceptualizaciones y asignaciones de roles, socialmente construidas, generan prácticas económicas discriminatorias que terminan colocando objetivamente a los sectores estigmatizados en la posición subordinada (económica¹³ y socialmente) que se consideraba a priori que les correspondía. La marginación y la exclusión se generan a través de prácticas y se legitiman mediante asignaciones de significados, culturalmente construidos.

¹¹ Esta práctica está muy extendida con respecto al trabajo femenino, pero es también frecuente en los salarios diferentes que pagan las empresas a sus obreros metropolitanos y los del Tercer Mundo.

¹² Por ejemplo a través de herencia preferente por línea masculina o asignar títulos de propiedad al cabeza de familia.

¹³ El problema no se centra sólo en el ámbito económico, la distribución desigual de prestigio por género puede llevar a que algunas posibilidades de ascenso económico de las mujeres resulten tan estigmatizadas que anulen en la práctica su ventaja inicial. Tal sería el caso de la prostitución.

Así la lucha para la erradicación de la marginalidad y exclusión se da forzosamente en dos frentes simultáneos, el económico y el cultural, entendiendo este último no sólo como la modificación de las conductas de los grupos discriminados a fin de integrarse más competitivamente en el mercado¹⁴ o adaptarse mejor a las demandas y exigencias sociales¹⁵, sino como una revisión profunda y una re-conceptualización de los estereotipos a través de los cuales se "explica" la situación social a través de características asignadas y presuntos determinismos culturales.

Últimamente se habla de *poder semiótico*, para la actividad cotidiana de re-leer los productos de la industria cultural, lo que no forzosamente está subordinado al *poder social*. Pero esta actividad requiere esfuerzo, trabajo y recursos. El feminismo está realizando este esfuerzo con coherencia y constancia desde hace décadas. Esto se corresponde con una tendencia actual de las ciencias sociales, que han pasado a ocuparse centralmente de los temas y los ámbitos que anteriormente se consideraban poco significativos o marginales.

Como señala Teresa San Román refiriéndose a las elaboraciones racistas, también en el caso de las conceptualizaciones referidas a la exclusión social, debemos intentar disolver categorías profundamente enraizadas en la estrategia misma de clasificar. Es toda nuestra visión estratificada y estable del mundo la que debe ser puesta a juicio, pues de ella se desprenden las categorizaciones legitimadoras a partir de las cuales naturalizamos y legitimamos el acceso desigual a los recursos.

¹⁴ Esta es la opción que han tomado más frecuentemente los planes de "cooperación para el desarrollo"

¹⁵ Este sería el caso de los proyectos de recuperación de prostitutas.

CONFLICTOS Y NEGOCIACIONES: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO¹⁶

En el caso de Colombia, la violencia que tanto preocupa y que ha sido objeto de un desarrollo teórico específico (la violentología), puede leerse desde una perspectiva de género. No sólo porque el 92% de las víctimas son hombres, la mayoría entre 18 y 39 años, sino porque también los ejecutores son varones jóvenes. Si bien la literatura puede jugar, como en el caso del cuento de Caicedo “Felices amistades”, con la idea de una muchacha que asesina sistemáticamente a sus conocidos, la realidad se acerca más al relato de Vallejo *La Virgen de los Sicarios*, que muestra el mundo de los violentos, no sólo como absolutamente masculino sino también como profundamente misógino. Es que la solución violenta de los conflictos tiene que ver con las construcciones sociales sobre la masculinidad y con la perpetuación de estos modelos. Esto deja al margen a las mujeres, lo que significa que la mitad de la población desarrolla otras estrategias de supervivencia que implican recurrir a procedimientos menos confrontativos. De este modo, analizar cuales son las estrategias que las mujeres aprenden y desarrollan, puede dar alguna luz sobre formas de convivencia, posibles y alternativas.

En la década de los setenta se comenzó a analizar la diferencia de las estrategias comunicativas de hombres y mujeres (Buxó, De Miguel, Moyer). Se descubrió, entonces, que había mayor distancia entre la forma de hablar de personas de diferente sexo y la misma clase social que la que separaba las clases mismas. Los “sexolectos” centraron entonces el interés de los lingüistas y sus descubrimientos señalaron que las mujeres usaban con mayor frecuencia que los hombres expresiones dubitativas, que tendían a sumar opiniones en lugar de confrontarlas, que empleaban menos las expresiones de desaprobación y rechazo, que matizaban más sus opiniones agregándoles calificativos, que no usaban casi interjecciones, ni insultos y que desarrollaban con frecuencia una particular estrategia consistente en poner en boca del interlocutor las propias opiniones mediante expresiones del tipo: ¿No te parece que...? ¿No crees tu que...?. También apoyaban con más frecuencia que los hombres temas propuestos por otras personas, y en las intervenciones

¹⁶ Una primer versión de este punto se publicó en *Senderi. Butlletí d'educació en valors*. N° 4 (nov.1999): “Conflictes i negociacions: La perspectiva de gènere” Associació de Mestres Rosa Sensat.

públicas no interrumpían las exposiciones de los demás y eran más disciplinadas para esperar su turno de palabras, o atenerse a los tiempos previstos de participación. En conjunto estos hábitos lingüísticos suelen agruparse en el ámbito de los discursos débiles, aquellos utilizados por los que no disponen de poder para hacer prevalecer sus propias opiniones. Dado que en la mayoría de las sociedades, y durante la mayor parte del tiempo, las mujeres han estado en esta posición subordinada, no nos puede extrañar que hayan interiorizado y desarrollado este tipo de hábitos comunicativos.

Estrategias semejantes pueden rastrearse en las elaboraciones femeninas en diferentes ámbitos. Si nos atenemos a los sistemas religiosos liderados por mujeres, como los estudiados por Starr Sered (1994) vemos que se caracterizan por su escaso dogmatismo, su flexibilidad teórica, su poca jerarquización interna y su facilidad para aceptar ideas nuevas. Estamos, entonces, ante dos tipos de modelos de conducta, que algunos autores rotulan como “ética femenina” contrapuesta a una “ética masculina”. Koehn señala que mientras la última se caracteriza por su apego a los códigos impersonales y a las normas abstractas, la primera se identifica por su carácter dialogal y por tener en cuenta los deseos y necesidades concretos de las personas. La “ética del cuidado, la confianza y la empatía” desarrollada por las mujeres, abre posibilidades para vías nuevas de negociar los conflictos y permite evitar posiciones irreductibles.

Si trasladamos estas propuestas a las políticas de participación nos encontramos con que estos diferentes puntos de partida tienen concreciones prácticas específicas. Hay muchos [investigadores](#) que han constatado en la práctica que la forma de hacer política de las mujeres es distinta de la de los hombres. No se trata solamente de que su participación sea menor, sino de que, cuando se encuadran en los partidos políticos, lo hacen de una manera diferente a como lo practican sus interlocutores hombres. Boter, Martínez Pardo y Ojeda (1998) señalan divergencias en varios campos, que pueden resumirse señalando que las mujeres mayoritariamente:

- Son más autoexigentes con respecto a su obligación con la ciudadanía
- No evalúan tan positivamente el juego político, como los logros obtenidos
- Consideran que hacer oposición no pasa por destrozar al adversario sino por buscar alternativas (por este motivo sus compañeros las acusan de "oposiciones débiles")
- Hacen los debates menos violentos y sin ataques personales

Podemos preguntarnos qué consecuencias tendría extender algunas de estas características al juego político general. Poner el énfasis en los logros, abandonar las estrategias de los ataques personales y las posiciones rígidas, son todos elementos que pueden llevar a una mejor solución negociada de los conflictos. Si se quiere lograr este avance, parece útil recurrir a la experiencia social de las mujeres, que a partir de una larga experiencia de ocupar posiciones sin poder, han desarrollado estrategias eficaces de intermediación y han acumulado experiencia sobre la solución no violenta de los conflictos.

Las organizaciones feministas se proponen, entre sus objetivos, el “empoderamiento” de las mujeres, es decir, el desarrollo en el campo social de sus propias estrategias. Así Allegrone (1990) propone trabajar para que los hombres políticos aprendan a compartir su parcela de poder, y fomentar la comunicación entre mujeres políticas

de distintos países, extendiendo estas estrategias al campo gremial, profesional y sindical. Esto parece estar lejos de conseguirse en Colombia donde si bien las mujeres han tenido acceso muy temprano a la vida política ocupan, sin embargo, sólo el 10% de las bancas parlamentarias¹⁷, con lo que se reafirma la humorada del periodista inglés que decía “Es más fácil ceder a una mujer el asiento en el autobús que en el parlamento”.

Pero no se trata sólo del interés de las mujeres por avanzar en campos en los que tradicionalmente habían encontrado barreras, se trata de beneficiar al conjunto de la sociedad, con su experiencia como negociadoras.

¹⁷ Como datos comparativos puede verse que en España el porcentaje es de 21,6% y en Suecia sube a 42,7%

Como señala la declaración de Pekín en su punto 18:

“La paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente vinculada al avance de las mujeres, las cuales son una fuerza fundamental para el liderazgo, la resolución de conflictos y la promoción de una paz duradera a todos los niveles”

La construcción de una cultura de la paz y el diálogo, distinta de la cultura de la violencia y el enfrentamiento, afecta indudablemente la situación de las mujeres, pero a su vez depende en cierta medida del reconocimiento social que se le de a sus posibilidades de participación y de la valoración que se haga de las estrategias que ellas han tenido necesidad de utilizar más frecuentemente, pero que forman parte del acervo de la humanidad (Renaud 2000).

BIBLIOGRAFÍA

ALEGRET TEJERO, Juan Luis (1993): *Como se enseñan los otros. Análisis de la presentación racista de la diversidad étnica en los libros de texto de EGP, BUP y FP utilizados en Cataluña en la década de los 80*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.

ALLEGRONE, Norma (1990): "Participación política de la mujer en Argentina" en *América Latina, una visión femenina*, Foro de Iberoamérica. Univ. de Salamanca.

ARENDT, Hannah (1998): *Los orígenes del totalitarismo*. (1950) Madrid. Taurus.

BOTER, Isabel; MARTÍNEZ PARDO, Maite; OJEDA, Patricia (1998): *Investigación cualitativa "Más mujeres en los poderes locales"*. PSOE.

BERISTAIN, Carlos Martín (2000): Justicia y reconciliación. El papel de la verdad y la justicia en la reconstrucción de sociedades fracturadas por la violencia. *Cuadernos de trabajo N°27*. Hegoa. Universidad del País Vasco.

BOURDIEU, Pierre (1992): "Réponses, avec Loïc J. D. Wacquant" en *Recherche Anthropologique et développement*. SABELLI Edit. Paris. Ed. Seuil.

BOURDIEU, Pierre et PASSERON, Jean Claude (1970) *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*. Editions de Minuit. Paris.

BUXÓ REY, María Jesús (1978): *Antropología de la Mujer*. Editorial Promoción Cultural, S.A. Barcelona.

CAICEDO, Andrés (1999): *Calicalabozo*. Colombia. Editorial Norma.

CAMACHO GUIZADO, Alvaro y GUZMAN BARNEY, Alvaro (1990): *Colombia, ciudad y violencia*. Bogotá. Foro Nacional por Colombia.

CARRITHERS, Michael (1995): *¿Por qué los humanos tenemos culturas? Una aproximación a la antropología y a la diversidad social*. Alianza Editorial. Madrid

DE MIGUEL, MOYER (1988): *La cárcel de las palabras*. Ed. Mensajero, Bilbao.

FOUCAULT, Michel (1980): *Microfísica del poder*. Madrid. La Piqueta. - (1992): *Vigilar y castigar*. 1975. Madrid. Siglo XXI.

FRANCO, Saul (1999): *El quinto, no matar*. Bogotá. Universidad Nacional.

GARCIA CANCLINI, Nestor (1990): *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México. Grijalbo

GONZALEZ, Arantzazu (2000): “Sobre los malditos del siglo XIX, mujeres judíos y homosexuales” en *Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI*. Instituto Andaluz de la Mujer.

GONZÁLEZ, Fernán (1999): *Colombia, una nación fragmentada*. Cuadernos Bakeaz 36. Bilbao.

GORDON, Milton M. (1964): *Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins*. New York. Oxford University Press.

GUILLEMIN, Henri (1997): *¡Los pobres a callar!. Libelo*. Barcelona. Grijalbo Mondadori.

GRAMSCI, Antonio (1985): *La política y el estado moderno 1949*. Planeta Agostini. Barcelona.

HARRIS, Olivia (1996): "The temporalities of tradition. Reflections on a changing anthropology" en *Grasping the Changing World*. (HUBINGER Edit.) London. Routledge.

HARVEY, Penelope y GOW, Peter (Edit.)(1994): *Sex and Violence. Issues in Representation and Experience*. London. Routledge .

HIMMELFARB, Gertrude (1988): *La idea de la pobreza. Inglaterra a principios de la Era Industrial*. México. F. de Cult. Económica.

HOLLOWAY, W. (1984) "Gender Difference and the Production of Subjectivity" en *Changing the Subject: Psychology, social regulation and subjectivity*. (HENRIQUES Edit.) London, Methuen.

KOEHN, Daryl (1998): *Rethinking Feminist Ethics. Care, Trust and Empathy*. De Paul University. USA

LEVI-STRAUSS, Claude(1993): *Raza y cultura* (1952) Madrid. Cátedra.

LITTLEFIELD, A.; LIEBERMAN, L. y REYNOLDS (1982): "Redefinición de raza: la desaparición potencial de un concepto en Antropología física" *Current Anthropology*. Dic.

JULIANO, María Dolores (1985): *Cultura Popular*. Barcelona. Anthropos.

LEWIS, Oscar (1969): *Antropología de la pobreza*. México F. C. E.

MARTIN BARBERO, Jesús (1987): *De los medios a las mediaciones*. Ed. G. Gili. México.

MARX, Karl (1976): "Formas que preceden a la producción capitalista" en *Antropología y Economía* (GODELIER Edit). Barcelona. Anagrama.

MIRANDA, M^a Jesús (1988): "Reflexiones en torno al concepto de marginación social" Barcelona. *III Coloquio del ICA*.

MOORE, Henrietta (1994): "The problem of explaining violence in the social sciences" en *Sex and Violence. Issues in representation and experience*. (HARVEY and GOW Edit.) London. Routledge.

OCDE (1998): *Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre mujeres y hombres*. Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores.

PECAUT, Daniel (1988): *Crónica de dos décadas de política colombiana*. Bogotá. Siglo XXI

PÉREZ de ARMIÑO, Karlos (1999): *Vulnerabilidad y desastres. Causas estructurales y procesos de la crisis de Africa*. Hegoa. Cuadernos de Trabajo Número 24.

RENAUD, Maria Dolors (2000): "Un feminismo para el siglo XXI" en *Desafíos del Feminismo para el siglo XXI*. Instituto Andaluz de la Mujer.

RESTREPO, Luis Carlos (1997): *El derecho a la ternura*. Barcelona. Península.

ROMANI, Oriol (1996): "Antropología de la marginación" en *Ensayos de Antropología cultural. Homenaje a Esteva Fabregat*. (PRAT y MARTINEZ, Edit) Ariel Antropología. Barcelona.

SALLMAN, Jean -Michel (1992): "La bruja" (pp. 470 a 485) en *Historia de las mujeres III. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. DUBY y PERROT Dir. Barcelona. Taurus Edit. TENTI FANFANI, Emilio (1994): *La escuela vacía. Deberes del Estado y responsabilidades de la sociedad*. UNICEF. Losada. Buenos Aires.

SAN ROMAN, Teresa (1990): *Vejez y cultura. Hacia los límites del sistema*. 1989. Barcelona. Fundacio Caixa de Pensions. - (1995): *Los muros de la separación. Ensayo sobre heterofobia y filantropía*. Edic. Univ. Autónoma. Barcelona

SCOTT, Joan (1986): "Gender. A useful category of historical analysis"
American Historical Review N° 91.

SEN, Amartya (1990): "More than 100 million women are Missing". *The New York Review*. Hay versión en castellano: "Faltan cien millones de mujeres". Ed. de las mujeres N°15 Sgo. de Chile. Isis Internacional. 1991

DEMOCRACIA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LO PUBLICO EN COLOMBIA

Alvaro Camacho Guizado¹

La entrada a un nuevo siglo es un motivo suficiente para reflexionar acerca de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, y en particular sobre su capacidad para consolidarse como una democracia moderna. Dos son las exigencias de esta consolidación: de una parte, proveer a la población de un conjunto de condiciones de bienestar que hoy en día son conquistas de la humanidad, así vastos sectores del país se encuentren lejos de ellas. De otra, garantizar que los espacios en los que se expresan los múltiples intereses de la colectividad, ya sea mediante la competencia, el conflicto, la lucha abierta o la cooperación, sean un “lugar vacío”, es decir, que no puedan ser objeto de apropiación privada por parte de intereses particulares². Esto es, construir un ámbito de lo público democrático.

La idea que querría sustentar es que la sociedad y el estado colombianos se encuentran asediados por la pervivencia de unos rasgos políticos, sociales y culturales que dificultan la realización de las anteriores condiciones.

¹ El autor es profesor titular –jubilado- de la Universidad del Valle. En el momento de realización del coloquio trabajaba como profesor especial del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

² Lefort, Claude, “La cuestión de la democracia”, en Ensayos sobre lo político, Guadalajara, México, Editorial Universidad de Guadalajara, 199, p. 26

Entre tales rasgos resaltan la desigualdad, la corrupción, el clientelismo, el rebusque y la violencia³. Todos ellos potenciados por el desarrollo del narcotráfico. Sin un avance significativo en la superación de estos retos no será posible que la sociedad colombiana desarrolle logros en la inclusión social –entendida como la capacidad de una sociedad de garantizar y proveer el libre acceso a bienes y a procesos públicos a la población, sin exclusiones por razones étnicas, económicas, políticas o culturales⁴- pero sí continuará estimulando, en cambio, formas perversas de inclusión –entendidas como los procesos de movilización de la población, que activan y apuntalan el sistema social y político vigente⁵.

Estas deficiencias en la democracia y la ciudadanía reflejan igualmente los rasgos de un estado débil, tanto en lo territorial como en su capacidad de garantizar las posibilidades de reproducción social, en un marco de plena vigencia de los derechos y deberes fundamentales que le corresponden.

³ Soy consciente de que este tipo de aproximación, el de una “lista de factores”, es problemático. Desde un punto de vista teórico se puede argüir que los “factores” no agotan una posible lista. Más aún, se podría pensar que ellos podrían ser sustituidos por una categoría mayor que los incluyera y que tuviera mayor capacidad explicativa. Estos factores serían entonces indicadores de esa categoría-variable. Desde el punto de vista teórico es difícil precisar cuál es el peso relativo de cada uno. En lo metodológico se haría necesario un análisis factorial que implica una cuantificación que escapa a este ámbito. Aún así, creo que la técnica de la “lista” puede tener una capacidad descriptiva alta; ése es el interés de este trabajo.

⁴ Es preciso dejar en claro que la noción de inclusión es diferente de la de participación. Esta última implica una voluntad y una decisión de formar parte de algo. La participación es activa, y la inclusión es pasiva.

⁵ Recientemente se han producido en Colombia varios ensayos que de una u otra manera tocan el tema de este ensayo. Ver en particular de Hernando Gómez Buendía, compilador, *¿Para dónde va Colombia?*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Colciencias, 1999. El trabajo de Luis Jorge Garay, *Construcción de una nueva sociedad*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Cambio, 1999, ha dado origen a debates. Cfr. Salomón Kalmanovitz, “Rentismo, crisis y nueva sociedad”, *Cambio*, # 345, 31 de enero-7 de febrero de 2000. La respuesta de Garay está en *Cambio*, # 347, 14-21 de febrero de 2000.

LOS OBSTÁCULOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

En un ensayo reciente, Marco Palacios ha precisado algunos de los rasgos que dibujan el presente sociopolítico colombiano; lo que en algunos países se ha llamado la “colombianización” se refiere “a la brecha, cada día más amplia, entre la norma jurídica y las prácticas institucionales y sociales; entre la proclamación de fórmulas para cimentar un Estado de derecho y una democracia ciudadana y el poder pragmático, el que existe realmente”. Estas relaciones revelan unas tensiones entre Estado y sociedad que, según Palacios, se concretan en un Estado débil correlativo de una acelerada urbanización y modernización social; en un proceso de globalización de mercados, en particular los de armas, drogas y dineros ilícitos.

Esta debilidad estatal se agrava por la demografía y las colonizaciones, que han cambiado la dinámica y la fisonomía de nuestra sociedad, y se revelan en el contexto sociopolítico en la acelerada ampliación de la frontera agrícola, el auge de los cultivos ilícitos, la criminalidad y el sicariato urbanos, la ampliación de las guerrilla y/o el auge del paramilitarismo.

Ahora bien, estas tensiones se materializan no sólo en tendencias antiestatales sino en el apuntalamiento del Estado. De los rasgos señalados, el clientelismo y la corrupción se refieren a unas tendencias específicamente estatistas; son prácticas típicas de apropiación de los recursos del Estado para beneficios privados, individuales o grupales; significan un tipo de apuntalamiento del Estado, así sea pervirtiendo los principios de la normatividad jurídica y moral que lo suponen y sustentan. El rebusque, en cambio, expresa tendencias antiestatistas, en cuanto significa dinámicas cuya reproducción se basa en una lógica que elude la acción del Estado, así en gran medida una de sus bases –la naturaleza precaria e informal del empleo- sea un producto de políticas estatales específicas.

La desigualdad y la violencia encarnan las dos tendencias, ya que la primera es un producto tanto de la acción del Estado como del capital, y la segunda se desarrolla tanto en la lucha por el control del Estado como en los ámbitos privados.

La corrupción

La dimensión estatista de la corrupción se expresa en que ésta es fundamentalmente la penetración del mercado económico en el mercado político; es el proceso de conversión en mercancías de los bienes y servicios que se manejan en la esfera estatal. La dominación de la lógica del mercado en la esfera política se explica por el predominio de la lógica de la ventaja, es decir, de la obtención de beneficios y prebendas privados derivados de las decisiones estatales, independientemente de que ello represente un encarecimiento de los mismos en lo colectivo. Es claro que la corrupción, bajo ciertas circunstancias, es altamente funcional para intereses económicos privados, en cuanto los costos de transacción que ella implica pueden ser positivamente compensados con los ahorros representados en el hecho de obviar trámites engorrosos y dilatorios⁶.

Más aún, es posible pensar en determinadas acciones de beneficio colectivo que no se puedan realizar si no median esos componentes de arbitrariedad o corrupción. Es el caso de una suma positiva, y los costos sociales están representados tanto en los efectos perversos de la institucionalización de esas prácticas, como en las posibilidades de que los fondos dedicados a la corrupción se dedicaran a otros fines sociales más benéficos aún. En otras condiciones ésta puede ser una suma negativa como es el caso de la malversación de fondos o la incuria en su manejo, cuando quiera que tales recursos no tienen beneficiarios legítimos.

Estudios recientes de la Contraloría General de la República vienen mostrando el desarrollo de la corrupción en la esfera estatal. Según esta entidad, se han detectado casos que tienen que ver con el sector agrario, el transporte terrestre y aéreo, el comercio exterior, la salud y las obras públicas, en lo que respecta a los aparatos del Estado central⁷. Por otra parte,

⁶ Ver un tratamiento general del tema en Hernando De Soto, *El otro sendero*, Lima, Editorial El barranco, 1986

⁷ Contraloría General de la República, *Gestión fiscal, Informe financiero de la Contraloría general de la República*, # 6, junio de 1999.

las denuncias sobre las deficiencias y componendas en la justicia y en el órgano legislativo muestran cómo el fenómeno se expresa en todos los resortes del Estado.

Confecámaras ha realizado un estudio reciente en el que se ilustra cómo el sector privado acepta la corrupción como parte consustancial de los procesos de contratación con entidades públicas, con lo cual se ha hecho evidente cómo ella forma parte del engranaje que liga el gasto público con las utilidades empresariales⁸.

Estas informaciones particulares ratifican los puntos ya reconocidos en estudios anteriores en los que se analizó en detalle el fenómeno de la corrupción en Colombia⁹. Sin embargo, a las ya tradicionales prácticas corruptas es preciso agregar que a partir de la década de los setenta, y en una forma incrementada, el narcotráfico elevó tanto los montos económicos como los espacios estatales y empresariales de acción, al punto que concretó en los noventa una de las más severas crisis políticas de la historia colombiana, luego de haber puesto a tambalear las instituciones judiciales, policiales y militares, y con ellas los más altos resortes de los poderes del Estado. Al mismo tiempo distorsionó comportamientos empresariales tradicionales y llevó la corrupción de los empresarios al Estado a niveles hasta entonces desconocidos¹⁰.

No parece haber duda, entonces, de que la corrupción, a la vez que extiende sus beneficios a algunos sectores que se logran lucrar de su uso, contribuye a deteriorar el marco institucional, legal y moral de sustento del Estado. Ella expresa una dialéctica de utilización y destrucción del Estado de parte de los sectores de la sociedad que así activan sus intereses individuales o grupales y perciben ganancias extraordinarias. La lógica de la ventaja individual se impone sobre la lógica de la responsabilidad con el conjunto de la sociedad.

⁸ Confecámaras y Fundación Corona, *Probidad, Lucha anticorrupción de los empresarios en negocios con el Estado*, Bogotá, marzo de 2000.

⁹ Fernando Cepeda (ed.), *La corrupción administrativa en Colombia: diagnóstico y recomendaciones para combatirla*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Contraloría General de la República, Fedesarrollo, 1996.

¹⁰ Ver el estudio de Francisco Thoumi, "Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia", en *Ensayo y error*, Bogotá, # 1, noviembre de 1996.

El clientelismo

En Colombia el clientelismo es una forma de superación de otras pautas de dominación no legítima como el tradicional caciquismo, figura en la cual el dominado no tenía capacidad alguna para reclamar del jefe nada más allá de la protección¹¹. En el clientelismo, en cambio, se da una relación negociada, mediante la cual las partes acuerdan el intercambio de votos o apoyos políticos por favores personales o colectivos¹².

El clientelismo como sistema de intercambios y lealtades políticas expresa la penetración de relaciones sociales de orden personal en los ámbitos estatales, cuyo carácter generalizante se ve menoscabado en su funcionamiento. Las opciones de privilegiar relaciones familiares, geográficas, étnicas, partidistas u otras formas de lealtades personales, emocionales y tradicionales se constituyen así en criterios preferidos.

Al mismo tiempo, ante las deficiencias de la cultura política, y ante los bajos niveles de integración que proporciona el sistema político, especialmente a las poblaciones rurales y a las de más bajos ingresos, el clientelismo se constituye en un mecanismo de inclusión social y de acceso a recursos del Estado. En este sentido, el clientelismo es una forma de redistribución, que si bien es perversa, en ausencia de mecanismos democráticos de inclusión opera con grados variables de eficiencia.

La instrumentalización del Estado por la vía del clientelismo experimenta un proceso de modernización a la par con el curso histórico de la sociedad en la que actúa. Es así como hoy en día, mientras las formas más tradicionales de relaciones cara-a-cara se mantienen en relación con las capas sociales más deprimidas, el clientelismo adquiere nuevas formas, cuya expresión más acabada es el sistema de contratos, el cual tiende a dirigir los fondos a capas de mayores ingresos y de alguna capacidad empresarial. Como lo describe el estudio de Confecámaras citado, el proceso de licitaciones y contrataciones con el Estado requiere no solamente alguna dosis de corrupción, expresada en los pagos a los funcionarios, sino un tipo de

¹¹ Malcolm Deas, "Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia", en *Revista de Occidente*, Madrid, # 127, 1973.

¹² El estudio sociológico más notable sobre el clientelismo en Colombia es el de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, *Clientelismo. El sistema político y su expresión regional*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Iepri, 1990. Ver también de Jonathan Hartlyn, *La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente nacional en Colombia*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo- Ediciones Uniandes-CEI, 1993, esp. pags-. 225 y ss.

relación entre éstos y los empresarios en el cual los criterios personales desempeñan un papel fundamental en la asignación de contratos y prebendas.

La política colombiana de los últimos años ha estado de muchas maneras enmarcada por los debates y medidas frente al clientelismo y a la necesidad de racionalizar el funcionamiento del Estado. La elección popular de alcaldes, la circunscripción nacional para el Senado y la descentralización presupuestal han sido mecanismos diseñados en esta dirección. Si bien los dos primeros buscan operar en el sentido de la inclusión por vías electorales y legítimas, la tercera ha tendido a convertirse en nueva fuente de clientelismo, dada la capacidad incrementada de gasto y manejo presupuestal de las autoridades locales.

El rebusque

En Colombia algo más del cincuenta y tres por ciento de la fuerza de trabajo pertenece al sector informal, en el que no opera una relación salarial, no se garantiza estabilidad laboral y presenta una alta movilidad ocupacional, basada en las habilidades individuales y en oportunidades inciertas.

El rebusque se asocia con las tradiciones antiestatistas y está caracterizado por un conjunto de prácticas que encarnan una lógica de oportunidad y ventaja en la que los sujetos buscan los esguinces que les ofrece la vida cotidiana para resolver sus problemas individuales o familiares de supervivencia. El rebusque expresa la apelación a la astucia y a la creatividad para circunvalar normas sustantivas o procedimentales para la satisfacción de metas personales o grupales. Es una práctica que tiende a apuntalar la informalidad, a desbordar los límites de lo institucional y activar la ilegalidad y la delincuencia.

El rebusque así entendido sustenta una ideología que alaba la capacidad de los sujetos para no dejarse apabullar por la adversidad, pero oculta que la práctica afianza el individualismo y el empobrecimiento de los tejidos sociales. Ha llevado, en efecto, a que se sostenga que esa capacidad de superación individual hace superflua la acción del Estado, y que la presencia de éste tiende a castrar las energías privadas.

Uno de los efectos más deletéreos del rebusque ha sido que el desarrollo de esa lógica de la oportunidad, de la ventaja individual, tiende a imponerse sobre una lógica de la responsabilidad, es decir, aquélla que privilegia el reconocimiento de los otros y por lo tanto establece unos límites a la acción socialmente valorada. Mediante la lógica de la oportunidad los individuos actúan a partir de una racionalidad instrumental en la que predominan los derechos y beneficios personales. En la lógica de la responsabilidad opera el sentido de la reciprocidad, del reconocimiento del otro y, por tanto, de la combinatoria de derechos y deberes. Esta se convierte así en la base del desarrollo de la ciudadanía, en cuanto en ella se tienden a hacer explícitos y reconocidos los vínculos del ciudadano con la comunidad¹³.

La desigualdad

Una síntesis de este componente la proporciona el trabajo reciente de Planeación Nacional sobre la situación del desarrollo humano en el país. Cito algunos apartes:

“Colombia registra un continuo avance en el índice de desarrollo humano en esta década, pero el país no alcanza a ser clasificado como un país de desarrollo humano alto. [...] Dos son los problemas que impiden al país alcanzar un mayor desarrollo humano: la violencia, que afecta en particular a la población masculina y contrarresta los logros

en materia de disminución de la mortalidad infantil y control de la morbilidad, y la desigualdad en la distribución de los ingresos. [...] La inequidad en Colombia equivale a un retroceso de más de diez años en desarrollo humano. Al hacer la corrección por distribución de ingresos, Colombia disminuye su IDH. La desigualdad en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini aumentó en 1997. Por eso,

¹³ Will Kymlycka y Wayne Norman, “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía”, en *La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad*, Barcelona, # 3, octubre de 1997. Ver también la amplia reseña de la literatura que sobre el tema desarrolla el libro reciente de Luis Jorge Garay, *Ciudadanía, lo público, democracia. Textos y notas*, Bogotá, edición del autor, 2000

cuando el índice del PIB se corrige por distribución, se pierden los avances logrados en desarrollo humano”¹⁴.

Entre sus principales formas se destacan las disparidades en el IDH urbano y rural, por género y por departamentos; aunque en estas dimensiones se han dado algunos avances, las desigualdades permanecen¹⁵. Ahora bien, el desarrollo humano se relaciona muy estrechamente con la pobreza. En este terreno, si bien la pobreza estructural ha disminuido, ese proceso de nivelación se han estancado en los dos últimos años,

“principalmente por aumento en el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas en dependencia económica y asistencia escolar, los dos relacionados en mayor medida con los problemas coyunturales, como pérdida de empleo e ingresos. De la misma forma, se estanca el progreso obtenido en cuanto a disminución de la población en miseria (dos o más NBI)”.

En síntesis, según el estudio,

“La actual coyuntura ha causado, entonces, un estancamiento en los indicadores de progreso social del país. Lo que significa, en términos de la figura, que el capital humano ha dejado de avanzar en la senda de crecimiento que traía. Y en el caso de las familias más pobres, ya hay indicios claros de que se está cayendo en la senda perversa. Para el conjunto de la población, el estancamiento del NBI y del ICV (Índice

¹⁴ Departamento Nacional de Planeación, *Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999*. Bogotá, Coediciones Tercer Mundo- Departamento Nacional de Planeación, Misión Social, PNUD, 2000, (pags. xv-xvi).

¹⁵ La concentración de la tierra es un de los componentes centrales de la desigualdad: En 1960, el 67% de los propietarios con predios menores de 5 has. ocupaba el 6% de la superficie, mientras que el 1.4% con propiedades mayores de 200 tenían el 46%. En 1984 el 0.37% de los propietarios de predios de más de 500 has, poseía el 34.8% de la tierra en nuestro país y el tamaño promedio de los latifundios de más de mil hectáreas pasó de 2.764 has. en 1970 a 3.562, mientras el 57% de los propietarios, con parcelas de menos de 3 has. tenía menos del 3% de la superficie. En 1989, el 67% de los propietarios poseía el 5.2% de la superficie, mientras que el 1.3% de ellas cubría el 48% del área. El coeficiente de concentración de Gini pasó de 0.83 en 1961 a 0.87 en 1970 y 1984. Darío Fajardo Montaña, “Colombia: reforma agraria en la solución de conflictos armados”, en *Varios Equidad y política social en Colombia I. Seminario Pobreza y Política*, Bogotá, Coediciones Universidad Nacional, Carrera de Ciencia Política- Fescol-Corporación Viva la Ciudadanía-Cinep-Consejo Nacional de Planeación-Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, 1999.

de Condiciones de Vida) es un llamado de atención para que se tomen las medidas adecuadas para evitar que el capital humano global se deteriore”¹⁶.

De otra parte, según la última encuesta social de Fedesarrollo, se viene dando una grave deterioro en la situación económica en general y del empleo en particular: 67% de los jefes de hogar considera que su situación ha empeorado; se ha dado una reducción del consumo, pérdida de empleo y falta de dinero. Ahora bien, esta crisis ha golpeado con más fuerza a los estratos bajos y medios, en los que hay mayor pérdida de empleo¹⁷.

La desigualdad es un rasgo central en la estructuración de las condiciones de inclusión y exclusión social¹⁸. La precariedad de condiciones de vida permite el mantenimiento de un nivel de salarios relativamente bajo en virtud del exceso de oferta de trabajo y, por tanto, facilita un nivel de ganancias elevado para los patronos; y además las desigualdades y deficiencias de educación y calificación impiden el acceso a procesos productivos basados en modernas tecnologías que requieren niveles más elevados de competitividad.

La desigualdad no se expresa solamente en lo económico. En la política ella incide en la perpetuación del clientelismo, en la medida en que las distancias entre los dirigentes y los dirigidos son tan amplias que no es posible que se salven y los primeros sean fácilmente sustituidos. Pero además la desigualdad atenta contra la posibilidad de que se asuman plenamente los derechos asociados con la ciudadanía; es comprensible que las personas que se encuentran en inferioridad de condiciones socioeconómicas no tengan ni la capacidad operativa ni los recursos para recurrir con fluidez y energía a los mecanismos estatales que les pueden garantizar esos derechos.

¹⁶ Departamento Nacional de Planeación, opus cit, pag. 53 y 54.

¹⁷ Fedesarrollo, Encuesta Social, 200.

¹⁸ Según Consuelo Corredor Martínez, la desigualdad y la pobreza son mecanismos de inserción precaria. Cfr. “El problema de la pobreza: una reflexión conceptual”, en Consuelo Corredor Martínez, editora, *Pobreza y desigualdad. Reflexiones conceptuales y de medición*, Bogotá, Coediciones Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional-Colciencias-Cinep-GTZ, 199. Ver también en el mismo libro el artículo de Arjan de Hann, “Exclusión social en la política y la investigación: operacionalización del concepto”.

La desigualdad y el rebusque se constituyen así en mecanismos de exclusión que inciden en la reducción de las posibilidades de participación tanto en las instancias de decisión respecto de sus vidas y sus posibilidades de reproducción social, como en las decisiones de políticas sociales que determinan su ubicación y posibilidades en la estructura social. Operan también ensanchando la brecha entre la sociedad y el Estado, dificultan la construcción de instituciones reguladoras y niveladoras y dejan a aquella al vaivén de su propia dinámica, en la que los más poderosos pueden ejercer su dominación y explotación sobre los más débiles.

La violencia

No es necesario sobreabundar sobre la extensa literatura que se ha producido en el país acerca de la violencia¹⁹. Un buen resumen de los principales hallazgos en la investigación la aporta también el informe sobre desarrollo humano:

1. Persisten conflictos asociados al acceso de riqueza que al no encontrar vías de solución alimentan y perpetúan la violencia.
2. Hay un conjunto de reformas sociales aplazadas que, ante la debilidad del manejo de lo colectivo de la sociedad colombiana, se esperan casi exclusivamente del Estado, el cual su vez, sin el soporte colectivo de la sociedad, no tiene suficiente fuerza para implantarlas exitosamente. Estas tienen que ver con los siguientes temas:

¹⁹ Ver las revisiones de la bibliografía contenidos en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, Coediciones Iepri-Cerec, 1991 y en Malcolm Deas y Fernando Gaitán Daza, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, Fonade, Departamento Nacional de Planeación, 1995; Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Barney, *Ciudad y violencia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.

- En lo económico: arbitrariedades e inequidades en el acceso y disfrute de bienes y servicios a los que la población tiene derecho y a las fuentes de nueva acumulación de riqueza.
 - En lo político: exclusión del acceso al manejo del Estado de grupos importantes de la población. Comparativamente con otros países Colombia no es el país más excluyente, pero cuenta con regiones donde esta exclusión es muy marcada.
3. La violencia originada en factores políticos y económicos ha sido reforzada por violencias generadas en actividades criminales y en especial por el narcotráfico. En los últimos años los narcotraficantes han propiciado dos clases de violencia, una violencia propia del negocio ilegal contra el Estado y sus agentes; y una violencia por la posesión de la propiedad agraria contra los campesinos. En la primera, el perdedor más claro es la juventud pobre urbana como actor y como víctima, lo que ha aumentado de manera inusitada las tasas de mortalidad de los hombres jóvenes. En la segunda, los paramilitares han sido el instrumento para la expropiación

forzosa de tierras y el desplazamiento forzado. Las víctimas son los campesinos pobres a través de las masacres, encaminadas a consolidar el dominio territorial a través del miedo²⁰.

Alfredo Sarmiento, en un estudio comparativo de los municipios colombianos, concluye que la violencia se asocia especialmente con la desigualdad; que tiende a reproducirse con más probabilidad en sectores o zonas con altas posibilidades de acumulación de riqueza y con presencia débil del Estado; que es más alta en aquellos municipios en los que hay presencia

²⁰ Departamento nacional de Planeación, *Informe...*, *op. cit.*, pp. 22-25.

de grupos paramilitares; y que podría verse sustancialmente reducida si se incrementaran la educación y la participación democrática²¹.

La violencia se manifiesta también en ámbitos que no tienen una relación inmediata con lo público. Se trata de la violencia asociada con deterioros acelerados en la calidad de vida de los ciudadanos, con la precariedad de las relaciones sociales, con la ya tradicional dificultad para tramitar pacíficamente conflictos emanados de esas mismas condiciones de vida social y que incuban criminalidad²².

El problema de la violencia colombiana se agrava con el proceso por el cual las diferentes modalidades de violencia tienden a entrelazarse y a retroalimentarse: las organizaciones insurgentes recurren sistemáticamente a prácticas propias de la delincuencia común, como la extorsión y el secuestro; la delincuencia común intercambia secuestrados con la insurgencia; los narcotraficantes terratenientes financian a grupos paramilitares expertos en masacres y terrorismo; financian también a grupos de sicarios urbanos; los mercaderes de armas se lucran del mercado creado por insurgentes, paramilitares y narcotraficantes; en fin, se crean circuitos en los que las distinciones entre modalidades de violencia se hacen complejas y confusas.

Y la violencia tiene también un rasgo central: se ha expandido de manera acelerada hacia las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En efecto, aunque en los últimos años las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado se han reducido, el Estado colombiano es hoy día considerado uno de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo.

²¹ Alfredo Sarmiento Gómez, “Violencia y equidad”, en Camacho y Leal, *op. cit.*

²² Alvaro Camacho Guizado, “Public and Private Dimensions of Urban Violence in Cali”, en Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez, editores, *Violence in Colombia. The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Wilmington, A Scholarly Resources Inc. Imprint, 1992.; Alvaro Guzmán, “Violencia urbana: teorías y políticas de seguridad ciudadana”, en Camacho y Leal, *op. cit.*; Mauricio Rubio, “Criminalidad urbana en Colombia”, en Malcolm Deas y María Victoria Llorente, compiladores, *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, coedición Ediciones Uniandes- Cerec-Norma, 1990. Un magnífico análisis de la violencia colombiana es el de Saúl Franco, *El quinto: no matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Iepri, 1999.

Las acusaciones internacionales acerca de la complicidad y/o tolerancia del Estado frente a las acciones paramilitares han sido contestadas con grandes declaraciones retóricas, pero tales acusaciones no amainan, en la medida en que día tras día se presentan casos que las reafirman.

Más aún, subsisten aún las prácticas que involucran a la población civil en el conflicto armado: las desapariciones, las complicidades con asesinos privados y actos de limpiezas sociales especialmente contra sectores de la juventud pobre.

A pesar de que existe un documento en el que se plantea la política oficial de defensa de los derechos humanos, la gran mayoría de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los mismos coinciden en criticar la ausencia de una decisión estatal de ponerla en marcha. Como consecuencia, en el país se producen aproximadamente cuatro mil muertos políticos por año, de los cuales aproximadamente 30 % caen en combate y los demás son población civil ajena al conflicto armado.

Paralelamente, se incrementan las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, en especial por parte de los grupos armados irregulares. Se destacan los paramilitares, quienes recurren al terror, el amedrentamiento y las masacres para cortar o evitar cualquier contacto de la población civil con los grupos insurgentes. Pero éstos no actúan inocentemente: aunque su participación en masacres y asesinatos colectivos es menor, sus prácticas de secuestros y ataques a poblaciones producen un elevado número de víctimas²³. No es de sorprender, entonces, que en el país haya actualmente un desplazamiento masivo de población que afecta hoy día a más de un millón y

²³ Ver el trabajo de Carlos Vicente de Roux, “Humanización del conflicto y proceso de paz”, en Camacho y Leal, *op. cit*

medio de personas²⁴.

La violencia es uno de los más poderosos mecanismos de exclusión. No sólo en cuanto elimina físicamente a los contrarios, sino en cuanto se somete a la población a un clima de terror que excluye de la libre participación ciudadana en los temas de lo público y lo político –y en este sentido, al obligar a alguien mediante la amenaza a actuar en una dirección impuesta, lo incluye de manera perversa en sus proyectos políticos-.

El narcotráfico

El narcotráfico ha sido clave en la transformación de la fisonomía del país²⁵. El reciente incremento en la siembra de cultivos ilegales ha determinado una fuerte expansión de la frontera agraria, modificado los patrones agrícolas en zonas de cultivos tradicionales, contribuido a acelerar el deterioro ambiental, propiciado migraciones masivas de colonos, encarecido los precios de productos de primera necesidad en zonas marginales agrícolas. En el aspecto de la distribución, suscitó el desarrollo de los más poderosos grupos criminales de que se tenga memoria en el país; incrementó los niveles de violencia e involucró en ella a algunos sectores de la población, en particular habitantes de zonas tradicionalmente dominadas por organizaciones guerrilleras y jóvenes pobres de las ciudades.

En lo internacional implicó una forma de inserción negativa de Colombia, propició sanciones internacionales y generó la más evidente estigmatización de los colombianos en el exterior.

En su dimensión política, hizo que la corrupción llegara a los más altos niveles en las tres ramas del Estado y propició, por tanto, una de las más severas crisis políticas por las que ha pasado el país. El narcotráfico contribuyó a precipitar un enorme deterioro de la justicia, tanto por las amenazas a los funcionarios estatales encargados de administrarla, como por el incremento de la impunidad y de la transformación de la normatividad

²⁴ Nora Segura Escobar, “Violencia, desplazamiento y exclusión”, ponencia presentada al V Coloquio Nacional de Sociología, Cali, Universidad del Valle, 2000.

²⁵ Ver mi trabajo sobre el tema en Camacho y Leal, *op. cit.*, y Alvaro Camacho Guizado, Andrés López Restrepo y Francisco Thoumi, *Las drogas: una guerra fallida*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Iepri, 1999.

tradicional, al forzar la creación de mecanismos que se tradujeron en ocasiones en procedimientos que desconocían el debido proceso²⁶. En el legislativo propició no sólo la corrupción de políticos tradicionales, sino la incorporación al Congreso de sus portavoces y defensores. Y en el ejecutivo llegó a salpicar al propio presidente de la república.

Al mismo tiempo tuvo efectos sociales y económicos importantes: si por una parte estimuló la movilidad social vertical ascendente, a partir de los ingresos percibidos por personas que de otra manera habrían permanecido en los estratos bajos de la población, por otra contribuyó a concentrar más la riqueza, en particular a partir de la propiedad agraria. Hoy se ha calculado que los narcoterratenientes controlan entre un 7% y un 8% del total de la superficie agrícola del país²⁷.

Y en el incremento de la violencia el narcotráfico ha desempeñado un papel fundamental. Éste ha desplegado varias modalidades: la inherente al negocio ilegal y clandestino, que se expresa en la eliminación de competidores y los ajustes de cuentas; la desplegada contra campesinos en la adquisición y control de tierras; la que enfrenta a las mafias con los agentes del Estado que se oponen a su desarrollo y a personalidades democráticas que se atrevieron a denunciarlo.

En este despliegue de violencia el narcotráfico ha propiciado la construcción de dos tipos de actores sociales que han tomado una fuerza inusitada. De una parte, el sicariato, organizado fundamentalmente en torno a empresas contratistas de criminales encargados de eliminar competidores, miembros de la Fuerza Pública, políticos o puestos al negocio o funcionarios del Estado.

²⁶ Ver el análisis de la justicia en Colombia que realizan Mauricio García y Rodrigo Uprimny, “El nudo gordiano de la justicia y la guerra en Colombia”, en Camacho y Leal, opus cit.

²⁷ Fajardo, *op. cit.*, p. 43. Cfr. Alejandro Reyes Posada, “La compra de tierras por narcotraficantes en los departamentos colombianos”, en Francisco Thoumi *et. al.*, *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*, Bogotá, Ariel Ciencia Política, 1997.

Esta dinámica de la violencia juvenil, que se concentró principalmente en Medellín, se tradujo en el desarrollo de modalidades paralelas de violencia, como las milicias urbanas y las organizaciones de autodefensa barrial²⁸. Todo esto hizo que las tasas de homicidios en esa ciudad llegaran a ser de las más elevadas del mundo.

De otra parte, el impacto más notable del narcotráfico ha sido su papel en la elevación del nivel bélico del conflicto armado. Los narcotraficantes armaron, entrenaron y organizaron las primeras bandas de pistoleros que en un principio los protegían contra las amenazas de secuestro de las organizaciones guerrilleras, pero que en su dinámica se fueron convirtiendo en organizaciones de paramilitares que pasaron de defender sus tierras a desarrollar toda una estrategia de guerra contra las organizaciones insurgentes. Compuestos por ex-guerrilleros, ex-miembros de la Fuerza Pública, campesinos y habitantes de pequeños pueblos que han sido asediados por la insurgencia, esos ejércitos privados y sustentados en sus orígenes por las Fuerzas Militares, hoy día han asumido una dinámica independiente, aunque las complicidades entre los dos son constantemente denunciadas²⁹.

Esta forma de confrontación se ha traducido en que hoy en día las drogas ilegales financian tanto a los paramilitares como a algunas de las organizaciones guerrilleras. Bien sea mediante el cobro de impuestos a los productores directos e intermediarios locales, que es el método guerrillero,

²⁸ Los trabajos más notables sobre el sicariato y otras modalidades de violencia en Medellín son los de Alonso Salazar. Ver *No nacimos pa' semilla*, Bogotá, Cinep, 1994; y *Mujeres de fuego*, Medellín, Corporación Región, 1993; Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, "El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado, en *Análisis Político*, Bogotá, # 14, septiembre-diciembre de 1991; Jorge Orlando Melo, "Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia de Medellín, en *Boletín socioeconómico, Cali*, # 29, diciembre de 1995. Sobre Cali, ver el trabajo de Gildardo Vanegas Muñoz, *Cali tras el rostro oculto de las violencias*, Cali, Universidad del Valle, Instituto Cisalva.

²⁹ La literatura sobre el paramilitarismo es abundante. Ver, por ejemplo de Carlos Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Bogotá Editorial Documentos Periodísticos, 1990. Ver también Jorge Orlando Melo, "Los paramilitares y su impacto sobre la política", en Francisco Leal Buitrago y Leon Zamosc, editores, *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*, Bogotá, Coediciones Tercer Mundo-Iepri, 1990

bien mediante las contribuciones de los terratenientes, que es el método de los paramilitares, el narcotráfico es el principal estímulo de la guerra colombiana.

En referencia a nuestro tema, el narcotráfico ha sido incluyente y excluyente: lo primero se expresa en la movilidad social que dio ascenso a algunos colombianos que lograron insertarse en el negocio y que, o bien pagaron sus penas, o bien se retiraron a tiempo, hoy son medianos o grandes empresarios. Otro tanto se puede decir de quienes constituyeron las redes sociales de los narcotraficantes y se lucraron a través de su papel como arquitectos, políticos, constructores, banqueros, abogados, financistas, etc. en el proceso de lavado de capitales. Importantes beneficiarios han sido también terratenientes quienes por razones de orden público o de falta de liquidez no podían usar sus tierras. Al venderlas a narcotraficantes, recuperaron su liquidez y pudieron reciclarse en actividades más rentables y menos riesgosas.

Pero al mismo tiempo ha sido notable su papel en la exclusión social, no sólo por su obvio papel en el incremento de la violencia, sino por sus efectos en la reconcentración de la tierra, la expulsión de pequeños y medianos propietarios, el desarraigo generado por los desplazamientos forzosos, el incremento de la estigmatización de la juventud urbana pobre, y no menos importante, el efecto deletéreo del incremento del consumo de sustancias peligrosas por parte de la población, que se ha traducido en su creciente marginalización. Y como si esto no bastara, el papel del narcotráfico en la conversión de Colombia en problema internacional ha sido suficientemente reconocido como para sobreabundar aquí sobre él.

La construcción de lo público y la inclusión- exclusión social

El tema de lo público está en el centro de la agenda sociopolítica colombiana; un buen número de académicos se han enfrascado en serios debates sobre su significado y algunos de ellos han llegado a plantear que el centro de la crisis social colombiana está constituido por la apropiación y privatización de lo

público por parte de los grupos más poderosos, sean legales, paralegales o ilegales³⁰.

Una de las dimensiones más importantes que asume el debate sobre lo público y lo privado en Colombia, como en otras partes del mundo, es el proceso por el cual elementos que tradicionalmente pertenecían al mundo de lo privado tienden a convertirse en objetos de debate en lo público, en la medida en que su significación creciente los construye como claves en el funcionamiento del orden social. Es el caso del desarrollo de identidades específicas que reclaman derechos y ejercicios de poder. El feminismo, los movimientos de la juventud, étnicos, religiosos o de preferencias sexuales alternativas expresan el desarrollo público y político de nuevas identidades colectivas, y constituyen hoy día movimientos sociales con grados variables de eficacia y logros.

Estamos en estos ámbitos justamente ante expresiones de movimientos que al convertir en públicos sus identidades, intereses y cosmovisiones, pugnan por lograr niveles significativos de inclusión y participación y que tratan de lograr transformaciones más o menos fuertes del orden social, de tal manera que les dé cabida³¹.

Así como esos movimientos identitarios han logrado algunos niveles de inclusión en la sociedad colombiana, en el ordenamiento social se han construido nuevos ámbitos en los que la inclusión y la exclusión ocupan lugares centrales en la construcción de una sociedad más democrática, justa y moderna. El hito más relevante en esta dirección es el proceso de descentralización política y administrativa, que ha creado condiciones de participación en los asuntos locales, pero que aún presenta grandes vacíos, al tiempo que ha estimulado el desarrollo de formas locales de corrupción y clientelismo.

³⁰ Garay, *Ciudadanía, lo público, democracia. Textos y notas, opus cit.*; Garay, *Construcción de una nueva sociedad*, opus cit.

³¹ Jürgen Habermas, "New Social Movements" *Telos*, # 49, 1981.

Al lado del terreno propiamente político, la estructura social colombiana exhibe rasgos que impiden el desarrollo de procesos de inclusión³². Tal es el caso del desarrollo de nuevas tecnologías en un mundo crecientemente globalizado, que ha significado que amplios sectores de la población queden rezagados. Más aún, el país en su conjunto experimenta atrasos sensibles frente a algunas de estas tecnologías. La telemática, particularmente, ha implicado que se crean abismos entre los colombianos que tienen acceso a ella y quienes no tienen tal posibilidad. Nuevos procesos productivos están demandando una fuerza de trabajo con nuevos y más altos niveles de educación y capacitación, y el acceso a éstos es restringido a sectores minoritarios de la población.

En pocas palabras, Colombia ha entrado a un mundo globalizado en el que se hacen necesarias instituciones que construyan las destrezas requeridas para hacer frente a las exigencias de un mundo en el que no pueden tener cabida las prácticas tradicionales, retardatarias y excluyentes que aún exhibe el país. Para regresar al principio: los obstáculos a la construcción de una sociedad y un estado modernos y participativos, y al ensanchamiento de las oportunidades de inclusión no perversa operan tanto en lo doméstico como en el proceso de inserción de Colombia en el panorama mundial.

³² Ver el desarrollo de algunos de estos puntos en Germán Rey, “Tercer Sector, agente de transformación”, en *Caja de Herramientas*, Bogotá, Año 9, # 72, julio de 2000

ACERCA DE LA FRAGILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS : REFLEXIONES A PARTIR DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Odile Hoffmann¹

Introducción

En Colombia, como en muchos países en los últimos quince años, la « construcción de lo público » se ha vuelto una prioridad nacional ya que se percibe como una condición mínima para lograr cierta eficiencia en la gestión de la vida pública y salir de los esquemas anteriores que desembocaron, históricamente, en procesos de clientelismo exacerbado y de confiscación de los asuntos públicos en manos de algunos (partidos, patrones políticos, mafias, etc.). Este giro en las concepciones de lo público corresponde a la evolución en las teorías y conceptos difundidos desde hace una década por las agencias internacionales, como el BM y el FMI, cuyos expertos desarrollaron la noción de « *gouvernance* » para « hablar de política sin nombrarla » (Ben Nefissa, 1999). La « *gouvernance* » sugiere en efecto « el esfuerzo para lograr el consenso u obtener los acuerdos necesarios a la ejecución de un programa en un escenario donde existen intereses varios, numerosos y divergentes » (de Alcantara citado por Ben Nefissa, 1999, traducción de O.H.). Se promueven así reformas que apuntan a nuevas articulaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado, pretendiendo resolver los conflictos por la lucha contra la corrupción, la racionalización de la gestión pública y el respeto al Estado de derecho.

¹ Odile Hoffman es Doctora en Geografía y se desempeña como investigadora en el Institut pour la Recherche et le Developement (IRD, anteriormente ORSTOM), institución francesa de investigación y desarrollo que tiene un convenio con en CIDSE de la Universidad del Valle.

Se ocultan de paso las dimensiones políticas de la vida pública que incluyen luchas de poder, contradicciones y conflictos de intereses, dinámicas hegemónicas y de dominación, etc.² En este contexto ideológico, el esfuerzo gubernamental para reconstruir el espacio público³ se inserta en el cruce de tres grandes orientaciones macro-políticas a las que, aplicando el caso al Pacífico colombiano, podemos asociar actores preeminentes.

La *descentralización* iniciada en los años ochenta otorga nuevos papeles a entes ya existentes (municipios, departamentos, entidades gubernamentales), lo que a su vez suscita la emergencia de actores que adquieren dimensión pública: tanto los alcaldes y sus equipos como los técnicos y funcionarios de las entidades descentralizadas son ahora responsables de la elaboración, financiamiento y ejecución de planes de desarrollo. La delegación de poderes y de gestión desplaza la arena de negociación hacia los niveles locales y regionales, con una creciente tecnificación y responsabilización de actores que anteriormente eran más gestores que iniciadores de políticas locales (Velásquez, 1996).

La *democratización* se dió en varios planos, principalmente a través de la elección popular de alcaldes (reforma de 1986, primeras elecciones en 1988), y del reconocimiento de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales (reformas de 1985, confirmadas y ampliadas en la constitución de 1991), con diversos mecanismos de veeduría, contraloría e intervención, incluyendo la tutela. Estas iniciativas gubernamentales respondieron en parte a presiones ejercidas desde las bases en contra de un clientelismo exacerbado que obedecía a lógicas nacionales (grupos de poder dentro de las facciones partidistas y entre ellas mismas) más que a factores locales. Los paros cívicos se multiplicaron en los años ochenta en todo el país, incluyendo el Pacífico (Guapi, Buenaventura, Quibdó, Tumaco) y

² El término de « *gouvernabilité* » (governabilidad), en cambio, tiene una carga ideológica menor, y se restringe a la capacidad o incapacidad de gobernar, a un momento dado, en un contexto institucional dado (puede ser el Estado, o un gobierno municipal o regional, o incluso una institución de cierta importancia. Desgraciadamente en castellano, hasta donde sé, ambos conceptos (*gouvernance* y *gouvernabilité*) se traducen por « gobernabilidad ».

³ La definición del espacio público se irá precisando a lo largo de las descripciones y del análisis. Partimos de una acepción elemental de « articulación del juego de intereses particulares con la construcción de consensos inspirados en la búsqueda del bien común » (términos de la convocatoria del VII Coloquio Nacional de Sociología, Cali, 3-5 de mayo 2000).

reunieron a fuerzas sociales que estaban dispersas: algunas de ellas descubrieron su capacidad de expresión política (pequeñas ong's o asociaciones de corte social-asistencialista o cultural) ; otras pudieron alzar una voz callada desde décadas atrás; otras más emergieron en estas ocasiones: el movimiento cívico de donde emergen líderes y militantes que conformarán luego el movimiento de comunidades negras.

Finalmente no se debe olvidar el proceso de *globalización* que se da través de medidas y discursos difundidos por las entidades mundiales como el OIT, BM, FMI, BID, UNESCO, con el doble efecto de una reevaluación del rol del Estado en los programas de desarrollo (hacia el retiro), y un reconocimiento del papel específico a los actores locales en la definición y ejecución de los planes de desarrollo que financian. Entre otros, y para el tema que aquí nos ocupa, el discurso sobre la multiculturalidad y pluriétnicidad se ve plasmado en la Constitución de 1991 y luego en la Ley 70 que delimitan, por primera vez, espacios políticos explícitos para las « comunidades negras » de Colombia (Agudelo, 1999 ; Hoffmann 1998).

Estos tres grandes procesos, iniciados en esferas internacionales o gubernamentales y bajo presión de la sociedad movilizada, desembocan en la constitución o mayor visibilidad de nuevos actores locales, conformando una « sociedad civil » en ciernes. En estas dinámicas políticas, la dialéctica local/global/local es total: los actores locales suscitan los cambios a la vez que dependen de medidas oficiales para aparecer institucionalmente; deben integrar el discurso localista para legitimarse -y acceder a los financiamientos- frente a las agencias internacionales que les proporcionan legitimidad y discurso. Asimismo, deben representar sus « bases » y rendirles cuentas pero, a la vez, tienen que aprender a manejar las lógicas globales para intervenir en los escenarios nacionales e internacionales, única manera de mantenerse presentes frente a los antiguos actores y grupos de poder con los que entran en competición.

De una cierta manera, las reformas « funcionaron ». Existen hoy, en el Pacífico por lo menos, espacios públicos que no existían en los años setenta: el político-municipal, el de la participación ciudadana, el de las « comunidades negras ». Esta interpretación deja sin embargo varios vacíos, en la medida en que sobrestima el papel del Estado, dándole un lugar autónomo y casi externo con relación a los espacios públicos que pretende fomentar. De alguna forma, postula la existencia de un Estado racional por fuera de la sociedad civil y capaz de influir sobre ella. Si bien analíticamente es válido diferenciar ambas categorías, es necesario reconocer y analizar los múltiples nexos que las relacionan y que, más que las iniciativas de cada una, impulsan en conjunto las dinámicas sociales y políticas. Por los actores que participan en los dos ámbitos, por las lógicas que a veces se cruzan, por algunos fuentes de financiamiento comunes, etc., las esferas del Estado y de la sociedad civil no se pueden distinguir fácilmente en la « vida real ».

En este artículo, quisiéramos analizar la construcción del espacio público bajo dos enfoques complementarios. Una primera parte es más descriptiva, y trata de los procesos concretos de construcción (o intento de construcción) de espacios públicos en la región sur del Pacífico en los últimos cincuenta años, partiendo de los juegos de los actores locales y siguiendo su inscripción en lógicas más globales. En una segunda parte, más analítica, proponemos un modelo de interpretación que permita evaluar la fragilidad de los espacios públicos recién constituidos y subrayar sus disfuncionamientos y/o potencialidades. Este modelo se concibe como una herramienta de seguimiento de las dinámicas sociales y políticas, que podría servir tanto a los observadores como a los propios actores.

La construcción de los espacios públicos en el pacífico colombiano : tres perspectivas

La noción de espacio público suscita cierta confusión. Por un lado es el lugar –no geográfico– donde se elaboran las reglas de convivencia entre miembros de una sociedad, donde se da la discusión y se exponen los conflictos y contradicciones, donde se busca la regulación social más allá de las unidades de base, donde se negocian las relaciones entre actores de un mismo territorio

y con los vecinos. Con razón apunta Da Matta (1989: 112) que «las reglas – por el hecho de no tener dueño- constituyen el espacio público por excelencia. Sin ellas no puede haber competencia ni lucha». El espacio público concebido como generador de reglas implica la existencia de mecanismos capaces de hacerlas respetar. En general esto se logra a través de instituciones especializadas, siendo el más evidente el ejemplo de la institución de la justicia que impone sanciones a los que no respetan las reglas.

Por otro lado, el espacio público se refiere a espacios geográficos, concretos, construidos socialmente e históricamente como «bien público», de acceso libre para todos los miembros de la sociedad (una plaza, una carretera, pero también ciertos edificios públicos). Por lo tanto difieren de una sociedad a otra, de una época a otra, pero responden a una condición fundamental de la convivencia social: tener espacios comunes que satisfagan las necesidades básicas de comunicación (en un sentido amplio de la palabra), sin restricción de orden social, económico o político. Por lo general los espacios públicos se inscriben en un espacio más amplio, diverso, concebido como el espacio de vida de la sociedad, que podemos en una primera aproximación calificar de territorio (en el sentido de territorio nacional por ejemplo).

La confusión entre las dos acepciones indica cierto grado de parentesco que quisiéramos descifrar, siguiendo a O'Donnell (1989), que expresa sus inquietudes teóricas a partir de situaciones muy concretas de confiscación o privatización de espacios públicos como son la calle, la playa y el espacio urbano en Brasil. En un primer momento, el espacio público se podría entonces definir como el espacio abstracto de regulación y negociación de las normas de acceso al espacio concreto de vida de una sociedad. Estudiar el espacio público consiste en analizar cómo emergen las «reglas» de convivencia, las cuales se refieren a espacios geográficos o políticos de muy distinto índole y escala. Como lo anota Sintomer (1998: 11), «siempre existe una pluralidad de espacios públicos, más que un espacio público unificado. [...] A nivel local se puede constatar la yuxtaposición de espacios públicos que casi no comunican entre ellos: el que se estructura alrededor del Concejo Municipal y de los eventuales consejos de barrios; los que se organizan

alrededor de asociaciones de barrios o, de manera más fluida, de grupos informales; los que están a medio camino entre la política y otros registros sociales (como el rap); los de tipo tradicional o comunitario..» (traducción de O.H.). Esta multiplicación de espacios públicos «sectoriales» no representa en sí, ni un obstáculo ni una ventaja para una mejor gobernabilidad; sencillamente traduce la complejidad social del momento y sus antecedentes históricos, y como tal se debe analizar. A continuación presentamos algunos procesos de construcción de espacio público desde tres perspectivas: desde su construcción microsocia y territorial, desde la acción pública (desarrollo institucional) o desde la acción colectiva (movimientos sociales y participación ciudadana).

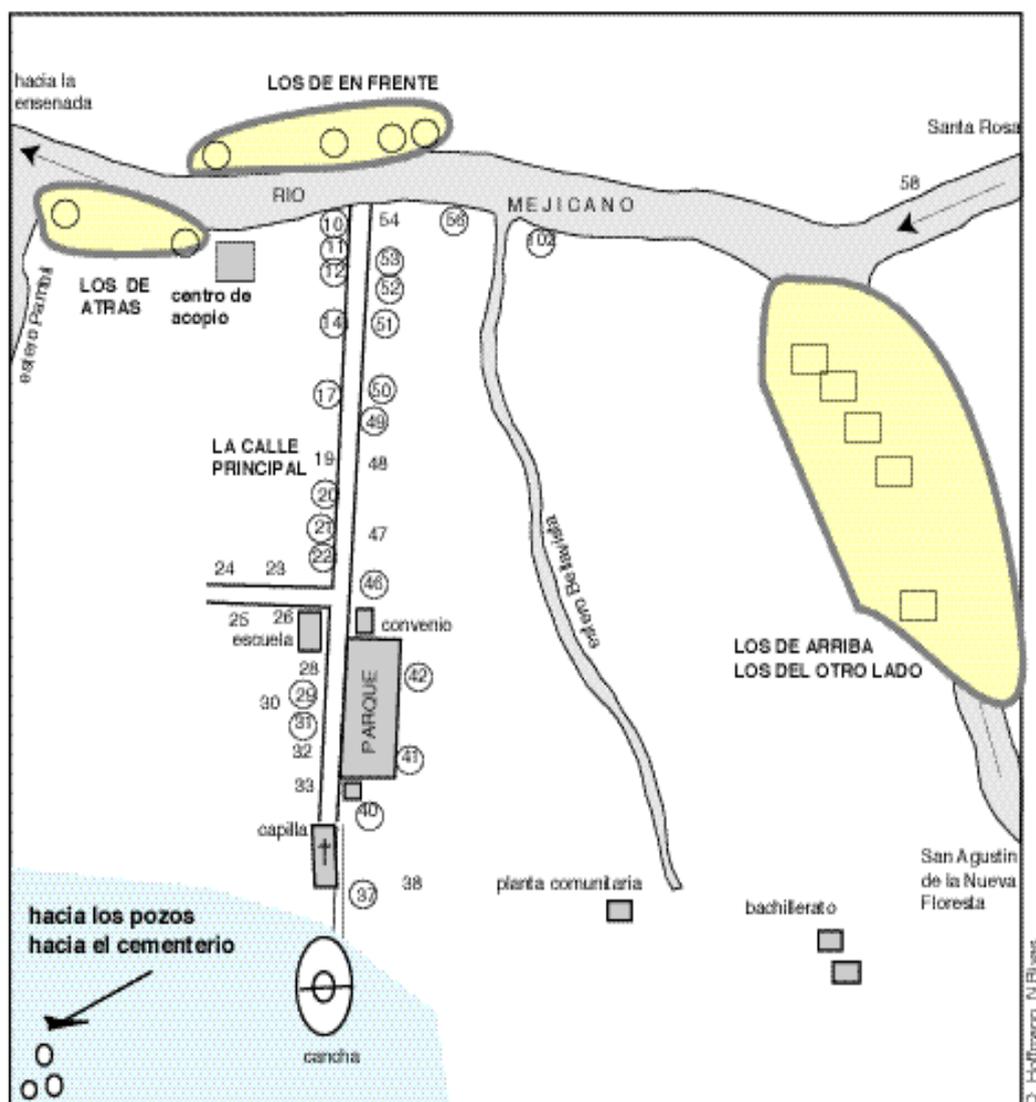
1. Espacios públicos a nivel veredal: las marcas de « lo público » y la estructuración del espacio

En el Pacífico rural « tradicional », las estructuras del aparato de Estado están casi ausentes. La ciudad está lejos, los funcionarios rara vez llegan a los ríos, las instituciones de educación (escuelas primarias) y salud (centros de atención primaria) son absolutamente deficientes, y los servicios públicos inexistentes. Tampoco existe control fiscal ni regulación estatal de las actividades productivas. El comercio está reducido a intercambios personalizados, lo mismo que las actividades de transporte. Los asuntos colectivos se tratan entonces (o se trataban, hasta hace veinte años quizá, hasta en la actualidad en muchas partes alejadas) entre habitantes del lugar, en interacciones dialógicas (Whitten 1992, Rivas 1999b) que, multiplicadas al infinito, conforman el espacio público de proximidad.

La historia del poblamiento determina unas modalidades de habitat muy específicas. A lo largo de migraciones que se intensificaron en el siglo XIX desde los valles interandinos, el altiplano y los piedemontes hacia la costa pacífica, los pobladores negros se instalaron en casas y pequeñas aldeas alineadas a lo largo de los ríos que corren paralelos entre ellos y perpendiculares al mar (West 1957). En estas tierras relativamente «vacías» y

no apropiadas legalmente (tierras baldías o tierras de la nación), construyeron poblados precarios y móviles: una inundación, un maremoto o algún desastre pueden acabar con un pueblo o, al contrario, un fundador activo y carismático logra atraer a nuevos migrantes, o también los recién casados prefieren apartarse y crear otro núcleo de población, etc. Desde los años setenta, sin embargo, se da un proceso de consolidación del hábitat, con un crecimiento poblacional fuerte en algunos pueblos y un inicio de jerarquización urbana (Mosquera y Aprile 1999).

La vereda de Bellavista, río Mejicano: la conformación espacial y los espacios públicos



Fuentes: fondo y numeración de viviendas: CIDEIM (1997)
información de encuesta propia

UNIVALLE - IRD, 2000

- etapa 1 : los barrios de parentela
- etapa 2 : los lugares colectivos
- etapa 3 : construcción institucional o comunitaria
- vivienda de miembros del grupo de los fundadores (28 viviendas)
- vivienda de miembros del grupo residente en el barrio "del otro lado" (6 viviendas)

NOTA: total de viviendas habitadas en 1997 = 54

En estos contextos, es interesante seguir las pautas de la extensión del espacio público (asumiendo aquí la ambigüedad del término) y de su posterior diferenciación y fragmentación, a nivel micro. Tomaremos el ejemplo de Bellavista (río Mejicano, ensenada de Tumaco, fig.1), vereda fundada al final del siglo XIX y que cuenta hoy con cerca de 250 habitantes. A lo largo del río subsisten tres barrios (los de atrás, los de en frente, los de arriba) de hábitat linear y familiar, típico de las primeras instalaciones en todo el Pacífico. Luego el poblado se desarrolló alrededor de una « calle principal » perpendicular al río, de hábitat más denso y mezclado, a la vez que los habitantes construyeron, con trabajo comunitario y aportes personales, la cancha de fútbol, los pozos y el cementerio, todos alejados del espacio habitado. Finalmente, a partir de los años setenta, se construyeron «espacios públicos» en la parte alta del pueblo : la capilla, la escuela, el parque, la «casa del convenio» (una Ong) y, recientemente, la planta de energía y el bachillerato, todas de material duradero que contrastan con las viviendas de madera de los pobladores.

La organización espacial de la vereda denota claramente la coexistencia de varios «espacios públicos» : en la primera etapa, no se diferencian lugares públicos o privados, salvo quizás las cocinas y azoteas de cada vivienda. Los asuntos colectivos se tratan en las riberas y playas del río, en las salas y verandas de las casas, en las canoas durante los viajes, etc. En la segunda etapa, se diferencian el espacio de viviendas de los «lugares colectivos», cuyo acceso implica reglas de uso, pero son reglas implícitas y cambiantes según los contextos. Por ejemplo, el espacio de la cancha, por lo general abierto a todos los jóvenes del río, se verá restringido en caso de conflicto con la vereda vecina, o los pozos de acceso libre en tiempo «normal» se individualizarán temporalmente en caso de tensión o división interna a la vereda (Rivas 1999a). Los «espacios públicos» lo son en cuanto corresponden a una dinámica social dada, no por naturaleza. En la tercera etapa, se delimitan lugares cuyo carácter público está avalado por instituciones (la iglesia, la escuela..), además que se distinguen en el paisaje por su ubicación (alejado del río, en la loma) y su tipo de construcción. Aparece una distinción entre el conjunto de individuos y sus necesidades, y la colectividad y sus necesidades que ahora pasan por el canal de instituciones formales y ajenas a la vereda.

En el Pacífico, el «espacio público» existe fuera y antes de las instancias y estructuras formales –incluso materiales- que hoy lo caracterizan (sean éstas del Estado, de la Iglesia o de una Ong). La no-ruptura entre público y privado no significa que no exista la idea de bien común, tampoco que sólo rija el individualismo, sino que se da un manejo flexible y contextual de las reglas de acceso a los espacios y recursos de la vereda. Podríamos hablar de un «espacio

público íntimo», parafraseando las regiones íntimas de Lomnitz-Adler (1995) que insiste sobre las modalidades contextuales y «culturales» de los arreglos sociales, las cuales dibujan las fronteras identitarias del grupo local o regional. Los mecanismos sociales de interacción no disocian lo privado de lo público, sino que ponen en juego negociaciones permanentes entre los actores, a nivel micro, en función de los contextos. Así lo comprueban los ejemplos de resolución de conflicto que se pudieron observar en el río Mejicano (Rivas 1999b): según el objeto del litigio (por lo general robo, invasión de parcela o destrucción de cultivo), intervienen individuos que pueden ser familiares, compadres, comadronas o ancianos, en escenarios físicos que varían desde los muy informales (en casa de alguno, en la tienda) hasta los formales (en la escuela, con una confrontación pública de las partes). No existe un garante único de «autoridad» y legitimidad para dirimir conflictos, tampoco un solo dispositivo, sino una amplia gama de mecanismos que se adaptan a cada caso.

Por su parte, aquí como en muchas partes, la institucionalización de los espacios públicos es expresión de la modernidad, no sólo a nivel material o de integración a la sociedad global sino por lo que significa en cuanto al distanciamiento de los individuos frente a la colectividad (mayor reflexividad y subjetividad del individuo). La formalización de los espacios públicos traduciría una tendencia a la individualización en la sociedad, cuando las personas se alejan de las redes de sociabilidad «primaria» (familia, parentela..) para remitirse a otras formas de relación del individuo con la colectividad (sea esta ciudadana, religiosa, étnica, asociativa, etc). Sin embargo la observación no permite llegar a estas conclusiones. La emergencia de un espacio público formal no ha significado que la otra modalidad pierda vigencia o tenga menos eficacia. Ambas coexisten sin excluirse, una tomando más importancia que la otra según las circunstancias. Se entremezclan, en una tensión permanente⁴ que redefine cada día las lógicas del que-hacer político en estas regiones. En efecto, es evidente que la dimensión política no es privativa de una o de otra modalidad, sino que pasa por lo cotidiano y lo

⁴ A este respecto se podría retomar la expresión de A.Marie (1997) que habla de «dos órdenes cómplices» al referirse a lo individual frente a lo colectivo.

interpersonal, además de incluir la expresión pública de ciertas posturas y discursos.

Lo importante aquí es evitar la interpretación evolucionista que vería en las distintas modalidades del espacio público el simple efecto del crecimiento demográfico de las veredas (mayor complejidad social y política) por un lado, de la entrada en la modernidad por otro. Más que en oposición, se deben interpretar como una combinación que revela una manera propia de concebir lo público y lo político. En este sentido el espacio público (en su diversidad) es una construcción cultural, y corresponde a un espacio social y simbólico de identificación y de solidaridad, para la gente que comparte este complejo dispositivo político.

2. La perspectiva institucional y la acción pública, el tramado territorial

Cambiamos ahora de escala y de lógica, al interesarnos no tanto en la regulación social «desde dentro» o desde abajo, sino en las instituciones que pretenden intervenir y organizar la vida pública en la región.

A partir de los años 1960, después del periodo de la «Violencia», el Estado intenta implementar instituciones de gobierno local a nivel micro, con los corregimientos. Concebidos como unidades territoriales que incluyen varias inspecciones de policía –encargadas de justicia menor en las veredas-, los corregimientos deben asegurar la comunicación administrativo-política entre el municipio y los ríos. De alguna manera, es un primer intento de construir un espacio público a nivel local ⁵.

En el municipio de Tumaco en 1997, según la Registraduría del Estado Civil, existían 167 veredas, de las cuales 111 eran corregimientos y 48 inspecciones (las inspecciones eran, en promedio, de tamaño mayor que los corregimientos, lo que de por sí, es una primera anomalía). Sin embargo en 1996, el Secretario a la Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Tumaco ignoraba el número y la localización de corregimientos e inspecciones del municipio, y en las

⁵ Aunque en esta época se trate quizás más de un espacio de control político de la población.

veredas casi nunca se mencionan ni se conocen los estatutos administrativo-políticos de las localidades. La confusión es persistente entre corregimiento e inspección por un lado, entre vereda (punto) y unidad territorial por otro. De hecho, los corregimientos en cuanto tales nunca fungieron como unidades territoriales, sino como puntos que eran las veredas-sedes. La noción de «tramado» político-administrativo, donde existen unidades territoriales que engloban a varios poblados menores, con una vereda-sede que por lo mismo tendría prerrogativas sobre los demás, no se arraigó en el Pacífico. La idea de jerarquización entre veredas no «cuadra» con la historia del poblamiento, que se construyó al ritmo de las fundaciones de las veredas, pero también de los fracasos de poblados desaparecidos por una mareada, un incendio, el agotamiento del recurso o unas desgracias que decidieron de la salida de los habitantes. De cierta manera, la alta volatilidad de las veredas del Pacífico (múltiples abandonos y creaciones, crecimientos y decrecimientos repentinos) no se dejó encerrar en una tipología administrativa. Los corregidores funcionan hoy uno por vereda (confundiéndoles con el inspector de policía), como «carteros del alcalde»; son socialmente instrumentalizados por las veredas que los necesitan para la comunicación institucional (para el Chocó, ver Losonczy 1997), pero el cargo no confiere ni implica prestigio social.

El destino de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fue un poco distinto. También voluntarista, su creación se enmarca en la política gubernamental del Frente Nacional (1958), y se difunden bajo el impulso de los alcaldes y políticos locales afiliados a uno u otro partido, para repartir cuotas en obras y servicios⁶. Pero si los habitantes se acuerdan de ellas (porque ya no son muy activas), es para quejarse de la ruptura que éstas provocaron: «Las Juntas empezaron a fragmentarlo todo, nos dividieron» (Porfirio Becerra, La Espriella), o bien «fue un golpe, lo que antes era de organización se volvió institución. Se echó a perder nuestra amistad. Se acabaron la minga y el cambio de mano» (Bellavista 1998). La intervención del Gobierno logró efectivamente, según los testimonios, cambiar ciertas reglas de negociación para obtener obras y servicios, pero a costa de los mecanismos tradicionales que dejaron de ser operativos.

⁶ «La JAC está por las obras, el corregidor por la Ley» (Bellavista, 1997)

Lo que antes se trataba a nivel de la vereda, de la familia, de los individuos, ahora se podía resolver mediante los canales institucionales insertos en las lógicas partidarias del Frente Nacional (reparto de los recursos y puestos, entre ellos los de las JAC). Esto hubiera podido desembocar en la constitución de un espacio público, es decir, en la aceptación de «reglas» de negociación de los asuntos colectivos. Sin embargo no fue así ya que de alguna manera, la institución suplantó a los actores locales; éstos no se apropiaron de unos mecanismos que no podían controlar, y las JAC siguieron como instancia de control político sin por ello promover participación ni negociación ciudadana (y de hecho, en el Pacífico, dejaron de jugar papel importante, hasta para las obras que se negocian directamente con el alcalde, el concejal o algún político).

3- Desde la acción colectiva

Desde hace una década entramos en una nueva fase de intensa movilización institucional, a raíz de los cambios constitucionales, de la Ley 70 y de las medidas concretas que se tomaron a nivel regional y local para aplicarla. Que se deban a iniciativas gubernamentales o a la movilización social sigue siendo tema de discusión; lo cierto es que los cambios actuales están conformando un nuevo panorama político-institucional. Se pueden distinguir tres niveles de organización que implican cierta participación popular o comunitaria, y que se reivindican como lugar de expresión e, incluso, de manera explícita, como «espacio público» en construcción.

-A nivel nacional y departamental, los espacios abiertos a las «comunidades negras» por la constitución y la Ley 70 (comisión consultiva de alto nivel, comisiones consultivas regionales, etc, ver Agudelo 1999 :164) no se han convertido en verdaderas arenas públicas de discusión y, con sus

excepciones, funcionan más bien como espacios de competición entre organizaciones y entre directivos para controlar recursos, información o puestos de poder.

-A nivel regional en la parte sur del Pacífico se constituye en 1993 un «Palenque Regional Nariño», coordinación regional del movimiento nacional «Proceso de Comunidades Negras» (PCN). Nació con la Ley 70; reunió en un principio algunas organizaciones pre-existentes (estudiantiles, culturales, de solidaridad, etc.), y propició en los años siguientes la constitución de muchas otras, que trabajaban en la difusión de la Ley a nivel regional, y llegaban hasta los últimos rincones de los ríos y montes del Pacífico sur. Así, de 1993 a 2000, «El Palenque» coordina de hecho las OET (organizaciones étnico-territoriales) que se crean en vista de la constitución de los territorios colectivos de comunidad negra; se presenta como la instancia de representación e interlocución de las comunidades negras de Nariño frente a las estructuras legalmente instituidas para implementar las nuevas políticas. Ocupado en un intenso trabajo de organización de base por un lado, y con una pretensión legítima a ocupar un espacio político de cierta envergadura por otro, el Palenque tenía muchos frentes a la vez. Con una capacidad reducida en miembros permanentes, no pudo asumir todas sus obligaciones, lo que lo llevó a la implosión. En efecto, en los últimos años, las organizaciones de base se distanciaron del grupo de directivos y reivindican ahora el papel de interlocutor (y canalizador de recursos) que el Palenque pretendía asumir en su nombre. Constituyeron instancias alternas, todavía frágiles, como por ejemplo la Asociación de Consejos Comunitarios del Centro y Norte Nariño, y buscaron establecer sus propios medios de negociación directa con las instancias gubernamentales.

El caso de esta fragmentación institucional merece análisis, más allá de una interpretación en términos de luchas de poder entre fracciones, de confiscación de puestos de representación o, incluso, de desvío de recursos. En sus inicios (años 1993 y siguientes), el Palenque funcionó como «espacio público» en el momento particularmente estratégico en que se difundían los textos de la Ley: había adecuación entre los actores locales, sus metas, el espacio que abarcaban y las instituciones que orientaban los debates.

El Palenque era el lugar de confluencia de intereses, de difusión de la información, es decir, llenaba un papel fundamental y único de comunicación y de facilitador del cambio a nivel regional. Era también el espacio de construcción identitaria por excelencia, en el que los actores locales empezaron a verse como «comunidad negra», con derechos y posiciones específicos en la sociedad regional y nacional.

Una vez constituidas las organizaciones étnico territoriales en cada río, porción de río o incluso vereda, los espacios de referencia de los actores sefragmentaron: los objetivos eran ahora constituir los consejos comunitarios reclamados por la Ley, y luego de concertar entre los habitantes las modalidades concretas de explotación y manejo de estos espacios (los territorios colectivos). Para los actores de la base, la institución válida dejó de ser Palenque, y se concentró en las organizaciones de base y luego en los consejos (ver más abajo). El Palenque, fiel a su vocación inicial de coordinación regional, no advirtió este cambio a tiempo; no modificó su funcionamiento y siguió en sus pretensiones de monopolizar el protagonismo frente a las instancias superiores, lo que causó desacuerdo y conflicto con las organizaciones de base. En otras palabras, Palenque dejó de funcionar como espacio público consensual, cuando cambió para la gente el espacio de referencia (de «la región» hacia «los territorios colectivos») y con esto las fuentes de legitimidad.

-A nivel local, como ya vimos, las organizaciones étnico-territoriales (OET) se constituyen para difundir en el campo las posibilidades abiertas a las poblaciones negras del Pacífico por la nueva constitución (1991), el artículo transitorio 55 y, posteriormente, la Ley 70. Como lo mencionamos, se insertan en el Palenque Regional y en las redes regionales de información y consecución de recursos. Al cabo de múltiples reuniones y asambleas locales, desembocan, en medio rural, en la constitución de «Consejos Comunitarios» encargados de llevar a cabo el proceso largo de titulación colectiva (Agier y Hoffmann 1999), a nivel de un río, una vereda o un conjunto de veredas.

Sin embargo, la creación de los Consejos Comunitarios no siempre implicó la desaparición de las OET que los precedieron. En efecto, desde el punto de vista organizacional del Palenque, las primeras en el tiempo (las OET) son concebidas como estructuras de larga duración, destinadas a acompañar el proceso de constitución de los Consejos, para luego apartarse de ellos y permanecer como herramienta de movilización política, más allá de los asuntos de gestión de los territorios colectivos. En esta lógica, los Consejos serían los actores microlocales (manejo del territorio colectivo) y las OET pretenden conservar un protagonismo político frente a los actores regionales y/o nacionales (el mismo que está en disputa con Palenque Regional). Es así como una OET, en la zona del río Patía, propició la constitución de varios Consejos comunitarios, pero sigue en pie aun después de las titulaciones. Sin embargo, en muchos casos, la OET y el Consejo coinciden en el espacio abarcado (1 organización = 1 consejo): las personas –y particularmente los directivos- adhieren a ambas estructuras, los temas de negociación se discuten en ambos espacios, etc. En estas circunstancias, los habitantes del lugar expresan cierta confusión frente al dispositivo desdoblado, el cual propicia competencia y conflictos de legitimidad en el momento de tomar decisiones (como se vio en la discusión del reglamento interno en cierta ocasión, debido a que la OET y el Consejo tenían divergencias y reivindicaban ambos la autoridad en la materia).

El espacio público en el centro de un triángulo : institución –actor– territorio

Hasta aquí hemos mencionado algunos espacios públicos abiertos recientemente en el Pacífico en el marco de los cambios globales enunciados en la introducción. Hemos visto cómo algunos funcionaron efectivamente como arenas de discusión, otros nunca, otros en un periodo solamente. Más allá del análisis descriptivo –indispensable- de su funcionamiento y de las razones que llevaron al éxito o fracaso⁷, quisiéramos proponer una hipótesis más global, que se apoya en casos concretos pero los rebasa.

⁷ Ver Agier y Hoffmann 1999 para el caso de las OET y Palenque en Nariño ; Agudelo 1999 y Hoffmann 1998 para el caso nacional.

Recordamos la definición de Sintomer para quien el espacio público es un espacio abstracto de *interacciones* donde se discuten los asuntos colectivos; tiene ciertas *reglas* -pluralismo, publicidad de las posiciones- e implica la existencia de controversias, es decir, la politización de los debates (postura de Habermas) (Sintomer 1998 :8-9). Todo espacio público es político por definición, pero no todos los espacios políticos son espacios públicos: las disputas en la cúpula gubernamental, las luchas partidarias para la repartición de puestos, las relaciones de fuerzas entre facciones, y muchos otros, se dan en espacios políticos s.s., sin que haya interacciones alrededor de asuntos colectivos, y menos reglas de pluralismo y publicidad de los debates. A pesar de sus múltiples nexos, no puede existir confusión entre ambos términos.

Ahora bien, las interacciones implican presencia de actores actuantes (no pasivos ni meramente manipulados o sumisos a las estructuras), que no tienen un acceso igualitario a los espacios públicos. Tenemos que reconocer, con Bourdieu, que la estructura social orienta en parte las interacciones, en la medida en que los actores disponen de capital (social, simbólico, económico) desigual, lo que les permite -o no- intervenir de manera también desigual en los debates, en función de la legitimidad de que gozan -o no- dentro de cierto espacio público. En otros términos, la comprensión del funcionamiento de un espacio público pasa inevitablemente por el análisis del juego de los actores, con sus respectivas estrategias y limitaciones.

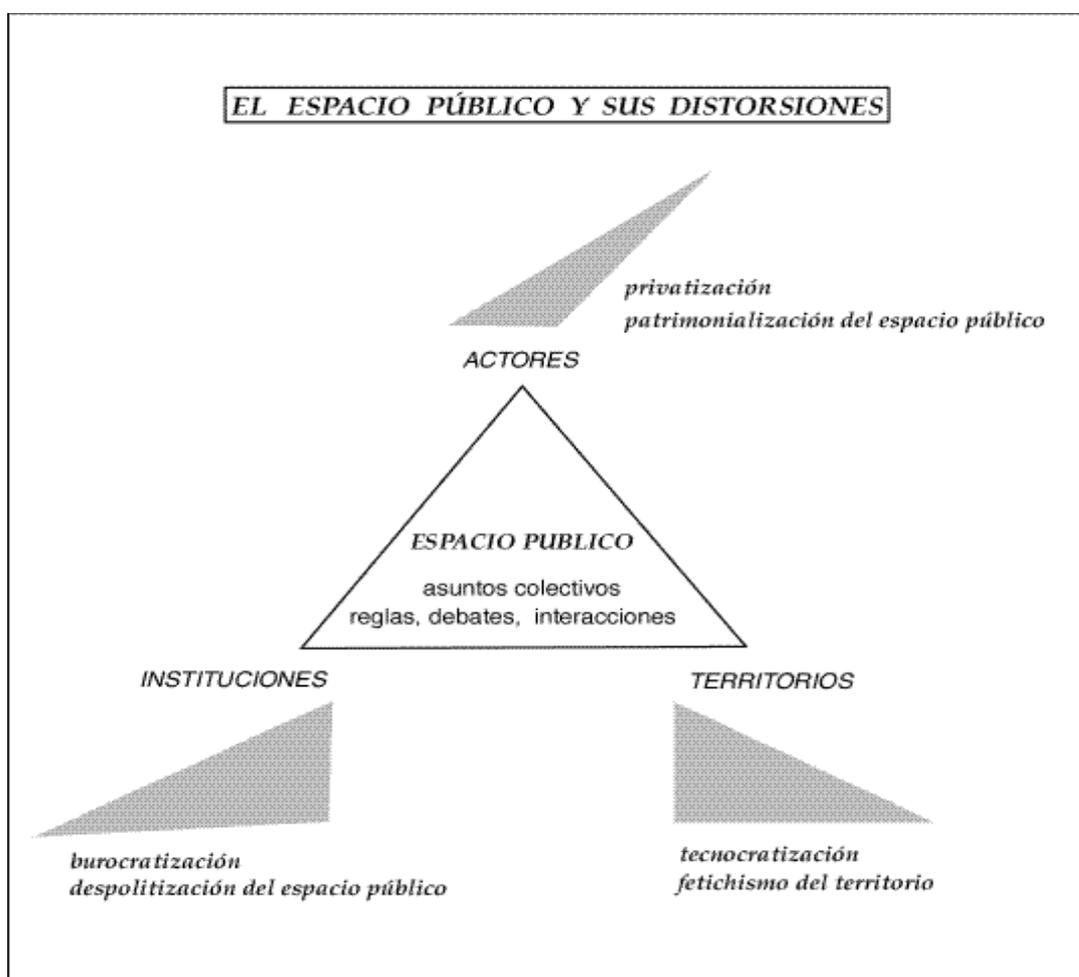
Por su lado, la idea de «reglas», indisociable y hasta asimilable por algunos a la noción de espacio público, remite a la noción de «institución», fuente o garante de éstas. Esto es particularmente evidente en el caso de espacios públicos «formales», como el político-electoral cuyas reglas se emiten desde los reglamentos electorales y se vigilan (o deberían vigilarse) en los distintos partidos. También los espacios étnico-comunitarios tienen sus reglas -que sean escritas, dichas o no-, con la posibilidad de sancionar posibles abusos o de cambiarlas a través de instituciones como las organizaciones de base o el Palenque. Incluso en el caso de los «espacios públicos íntimos», sin reglamentación explícita, existen mecanismos e instituciones sociales capaces de orientar los comportamientos y señalar las desviaciones (pienso en la familia, o el colectivo religioso cuando existe).

Finalmente, es necesario introducir la noción de territorio, definido aquí como el ámbito de referencia de los actores y de las instituciones, que no existen en el vacío sino con relación a una sociedad –o grupos sociales- contextualizada en el tiempo y en el espacio. El territorio remite a un espacio social de solidaridad y de identificación, siempre en relación con situaciones dadas. Al igual que las identidades, los territorios nunca son definitivos ni únicos, sino que se insertan en otros más amplios, abrigan otros «menores» o se combinan con otros.

Podríamos entonces visualizar un espacio público como un triángulo cuyos vértices serían los actores, las instituciones y los territorios, haciendo la hipótesis de que sólo funciona en cuanto tal cuando existe cierta adecuación entre los tres puntos de anclaje. Al contrario, cuando una dimensión adquiere un papel demasiado prominente en detrimento de las otras, el espacio público se distorsiona hasta cambiar de naturaleza y volverse, por ejemplo, espacio político stricto sensu (luchas de poder) o espacio de planeación, o aún desaparecer. Los casos mencionados previamente ilustran esta proposición (ver también el esquema, fig.2).

- Cuando se sobrepone la dimensión institucional sobre las demás, se corre un doble riesgo. Por un lado, puede llevar a la rigidificación de las instituciones, que pierden la comunicación con los actores y las dinámicas sociales y políticas del lugar. Esta *burocratización*, que privilegia la lógica institucional sobre la social, impide el debate y los asuntos colectivos se ven confiscados por la estructura que impone las reglas sin discusión abierta. Por otro lado, el sobrepeso de la institución puede cortar los lazos de legitimidad que debería mantener con la población que pretende servir. Se vuelve una «cáscara vacía» sin contenido político o social. De tal manera que la ausencia de debate lleva a una *despolitización del espacio público*. Esta interpretación llevaría al fracaso a los corregimientos en el Pacífico. Serían

- innovaciones institucionales, concebidas e implementadas desde arriba, sin tomar en cuenta los actores de base ni su funcionamiento real, y menos aún, adaptarse a las organizaciones territoriales preexistentes. En el Pacífico, con algunas excepciones, dejaron pronto de ser pertinentes para los habitantes, al punto de no ser operativas ni siquiera para las estructuras de gobierno para las que se habían creado (los municipios).



- Cuando jala demasiado del lado territorial, se distorsiona el espacio público en el sentido de que sólo los aspectos territoriales son legitimados por las instituciones, desconectándolos de sus raíces sociales o políticas. Al pretender enfocarse exclusivamente sobre los fundamentos territoriales de las sociedades, el espacio público se reduce a la discusión de asuntos locales de planeación o manejo, con una creciente *tecnocratización* en las decisiones. Lo que califico de «*fetichismo del territorio*» es esta tendencia a pretender explicar y arreglar todo a partir de criterios eminentemente parciales, locales, negando las dimensiones globales y políticas que siempre tienen los asuntos colectivos, así traten de temas muy concretos (la basura, la contaminación, la construcción de una calle, etc). Otra posible «desviación territorial», frecuente, consiste en utilizar el territorio como instrumento de identificación de un «nosotros» y de exclusión del «otro». En el contexto colombiano actual, se podría incluso llegar a una partición territorial de la sociedad, o una partición social sobre bases territoriales: los indígenas por un lado, las comunidades negras por otro, los desplazados, pero también las guerrillas, los paras, etc. El territorio es la base del espacio público, pero debería serlo siempre en términos relativos: demasiado énfasis en la defensa del territorio propio lleva a desconocer los otros actores e instituciones que participan en territorios contiguos o imbricados. El territorio se vuelve entonces causa del estrechamiento de la vida pública sobre bases territoriales limitadas.

- Finalmente, las distorsiones más clásicas son las que se refieren a la confiscación del espacio público por los actores cuando rompen sus relaciones de lealtad y obligación hacia las instituciones y los territorios con los que conforman el espacio público. Ampliamente documentados en la literatura, los procesos de *privatización* del espacio público consisten, para el o los actores dominantes, en priorizar estrategias particulares (sean individuales o de grupos), utilizando su peso en el espacio público para fines que divergen de las colectivamente aceptadas. Pueden ser fines exclusivamente materiales (corrupción) como pueden ser, caso más general, para fines políticos, utilizando el capital social o político acumulado en cierto espacio público para legitimar una intervención en otros espacios (lo que algunos autores califican de procesos de *neopatrimonialización*).

Así es como interpreto la dificultad de los Comités Regionales de Comunidades Negras para conformar un espacio público vivo, cada actor jalando por su lado para imponer sus reglas y temas de interés. Asimismo se explica la fragilidad de ciertas organizaciones étnico-territoriales, que dejan de fungir como espacio público pertinente en el momento en que siguen con una lógica estrictamente política, mientras los términos del debate colectivo se desplazaron hacia los territorios y las nuevas instituciones (los Consejos

- Comunitarios). La privatización extrema lleva al desmembramiento del espacio público en cuanto tal o a su desplazamiento hacia otras arenas de discusión y otras instituciones.

Además de subrayar las deficiencias y distorsiones del espacio público en el Pacífico, este modelo permite distinguir los casos en que sí funcionan o funcionaron, en un momento dado, algunos espacios públicos. En cuanto a los ya mencionados, está el Palenque Regional Nariño en un primer periodo, el de la adecuación entre los asuntos tratados (movilización y difusión de la Ley 70), el espacio abarcado (regional) y los actores que intervenían: dirigentes regionales, pero también líderes locales, campesinos, funcionarios, miembros de asociaciones diversas, etc. También las OET, en su primera etapa, propiciaron el debate colectivo y público a escala de los territorios colectivos, llegando a constituir espacios públicos que, para muchos habitantes, revistieron una importancia fundamental por darles acceso, por primera vez, al debate político (Hoffmann 2000). Otros espacios públicos, que no indagamos en estas páginas, emergieron en el Pacífico de los últimos años: el que invade toda la vida pública en los periodos electorales (Agudelo 1999), el que se teje alrededor de instituciones públicas como Plan Pacífico en sus gestiones de construcción de obras y servicios en las veredas o incluso de instituciones privadas como Plan Padrinos (una Ong internacional) cuando impulsa la participación comunitaria.

Conclusión

El Pacífico rural nos ofrece la oportunidad única de poder seguir, en el espacio geográfico, las marcas concretas de la construcción del espacio público desde sus inicios. El enfoque geográfico permite seguir las huellas de las transformaciones del espacio público e interpretarlas en términos políticos. A nivel regional, cuando se pierde la correspondencia entre espacio geográfico concreto y espacio público, el mismo enfoque sigue siendo pertinente con la introducción del concepto de «territorio», asociándolo a los de actores e instituciones. El espacio público sólo existe en la articulación (y no la sola yuxtaposición) de intereses de actores e instituciones en un mismo territorio, así sea éste real, político o simbólico. Si se separan los ámbitos (el de las instituciones, el de los actores, el territorial), se distorsionan los espacios públicos. Desde un punto de vista teórico-metodológico, este enfoque permite rebasar las oposiciones que se usan clásicamente para explicar fracasos o limitaciones del desarrollo de la acción colectiva desde el espacio público: pienso en el dilema teórico estructura/interacción, o en las dicotomías de público/privado, Estado/sociedad civil, o individual/colectivo.

En los últimos diez años, el Pacífico experimentó transformaciones mayores, con la emergencia de discursos y actores que promovieron la constitución de un espacio público nuevo, en la línea del movimiento de comunidades negras (es decir, organizado alrededor de la noción de identidad negra y de la participación popular en el devenir de su región). Esta parte de la sociedad civil no existe por fuera del Estado, como tampoco existe por fuera de los partidos y de las demás «corporaciones» que componen la sociedad, pero tiene cierta autonomía que proviene de las características del espacio público que fomentó (entre otras: multiplicación de espacios a varias escalas, fuerte presencia de campesinos y pobladores rurales, temas de importancia «vital» para los actores).

De alguna manera, el Pacífico conforta cierto optimismo expresado por Restrepo cuando habla de la emergencia de los actores de la sociedad civil que se imponen a los partidos y se «autorepresentan en el espacio público», y concluye que «la dinámica no apunta ya a construir la sociedad desde el Estado sino más bien a reconstruir el Estado desde la sociedad» (Restrepo 1990 :153).

Sin embargo el análisis de las prácticas concretas no justifican tanto optimismo. Es cierto que la multiplicación de espacios públicos no representa, en cuanto tal, una amenaza a la democratización o participación ciudadana, siempre y cuando cada uno de ellos sea coherente y esté articulado con los demás. Pero algo que sí cuestiona el proceso de «inclusión ciudadana» es la confiscación parcial o total de algunos de ellos y la distorsión entre las dimensiones territorial, social e institucional. Cuando se combinan demasiadas distorsiones en el espacio público global, se cortan las

comunicaciones entre actores, entre instituciones, a veces entre territorios (caso de los Conejos Comunitarios de algunos ríos, en el Cauca, por ejemplo), o entre las tres dimensiones. Sin reglas comunes y aceptadas (definición del espacio público), se difunden actitudes de imposición que participan del ambiente de violencia que vive la región.

Todo el mundo (el gobierno, los políticos, las ong's, los líderes, los militantes, los habitantes) aspira a desarrollar y fortalecer el espacio público. Bajo este lema, programas específicos se financian desde las agencias nacionales o internacionales para promover el «fortalecimiento institucional», o favorecer la «gobernabilidad», luchar contra la corrupción, etc. Pero haciendo así se privilegia un solo eje, el de la institucionalidad, y se olvida una característica intrínseca de cualquier espacio público: su naturaleza política. Como bien lo recuerda Da Matta, el espacio público está en el centro de disputas mayores: un espacio público amplio y abierto debilita el poder de cada uno los participantes; su reducción y privatización otorga más poder a algunos (Da Matta 1989). El juego político regional, donde los políticos y actores pretenden ampliar el espacio público a la vez que acceder a más poder, sólo se puede construir alrededor de esta paradoja.

Bibliografía

AGIER, Michel y HOFFMANN, Odile (1999), Les terres des communautés noires dans le Pacifique colombien. Interprétations de la loi et stratégies d'acteurs, Paris, *Problèmes d'Amérique Latine*, N° 32, janvier-mars 1999, pp17-42, Paris, La Documentation Française.

AGUDELO, Carlos, 1999, Colombie: changement constitutionnel et organisation des mouvements noirs, *Problèmes d'Amérique Latine*. n° 32, janvier-mars 1999, pp43-52, Paris, La Documentation Française.

BADIE, B., *La fin des territoires*, Paris, Fayard, 1995

BAYART, J-F., *L'illusion identitaire*, Paris, Fayard, 1996

BEN NEFISSA, S. (2000). *Ong, gouvernance et développement dans le monde arabe*. Conférence UNESCO, Le Caire, 29-31 mars 2000 « NGOs and governance in the Arab countries »

BLANQUER, JM et C.Gros, *La colombie à l'aube du troisième millénaire*. IHEAL-1997

BOURDIEU, P. (ed), *La misère du monde*, Paris, Le Seuil, 1996

DA MATTA, Roberto, 1989, A propósito de microescenas y macrodramas : notas sobre el problema del espacio y del poder en Brasil. *Nueva Sociedad*, N°104, nov-dic.1989: 111-117.

HOFFMANN, O. (1998), Políticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias: Colombia y México, *Análisis Político* N°34, mayo/agosto 1998, Bogotá, IEPRI, pags. 3-25.

HOFFMANN, Odile, 2000, "Jeux de parole et de mémoire autour des mobilisations identitaires dans le Pacifique colombien", Paris, *Autrepart* N°14, pp33-52

LOMNITZ-ADLER, Claudio. 1995. *Las salidas del laberinto*. México. Ed. Joaquín Mortiz, 426p.

LOSONCZY, AM. 1997. *Les Saints et la forêt. Rituel, société et figures de l'échange entre noirs et indiens Emberá (Chocó, Colombie)*. Paris, L'Harmattan, 418p.

MOSQUERA, Gilma y APRILE, Jacques, 1999, Habitats y habitantes del Pacífico, Síntesis y reflexiones finales, *Cuadernos CITCE*, Serie Investigaciones n°2, Cali, UNIVALLE, 87p.

O'DONNELL, Guillermo, (1989), Privatización de lo público en Brasil : microescenas, *Nueva Sociedad*, N°104, nov-dic.1989 : 105-110

OLIVIER DE SARDAN (J-P.) 1995. *Anthropologie et développement*. Karthala, Paris

RESTREPO, Eduardo y DEL VALLE, Jorge Ignacio (Eds). 1996. *Renacientes del guandal: "grupos negros" de los ríos Satinga y Sanquianga*" Biopacífico-Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Bogotá.

RESTREPO, Luis Alberto. Relación entre la sociedad civil y el Estado, *Análisis Político* 9, abril 1990 : 53-80, Bogotá.

RIVAS, Nelly Yulissa, 1999a, Prácticas espaciales y construcción territorial en el Pacífico nariñense: el río Mejicano, municipio de Tumaco, *Cuadernos de trabajo CIDSE* n°41, UNIVALLE, Cali, 86p.

RIVAS, Nelly Yulissa, 1999b, Territorialidad, autoridad y ley 70 en el río Mejicano (municipio de Tumaco-Nariño), *Cuadernos de trabajo CIDSE* n°39, UNIVALLE, Cali, pp69-83.

SINTOMER, Y. 1998. « Sociologie de l'espace public et corporativisme de l'universel », *L'Homme et la Société*, 130(4) :7-20

VELASQUEZ, Fabio. 1996. Los horizontes de la descentralización en Colombia, Bogotá, *Revista Foro*, N°29, pp34-46.

WEST, Robert, 1957, *The Lowlands of Colombia. Louisiana State University Studies*. Baton Rouge.

WHITTEN, Norman. *Pioneros negros: la cultura afro-latinoamericana del Ecuador y Colombia*. Centro cultural Afro-ecuatoriano. Quito. 1992.

EXCLUSION SOCIAL Y GESTION URBANA: A PROPOSITO DE CALI

Fabio E. Velásquez C.¹

Inserción global e integración interna

En un mundo de urbanización generalizada, como lo denominan Borja y Castells (1997), las ciudades, inscritas con mayor o menor intensidad en el proceso de globalización de la economía y la comunicación, y en la dinámica de la revolución tecnológica informacional, se han visto obligadas a redefinir su estructura y su función económica y cultural, en el sentido de una articulación entre lo global y lo local que refuerce la sociedad local y sus instituciones políticas:

“Lo global y lo local son complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica, como lo fueron en los albores de la economía mundial en los siglos XIV-XVI, momento en que las ciudades-estado se constituyeron en centros de innovación y de comercio a escala mundial” (pag. 14).

Lo local, dicen Borja y Castells, adquiere una importancia estratégica como centro de gestión de lo global en un triple ámbito: en primer lugar, el de la productividad y la competitividad económicas. Desde este punto de vista, el territorio es un elemento decisivo, pues las empresas dependen de su entorno para ser competitivas. Las administraciones territoriales pueden contribuir a mejorar, a través de sus políticas, las condiciones de producción de las empresas (infraestructura tecnológica, sistema de comunicaciones, recursos humanos calificados, condiciones de vida satisfactorias para la gente, etc.) de las que depende en buena parte el bienestar local.

En segundo lugar, en el ámbito de la integración socio-cultural. En un mundo globalizado, caracterizado por la “hegemonía de valores universalistas” (ibid. pag. 16), el mantenimiento de identidades culturales diferenciadas, de base histórica territorial, es clave para cultivar el sentido de pertenencia a una comunidad concreta. Las ciudades congregan individuos y grupos con diversos patrones culturales que, de no tener referentes compartidos, quiebran los lazos de cooperación y convivencia.

¹ Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, Cali.

Las sociedades locales pueden generar mecanismos de integración cultural muy eficaces y los gobiernos locales, mejor que los nacionales, pueden gestionar la integración de las diferencias culturales: “La articulación territorial del Estado permite el reconocimiento y expresión de identidades propias en los ámbitos local y regional, a la vez integrándolas y haciéndolas compatibles con el ámbito nacional” (ibid., pag. 17).

El tercer ámbito es el de la representación y la gestión políticas. Los gobiernos locales disponen de dos ventajas comparativas con respecto a los gobiernos nacionales: de una parte, son más representativos y legítimos a ojos de los ciudadanos, por ser el nivel del Estado más próximo a estos últimos y constituir el referente primario para la satisfacción de sus necesidades y demandas; de otra, son más flexibles y adaptables a las situaciones cambiantes que caracterizan a los flujos económicos y de información propios de la globalización. Los gobiernos locales poseen, así, un potencial para el manejo ágil de lo global, para la formulación de políticas públicas flexibles, a través de la capacitación de su personal, de la modernización de su gestión, de la ampliación de sus recursos financieros y del ejercicio eficiente de sus competencias administrativas.

Existe, pues, una estrecha relación entre las transformaciones urbanas y la economía global: ésta se articula territorialmente a redes de ciudades pero, a su vez, estas dependen cada vez más en su economía y en su bienestar de su capacidad de insertarse en la economía global. Esto último significa que las ciudades se ven forzadas, quiéranlo o no, a ser cada vez más competitivas en un triple sentido: primero, aumentando su conectividad, es decir, su vínculo “con los circuitos de comunicación, telecomunicación y sistemas de información en los ámbitos regional, nacional y global” (ibid., pag. 32). Segundo, introduciendo permanentemente innovaciones a través de la generación de nuevo conocimiento aplicado a actividades económicas.

Finalmente, flexibilizando sus instituciones en el sentido de aumentar la capacidad para negociar su articulación a las empresas e instituciones supra-locales.

Pero, al tiempo que las ciudades se insertan en la dinámica global, deben también integrar su sociedad local, resolver sus tensiones internas y fortalecer la vinculación de los ciudadanos a las tareas colectivas: “Sin un anclaje sólido en sus ciudadanos -escriben Borja y Castells- los gobiernos de las ciudades no tendrán la fuerza necesaria para navegar los circuitos globales. En ese sentido, lo local y lo global son complementarios, no antagónicos”. Y añaden: “Esa integración social requiere mecanismos políticos democratizados, basados en la descentralización administrativa y en la participación ciudadana en la gestión municipal” (ibid., pag. 33).

En pocas palabras, las ciudades y sus gobiernos se mueven en un doble ritmo: de inserción en lo global y, al mismo tiempo, de integración social interna. Ello supone un gobierno actuante, intérprete del sentir de sus súbditos, líder en la definición de un proyecto colectivo y presto a eliminar todos aquellos factores económicos, políticos y, especialmente, sociales que reduzcan la competitividad de la ciudad. Un gobierno capaz de formular y ejecutar políticas económicas, territoriales y sociales con criterio de bien común. Un gobierno, en otras palabras, interesado en el fortalecimiento de la esfera pública, que une en un mismo proyecto la integración interna y la inserción global.

Las tensiones entre lo local y lo global

Este modelo ideal descrito por Castells y Borja está lejos de la realidad de nuestras ciudades en América Latina y en Colombia. En efecto, si algo caracteriza su diario desenvolvimiento es una “desgarradora tensión entre las presiones globalizadoras del capital internacional y la necesidad de responder a las demandas internas de una población que padece los efectos de las políticas de ajuste estructural, de la apertura económica y de múltiples formas de exclusión social y política” (Velásquez, 1999).

Se trata de una tensión real: lo global, en vez de crear sinergias productoras de bienestar, ha desarticulado por dentro la vida de las ciudades y las ha convertido en escenarios de exclusión y lucha por la sobrevivencia.

El modelo de desarrollo mercadocéntrico, que se impuso en el continente desde comienzos de la década del ochenta, implicó, en virtud de la apertura de las economías nacionales al mercado internacional, una serie de transformaciones, entre las cuales Rodríguez y Winchester (1998) destacan la reconversión productiva y laboral, la desterritorialización de los flujos económicos y la desmaterialización de la actividad económica. Estos cambios han producido severos traumas en la estructura del empleo y de los ingresos, especialmente en las ciudades. Los mercados laborales se han fragmentado: frente a una demanda de trabajadores altamente especializados crece una oferta de mano de obra no calificada que busca ingresos de supervivencia, estabilidad y garantías laborales que ni los mercados ni las políticas públicas quieren ofrecer. A ello hay que sumar el crecimiento de las tasas de participación laboral, fruto de la inserción de mujeres, jóvenes y niños al mercado laboral para incrementar los ingresos familiares, especialmente en los estratos más bajos de la población.

Estos fenómenos han producido un aumento en las tasas de desempleo, el crecimiento del empleo informal y el deterioro de los ingresos. Como lo indica claramente la Cepal en su informe sobre la situación social de América Latina, “una pequeña proporción de los empleos generados corresponde a los sectores modernos de la economía, mientras que la gran mayoría se concentra en el sector privado de menor productividad relativa y, en especial, en el área de los bienes y servicios no transables; como ya se ha mencionado, esta heterogeneidad laboral dificulta la superación de la pobreza y una mejor distribución del ingreso. La proliferación de empleos de baja productividad [...] ha venido acompañada de falta de protección, contrataciones flexibles a plazo fijo, subcontrataciones y otras modalidades que han aumentado la incertidumbre y la inestabilidad laboral” (Cepal, 1999, pag. 5). Estos síntomas corresponden a lo que Robert Castel llama la precarización de las relaciones de trabajo, proceso que implica una alta vulnerabilidad social y la posibilidad para muchos de caer en la condición de excluidos (Castel, 1996).

Se produce así un fenómeno de “dualización social urbana”, como lo denominan Borja y Castells, según el cual “los procesos de exclusión social más profundos se manifiestan en una dualidad intrametropolitana, particularmente en las grandes ciudades de casi todos los países, siendo así que en distintos espacios del mismo sistema metropolitano existen, sin articularse y a veces sin verse, las funciones más valorizadas y las más degradadas, los grupos sociales productores de información y detentadores de riqueza en contraste con los grupos sociales excluidos y las personas en condición de marginación” (Borja y Castells, 1997, pag. 60).

Las ciudades de América Latina son excluyentes. La pobreza se concentra cada vez más en ellas, como lo certifica el informe de la Cepal ya mencionado. La mayor parte de los pobres de América Latina viven en las ciudades (60%) y es previsible que su número aumente en virtud de la reducción del ritmo de crecimiento económico de la región en el final de la década del 90. La pobreza es la expresión más visible de la exclusión, pero no es la única. Otras tres merecen ser mencionadas, pues hacen parte de la realidad urbana de la mayoría de las ciudades del continente: la segregación socioespacial, la violencia y la exclusión política.

No sólo en las ciudades viven los pobres, sino que las ciudades son pobres (Rodríguez y Winchester, 1998): sus infraestructuras y equipamientos se encuentran deteriorados, los espacios públicos privatizados y un porcentaje de población no despreciable habita en asentamientos precarios. El resultado de esos fenómenos es una ciudad desarticulada territorialmente, inequitativa en cuanto a las condiciones de habitabilidad y muy mal dotada para hacer frente a los retos de la competitividad.

Por su parte, la violencia y la inseguridad se extienden en las ciudades, generando un sentimiento de intranquilidad e incertidumbre entre sus habitantes. El Estado parece incapaz de controlar las causas y los síntomas de las conductas violentas, lo que propicia las condiciones para su difusión a todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida urbana.

Finalmente, las decisiones políticas en muchas ciudades siguen siendo monopolizadas por una elite que se resiste a democratizar la gestión local. Aunque en varias ciudades del continente ha sido posible llevar adelante experiencias alternativas de gestión democrática y eficiente (Montevideo, Curitiba, Porto Alegre, Bogotá, entre las más conocidas), los sectores

políticos tradicionales se insertan cada vez más en lógicas de autorrepresentación política y en conductas guiadas por el autoritarismo, el clientelismo y la corrupción.

Cali: los interrogantes

Cali tipifica buena parte de los rasgos de las ciudades latinoamericanas antes descritos. Comparte varios de ellos con un buen número de centros urbanos del país, en particular su ritmo de expansión demográfica y espacial a partir de la segunda guerra mundial, la terciarización de su actividad económica, el peso importante del empleo informal en la estructuración del mercado de trabajo en la ciudad y la acumulación de carencias en materia de vivienda, infraestructuras y equipamientos colectivos.

Sin embargo, la ciudad tiene sus peculiaridades, su identidad propia, que la convierten en un caso especial en el contexto urbano del país². En primer lugar, es el principal núcleo urbano del suroccidente colombiano y puerta de salida hacia la cuenca del Pacífico. Ocupa en tal sentido un lugar estratégico para el desarrollo de la actividad económica orientada al sector externo. En segundo lugar, Cali vivió desde mediados de la década del ochenta hasta mediados de la década pasada un “boom” económico relacionado con la expansión de la actividad del narcotráfico, lo cual estimuló coyunturalmente el desarrollo de algunos sectores económicos, como la construcción y el comercio, transformó las formas y niveles de consumo y los estilos de vida de gran parte de los caleños, amén del incremento de los índices de inseguridad y violencia.

Una tercera característica de la ciudad es su fuerte ancestro agrario y su ubicación en una zona de elevado potencial productivo, en la que dominó la gran propiedad terrateniente y la hacienda esclavista, lo que ha determinado

² Para el desarrollo de este punto me baso en Velásquez (1996) y Velásquez (1996a).

formas patrimonialistas de relación entre las elites económicas y el resto de la población, especialmente la más pobre. Este antecedente ha sido determinante en la configuración de diferentes formas de dominación que se han superpuesto en la historia reciente de Cali. La relativa calma social que reina en la ciudad³, no obstante las evidentes desigualdades sociales y territoriales que la caracterizan, puede ser interpretada como fruto de un fuerte control social y político ejercido por las elites locales sobre el conjunto de la población. Dicho control se ha ejercido a través de varios medios: en el plano simbólico, a través del discurso mítico del civismo⁴ que ha tenido un gran ascendiente sobre diversos grupos de la ciudad y que se ha convertido en rótulo e imagen de exportación de Cali hacia el país y el extranjero. Constituye un mecanismo de integración simbólica que afirma la identidad de los caleños, fortalece su sentido de pertenencia a la ciudad y contribuye a distensionar la vida urbana. La “cultura del civismo” fue constantemente reforzada por sectores empresariales y por la clase política a través de campañas y mensajes publicitarios que buscaban mantener un alto nivel de compromiso de los caleños con la ciudad, en el sentido de colaborar en todas aquellas acciones que fortalecieran el bien común y nutrieran esa imagen.

Un segundo instrumento de control social “de arriba hacia abajo”, estrechamente ligado al mito del civismo, es la acción filantrópica de personas y entidades ligadas a los centros de poder económico y político, que pone al servicio de los sectores más pobres de la ciudad una serie de recursos productivos y de consumo que tradicionalmente el Estado no ha sido capaz de brindarles. Por esa vía se ha estimulado la microempresa, se ha desarrollado un proceso de intervención social en el Distrito de Aguablanca y, más recientemente, en las zonas de ladera de la ciudad y se ha construido una importante red de infraestructuras y equipamientos urbanos para la educación, la salud, la recreación y la vivienda.

³ Hablamos de calma “relativa” en el sentido de que la ciudad no ha mostrado grandes movilizaciones sociales en los últimos veinte años, excepción hecha de las protestas del sindicato de EMCALI a raíz de la transformación, la crisis y la posterior intervención estatal de las Empresas Municipales de Cali, y las del movimiento de vendedores ambulantes que fueron finalmente reubicados en una zona de la ciudad.

⁴ Entendemos el civismo como “el conjunto de valores y prácticas a través de los cuales los caleños desarrollan un fuerte sentido de pertenencia a la ciudad y ejercitan conductas que expresan una cierta sensibilidad hacia lo colectivo” (Velásquez, 1996, pag. 44).

Ligada a la idea de la “Cali Cívica” está la de la “Cali participativa”. La retórica de la participación, plasmada en una oferta creciente de instancias y mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal, constituye otra herramienta de control político en la ciudad. Como ocurre en la mayoría de municipios colombianos, la participación ha sido producto más de una oferta institucional estatal que de una demanda ciudadana. Esta, sin lugar a dudas, ha existido y sigue existiendo en el escenario municipal, particularmente cuando se trata de formas no institucionalizadas, pero pesa poco en el momento de los balances sobre la democratización de la gestión pública. En Cali, este desbalance entre oferta y demanda es más notorio aún. Desde que fue instituida la elección de Alcaldes, las distintas administraciones han hecho una amplia oferta de participación, casi toda en el marco de las normas constitucionales y legales vigentes: Juntas Administradoras Locales, Consejos de Planeación, Comités de participación en Salud, veedurías ciudadanas, consultas sobre programas específicos, cabildos abiertos, sistema local de planeación, etc. Sin embargo, como señala González (1999), esa oferta no sólo es incoherente, fragmentada y dispersa, sino que los mismos gobiernos se han encargado de ponerle límites e impedir que se convierta en fuente de empoderamiento ciudadano. Se incrementa la oferta, pero se la limita cualitativamente dándole escasa importancia política, bajo presupuesto, y poca cabida en la formulación de políticas públicas. Los gobiernos, en otras palabras, intentan a toda costa tutelar y “teledirigir” la participación, de manera que se convierta en elemento funcional a sus propósitos políticos. En esas circunstancias, la participación se vuelve formal, instrumental y queda reducida a mera retórica participativa.

Finalmente, una fuente importante de control es el manejo clientelista del aparato gubernamental por parte de la clase política. El intercambio de lealtades electorales por bienes y servicios financiados con el erario público, en el caso de los sectores más pobres de la población, o por empleos en la administración municipal (Cali es una de las ciudades con mayor tasa de empleados públicos por diez mil habitantes), en el caso de los sectores bajos y medios, o por contratos millonarios, en el caso de las empresas y las consultoras locales, ha sido el medio preferido por la dirigencia local para mantenerse en el poder y usufructuar sus privilegios. Ese control político se refleja en la hegemonía de los partidos tradicionales en el gobierno de la ciudad, especialmente en la última década, cuestionado excepcionalmente por algunos movimientos de corte populista (Movimiento Cívico) y en el funcionamiento de una poderosa maquinaria política que en períodos electorales opera “a tope”.

Pero, uno de los rasgos que en la reciente coyuntura ha hecho evidente la particularidad del caso caleño es la crisis económica que ha golpeado a la ciudad en los últimos tres o cuatro años. Después de un período de crecimiento constante de la actividad económica en la ciudad, acelerado por la penetración de los dineros del narcotráfico, la ciudad vive actualmente las consecuencias de una desactivación económica: quiebra de muchas empresas, grandes y pequeñas, altas tasas de desempleo y subempleo, crecimiento del sector informal y deterioro de las condiciones de vida de un número creciente de hogares. La crisis ha golpeado la autoestima de los caleños, ha generado desconfianzas mutuas y ha debilitado de manera significativa el liderazgo social y empresarial que durante décadas fue la bandera de presentación de la ciudad y la región.

Dos interrogantes suscita la situación actual de Cali: en primer lugar, ¿qué tanto podemos hablar de exclusión en la ciudad y, en caso positivo, cuáles serían sus principales formas de expresión y los grupos más afectados?. En segundo lugar, ¿qué tanto las políticas urbanas en los últimos cinco años han interpretado la realidad de la ciudad, especialmente en lo que respecta a su situación social? Para decirlo de otra manera, ¿han estado las dos últimas administraciones municipales a la altura de las circunstancias, poniendo en marcha políticas y planes de inversión que logren enfrentar con vigor la coyuntura de crisis o, por el contrario, han hecho caso omiso de las consecuencias de la crisis y definido otras prioridades?

Sobre exclusión social y nociones afines

Como ha sido el caso de otros conceptos, el de exclusión ha ganado recientemente muchas simpatías y aparece como uno de los descriptores preferidos por los científicos sociales para dar cuenta de las recientes

tendencias sociales en los países capitalistas de ambos hemisferios⁵. En tal circunstancia, al término se le han asignado contenidos conceptuales bien disímiles, lo que por momentos lleva a la confusión. A ello se suma el uso de términos afines, como los de segregación, marginalidad, desviación, aislamiento, etc., para designar el mismo tipo de fenómenos, lo que aumenta el grado de confusión. Una primera tarea, en consecuencia, es la de intentar aclarar ese contenido para evitar equívocos.

Con el término exclusión social se hace referencia a una manera de ser y de estar en la sociedad, ligada a una concepción del orden social y a una interpretación específica del devenir social (Tezanos, 1999). La cuestión es precisar en qué consiste esa “manera de ser y de estar”. A ese respecto, pueden distinguirse por lo menos tres enfoques: en primer lugar, la exclusión entendida como apartamiento, voluntario o involuntario, de los estándares dominantes en una sociedad. Los conceptos corrientemente empleados en esta óptica son los de desviación social (desajuste con respecto a normas y valores), marginación y segregación social (ubicación de sectores sociales en lugares secundarios a partir de sentimientos de rechazo y repudio). En todos estos casos, la exclusión se mueve en un plano esencialmente simbólico.

El análisis de Richard Sennet (1978) sobre la ciudad moderna y el de Norbert Elias (1994) sobre la comunidad de Wiston Parva ilustran esta perspectiva. Sennett trata de entender la conducta de ciertos grupos

⁵ Pierre Rosanvallon (1995) es uno de los pocos autores que alerta sobre las limitaciones –e, incluso, los peligros– del concepto de exclusión, en el sentido de que dicha categoría alude a un segmento de la población y, en consecuencia, impide una mirada global del sistema. Además, según él, está ligada a una cierta visión caritativa de las políticas públicas: “Desempleo de larga duración, nueva pobreza, personas sin techo: desde hace unos diez años, el crecimiento de la exclusión ha constituido el gran hecho social. Al mismo tiempo, la ‘cuestión social’ se desplazó: se pasó de un análisis global del sistema (en términos de explotación, repartición, etcétera) a un enfoque centrado en el segmento más vulnerable de la población. La lucha contra la exclusión polarizó toda la atención, movilizó las energías, ordenó la compasión”. Y más adelante señala: “La invitación a luchar contra la exclusión simplificó así lo social, ciertamente en demasía. La dinámica social no podría reducirse, en efecto, a la oposición entre los que están ‘adentro’ y los que están afuera’. Incluso puede decirse que nuestra comprensión de la sociedad está hoy deformada por la polarización de todas las atenciones sobre el fenómeno de la exclusión. Aun cuando deba considerarse con justa razón que ésta constituye el fenómeno fundamental de nuestro tiempo, no agota la cuestión social. La justa denuncia de la pobreza y la miseria del mundo no debe dispensarnos de un enfoque más global de las tensiones y contradicciones que atraviesan la sociedad” (pags. 85-86).

sociales en las ciudades de países opulentos, que evitan a toda costa mezclarse con otros grupos de diferente condición social (por ingresos, color de la piel, religión o status). Para Sennet, dicha conducta se asemeja a la de los adolescentes, quienes, ante la tensión que viven entre sus potencialidades físicas, psíquicas y afectivas, de un lado, y su inexperiencia, de otra, construyen un mundo ideal en el que se refugian, alejándose de la realidad y evitando todo contacto con aquello que rompe la lógica de ese mundo. Algo parecido ocurre con ciertos grupos en la ciudad: ante la dificultad para enfrentar al “otro diferente”, optan por rechazarlo como parte de su comunidad y se refugian en la “tranquilidad” de su modo de vida y sus costumbres. Ocurre así un proceso de auto-exclusión, de retraimiento con respecto al mundo diferente, de elusión de todo aquello que no encaje en sus propios parámetros de vida. Prefieren una vida “plana”, tediosa, sin sobresaltos, a una existencia rica en experiencias y de alguna manera “anárquica”. Dicho sentimiento individual se convierte en norma social y marca la conducta de los grupos sociales, generando una distancia social voluntaria con respecto a los demás.

Elías se refiere también a la relación entre grupos de una misma comunidad, pero interpreta la exclusión no tanto como un auto-retraimiento, sino como una forma de dominación de un grupo sobre otro. La exclusión alude, en efecto, al modo como un grupo (los “establecidos” en su estudio sobre la comunidad de Winston Parva) rechaza a otro grupo (el de los recién llegados) a partir de sentimientos valorativos de autoestima que los llevan a pensar que son más poderosos y mejores que los demás. El grupo dominado queda marginado de toda posibilidad de participar en los mecanismos de relación y de control social. Es objeto de estigmatización por el hecho de ser portador de una “marca de diferencia”, en este caso el hecho de ser “recién llegados” al lugar. El grupo excluyente ve al otro como una amenaza a sus fuentes de poder, a su carisma de grupo y a sus normas grupales, y por eso niega su existencia marginándolo de la posibilidad de compartir su vida comunitaria. Existe en él una comunidad de intereses, un “nosotros sobredimensionado”, que fortalece a sus miembros y les impone una serie de normas por medio de las cuales se autocontrolan y actúan “como es debido”, es decir, reproduciendo los sentimientos y las conductas de rechazo hacia los marginados. Estos, por su parte, no logran construir ese sentido de comunidad, lo que los vuelve frágiles para reivindicar una relación horizontal con el grupo dominante. Más aún, el efecto de la dominación es tan fuerte que el grupo excluido termina por sentirse inferior y auto-estigmatizarse.

Sennett entiende, pues, la exclusión como un proceso voluntario de aislamiento y distinción con respecto al “otro diferente”, mientras que Elias coloca el acento en procesos de segregación social. En este caso, la exclusión es más padecida que voluntaria y forma parte de una relación de dominación. Pero, en ambos casos, se asigna un alto peso específico a la dimensión cultural-simbólica.

Un segundo enfoque sobre la exclusión centra su atención en aspectos más estructurales, concretamente en la dimensión económica. La exclusión es vista como la carencia, estructuralmente determinada, de algo: de empleo, de ingresos, de bienes materiales para vivir dignamente. El trabajo de Robert Castel (1996) sobre la crisis del trabajo asalariado es uno de los más representativos de esta corriente de pensamiento. Para él, “la crisis de la sociedad salarial, que ha caracterizado el presente siglo, ha llevado al surgimiento de nuevas formas de vulnerabilidad y desigualdad social” (Castel, 1998, pag. 121). Este proceso es fruto de la precarización de las relaciones de trabajo a través de la multiplicación de tipos de contrato, la parcelación de la negociación colectiva, la individualización en la relación salarial, etc. La desigualdad no es ahora en términos de la distribución del ingreso, sino de la condición del empleo. El mercado de trabajo se ha segmentado en virtud de las exigencias de la competitividad y la globalización y ello ha generado una gran masa de asalariados que comienzan a ser objeto de procesos de desestabilización laboral. Este segmento se ve permanentemente amenazado por el temor a la degradación de su status salarial y/o al desempleo. Este se convierte en el factor desencadenante de las demás manifestaciones de carencia y vulnerabilidad social.

Para Manuel Castells (1998), estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo modelo de sociedad en el que la complejidad y la tecnologización de los sistemas productivos da lugar a una segmentación de las necesidades de fuerza de trabajo: de un lado, personal altamente calificado y, de otro, sectores que no precisan cualificación y cuyas tareas pueden ser realizadas por robots.

Es una nueva forma de estratificación social que lleva a la exclusión de un segmento significativo de la sociedad, compuesto por individuos desechados cuyo valor como trabajadores y consumidores se ha agotado y cuya importancia como personas es mínima. Sería este el contraste entre sobredesarrollo tecnológico y subdesarrollo social.

La idea de exclusión es aquí más dinámica que en el primer enfoque. No se trata de “los de adentro” y “los de afuera”, como categorías que permiten clasificar a individuos o grupos, sino como un proceso de vulnerabilización que puede conducir a una condición de exclusión, definida ésta como “dejar de ser alguien en la sociedad”, en razón de no conseguir insertarse en las cadenas productivas y del mercado laboral “formal” que demanda mano de obra altamente calificada. Como dice Tezanos (1999), ello implica examinar trayectorias de vida para identificar los momentos en los que ciertos individuos o grupos se encuentran con respecto a los procesos de vulnerabilización y exclusión.

Minujin (1998) desarrolla estas ideas, las enriquece introduciendo dimensiones extraeconómicas y las aplica a la situación de América Latina. Parte de la idea casteliana de que el mecanismo de la asalarización se ha quebrado, en el sentido de que el crecimiento del empleo es bajo y muy inestable. Los años 90 fueron para América Latina años de estabilización económica, pero con crecimiento de la pobreza y la desigualdad. En el contexto de modelos mercadocéntricos, el desarrollo es entendido como crecimiento económico, inversión en desarrollo humano y focalización del gasto social hacia los más pobres. Esta receta es, según Minujin, insuficiente y no garantiza que las sociedades sean incluyentes. Por el contrario, lo que se observa en estos países son sociedades desintegradas, donde “el fraccionamiento y la exclusión son crecientes”. Así, la nueva dinámica de estas sociedades se refleja en buena parte en la existencia de grupos sociales que luchan por no ser excluidos.

Exclusión e inclusión, dice Minujin, son los extremos de un continuum y varían en el tiempo y en el espacio. En la moderna era industrial, la asalarización ha sido el principal mecanismo de inclusión social, cuyo complemento fue el Estado de bienestar. Ella abrió a la gran mayoría de la población la posibilidad de acceder a los derechos sociales. En tal sentido, exclusión social alude “a la imposibilidad o a la no habilitación para acceder a los derechos sociales sin ayuda, sufrimiento de la autoestima, inadecuación de las capacidades para cumplir con las obligaciones, riesgo de estar relegado por largo tiempo a sobrevivir del asistencialismo, y estigmatización” (ibid., pag. 171). En ese sentido, la exclusión trasciende la pobreza e involucra aspectos políticos, sociales y culturales.

La exclusión refleja la acumulación de desventajas de diversa índole, que lleva a una fuerte privación en uno o varios aspectos. Una mayor o menor acumulación refleja niveles distintos de vulnerabilidad y/o exclusión.

El elemento determinante es la exclusión económica, entendida como la falta de espacio en el mercado laboral. La forma como los individuos y grupos se relacionan con el mercado laboral determina la existencia de tres segmentos: los incluidos, es decir, los estratos medios y altos que cubren necesidades básicas; los vulnerables, o segmento de pobres vinculados al mercado laboral y de sectores medios empobrecidos. Finalmente, los excluidos, segmento conformado por los grupos en alto riesgo, con barreras educativas y culturales

y con dificultades de acceso a los servicios básicos^{6 7}. La hipótesis de Minujin es que “la estructura social de la mayor parte de los países de la región se ha complejizado y heterogeneizado. La concentración del ingreso ha aumentado, es decir, hay ricos más ricos, pero simultáneamente una proporción significativa de los sectores medios se ha empobrecido, mientras que en algunos países los más pobres han mejorado su situación relativa reflejada en un incremento de su mediana y media de ingresos” (pags.191-192). Los pobres están constituidos hoy por los pobres históricos más los nuevos, provenientes de sectores medios venidos a menos, más una amplia zona de grupos en situación de vulnerabilidad.

Las tesis de Minujin se aproximan bastante al tercer enfoque sobre exclusión, que considera como centrales los aspectos sociales y políticos y otorga considerable importancia a la noción de ciudadanía. Según Sonia Fleury (1998), la exclusión es un concepto negativo referido a la “no incorporación de una parte significativa de la población a la comunidad social y política, negando sistemáticamente sus derechos de ciudadanía, como la igualdad de tratamiento ante la ley y las instituciones públicas, e impidiendo su acceso a la riqueza del país” (pags. 3-4). La exclusión implica una fractura sociopolítica, en cuanto pérdida del sentido de pertenencia a un grupo y de subordinación a un orden simbólico, económico y político común.

Es, en última instancia, una negación de la ciudadanía, un impedimento para gozar de los derechos civiles, políticos y sociales vinculados en cada sociedad a la pauta de derechos y deberes que condicionan legalmente la inclusión en la comunidad sociopolítica. La exclusión tiene un fundamento político que se expresa en la no pertenencia a una comunidad política, que es, en el Estado moderno, una comunidad de derechos. Es un proceso relacional, socialmente sancionado mediante normas y valores (componente simbólico) que ordenan las relaciones sociales y vuelven los comportamientos previsibles. Es, en otras palabras, un proceso que regula la diferencia como condición de no inclusión.

⁶ Minujin propone una metodología para la medición de estos grupos a través de los instrumentos más conocidos como los censos y las encuestas de hogares.

⁷ Tezanos (1999) propone cuatro segmentos: integrados, vulnerables, sujetos de asistencia y excluidos. Ver una caracterización de cada grupo en el Cuadro 1 del Anexo.

La exclusión no es sinónimo de desigualdad. Para apoyar esa idea Fleury cita el siguiente texto de Boaventura de Souza Santos:

“Si Marx es el gran teórico de la desigualdad, Foucault es el gran teórico de la exclusión. Si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico, la exclusión es, sobre todo, un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilización. Se trata de un proceso histórico a través del cual una cultura, por vía de un discurso de verdad, crea la interdicción y la rechaza.

El sistema de la desigualdad se asienta paradójicamente en el carácter esencial de la igualdad; el sistema de la exclusión se asienta en el carácter esencial de la diferencia [...] el grado extremo de la exclusión es el exterminio; el grado extremo de la desigualdad es la esclavitud” (Fleury pag. 10).

En otras palabras, la exclusión, además de ser un fenómeno económico y político, es también un fenómeno cultural. La exclusión despoja a los individuos de su dimensión humana impidiéndoles que se conviertan en sujetos de su proceso social. Lo que está en juego es la posibilidad de realizar su potencial como constructores de sociedad. Y allí el componente simbólico juega un papel relevante, pues constituye parte esencial de la construcción de sujetos. La exclusión implica el exterminio simbólico. A través de regímenes de verdad se fundamentan normas sociales que definen lo normal y lo anormal, lo que debe ser incorporado y lo que debe ser excluido.

Fleury resume así su posición: “la exclusión es un proceso cultural que implica el establecimiento de una norma que prohíbe la inclusión de individuos, grupos y poblaciones en una comunidad sociopolítica. De esta forma, los grupos excluidos están, en general, imposibilitados de participar de las relaciones económicas predominantes –el mercado, como

productores y/o consumidores- y de las relaciones políticas vigentes –los derechos de ciudadanía-“ (pag. 13).

Los tres enfoques presentados dejan ver que el concepto de exclusión posee una alta densidad teórica y que sería inconveniente convertirlo en una categoría unidimensional. Por el contrario, es preciso incluir en su definición las dimensiones económica (imposibilidad de acceder al mercado de trabajo), social (imposibilidad de ejercer los derechos sociales), cultural (apartamiento o marginación/segregación simbólica) y política (imposibilidad de formar parte de una comunidad de derechos). La articulación de estas dimensiones permite pensar a los excluidos como individuos o grupos que no son considerados por los demás como miembros de derecho de la sociedad: “La exclusión social -escribe Lo Vuolo- refiere a todas aquellas condiciones que permiten, facilitan o promueven que ciertos miembros de la sociedad sean apartados, rechazados o simplemente se les niegue la posibilidad de acceder a los beneficios institucionales” (Le Vuolo, s.f.).

La noción de ciudadanía, señalada por Fleury como referente principal de la de exclusión, es, en ese sentido, bastante adecuada. Pero, retomando a Castel, Minujin y Castells, el factor crisis del trabajo debe ser considerado como elemento determinante para comprender los actuales procesos de estratificación social y de exclusión, especialmente en sociedades como la nuestra, en las cuales las transformaciones introducidas por el modelo mercadocéntrico y por las presiones globalizadoras del capital internacional han producido fenómenos como la segmentación del mercado de trabajo y la expansión acelerada del empleo informal. La noción de exclusión remite así a una noción de sociedad en la que el trabajo deja de ser factor de dignificación personal y de integración social y se convierte, por la vía de su degradación, en un obstáculo para que ciertos grupos sociales puedan

acceder a los beneficios institucionales, como dice Le Vuolo, e intervenir en la definición de metas colectivas⁸.

Pero, si bien la precarización del trabajo es el factor principal de vulnerabilidad y exclusión, no puede ser considerado como el único. Existen otras formas de exclusión, no necesariamente ligadas a esta dimensión socioeconómica, sino a elementos simbólicos o de carácter político. Es el caso de la exclusión por marcas como el género, la edad, la nacionalidad o el color de la piel. Igualmente, puede y debe hablarse de exclusión en aquellos casos en los cuales ciertos grupos de la población no pueden intervenir, por razones de diversa índole, en la toma de decisiones sobre la marcha de los asuntos colectivos. Aunque puede existir una correlación entre estos factores socioculturales y políticos, de un lado, y el desempleo y la pobreza, de otro, no necesariamente ello ocurre. Es en este sentido que la exclusión no puede reducirse a un fenómeno de pobreza, aunque ella puede ser tenida como el núcleo “duro” de la misma.

Tezanos presenta el siguiente cuadro sobre los principales factores de exclusión social, que refleja de manera adecuada la complejidad del concepto (Ver Cuadro 1). Sin que sea necesario compartir las categorías que él define como factores determinantes de la exclusión, el cuadro constituye una buena aproximación a su significado y sugiere una guía metodológica útil para el análisis empírico de ese fenómeno.

⁸ Por ese motivo, como señala Castel, el imaginario socialdemócrata de un desvanecimiento asintótico de las desigualdades sociales ha pasado a un segundo plano y ha sido sustituido por el temor a la degradación del status salarial y al desempleo. La cuestión no es una mejor inserción social de los asalariados por medio de mejoras en las condiciones laborales, sino la inserción social de quienes no tienen trabajo y quedan por fuera de las oportunidades que brinda el sistema.

El otro aspecto que debe ser destacado es la consideración de la vulnerabilidad y la exclusión como proceso y no como categorías clasificatorias estáticas. Las situaciones de inclusión y exclusión no son fijas; constituyen más bien escenarios que se transforman permanentemente. La adscripción de individuos y grupos a esas categorías implicaría, por tanto, un análisis de trayectorias de vida para comprender en un determinado corte del tiempo en qué lugar del continuum “inclusión-exclusión” se encuentran.

Vulnerabilidad y exclusión en Cali

No existe información suficiente sobre Cali para documentar todas las dimensiones de la exclusión arriba señaladas. No obstante, en los últimos dos años se han realizado varios estudios que aportan datos sobre algunas de ellas⁹ y permiten identificar ciertas tendencias en esa dirección. A continuación se presenta una descripción de algunos de los rasgos constitutivos de ese fenómeno en la ciudad.

Empleo y Pobreza

El último dato del Dane señala que el desempleo en Cali-Yumbo, en marzo de este año, fue de 21.5%. Esta cifra refrenda una tendencia de crecimiento del desempleo abierto en la ciudad a partir de 1996 (Cuadro 2), producto de un crecimiento más acelerado de la oferta laboral que de la demanda, lo cual se explica, de un lado, por el incremento del fenómeno migratorio y por la vinculación al mercado laboral de agentes tradicionalmente inactivos -niños,

⁹ Me refiero principalmente a la “Radiografía Social de Cali”, elaborada por Foro Nacional por Colombia (1999) como estudio de base para la formulación de una propuesta de política social para la ciudad, y al estudio del CIDSE (1999) sobre empleo y pobreza en Cali, elaborado para la Misión del Banco Mundial. Las cifras que se presentan a continuación son extraídas de esos dos informes.

ancianos y amas de casa- y, de otro, por la desaceleración de la actividad productiva en la ciudad a partir de 1996.

Cuadro 1
Principales factores del equilibrio “exclusion-integración”

Variables	Factores de exclusión	Factores de integración
Laborales	Desempleo. Subempleo. Temporalidad (agricultura, servicios). Precariedad laboral. Carencia de seguridad social. Carencia de experiencias laborales previas.	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo fijo o estable. • Buen nivel de ingresos (como asalariado o por cuenta propia). • Condiciones de empleabilidad razonables. Experiencia laboral.
Económicos	Ingresos insuficientes. Ingresos irregulares (economía sumergida). Carencia de ingresos. Endeudamiento. Infravivienda, hacinamiento. Sin vivienda.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos regulares. • Fuentes alternativas de ingreso. • Vivienda propia.
Culturales	Pertenencia a minorías étnicas. Extranjería. Barreras idiomáticas y culturales. Pertenencia a grupos de “rechazo” (cultural y político). Analfabetismo o baja instrucción. Elementos de estigma.	Integración cultural. Perfiles “culturales” aceptados e integrados. Alto nivel de instrucción, posesión de cualificaciones demandadas.
Personales	Variables “críticas” de edad y sexo (jóvenes y mujeres). Minusvalías. <i>Handicaps</i> personales. Alcoholismo, drogadicción, etc. Antecedentes penales. Enfermedades. Violencia, malos tratos, etc. Débil estructura de motivaciones y actitudes negativas. Pesimismo, fatalismo. Exilio político, refugiados.	Capacidad e iniciativa personales. Cualidades personales valoradas socialmente. Buena salud. Motivaciones fuertes. Optimismo, voluntad de realización Facilidad de trato.
Sociales	Carencia de vínculos familiares fuertes. Familias monoparentales Carencia de otras redes sociales de apoyo. <ul style="list-style-type: none"> • Entorno residencial decaído. • Aislamiento. 	Apoyo familiar. Intensa red social, relaciones. Pertenencia a Asociaciones. Residencia en zonas en expansión. Integración territorial.

Fuente: Tezanos, 1999, pag. 44.

Cuadro 2
Tasas de desempleo en Cali-Yumbo
1994:I A 2000:I

Año Tasa 1994:10.8 1995 9.1 1996 13.1 1997 17.2 1998 17.9 1999 21.2 2000 21.5

Fuentes: Foro (1999), Cidse (1999)

El subempleo también aumentó: pasó de 10.8% en 1995 a 25.7% en 1999. Algunas características sociodemográficas de los desempleados permiten identificar los sectores más vulnerables (Cidse, 1999):

- a. *Los jóvenes y las mujeres sufren el mayor desempleo:* Las tasas de desempleo más altas en marzo de 1999 se registraron en la población más joven (35.9% en los niños de 12 a 14 años, 41.6% en los jóvenes de 15 a 19 años, 27.4% en los de 20 a 29 años). En esa misma época, la tasa de desempleo femenino fue de 24.5%, más elevada que la de los hombres (18.4%). De nuevo, las mujeres jóvenes (12 a 19 años) presentan las tasas más altas (48%).
- b. *La mayor parte de los desempleados son trabajadores con estudios de secundaria:* Ellos representaban en marzo de 1999 el 61.4% del total de desempleados en Cali-Yumbo. Además, los bachilleres muestran mayores tasas de desempleo que el resto de la población (24.6% en marzo de 1999). Esos rasgos permanecen invariables en el período 1993-1999, lo que denota un problema estructural en la relación entre educación secundaria y mercado laboral. Por su parte, el título profesional constituye un importante elemento de acreditación para el empleo: en marzo de 1999, la tasa de desempleo para las personas con título fue de 7.9%. Sin embargo, la tasa de desempleo de los profesionales creció más rápidamente que la de personas con estudios primarios y secundarios en el período 1993-1999, lo que es un indicador de la gravedad de la recesión en la ciudad.
- c. *Aumenta la duración del desempleo.* Este es un síntoma de precarización del empleo en Cali. Una estimación hecha por el Cidse indica que la duración media del desempleo pasó de cinco a ocho meses en el período 1994-1998.
- d. *Aumenta la informalidad.* En marzo de 1993, los trabajadores por cuenta propia representaban el 24.3% del empleo. En 1999, esa proporción aumentó a 35.2%. La aceleración se produjo precisamente a partir de 1996, momento en que se agudiza la recesión económica local y nacional. Según Fedesarrollo, los trabajadores cuenta propia

representan una porción mayoritaria del empleo informal, lo que permite concluir que en esos seis años aumentó sistemáticamente la informalidad urbana en Cali.

- e. *El desempleo golpea más fuertemente a los pobres.* En la década del 90, las mayores tasas de desempleo corresponden a los dos primeros deciles de la distribución del ingreso (59.2% y 31.1% en marzo de 1998, respectivamente). En términos dinámicos, el crecimiento más acelerado del desempleo se dio precisamente en esos deciles (entre 1994 y 1998, la tasa se duplicó en ambos deciles, lo que no ocurrió con los restantes). Parecido resultado se obtiene con el indicador línea de pobreza: en junio de 1999, la tasa de desempleo de los pobres (34.8%) es casi tres veces la de los no pobres (12.3%).
- f. *Los hombres concentran los puestos mejor remunerados.* A mayor nivel de ingreso, mayor participación masculina en el empleo. En junio de 1998, la participación femenina es mayor en el primer quintil de ingreso (60.1%), que en el quinto (33.6%).
- g. *Concentración del ingreso laboral.* Según las cifras del Dane, en 1994 el 26.3% de los trabajadores percibía menos de un salario mínimo y 68.1% percibía menos de dos salarios mínimos. Cinco años después esas proporciones eran el 25.5% y el 75.5%, respectivamente. Por su parte, los trabajadores que recibían más de 10 salarios mínimos pasó de ser el 1.6% en 1994 a ser el 2.6% en 1999.
- h. *Concentración del ingreso.* Según datos de Santamaría, citados por el estudio del Cidse, el coeficiente de Gini en Cali pasó de .506 en Junio de 1994 a .542 cuatro años después, mayor que el de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

En materia de pobreza, el estudio del Cidse destaca los siguientes aspectos:

- a. *Creció la pobreza y la indigencia.* Entre 1994 y 1998, la población del área Cali-Yumbo bajo línea de pobreza pasó del 29.8% al 39%, para un total de más de 800.000 pobres en la ciudad. Por su parte, la población en indigencia pasó de 5.3% a 10% en el mismo período (el volumen de indigentes se duplicó en el período, llegando a ser en 1998 un poco más de 200.000).
- b. *Los jóvenes, los más afectados por la pobreza.* El 47% de la población pobre y el 51% de la población en indigencia tenía menos de 20 años en junio de 1998. Desde el punto de vista del género, el 53% de la

población masculina en pobreza y el 62% en indigencia es menor de 20 años. En otras palabras, a mayor pobreza, aumenta la participación de los jóvenes y de la población masculina. Nueve de cada diez personas del primer decil de la distribución del ingreso se encontraban, en junio de 1998, en situación de indigencia, mientras que el 88% de la población de los cuatro primeros deciles eran pobres.

- a. *Deterioro en el nivel de NBI.* El estudio del Cidse cita otro del Dane, según el cual el porcentaje de personas y de hogares en pobreza y miseria en Cali-Yumbo aumentó de 1994 a 1995, superando el nivel de NBI en otras seis áreas metropolitanas del país. Según el Dane, el factor determinante de ese incremento fue el hacinamiento crítico, lo que, según el Cidse, puede explicarse por el incremento de las migraciones rural-urbanas, especialmente a causa de la violencia.

La dimensión territorial

Los fenómenos de desempleo, subempleo y pobreza se expresan territorialmente. Varios estudios realizados por el Cidse¹⁰ han identificado cuatro “corredores” o franjas urbanas, las cuales poseen una cierta homogeneidad social y territorial. Para efectos de la exposición, se toma la zonificación elaborada en el estudio para el Banco Mundial. Dicho estudio contempla los siguientes corredores urbanos:

- Franja Oriental: comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21.
- Franja de Ladera: Comunas 1, 18 y 20¹¹.
- Franja centro-nororiental: comunas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12¹².
- Franja residencial norte-sur: Comunas 2, 17 y 19

¹⁰ Me refiero al estudio “Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas de la región pacífica colombiana”, realizado conjuntamente por el CIDSE y el IRD (Francia). Igualmente, al estudio ya citado sobre pobreza, elaborado para el Banco Mundial. Finalmente, el trabajo de FORO para la formulación de la política social también consideró una zonificación socioterritorial de la ciudad, que no coincide totalmente con la de los estudios mencionados, pero que en lo fundamental apunta al mismo resultado.

¹¹ El estudio del Cidse incluye en esta franja a Yumbo, dado que la información sociodemográfica y de empleo proporcionada por la Encuesta de Hogares del Dane incluye a ese municipio.

¹² Esta es la franja más heterogénea, con un cierto predominio de estratos medio y medio-bajo y de sectores populares integrados urbanísticamente.

Pues bien, el desempleo es mayor en las zonas más pobres de la ciudad. En Junio de 1998, la tasa de desempleo era menor en la franja residencial de Cali (13.8%) que en las zonas más pobres de la ciudad: Comunas de ladera (26.7%) y franja oriental (22.7%). A una conclusión similar se llega cuando se examina la tasa de desempleo por quintiles de ingreso en cada una de esas zonas de la ciudad: la tasa es mucho mayor para los quintiles más bajos de la distribución en todas las franjas.

Cosa parecida puede decirse de la distribución territorial de la pobreza y la indigencia. En junio de 1998, en la franja oriental un poco más de la mitad de la población (cerca de 400.000 personas) era pobre y una de cada ocho, indigente (100.000 personas, aproximadamente). En el sector de ladera (incluyendo a Yumbo), el 56% eran pobres (155.000 personas) y el 16% indigentes (48.000 personas). En contraste, en el corredor residencial los pobres representaban apenas el 5% de la población (un poco más de 18.000 personas) y los indigentes, menos del 1% (cerca de 2900 personas).

Estas tendencias han configurado una organización territorial de la ciudad que muestra altos niveles de segregación socioespacial. Según los datos de la Encuesta de Hogares en Junio de 1994, el 83.5% de los hogares de Cali vive en barrios de estrato 1, 2 y 3. Los datos de Planeación Municipal coinciden bastante con los del Dane: en 1997, el 83.6% de la población residía en barrios de los estratos más bajos (Dapm, 1998).

La distribución de los hogares muestra tendencias claras por franja: en la oriental, predominan en forma absoluta los estratos 1, 2 y 3 e, incluso, en Comunas como la 14 y la 21 no existen viviendas de estrato 3. En las Comunas de ladera ocurre lo mismo. En contraste, en la franja residencial predominan los estratos altos, aunque en las comunas 2 y 19 existen algunos barrios de estratos 1 y 2, ubicados en las zonas de ladera de dichas comunas. La franja centro-nororiental es, como ya se dijo, la más heterogénea, aunque predominan en ella las viviendas de estratos 2, 3 y 4, en especial de estos dos últimos.

Otro elemento de la segregación socio-espacial es el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según el diagnóstico de vivienda elaborado por el Municipio para la formulación del Pot, existía en Cali en 1999 un déficit cuantitativo de 65.000 viviendas y uno cualitativo de 49.000. El 82% del déficit cuantitativo correspondía a los estratos 1 y 2 y otro 15% al estrato 3 (Dapm, 1999). El mismo estudio señala que había en la ciudad 26.835 viviendas en 127 “asentamientos humanos de desarrollo incompleto” (25.203 en el área urbana y 1.632 en la zona rural), en los que habitaban cerca de 130.000 personas. Dichos asentamientos se ubican en las zonas donde predominan los estratos bajos de la población (Cuadro 3). Cuatro de cada cinco habitantes en esos asentamientos se localizan en las franjas oriental y de ladera, especialmente en esta última (55.9%). Estos asentamientos no están conectados a las redes formales de servicios públicos y no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad interna (número de cuartos, sanitario, cocina independiente, etc.) ni externa(servicios públicos domiciliarios, vías de acceso, infraestructuras y equipamientos colectivos).

Cuadro 3
Asentamientos humanos de desarrollo incompleto en Cali
por franjas territoriales

Franja	No. de asentamientos	No. de viviendas	Población	% de población
Oriental	54	6847	32864	25.5
Ladera	42	15013	72062	55.9
Centro-nororiental	5	2070	9936	7.7
Residencial	9	1273	6111	4.7
Zona Rural	17	1632	7834	6.1
Total	127	26835	128807	100.0

Fuente: Dapm, 1999.

En materia de servicios públicos, la situación no es muy diferente, aunque los diferenciales de cobertura son menores entre las distintas franjas de la ciudad (Cuadro 4). La franja de ladera es la que presenta los mayores déficits, lo mismo que la zona rural. Según el Dapm, en el área rural la cobertura de alcantarillado es parcial (1999, pag. 26) en todos los corregimientos. La cobertura en energía para el área urbana de la ciudad es del 91%. De nuevo, las comunas de ladera son las que muestran un mayor déficit (41.4% en la Comuna 1, 11.4% en la 18 y 29% en la 20), al igual que las de la franja oriental, aunque en menor proporción (20.4% en la Comuna 15 y 24.1% en la 16, para citar solamente esas dos).

Cuadro 4
Cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado en Cali 1998
por franjas territoriales

	Cobertura acueducto	Cobertura alcantarillado	Franja	Cobertura
	95.4	93.5	Oriental	75.3
	98.2	99.4	Ladera	98.2
			Centro-nororiental	99.4
			Residencial	99.4
			Zona Rural	99.4

Fuente: Dapm, 1999a

La cobertura en telefonía es aún más precaria (26.2 líneas por 100 habitantes), especialmente en las zonas donde predominan los estratos más bajos. En la franja de ladera, existen 12.7 líneas por 100 habitantes y en la oriental, 18.6, mientras que en la franja residencial la cobertura es de 48.3 líneas por 100 habitantes, es decir, 3.8 veces más que en ladera y 2.6 veces más que en la franja oriental.

Finalmente, en materia de equipamiento colectivo, el contraste es también notorio. El índice de zona verde por habitante es un buen indicador al respecto: en la franja de ladera ese índice es de 1.49 mts² por habitante; en la franja oriental es más bajo: 1.25 mts² por habitante; en la zona centro-nororiental es de 1.72 mts² y en la franja norte-sur es de 15.5 mts² por habitante, es decir, 12.4 veces más que en la franja oriental, 10.4 veces más que en la de ladera y 9 veces más que en la franja centro-nororiental. El promedio de la ciudad es de 3.51 mts² por habitante¹³. La brecha entre algunas comunas de estratos altos y bajos es significativa: Por ejemplo, en la comuna 17 hay 27.45 mts² de zona verde por habitante, mientras que en la comuna 9 solamente 30 cms² y en la comuna 14, 13 cms². (Dapm, 1999b, pag. 9).

El equipamiento educativo oficial de la ciudad, en lo que respecta a la infraestructura física se encuentra en un 53% en un estado regular o malo. Ese porcentaje es más elevado en las zonas de estratos bajos de la ciudad: en la comuna 20, dos terceras partes de los centros docentes se encuentran en esa situación; en la 3, el 58%; en la 4, el 71%; en la 7, el 75%; en la 8, el 74%; en la 9, el 80% (Dapm, 1999b, pag. 19).

La infraestructura física en salud está en mejor estado que la educativa. Solamente el 37.3% de los establecimientos se encuentran en mal o regular estado, la mayoría de los cuales están ubicados en las comunas de estratos bajos, especialmente en la franja oriental (44.4% de los establecimientos están deteriorados). En la zona rural, solamente 6 de los 21 establecimientos se encuentran en regular condición.

¹³ No sobra señalar que uno de los decretos reglamentarios de la ley 388 de 1997, sobre espacio público, establece como norma estándar la de 15 mts²/hab. Es decir, solamente la franja residencial norte-sur estaría cumpliendo el parámetro, mientras que el conjunto de la ciudad está lejos de acercarse a él y mucho menos las comunas de estratos bajos.

Capital humano

Un componente importante de la exclusión social está referido a las barreras de acceso a los bienes públicos que pueden convertirse en capital humano individual y social, especialmente la educación y la salud.

Según la Radiografía Social de Cali (Foro, 1999), “el déficit más alto en cobertura [del sistema educativo] afecta los niveles de preescolar y secundaria” (pag. 44). Los niños entre 3 y 4 años y los jóvenes entre 11 y 17 tienen serias dificultades para insertarse en el sistema educativo. Según el Plan Educativo Municipal 1998-2000, solamente el 70.1% de los niños, niñas y jóvenes entre 3 y 17 años se encuentran vinculados al sistema escolar, quedando por fuera de él cerca de 160.000 alumnos, quienes no cuentan siquiera con la oportunidad de aspirar a un cupo en la escuela (Pem, 1998, pag. 18, citado por Foro, 1999). El déficit es muy significativo en los primeros años de todos los niveles, lo que denota barreras de acceso al sistema en cada ciclo. La cuestión se complica por el fenómeno de la extra edad, el cual genera “cuellos de botella” y retrasos en el proceso de formación de los niños y jóvenes. El déficit tiende a aumentar con la edad y muestra su mayor envergadura en la secundaria: el déficit de cupos para la población de 12 años en el período escolar 1996-1997 fue de 16.9%; para los jóvenes de 13, fue de 22.6%; para los de 15, 16 y 17 años fue de 32.1%, 45.2% y 64.7% respectivamente. En el año escolar 1996-97, la tasa de escolaridad neta en la educación básica secundaria fue del 70.9%, inferior a la de la educación básica primaria (89.4%) (Foro, 1999, pag. 48).

¿Dónde se ubica el déficit? La información para 1995 señala que el déficit en preescolar se presentó en todo el municipio, excepto en la Comuna 14 (franja oriental) y en la zona rural. En primaria, hubo déficit en las comunas 1, 3, 6, 12, 16 y 18 (población de estratos medio-bajo, bajo y bajo-bajo) y en la zona rural. En secundaria, el déficit mayor se presentó en las Comunas 7, 8 y 13, aunque otras comunas también se vieron afectadas (5, 6, 11, 12, 14, 15 y 16). Estas cifras coinciden en lo fundamental con las presentadas por el estudio del CIDSE (1999) para el año 1994. Según dicho estudio, “la asistencia escolar de la población de 5 a 29 años [...] por zonas geográficas y género muestra un ligero mejoramiento en los cuatro años para el conjunto de toda la población en esos grupos de edad, pero con una desmejoría en el grupo de edades de 15 a 19 años, en la franja oriental de la ciudad, en la zona residencial de clases medias-bajas y en la de clases

medias-altas”(pag.16). La consecuencia más visible de este fenómeno ha sido una mayor presión sobre el mercado laboral, aunque las probabilidades

de empleo para esta cohorte, como ya se indicó atrás, son realmente las más reducidas. Se configura así un cuadro preocupante en el que una cohorte de jóvenes no puede acceder a la educación secundaria, pero tampoco al mercado laboral, lo que los relega a una condición en la cual se van viendo marginados de los beneficios del desarrollo y de la posibilidad de acceder a niveles de bienestar mínimos.

El otro aspecto relevante es la calidad de la educación. Algunos indicadores para el conjunto de la ciudad presentan mejorías, como la tasa de reprobación en la básica primaria y secundaria, la cual descendió de 6.5% al 2.8% entre 1995-96 y 1996-97. Pero, otros indicadores muestran un comportamiento diferente: según el Pem, los docentes de la región no han superado los esquemas tradicionales de las estructuras curriculares; no existe una relación de la escuela con su entorno inmediato, ni los currículos se corresponden con los patrones culturales locales y regionales. En materia de equipamiento, los establecimientos del sector oficial siguen a la zaga, comparativamente con los del sector privado: sólo existe un laboratorio de química, física, idiomas y sistemas por establecimiento, mientras que en el sector privado existen dos o tres. Algo parecido ocurre con la infraestructura de informática y audiovisuales.

Un aspecto clave de calidad es el que ha venido apareciendo en las zonas de estratos populares. Ante la reducción de la oferta por parte del sector oficial en esas zonas, han proliferado una buena cantidad de establecimientos privados que no llenan los requisitos mínimos para garantizar enseñanza de buena calidad. Se trata de “colegios de garaje” cuyos dueños piensan generalmente más en el negocio que en ofrecer un servicio de buena calidad. Aprovechan el incremento de la demanda y copan esa necesidad con un bajo nivel de calidad de la educación.

En materia de salud, algunas cifras son significativas, especialmente en lo que respecta a la población de estratos más bajos. Por ejemplo, según la Radiografía Social de Cali (Foro, 1999), las comunas más sensibles al fenómeno de mortalidad materna son la 18, la 15, la 14, la 13 y la 12 (nivel alto), así como las comunas 20 y 16 (nivel medio). Algo parecido ocurre con

la mortalidad infantil. En el período 1990-1996 las comunas más afectadas fueron las del Distrito de Aguablanca (franja oriental), la Comuna 3 y las Comunas 1, 18 y 20 (franja de ladera) (FORO, 1999).

Según la Secretaría de Salud Municipal, existen diez comunas de alto riesgo, es decir, comunas que conjugan altos niveles de pobreza, mortalidad infantil, mortalidad materna y violencia. En todas ellas predomina la población de los dos primeros estratos y concentraban en 1997 prácticamente la mitad de la población de la ciudad.

En cuanto al régimen subsidiado de salud, su mayor cobertura corresponde a población de las zonas oriental y de ladera, las cuales tienen la mayoría de su población en alto riesgo. Sin embargo, las coberturas promedio son bajas (13%). Un estudio del Dnp y el Sisben de Cali encontró que el 76% de la población pobre de la ciudad (tanto del área urbana como -y sobre todo- del área rural) no se encuentra inscrita en ningún sistema de salud (FORO, 1999, pags. 53-54).

El estudio de Mauricio Santamaría, citado por el informe del Cidse, señala que Cali tuvo una caída en cobertura de seguridad social y pensional entre 1994 y 1998. Encontró igualmente que entre septiembre de 1996 y junio de 1998 se redujo para todos los quintiles de ingreso per cápita la cobertura de la población ocupada en seguridad social y en fondos pensionales, siendo más dramática la disminución en el primer quintil (Cidse, 1999, pag. 20).

Inseguridad y violencia

Una forma de exclusión -la más radical- es la violencia, en el sentido de agresión contra la integridad intelectual, física y moral de las personas, incluyendo su exterminio. La violencia como forma de resolver las diferencias expresa la incapacidad de ciertas personas y grupos de reconocer la alteridad como un componente necesario de las relaciones sociales. Implica la intolerancia, es decir, la consideración de que el otro, el "enemigo" no tiene derecho a compartir los mismos estándares de vida que el agresor.

Los estudios recientes muestran que Cali es una de las ciudades con mayores índices de violencia en el país¹⁴. Cali sufre, en efecto, una violencia

¹⁴ Ver al respecto Camacho Y Guzmán, 1990; Cidse, 1999 y Foro, 1999.

endémica relacionada especialmente con una dinámica importante de delincuencia homicida, dependiente de formas de delincuencia organizada. Aunque las tasas de delito mostraron una tendencia a la disminución en la última década, las tasas de violencia homicida permanecieron elevadas, mucho más que en el resto del país. Más de la mitad de los delitos (58%) fueron en la última década homicidios y lesiones. Y aunque la tendencia de la tasa de homicidios fue descendente entre 1994 y 1998 (CIDSE, 1999, pag. 48), en 1999 la tasa se disparó de nuevo a niveles comparables a los de la primera mitad de la década del 90.

La violencia se despliega en ámbitos de la vida pública y privada. Las violencias privadas se desarrollan en torno a la sexualidad, el género, la familia, las riñas. Una franja importante de homicidios depende de una criminalidad poco estructurada, dedicada al robo, y ocurre en contextos de pobreza. En lo que respecta a la violencia organizada, ésta responde esencialmente a ajuste de cuentas en el contexto del funcionamiento de negocios ilícitos. Se ha desarrollado en tal sentido una red altamente sofisticada de industria del crimen que, en ocasiones, se articula con formas menos organizadas de criminalidad.

No existe una relación directa entre pobreza y violencia. Es lo que deja entrever el análisis de las tasas de delito y de violencia (homicidios + lesiones). Las comunas con mayores tasas de delito son la 3, la 4, la 2, la 19 y la 10. Las que presentan mayores tasas de violencia (homicidios + lesiones) son en su orden la 3, 9, 15, 4, 7, 14, 8, 11, 10, 12, 2 y 20. No significa ello que las zonas más pobres de la ciudad estén libradas de la inseguridad y la violencia. De hecho, la comisión de delitos comunes y de homicidios es recurrente en esas áreas. Pero en términos de tasas, el fenómeno no es tan pronunciado como en otras zonas de la ciudad, incluido la franja residencial norte-sur.

Según las estadísticas que ha venido trabajando Alvaro Guzmán desde hace más de una década, las víctimas de la violencia son en buena parte jóvenes de 15 a 25 años, la gran mayoría de los cuales (nueve de cada diez) son hombres. En los estratos bajos, la víctima más frecuente es la población negra. Llama la atención que en más de una tercera parte de los casos, el nivel de alcoholemia es positivo.

Segregación y discriminación racial

En el plano cultural-simbólico y de las relaciones cotidianas aparecen trazas de segregación que completan el cuadro de la exclusión en Cali. Un reciente trabajo de Fernando Urrea (2000) presenta, con base en los datos arrojados por la encuesta del Banco Mundial-Cidse sobre acceso y percepción de servicios ofrecidos por el municipio, y por la encuesta Cidse-Ird sobre movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas en Cali, una serie de indicadores de la desigualdad socioeconómica y racial en Cali, al tiempo que el análisis de un conjunto de registros cualitativos sobre relaciones interraciales en la ciudad, en la perspectiva de la construcción de ciudadanía. Urrea examina una serie de evidencias empíricas en ambos planos (estructural y cultural), entre las cuales interesa destacar las siguientes:

- a. *Peso significativo de la población y los hogares afrocolombianos.* Los hogares afrocolombianos constituyen el 37.2% de los hogares en Cali. Casi la mitad de ellos se localizan en la franja oriental; una cuarta parte en la franja centro-nororiental; un 8% en la zona de ladera y un 20% en la franja norte-sur. Los datos sobre el peso de los hogares afrocolombianos en las distintas zonas de la ciudad señalan, según Urrea, “una significativa sobrepesada de los hogares afrocolombianos en la franja oriental, una casi igual participación de hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en la zona centro oriente y una caída en la participación de hogares afrocolombianos en las de ladera y corredor” (pag. 3). En términos socioraciales del fenotipo de los individuos, un 32% de la población de la ciudad es negra-mulata, cuyo peso demográfico en las distintas franjas es el siguiente: 40% en la franja oriental; 31% en la centro-oriente; 22.4% en la de ladera (con predominio de la población mulata) y 24% en la franja residencial.
- b. *Segregación socio-racial en la ciudad.* Las cifras anteriores indican que “el eje espacial desde el centro hacia el nororiente y suroriente marca aumento de la población ‘negra-mulata’, sobre todo ‘negra’ o afrocolombiana [...] Por otra parte, el eje espacial de la ladera (occidente) es más ‘mulato’ y ‘mestizo’ en el imaginario clasificatorio de fenotipos, con una participación también de población ‘blanca’; la población ‘mestiza’ participa tanto en la franja oriental como en la zona de corredor medio-alto y ladera; y finalmente, que la población ‘blanca’ es dominante en el corredor medio-alto, parte de la zona de ladera y en algunas comunas del centro oriente”(pag. 4). Ello permite afirmar -dice Urrea- “la existencia de una significativa segregación socio-racial en la ciudad de Cali, la cual tiene implicaciones en los patrones de desigualdad social de la misma, es decir hay una geografía urbana con trazos raciales” (idem).

- c. *Mestización de los hogares afrocolombianos.* Los hogares afrocolombianos presentan un 18% de miembros blancos, mestizos y de otras características. Ese proceso de “blanqueamiento” “se incrementa a medida que nos alejamos del eje oriental de la ciudad, es decir, es un elemento complementario de la segregación socioespacial de orden socio-racial” (pag. 5). En síntesis, Cali es “una ciudad mestiza con una de las mayores concentraciones de población negra en Colombia [...] la ‘capital del Pacífico colombiano’” (pag.8).
- d. *Mayor dependencia juvenil y tasas de masculinidad más bajas.* La población de los hogares afrocolombianos es más joven que la de los no afrocolombianos, especialmente en las zonas más pobres de la ciudad (franjas oriental y de ladera). De otra parte, “los hogares afrocolombianos tienen una población femenina ligeramente mayor que los no afrocolombianos, con excepción de la región de ladera”(pag. 9).
- f. *Bajos niveles de ingreso.* “La población de los hogares afrocolombianos presenta una mayor concentración en los dos primeros quintiles que la de los hogares no afrocolombianos” (pag. 11). Ello significa que “la población afrocolombiana en su conjunto es de menor ingreso, especialmente en los dos primeros quintiles de la distribución del ingreso” y que posee inferiores condiciones de vida: “La desigualdad es más marcada -escribe Urrea- entre la población afrocolombiana que en la no afrocolombiana” (pag.12).
- g. *Mayores índices de hacinamiento.* “Con excepción de los quintiles cuarto y quinto, el índice de hacinamiento promedio en los hogares afrocolombianos es superior al de los no afrocolombianos” (idem).
- h. *Diferenciación de roles ocupacionales.* A pesar del patrón similar de inserción laboral en las poblaciones afrocolombiana y no afrocolombiana, “se registra un efecto diferenciador entre las opciones ocupacionales para las mismas, controlando el género” (pag. 17): existe una “sobreconcentración de mujeres afrocolombianas en los grandes grupos ocupacionales no calificados asalariados de los servicios y servicio doméstico [...] En el caso de los hombres afrocolombianos hay una sobreconcentración en oficios tales como artesanos, pintores, maestros de obra, trabajadores de la construcción, bien diferente a los no afrocolombianos” (idem). Se observan, además, “restricciones al enganche de personal negro-mulato en empleos de atención al público”(pag. 17). “En síntesis -escribe Urrea- la estructura ocupacional caleña por población según tipos de hogares nos indicaría una cierta segregación laboral hacia empleos no calificados en servicios diversos, con predominio del doméstico y actividades relacionadas, construcción,

obreros manufactureros [...] Hay otros oficios también segregados socio-racialmente como el de profesores, vendedores de comercio, etc. Se trata entonces de un mercado de trabajo con patrones segregativos que operan bajo el color de la piel” (pag. 18).

Estos patrones estructurales de segregación se ven complementados por configuraciones culturales de carácter excluyente que permean las relaciones interraciales en la ciudad. En primer lugar, “hay una autopercepción de población excluida del conjunto de la ciudad -afirma Urrea- la cual se ha venido construyendo a partir de un sentido de alteridad desde diversos espacios urbanos por quienes no viven en la franja oriental” (pag. 20). Dicha autopercepción es consecuencia de un dispositivo de exclusión por la vía del estigma. Este es construido en la ciudad a partir de una articulación entre marcas de clase y marcas raciales: “la relación entre pobreza y color de piel -afirma Urrea- está indicando una construcción en el imaginario social urbano de un mecanismo de segregación socio-racial y socioeconómica no separables o autónomas que a la vez tiene un soporte ‘objetivo’ en la distribución de la geografía urbana de la desigualdad social” (idem). Así, las desigualdades de clase, determinadas “objetivamente”, si bien aportan a la construcción de dicho imaginario, no lo agota, Las marcas raciales también contribuyen a darle contenido al proceso de exclusión. Esto explica por qué los jóvenes de la población negra y mulata construyen la noción de “ghetto” como nicho de existencia propia, generador de identidad y pertenencia. En últimas se trata de jóvenes que, además del color de su piel, presentan altos índices de deserción escolar, vinculación temprana al mercado laboral, alto desempleo, estrategias de rebusque y supervivencia, incluso ilícitas, violencia, etc¹⁵.

Urrea muestra en su trabajo otros dispositivos de exclusión: la caricatura de Nieves, que publica El País, en la que se asignan roles específicos a la mujer (empleada doméstica) y al hombre (trabajador de la construcción) negro; la aparición en la Universidad del Valle de grafitos racistas que contienen altas dosis de “odio racial”; las medidas explícitas de discriminación racial practicadas por Almacenes Exito en el enganche de personal negro-mulato, incluso en niveles de escolaridad medios-altos; la requisa frecuente que hace la policía a gente negra, especialmente hombres; la costumbre de los conductores de buses de no recoger pasajeros negros en determinadas áreas de la ciudad por el temor a ser asaltados.

¹⁵ Ello no libra de la estigmatización a la población afrocolombiana de estratos medios, sólo que ella no opera en los mismos términos que para los grupos más pobres. En el caso de los hogares de clase media, dice Urrea, “la discriminación racial se experimenta a través de dispositivos más sutiles, a escala de la estructura ocupacional en empleos calificados, en los niveles de ingresos dentro de esos empleos y en la jerarquía social de cargos de mando empresarial” (pag. 22).

Concluye Urrea que “las condiciones de inserción de la población negra en esta ciudad, a pesar de los factores del enorme peso demográfico y los nuevos elementos institucionales-políticos antes mencionados, están marcadas por una dinámica de segregación racial socio-espacial en el interior de la ciudad y la presencia de formas sutiles en unos casos, agresivas en otros, de racismo que pueden también afectar a sectores de clases medias, a pesar de los discursos de aparente apertura a la diversidad étnica y racial. Aunque hay un mestizaje interracial no se está avanzando lo suficiente en un reconocimiento de la diversidad y hay síntomas peligrosos de agresión racial en varios espacios públicos de la ciudad, al ser rechazadas las formas de autoestima de sectores de clases medias de la población afrocolombiana” (pag. 30).

De la caracterización hecha en las páginas anteriores puede derivarse una mención a los grupos que pueden ser considerados como vulnerables o excluidos, sea por dinámicas de precarización laboral, por la existencia de barreras que les impiden participar de las relaciones económicas y/o sociales dominantes o por elementos culturales que intentan apartarlos de la sociedad a través de dispositivos de estigmatización. Los jóvenes y las mujeres encabezan la lista. Los primeros por las dificultades que enfrentan para insertarse en el sistema escolar o en el mercado laboral, o porque son las víctimas más recurrentes de los hechos de violencia homicida; las segundas por la discriminación laboral de la que son objeto y por su histórica situación de subordinación con respecto a los hombres -aspecto que no ha sido documentado en este trabajo.

En segundo lugar, los que pueden ser llamados “pobres” de la ciudad. Se ha mostrado que no solamente los golpea más fuertemente el desempleo y el subempleo, sino que por su condición de pobres (primero y segundo decil de la distribución de ingresos) están sometidos a vivir en condiciones que no llenan los parámetros promedio o mínimos de una vida digna en el medio urbano. El ámbito en el que se expresa dicha condición -el más importante, mas no el único- es el de su entorno territorial: viven en zonas periféricas, los más pobres en asentamientos precarios, con altos índices de hacinamiento, baja accesibilidad, carencias en materia de servicios públicos y equipamientos sociales, poco o nulo espacio público y zonas verdes para la recreación, zonas consideradas por el resto de la población como “peligrosas” y, como se verá luego, cada vez menos atendidas por la inversión pública.

En tercer lugar, la población negra-mulata: su localización en la ciudad, sus formas de inserción en el mercado laboral y, en general, las condiciones de vida, amén del color de su piel, constituyen marcas que no sólo la ubican en el segmento de los pobres de la ciudad, sino que la convierten en objeto de procesos de segregación simbólica y de prácticas sociales discriminantes.

La combinación de estas características (ser mujer, joven, pobre y negra-mulata) permite definir grados diferentes de vulnerabilidad y exclusión. Se pueden añadir otras, que no han sido examinadas aquí, pero que constituyen parte de ese perfil: ser niño, especialmente niño trabajador, viejo y/o mendigo, discapacitado o desplazado por la violencia. Lo que sí es cierto es que el cuadro de la exclusión en Cali es complejo y, además, de ser cuantificado, cubriría una proporción nada despreciable de la población.

Las políticas sociales en Cali

El avance de los síntomas de vulnerabilización y exclusión social, particularmente en una coyuntura de crisis económica como la que vive la ciudad, haría pensar que las políticas sociales y los correspondientes planes y programas de acción gubernamental tendrían un peso específico

importante en el conjunto de las políticas públicas locales¹⁶. ¿Qué tanta importancia le han dado las dos últimas administraciones municipales a las políticas sociales y cómo se ha reflejado ello en la gestión municipal en el último lustro?

Sobre la política social

¹⁶ La discusión actual sobre las políticas públicas en el contexto de la descentralización parten de la consideración de que los países capitalistas están sufriendo un conjunto de transformaciones de fondo hacia configuraciones políticas, económicas, culturales, sociales y territoriales de nuevo tipo. Así, la oferta de políticas públicas en el nivel local ha tenido que diversificarse. Hoy se plantean por lo menos tres ámbitos de intervención de los gobiernos locales: el ámbito económico-laboral, marcado por la apertura de las economías nacionales al mercado mundial y por las demandas del capital nacional e internacional sobre territorios específicos en términos de recursos y de políticas flexibles. “El nuevo escenario -como dicen Brugué y Gomà (1998)- se plasma en la destrucción a gran escala de tejidos industriales y en la aparición del desempleo masivo con fuertes ribetes estructurales. Todo ello se desplaza a la esfera pública en forma de crisis fiscal, la cual presenta rasgos mucho más acuciantes en las Haciendas regionales y locales”(pag. 30). En esas circunstancias, la escasez y precariedad del empleo constituye para diversos grupos el elemento determinante de su modo de vida. Esto motiva la necesidad de que en las agendas públicas locales ganen lugar la crisis industrial y de empleo, lo que implica para los municipios el diseño de respuestas imaginativas a los problemas de desempleo y de estrategias de desarrollo local que ofrezcan nuevos horizontes de vida a los distintos sectores sociales, especialmente los más vulnerables y los que se sitúan en los umbrales de la exclusión. Un segundo campo de intervención es el de las políticas urbano-territoriales. Los procesos de metropolitanización, la conformación de ciudades región, el deterioro de los centros históricos, la complejización de las estructuras territoriales, el crecimiento de periferias urbanísticamente precarias, la ausencia de condiciones infraestructurales para el desarrollo de una ciudad productiva y competitiva, el deterioro del espacio público, la insostenibilidad ecológica de los centros suburbanos, todo ello obliga a un replanteamiento de la agenda local en el sentido de acciones que tiendan a volver eficiente el sistema urbano, a asegurar una expansión urbana sostenible y equitativa, a recuperar los espacios más degradados y a articular la estructura urbana a las dinámicas del entorno regional. Finalmente, el tercer ámbito es el sociocultural. En este campo, dos procesos parecen dominantes: de un lado, la fragmentación social, producto de rupturas de diverso orden (de clase, de género, étnicas, de ciclo de vida, etc.) que operan permanentemente en la ciudad y que aumentan, como hemos visto, los márgenes de vulnerabilidad y exclusión. De otro lado, la redefinición de referentes de identidad colectiva. Surgen nuevas identidades y nuevas estrategias de construcción de identidad, varias de ellas orientadas hacia la cooperación y la solidaridad y a la vivencia comunitaria compartida. En ese contexto, “el bienestar ya no es sólo una reivindicación globalizante para ser atendida desde ámbitos de lejanía (El Estado), sino también un elenco de inquietudes de nuevo tipo, muy conectadas a la vida cotidiana. La cultura política del bienestar adquiere una nueva dimensión. Deja de ser únicamente la demanda de protección social, para ser también el resultado de armar un conjunto de relaciones sociales participativas y cohesionadoras en el ámbito local”(Brugué Y Gomà, 1998, pag. 31). La oferta de políticas sociales se ve, pues, sometida a presiones de cambio de dirección en el sentido de estrategias de inclusión social y de equidad, de un lado, y de fortalecimiento de identidades ligadas a políticas

Para responder a ese interrogante, se requiere precisar la noción de política social, habida cuenta del debate que se ha desarrollado recientemente al respecto^{17 18}. Tradicionalmente, la política social se caracterizó por ser una responsabilidad más nacional que local, jugar un papel marginal en el conjunto de las políticas públicas, partir de una óptica sectorial (educación, salud, vivienda, etc.), concentrarse principalmente en la erradicación de la pobreza, poner en marcha estrategias y programas de corte asistencialista, desarrollarse en el marco de una relación vertical y autoritaria entre el Estado y la sociedad y tener demasiadas soluciones de continuidad en virtud de los cambios de gobierno.

Este enfoque ha sido puesto en tela de juicio desde hace varios años, en razón de tres factores determinantes: en primer lugar, un importante debate conceptual en torno a los conceptos de exclusión/integración, pobreza, equidad y ciudadanía. En segundo lugar, un cambio de perspectiva en la comprensión de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado, y, finalmente, la atribución a los municipios de importantes responsabilidades en materia social, especialmente en áreas como educación, salud, recreación, seguridad ciudadana, vivienda y atención a grupos específicos, a raíz de la implantación de reformas descentralistas en los países capitalistas.

Sobre el primer punto, ya se ha hecho referencia en la primera parte de este trabajo. Baste añadir que la política social es hoy considerada como una política de inclusión, de fortalecimiento de la ciudadanía, especialmente de la ciudadanía social, en términos del clásico trabajo de T. H. Marshall (1998), cuyo núcleo es la reivindicación de los derechos sociales, la cooperación, la participación y el rescate y fortalecimiento de la esfera pública. Este enfoque mira al “beneficiario de la política” no como un ente pasivo, a la espera de que el Estado le garantice la total satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas, ni un individuo racional que despliega toda su iniciativa para satisfacer en el mercado esas necesidades, sino como un ciudadano “activo y virtuoso” que mantiene un vínculo identitario con su comunidad local y nacional; que reconoce la existencia de otros ciudadanos diferentes a él, con quienes ha de trabajar para promover el bienestar colectivo; que se autorregula y se siente responsable de las

culturales y de dinamización comunitaria.

¹⁷ Ver, por ejemplo, el libro de Minujin y Bustelo (1998) y el trabajo de Kliksberg y Sulbrandt (1999).

¹⁸ Para el desarrollo de estas ideas me apoyo en Velásquez (1999).

consecuencias de sus actos sobre su entorno. El Estado, por su parte, tiene una gran responsabilidad en la promoción y garantía de los derechos ciudadanos, lo cual le impide sustraerse de la responsabilidad de igualar oportunidades y resultados. La justicia distributiva aparece como una necesidad, dado que las fallas del mercado impiden una óptima asignación de los recursos. Los derechos sociales se convierten entonces en centro de la acción pública.

El segundo aspecto alude al dilema, bastante documentado hasta el momento, entre Estado o mercado. La salida que parece ganar consenso a ese respecto es la que evita plantear la cuestión en forma excluyente: ni sólo Estado (como fue el caso del modelo de estado desarrollista) ni sólo mercado (como en el modelo mercadocéntrico). Más bien, Estado y mercado. Como lo plantea Faletto (1994), hoy se acepta la idea de un Estado que recupera la iniciativa en la formulación de consensos estratégicos y convoca a todos los agentes políticos, económicos y sociales para producir tales acuerdos mediante procesos de concertación. Es un Estado que lidera la formulación de políticas públicas, las cuales -se supone- son representativas de distintos intereses, y apunta a la eliminación de toda forma de exclusión. Esta noción va de la mano con la democratización de la gestión pública, el fortalecimiento de la esfera pública como campo de deliberación y de construcción del bien común y la devolución al Estado de su papel como garante de los derechos civiles, políticos y sociales.

El tercer aspecto se refiere a los procesos de reforma del Estado y, en particular, a la implantación de programas de descentralización que han devuelto competencias y recursos a los entes territoriales (regionales y locales). En América Latina, estas reformas han entregado a los municipios un paquete voluminoso de competencias en campos muy diversos, entre los

cuales los considerados tradicionalmente como sociales tienen un peso elevado (Velásquez, 1997). En Colombia, la devolución de esas competencias estuvo acompañada por tres elementos adicionales que han reforzado la capacidad de intervención de los gobiernos locales en materia social: el incremento sustancial de las finanzas territoriales, la autonomía local en el marco de un Estado unitario y la apertura de canales de participación institucional de la población en la gestión pública local, elementos consagrados por la propia Constitución nacional.

En este orden de ideas, tiende a manejarse una noción de política social que supera el marco tradicional heredado del pasado y que coloca énfasis distintos en sus objetivos y en las formas de ser construida y ejecutada. En efecto, la política social es entendida como “el conjunto de orientaciones estratégicas, construidas a partir de procesos de diálogo entre el gobierno municipal y los distintos actores sociales, económicos y políticos, locales y extra-locales, dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el ejercicio de sus derechos, en particular de los derechos sociales, asegurar los medios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores excluidos y vulnerables, y construir un capital social que sirva de fundamento a la convivencia pacífica” (Velásquez, 1999, pags. 49-50).

En contraste con el enfoque tradicional, la política social es entendida aquí como el eje articulador de las restantes políticas públicas locales; posee un carácter estratégico y no meramente sectorial; se enfoca hacia la lucha contra la exclusión y no solamente contra la pobreza; busca desarrollar potencialidades individuales y colectivas que fortalezcan el ejercicio de la ciudadanía; estimula la cooperación y el fortalecimiento del capital social; es fruto de una interacción dialógica entre el Estado y los agentes económicos y sociales y es diseñada no sólo para cortos sino también para medianos y largos plazos.

Por supuesto, se trata de una noción más amplia que supera por obsoletos los programas asistencialistas y las estrategias de focalización compensatoria que han sido dominantes desde la segunda guerra en América Latina. Incluye, además, dimensiones que hasta el momento no han sido concebidas como parte de la política social, concretamente el empleo y mejoramiento de los ingresos, la equidad territorial y la formación de capital social.

Definida así, ¿puede afirmarse que en Cali se ha formulado y ejecutado durante las dos últimas administraciones (1995-2000) una política social que enfrente los procesos de vulnerabilización y exclusión y la creciente brecha social?

El Diseño

Dos dimensiones de la acción gubernamental deben ser examinadas para dar respuesta a ese interrogante. De una parte, el diseño de la política, el cual se mueve en un campo retórico, discursivo, el de los programas de gobierno, los planes de desarrollo y los programas que traducen estos últimos en propuestas de acción. De otra, la gestión de la política, es decir, el conjunto de acciones concretas encaminadas a poner en marcha las propuestas discursivas.

Desde el punto de vista del diseño, es posible encontrar formulaciones que se aproximan -unas más, otras menos- a la idea de política social arriba enunciada. Un análisis de los planes de desarrollo municipal^{199 200} permite examinar el alcance discursivo de las propuestas en esta materia. El Plan Guzmán se acoge a varios principios que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, entre ellos el de prioridad del gasto público social. Según tal principio, “para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población [...] se deberá tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas [...] y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación (Art. 2). La visión y la misión del municipio incluyen referencias permanentes al bienestar en diversos campos (salud, educación, vivienda, recreación, deporte, ambiente sano, familia, etc.). La misión es enunciada de la siguiente forma: “trabajar de manera concertada [...] en la formulación y gestión de un modelo de desarrollo integral sostenible, basado en principios de justicia, equidad, igualdad y respeto de la ley, solidaridad social y económica y participación comunitaria, que le permita a sus habitantes vivir con bienestar y dignidad” (art. 5).

¹⁹ Las dos últimas administraciones municipales, la de Mauricio Guzmán C. (1995-1997) y la de Rocardo Cobo Ll. (1998-2000) fueron cobijadas por la ley 152 de 1994 (ley orgánica de planeación), que obliga a los Alcaldes a formular el Plan de Desarrollo Municipal. Guzmán lo expidió mediante el Decreto 0605 de junio de 1995. Lo llamaremos el Plan Guzmán. El plan de desarrollo de la Administración Cobo fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 05 de mayo 29 de 1998. Lo llamaremos el Plan Cobo.

²⁰ No se toma en cuenta los programas de gobierno, inscritos por los aspirantes a la Alcaldía, pues generalmente se trata de documentos gaseosos, que enuncian generalidades y contienen poca precisión y, en general, ningún compromiso específico del Alcalde en materia de política pública. Para dar una idea, el programa de gobierno de Mauricio Guzmán está lleno de frases como “no ahorraré esfuerzo alguno para darle seguridad a Santiago de Cali”, “fomentaremos políticas recreativas y culturales”, nuestro programa social tendrá un carácter integral”.

Uno de los objetivos generales del plan consiste en lograr “un nuevo orden social que garantice la dignidad, la seguridad y la convivencia” . Ello significa defender los derechos humanos, trabajar en busca de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades educativas y la participación en las decisiones colectivas, promover la formación del ciudadano en torno al cumplimiento de sus deberes y la defensa de sus derechos en el desarrollo social del municipio (Art. 6).

El plan no formula una estrategia social integral, sino un conjunto de estrategias sectoriales que reflejan un concepto bien tradicional de planificación: cultura y civismo, grupos vulnerables, seguridad, orden, justicia y paz, educación, salud, recreación, deporte y turismo, hábitat, desarrollo económico equilibrado y participación. En términos cuantitativos, 9 de las 19 estrategias corresponderían a lo que entendemos por política social.

Como señala Edgar Vásquez en un comentario sobre el Plan (Vásquez, 1995), éste reivindica el concepto de “desarrollo equilibrado”, aunque no lo define claramente. Ello explica la ausencia de una priorización de las estrategias y, más aún, del lugar que ocupan las estrategias sociales en el conjunto del Plan. No obstante, ese concepto desaparece totalmente al examinar el presupuesto plurianual de inversión propuesto por el Plan. En efecto, contrariamente al principio enunciado de prioridad dada a la inversión social, ésta representa solamente el 25.03% del total de inversión en los tres años de vigencia del plan, mientras la inversión urbanística, especialmente en vías, representa el 70.66% del total (Cuadro 5).

El plan Cobo contiene un lenguaje menos alejado de la noción de política social arriba enunciada. El art. 2 presenta la misión del municipio en los siguientes términos: “[...] el municipio trabajará por el desarrollo social y económico en general y la superación de las condiciones de pobreza, exclusión e ignorancia de los ciudadanos y ciudadanas marginados, priorizando la inversión social entendida como la orientación general del presupuesto municipal, la gestión de recursos nacionales e internacionales, tanto privados como públicos y la generación de nuevos recursos tributarios y financieros para el desarrollo del bienestar general de la población, en términos de una mejor calidad de vida y del acceso equitativo a las oportunidades”. De nuevo, la inversión social es calificada como prioritaria en el conjunto del gasto público municipal (Art. 3), junto con la promoción de

la solidaridad y el civismo como componentes de la convivencia pacífica, y la participación ciudadana como condición inseparable de la la gestión pública.

El plan está estructurado en torno a tres grandes programas: reactivación económica, desarrollo social integral y ordenamiento territorial. El segundo programa, el de desarrollo social integral, comprende 12 programas de carácter sectorial: Educación, Salud, Atención a grupos específicos, Recreación y Deporte, Cultura, Justicia y seguridad, Prevención y atención de desastres, Vivienda, Paz, Abastecimiento, Agroforestal y pecuario y Participación ciudadana. No hay, pues, un cambio sustantivo con respecto al Plan Guzmán, salvo el agrupamiento de las estrategias en tres grandes programas que identifican, según se señaló atrás, los tres ámbitos de intervención de los gobiernos locales. Pero, al igual, que en el Plan Guzmán, el principio de la prioridad de la inversión social no pasa de ser retórico. De hecho, el plan plurianual de inversiones aprobado por el Concejo, aunque incrementó la participación de la inversión social en el total del presupuesto, sin embargo, siguió dando prioridad al gasto territorial, especialmente en programas de vías y transporte (cuadro 5)

Cuadro 5
Distribucion de la inversion presupuestada en los planes
de desarrollo de Cali 1995-2000 (\$ corrientes)

Tipo de inversion	Plan Guzmán		Plan Cobo	
	Monto (Millones de \$)	%	Monto (Millones de \$)	%
Social	159.464.0	25.0	282.721.0	34.3
Territorial	450.063.8	70.7	512.387.0	62.2
Gestión Pública	27.456.1	4.3	29.013.0	3.5

Fuente: Planes de desarrollo municipal.

“El papel aguanta todo”, dice el refrán. Y ello ocurre con los planes de desarrollo municipal. Contienen enunciados grandilocuentes, buenas intenciones, declaraciones de principios, pero en la letra menuda y, sobre todo, en las cifras de inversión se definen las reales intenciones. En ambos casos, a pesar de las formulaciones retóricas sobre la prioridad a la inversión social, ésta tiene un peso específico menor y no logra convertirse en eje articulador de las restantes políticas públicas.

Por lo demás, ninguno de los dos gobiernos se interesó en formular una política social como estrategia orientadora de la gestión. En la Administración Guzmán, el Plan de Desarrollo ordenó la elaboración de Planes de Acción por dependencia que deberían ser presentados y aprobados un año y medio después de la expedición del plan municipal.

Muy probablemente²¹ esos documentos fueron elaborados por cada dependencia, pero no se conoce un esfuerzo por integrar esas propuestas ni por coordinar la acción correspondiente, a pesar de que una de las intenciones de la reforma administrativa impulsada por la Administración Guzmán fue precisamente crear instancias de coordinación sectorial a través de las Gerencias Sectorial y Territorial²².

En la Administración Cobo se pecó por exceso y no por defecto. En vez de uno, hubo dos esfuerzos internos por enunciar una política social. Desde la Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria, con el apoyo inicial de Desepez y luego de la Consejería Social, se conformó la Comisión Asesora de Política Social, a la cual se le encargó la formulación de una propuesta de política social. Dicha propuesta fue elaborada bajo la coordinación técnica de Foro por Colombia (Foro, 1999a), pero hasta el momento no ha sido adoptada oficialmente por el Alcalde como política social para el municipio, aunque algunos aspectos han sido incorporados de manera tenue en el plan de ordenamiento territorial.

El otro esfuerzo es el diseño de la estrategia “Cali, Municipio saludable por la paz”, patrocinada desde la Secretaría de Salud, con el apoyo de la gerencia sectorial. Existen algunos documentos sobre los objetivos y estrategias que hacen parte de esa propuesta, cuyos resultados están aún por verse y ser evaluados desde el punto de vista de su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Así, pues, desde el punto de vista del diseño, los enunciados de política poca respuesta han dado a la problemática social de la ciudad, salvo los mencionados esfuerzos durante la Administración Cobo, cuyos efectos deben ser demostrados. El avance entre uno y otro plan, además de los

²¹ No se dispone de información suficiente para afirmar que tales planes fueron efectivamente diseñados y aprobados.

²² La Administración Guzmán hizo pública una sola política social, la de equidad para la mujer.

enunciados de política, es el incremento (en términos nominales) del monto de inversión social en un 77.3%.

La Gestión

Lo que efectivamente permite reconocer el valor real dado a las políticas sociales por cada una de las administraciones municipales es su ejecución, los criterios tenidos en cuenta para definir y llevar a cabo determinados programas y el peso de cada uno de ellos en el conjunto de la gestión municipal. El análisis de la gestión de políticas sociales puede hacerse a través de dos vías complementarias: una, de carácter cuantitativo, examinando la ejecución presupuestal por campo de intervención; otra, más cualitativa, examinando los criterios de priorización del gasto, los cambios en las prioridades y la orientación general dada a la gestión social. En este trabajo examinaremos la ejecución presupuestal en el período 1995-1999 para luego caracterizar, en forma muy panorámica, la orientación y los énfasis dados a los programas sociales por las dos administraciones.

La ejecución presupuestal en el período 1995-1999 señala tendencias importantes y una que otra sorpresa:

a. Contrario a lo planteado en los planes, la inversión social ejecutada ha sido mayor a la proyectada (Cuadro 6). Representó en el período entre el 45 y el 50% de la inversión total, mientras que la inversión urbanística, especialmente en el plan vial, se mantuvo entre el 45 y el 46% durante la administración Guzmán (contra el 70% proyectado)²³³ y subió en el primer año de la administración Cobo a un 53.2%, descendiendo a niveles inferiores en 1999. De todas formas, la participación de la inversión social en el total de la inversión muestra una tendencia a la baja, con una leve recuperación en 1999.

²³ El menor nivel de inversión urbanística durante la administración Guzmán se debió a la tardanza en la ejecución de obras. En 1995, por ejemplo, el Laboratorio de Observación de la Gestión Urbana (LOGU), de Foro Nacional por Colombia, mostró que en ese ámbito sólo se ejecutó un 77.6% del presupuesto aprobado por el Concejo, cifra muy inferior al porcentaje de ejecución en el área social (entre el 85 y el 100%).

Cuadro 6
Distribucion de la inversion ejecutada del municipio de Cali
por ambitos 1995-1999 (%)

Ambito de inversion	1995	1996	1997	1998	1999
Social	50.4	48.9	49.4	45.2	48.5
Urbanística	46.3	46.6	45.9	53.2	45.1
Gestión Institucional	3.3	4.5	4.3	1.6	6.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuentes: Dapm, Ejecuciones presupuestales 1995-1998 (citado por Cidse, 1999). Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Ejecución Presupuestal 1999.

b. El monto de inversión social, al igual que el de inversión total, mostró en el período una tendencia ascendente en términos corrientes, con una caída importante en 1998, producto del sobreendeudamiento del municipio en años anteriores. Sin embargo, en términos constantes la inversión social se redujo drásticamente en esos cinco años (Cuadro 7). Así, aunque la inversión social tuvo una importante participación en el total de la inversión durante el período, el monto real de recursos destinados a ese campo disminuyó. El saldo neto de esas tendencias es que la capacidad de respuesta del municipio a las demandas sociales se vió seriamente afectada.

Cuadro 7
Indice de la inversion social y total del municipio de Cali
1995-1999

Año	Inv. social \$ corrientes	Inv. total \$ corrientes	Inv. social \$ de 1988	Inv. total \$ de 1988
1995	100.0	100.0	100.0	100.0
1996	167.1	172.2	148.3	78.8
1997	197.1	199.5	142.9	80.9
1998	115.5	128.6	84.1	45.6
1999	184.4	191.8	N.D.	N.D.

Fuentes: Dapm, Ejecución Presupuestal 1995-1998 (citado por Cidse, 1999).
 Departamento de Hacienda Municipal, Ejecución Presupuestal de 1999

c. La mayor parte de la inversión social se canalizó en el período hacia las áreas de educación y salud, las cuales concentraron entre el 54 y el 71% del total invertido (Cuadro 8). Sin embargo, el comportamiento en esos sectores fue diferente. La inversión en educación tuvo una participación creciente, mientras que en salud esa participación muestra una tendencia a la baja, con una participación excepcional en 1998. Sobresale la reducción importante de la participación de los sectores recreación y deporte y cultura, así como el peso creciente de la inversión dirigida a los grupos especiales y, con fluctuaciones, la destinada a justicia, seguridad y paz y a participación. El sector vivienda aumentó su participación durante la administración Guzmán y cayó en la de Cobo, aunque con tendencia a la recuperación.

Cuadro 8
Distribución de la inversión social por sectores en Cali
1995-1999 (%)

Sector	1995	1996	1997	1998	1999
Educación	11.4	16.2	18.8	17.3	20.2
Salud	51.4	41.7	35.1	53.7	37.6
Vivienda	5.6	15.2	16.2	8.3	10.0
Recreación y Deportes	11.4	4.8	3.0	6.5	3.1
Cultura	4.0	5.3	2.1	2.2	2.3
Grupos Especiales	0.0	4.9	5.0	5.3	5.3
Justicia, Seguridad y Paz	12.9	8.7	14.3	5.6	16.7
Participación	3.3	3.2	4.5	1.1	4.8

Fuentes: Dapm, Ejecución Presupuestal 1995-1998 (citado por CIDSE, 1999).
Departamento de Hacienda Municipal, Ejecución Presupuestal de 1999

d. La inversión muestra claros signos de regresividad durante el período examinado (cuadro 9). La inversión per capita por comuna tiende a favorecer a los sectores de estratos medios y altos, antes que a los estratos más bajos. Durante la Administración Guzmán fueron preferidas las Comunas 3 y 9 y el Área Rural, las cuales aparecen en los primeros rangos durante todo su mandato. El dato correspondiente a 1997, último año de la

Administración Guzmán, muestra claramente la tendencia: aparte del área rural, que es una zona socialmente heterogénea, las comunas ubicadas en los cuatro rangos siguientes son la 17 y la 2 (franja norte-sur) y la 9 y la 3 (franja centro-nororiental, de estratos medios y medios-bajos).

Durante el primer año de la Administración Cobo se mantuvo el área rural como destinataria de las mayores inversiones per cápita y aparecieron dos comunas nuevas, la 4 (franja centro-nororiental) y la 21 (Distrito de Aguablanca). Con todo, la regresividad de la inversión ha seguido siendo característica de la actual administración. En el informe de gestión presentado por el Alcalde Cobo sobre sus primeros 21 meses al frente de la administración municipal presentó una serie de cifras que confirman lo dicho: la inversión per cápita en infraestructura fue inequitativa: en las comunas de estratos altos fueron invertidos \$95.337 por habitante, mientras que en las comunas de estrato medio, \$28.620 y en las de estrato bajo sólo \$9.350. Es decir, en las comunas ricas se invirtió 10.2 veces más que en las pobres. La inversión per cápita fue igualmente inequitativa, sobre todo con respecto a los sectores medios. La mayor inversión per cápita fue para las comunas de estratos altos, \$17.926 contra \$14.352 para las de estrato bajo y \$12.873 para las de estrato medio.

En otras palabras, la inversión pública, en lugar de convertirse en un factor de redistribución de beneficios, ha contribuido a ampliar la brecha social.

Cuadro 9
Rango de las comunas según inversión per cápita
del municipio de Cali - 1995-1998

Año	Rango				
	1	2	3	4	5
1995	9	3	Area Rural	19	15
1996	9	3	19	Area Rural	2
1997	Area Rural	9	17	2	3
1998	4	Area Rural	17	21	9

Fuentes: Dapm, Ejecución Presupuestal 1995-1998 (citado por Cidse, 1999).

Lo que, en últimas, muestran estas tendencias del gasto social es que la gestión municipal en Cali no está respondiendo a los retos generados por la crisis económica y por sus consecuencias sociales. Por el contrario, parece estar contribuyendo a que el problema se agrave debido al carácter inequitativo en la distribución de la inversión total y social.

Esta característica de la gestión pública en el período analizado se confirma mediante el análisis de algunos elementos cualitativos de la gestión social. En primer lugar, las políticas sociales en Cali en el período examinado han sido aleatorias. Significa ello que la administración municipal desarrolla algunos programas y proyectos, pero perfectamente podría haberlo hecho de otra manera. En otras palabras, la gestión de las políticas sociales no depende de una priorización de problemas ni de un plan de acción predeterminado, sino que terminan siendo el producto de la voluntad discrecional de algunos Secretarios que, en virtud de las demandas sociales, de su obligación de cumplir con determinadas competencias definidas en la ley, o de la percepción de que ese frente de acción es importante, ponen en marcha los programas que a su juicio convienen. En la administración Guzmán se publicitó una política de equidad de género porque algunas funcionarias se interesaron en el asunto y, amparadas en la política del Gobierno Nacional en esa materia, diseñaron una propuesta para Cali. En la Administración Cobo, la estrategia de “Municipio Saludable” surgió como propuesta a raíz de que dos o tres miembros del gabinete conocieron el programa y se entusiasmaron con él. Pero ninguna de esas iniciativas hizo parte, por ejemplo, de sus programas de gobierno ni de su respectivo plan de desarrollo.

En segundo lugar, dado que se trata de iniciativas aisladas, no ha existido una coordinación de esfuerzos entre los distintos integrantes del equipo de gobierno para sacar adelante sus respectivos programas. Cada dependencia actúa como una unidad cerrada, sin lazos de comunicación con las demás, y a partir de lógicas definidas en su seno que para nada consultan el trabajo en equipo. Cada Secretaría termina siendo una “mini-alcaldía” con sus propios recursos, sus propios programas y sus correspondientes acciones.

Ello, por supuesto, implica duplicidad de esfuerzos y altos niveles de ineficiencia en el uso de recursos escasos, como ocurrió en la Administración Cobo en la que dos dependencias diferentes pusieron en marcha estrategias distintas y paralelas para formular una política social para la ciudad.

En tercer lugar, dentro de esa lógica de aislamiento, los programas sociales se convierten en objeto de transacción política y de pactos de poder que, más que consultar las necesidades reales de la población en sus distintos segmentos, le apuntan a objetivos de acumulación política y a la obtención de privilegios particulares. El diseño y ejecución de políticas sociales implica contratos, erogaciones, servicios, nóminas paralelas que mueven sumas considerables de dinero, así como universos de beneficiarios que representan caudales políticos no despreciables. Esos factores son relevantes en el contexto del modelo de gestión clientelista que durante muchos años ha caracterizado el manejo del municipio en la ciudad. En esa perspectiva, el criterio de favorecer el bien común pasa a un segundo plano y queda subordinado a la consecución de beneficios particulares.

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, los programas de cada gobierno en el ámbito social poco o nada tienen que ver con los ejecutados por los gobiernos anteriores. No existe continuidad en la ejecución de programas sociales -mucho menos en la formulación de políticas sociales- pues, como se ha mostrado, éstas prácticamente no existen. Cada gobernante busca dejar su propia impronta en las acciones realizadas y busca diferenciarse a toda costa de lo hecho por su antecesor. No existen políticas sociales de Estado, sino programas gubernamentales cuyo impacto no está asegurado, por lo menos en el mediano y en el largo plazo. Bastaría preguntarse por los principales programas ejecutados por la administración Guzmán para ver si fueron recogidos por la siguiente administración y fortalecidos financiera e institucionalmente. Si los hay, puede postularse como hipótesis que son más la excepción que la regla.

Consideraciones finales

La exclusión es una realidad cada vez más visible en Cali. Los indicadores sociales así lo demuestran. Pero no sólo es visible. Es también una realidad creciente, que se expande con vigor y que amplía rápidamente sus fronteras alcanzando sectores que nunca habían sido tocados: las clases medias, los jóvenes, ciertos segmentos de mujeres, sectores profesionales, etc. La exclusión ha fracturado socialmente a la ciudad. No es ese un fenómeno nuevo: la brecha social ha existido de tiempo atrás. Lo que ocurre es que el umbral que la define está marcado por variables nuevas: no se trata solamente de la división entre pobres y ricos, entre estratos altos y bajos,

entre obreros y empresarios, sino también -y, sobre todo- de la que separa a jóvenes y adultos, a mujeres, especialmente mujeres pobres cabeza de familia, y hombres, a discriminados e incorporados, a ciudadanos "de primera" y "de segunda".

Esta realidad de a puño ha modificado en la última década el imaginario colectivo: del mito de la Cali cívica, integrada y participativa (Velásquez, 1996) hemos pasado a la imagen de la Cali pobre, de la Cali violenta, de la Cali narco, de la Cali en crisis. Hoy se palpa en la ciudad un "bajón" moral que no hace más que reflejar el severo deterioro de la autoestima colectiva y el sentimiento de incertidumbre ante el futuro, que invade a hombres y mujeres de diferente condición. Algunos -en realidad, pocos- cultivan la idea del civismo como una tabla de salvación de una sociedad que camina por rumbos diferentes a los de hace un par de décadas. Guardan la esperanza de recuperar el mito y colocarlo como aliciente ciudadano para emprender la tarea de reconstruir moral y materialmente a Cali, de manera que desaparezcan los síntomas de la crisis. Se apela así a la colaboración cívica, a la construcción de visiones de ciudad y de región, a la formulación

de consensos colectivos, como requisito para generar confianza y relanzar económica y socialmente a Cali²⁴. La pregunta es si ello basta o si, más bien, ese llamado a la colaboración ciudadana debe ser complementado -o, mejor, sustentado- con iniciativas privadas y gubernamentales que sienten las bases para mejorar la calidad de vida de los caleños, especialmente de los excluidos. Pues no se trata sólo de sustituir el imaginario dominante hoy día -esa ya es una tarea heroica en Cali, sino de darle piso, ponerle cimientos, a través de reformas de fondo que, inspiradas en principios de equidad y de justicia, mejoren la calidad de vida de los caleños y las caleñas.

Frente a esa dura realidad, las políticas públicas poca prioridad le dan a la inversión social y eluden la posibilidad de construir una mirada estratégica de Cali que permita enfrentar con eficacia y tino los factores de exclusión. Hay inversión social, pero no una política social. Se dedican rubros de presupuesto a programas y proyectos para paliar las consecuencias sociales de la crisis, pero tales acciones no forman parte de una apuesta integral que identifique los nudos críticos del problema y los ataque ordenadamente. Por el contrario, cada dependencia trabaja “lo suyo”, sin coordinación alguna con otras unidades de gestión local y sin conexión con los afectados, con quienes están sufriendo en carne propia el impacto de la exclusión. En los dos últimas administraciones municipales brilla por su ausencia un liderazgo político y administrativo que señale la ruta más adecuada para reducir la brecha social. Más aún, no parece existir en las altas esferas del poder municipal un mínimo interés por “tomar el toro por los cuernos” y darle a las políticas sociales el lugar que hoy merecen en el conjunto de las decisiones públicas. Además, como se mostró en las páginas anteriores, la inversión social social y, en general, el gasto público municipal, han sido regresivos y, por tanto, inequitativos: benefician más a los sectores de altos ingresos que a los estratos bajos de la población. En otras palabras, la gestión pública en Cali ha contribuido a su manera a reforzar las desigualdades sociales, colocando barreras a la ampliación de la ciudadanía social hacia los sectores excluidos o en condición de vulnerabilidad.

²⁴ Es esa la apuesta de iniciativas como la que adelanta la Cámara de Comercio en colaboración con la Cepal, la consultora Mckinsey y el gobierno municipal y departamental, cuyo propósito es construir una visión compartida del Valle y precisar iniciativas concretas que permitan una aproximación a ese escenario.

No obstante, son pocos -casi nulos- los síntomas de protesta social en la ciudad. Exceptuando la lucha del sindicato de EMCALI contra la privatización de la empresa y la movilización de los vendedores ambulantes contra su reubicación en sitios cerrados, Cali vive una cierta “calma”, que poco se corresponde con los indicadores del deterioro del nivel de vida en la ciudad. Dos factores pueden explicar ese paradójico fenómeno: de un lado, siguen siendo fuertes y variados los mecanismos de dominación social y política en la ciudad: el mito del civismo aún opera, así su eficacia sea menor y hayan aparecido otras representaciones de la ciudad que le compiten; la acción filantrópica de las elites económicas sigue teniendo gran importancia a través de los programas impulsados por las fundaciones empresariales; las redes clientelistas, por su parte, canalizan las demandas de los sectores más pobres de la ciudad, pero también de las clases medias empobrecidas que ven en el Estado y en la dirigencia política una tabla de salvación para asegurar un puesto en la burocracia municipal o un contrato financiado por el erario público.

De otro lado, el débil capital social, reflejado en la baja densidad del tejido social, la desconfianza generalizada que reina en la ciudad y el bajo impacto de normas sociales de cooperación en las conductas del común de las gentes²⁵ (González, 1999).

Tres escenarios pueden ser imaginados de cara al futuro. El primero se caracterizaría por la multiplicación de movilizaciones de protesta, demostrativas de una rebeldía social incontenible que desbordaría los mecanismos de control social y político, cuyo objetivo sería la definición y ejecución de políticas públicas para reducir la brecha social y ampliar la ciudadanía social y política. Un segundo escenario podría ser la prolongación de la actual situación. La exclusión ampliaría su cobertura y las elites locales lograrían contener la eventual protesta social a través de los medios conocidos: difusión de imaginarios compartidos que oculten la dimensión de la desigualdad, acciones filantrópicas en beneficio de los más pobres, incremento de la oferta participativa y afinamiento de las redes de clientela. Finalmente, un tercer escenario podría ser el de un cambio gradual en la gestión pública, en el sentido de asignar mayor importancia a

²⁵ El estudio del Banco Mundial muestra los resultados de la encuesta de hogares sobre acceso y percepción de los servicios ofrecidos por el municipio de Cali, aplicada en 1999, entre los cuales cabe destacar la baja participación de los caleños en organizaciones sociales de base, debido fundamentalmente a la poca confianza que tienen en la capacidad de dichas organizaciones para colmar sus expectativas (Banco Mundial, 2000, cap. 2).

las políticas sociales, reducir la corrupción y actuar con base en postulados de justicia distributiva y equidad social. Implicaría igualmente este escenario un cambio de actitud del ciudadano en el sentido de ser menos reactivo a las políticas estatales y más proactivo en la formulación de dichas políticas.

El primer escenario no parece tener demasiadas probabilidades de existencia. Su configuración implicaría transformar radicalmente componentes estructurales de la vida local, especialmente culturales y políticos. Implicaría reestructurar las bases de la dominación local, cosa que no ocurre de la noche a la mañana. El segundo escenario es menos improbable: cuenta con todas las condiciones de existencia, excepto una que puede tener importancia en el mediano plazo: el descontento ciudadano con la clase política, la poca credibilidad de esta última y el crecimiento de una corriente de opinión ciudadana que, si bien no tiene trazos precisos, parece apuntarle a objetivos de cambio. Ese factor no es sin embargo decisivo, aunque puede contar en el futuro.

Finalmente, el tercer escenario parece ganar terreno, aunque no cuenta aún con las condiciones ideales para su concreción: implica cambios de mentalidad y de actitud en la dirigencia política y en los ciudadanos, procesos que sólo maduran en plazos medianos y largos. Juega en su favor

el mismo factor que puede desestabilizar el escenario anterior: el descontento de la gente y las estrategias de recambio de la clase política para recuperar su legitimidad.

Que uno de estos dos últimos escenarios sea factible depende, pues, de la capacidad de los ciudadanos y de sus dirigentes de transformar el actual estado de cosas: las conductas públicas, la gestión local, las formas de relación entre unos y otros, etc. En tal sentido, las elecciones municipales de este año pueden ser un excelente referente de cambio o de estabilidad. Lo que allí está en juego es la posibilidad de construir un proyecto de ciudad nuevo, de largo plazo, y de reconstruir democráticamente la política para que opere al servicio de los ciudadanos. En otras palabras, está en juego la posibilidad de garantizar una gobernabilidad democrática para Cali.

Bibliografía

BANCO MUNDIAL (2000), *Cali: hacia una estrategia de desarrollo de ciudad*, Informe 20607-CO, Washington.

BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel (1997), *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información*, Madrid, Taurus.

BRUGUÉ, Quim y GOMÀ, Ricard (1998), *Gobiernos Locales y Políticas Públicas. Bienestar social, promoción económica y territorio*, Barcelona, Ariel S.A.

CAMACHO, Alvaro y GUZMAN, Alvaro (1990), *Colombia, Ciudad y Violencia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia.

CASTEL, Robert (1996), *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires, Paidós.

_____ (1998), “La lógica de la exclusión”, en BUSTELO, Eduardo y MINUJIN, Alberto (editores), *Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes*, Santafé de Bogotá, Unicef-Santillana.

CASTELLS, Manuel (1998), *La era de la información* (3 vols.), Madrid, Alianza Editorial.

CEPAL (1999), *Panorama Social de América Latina 1998 (síntesis)*, Santiago de Chile.

CIDSE (1999), “Patrones sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali”, Documento de Trabajo para el Banco Mundial, Cali (mimeo).

DAPM (1998), *Cali Datos y Cifras 1998*, Cali.

_____ (1999), *Diagnóstico 1999 P.O.T., Vivienda Social y Renovación Urbana*, Cali.

_____ (1999a), *Diagnóstico de Servicios Públicos Domiciliarios de Santiago de Cali*, Cali.

_____ (1999b), *Diagnóstico grupo de trabajo social y equipamiento colectivo*, Cali.

ELIAS, Norbert (1994), "Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados", en ELIAS, Norbert y SCOTSON, John, *The Established and the outsiders. A sociological inquiry into community problems*, Londres, Thousand Oaks, Saged Publications.

FALETTO, Enzo (1994), "La función del Estado en América Latina", en *Revista Foro*, No. 23, pags. 5-16.

FORO NACIONAL POR COLOMBIA (1999), "Radiografía Social de Cali", Cali (mimeo).

_____ (1999a), *En Busca de la equidad. Política social para el municipio de Cali*, Cali.

FLEURY, Sonia (1998), "Política social, exclusión y equidad en América Latina en los años 90", Caracas (mimeo).

GONZALEZ R., Esperanza (1999), "El capital social en Cali: participación y tejido organizativo", en *Revista Foro*, No. 37, Bogotá, Octubre de 1999, pags. 33-41.

KLIKSBURG, Bernardo y SULBRANDT, José (1999), "América Latina: una región en riesgo. Pobreza, inequidad e institucionalidad social" (Documento de trabajo), página web: iigov.org/pnud.

LE VUOLO, Rubén (s.f.), "A modo de presentación: los contenidos de la propuesta del ingreso ciudadano", en VARIOS, *Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano*, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.

MARSHALL, T.H. y BOTTOMORE, Tom (1998), *Ciudadanía y Clase Social*, Madrid, Alianza Editorial.

MINUJIN, Alberto (1998), "Vulnerabilidad y Exclusión en América Latina", en BUSTELO, Eduardo y MINUJIN, Alberto (editores), *Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes*, Santafé de Bogotá, Unicef-Santillana.

RODRIGUEZ, Alfredo y WINCHESTER, Lucy (1998), "Fuerzas globales, expresiones locales: desafíos para el gobierno de la ciudad en América Latina", en RODRIGUEZ, Alfredo y WINCHESTER, Lucy (editores), *Ciudades y Gobernabilidad en América Latina*, Santiago de Chile, Ediciones SUR.

ROSSANVALLON, Pierre (1995), *La nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia*, Buenos Aires, Manantial.

SENNET, Richard (1978), *Vida Urbana e Identidad Personal*, Barcelona, Ariel.

TEZANOS, José Félix (1999), "Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avanzadas. Un marco para el análisis", en TEZANOS, José Félix (editor), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*, Madrid, Sistema.

URREA, Fernando (2000), "Relaciones interraciales y clases en la construcción de ciudadanía: el caso de Cali (Colombia)", Ponencia presentada al Simposio "O desafio da diferença. Articulando gênero, raça e classe", Salvador de Bahia, Universidad Federal de Bahia (mimeo).

VASQUEZ, Edgar (1995), "El Plan de Desarrollo no tiene prioridades", en *El Tiempo*, Sección Cali, Agosto 29, pag. 3.

VELASQUEZ, Fabio (1996), *Ciudad y Participación*, Cali, Editorial Universidad del Valle.

_____ (1996a), "Una mirada desde Cali", en VARIOS, *Nuevas Formas de Participación Política*, Bogotá, IEPRI/FESCOL.

_____ (1997), "Descentralización y Gestión Local en América Latina", en VARIOS, *América Latina: entre el desencanto y la esperanza*, Bogotá, EZE-Viva la Ciudadanía, pag. 26-45.

_____ (1999), "Gestión Local y Política social. Notas para la definición de un enfoque", en *Revista Foro*, No. 37, Bogotá, Octubre de 1999, pag. 42-55

**SER HOMBRE, NEGRO Y JOVEN.
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES MASCULINAS
ENTRE SECTORES POPULARES EXCLUIDOS EN CALI**

**Pedro Quintín Quílez
Fernando Urrea Giraldo¹**

La gente es muy racista. Más que todo los blancos. O sea, uno sale para otros barrios y hay veces que, como uno es negro, piensan que todos los negros son ladrones y empiezan a mirarlo mal. Uno les pasa al lado, a un riquito, uno que tenga más o menos, y se le esquivan a uno pensando que uno los va a robar. [En Cali] cuando uno sale por el centro, que la gente va a comprar su ropa, lo ven a uno así. Unos negritos así, y ‘¡No! Este me va a robar’, y también uno siente.

Mauricio, joven negro, 19 años, barrio Charco Azul.

Cali es una ciudad mestiza en términos raciales, en la que no puede desconocerse que operan relaciones interraciales con amplio mestizaje a lo largo de todas las capas sociales de la población. Sin embargo, como veremos, los procesos de exclusión social en Cali tienen un componente de segregación socio-racial del espacio urbano (Barbary, 1999 y 2000; Urrea, 1999; Urrea y Murillo, 1999), a la vez que las mismas relaciones interraciales están marcadas por un racismo, entre sutil y explícito, que también afecta a los grupos negros y mulatos de clase media, incidiendo negativamente en sus posibilidades de movilidad social (Bruyneel y Ramírez, 1999).

Nuestra atención se dirige al análisis de algunas formas de sociabilidad que atañen a la construcción de identidades masculinas entre hombres negros menores de 25 años en sectores populares, residentes en algunas de las áreas más pobres de la ciudad con la mayor concentración

¹ Los autores son profesores del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle, Cali. Este texto hace parte del proyecto Cidse-Univalle, “La construcción social de las masculinidades entre jóvenes negros de sectores populares de la ciudad de Cali”, bajo responsabilidad de los autores por parte de Univalle, y la participación de Fernando Murillo y Antonio Murillo *Mahambo* de la organización Ashanty, realizada dentro del programa Prodir III de la Fundación Carlos Chagas (São Paulo), 1999-2000. En la elaboración del artículo colaboraron los estudiantes de sociología Hernán Darío Herrera Arce y Lewinson Palacios Abadía.

de población negra-mulata. Nos interesa la relación entre las dimensiones de la sociabilidad, las condiciones de exclusión con segregación espacial de orden socio-racial y la producción de subjetividades. Quiere ser una mirada en la que el contexto social forma parte del juego de interacciones a escala micro y, por lo mismo, es central en la construcción de las figuras masculinas deseadas y asumidas. Así, el artículo presenta primero algunos datos generales de las poblaciones estudiadas, analiza la producción de determinadas figuras masculinas hegemónicas entre los jóvenes negros, sigue con la presentación de nuevas figuras que aparecen como fisuras a esa identidad hegemónica microlocal y sugiere una serie de conclusiones a la manera de hipótesis de trabajo.

Este texto asume la crítica que Peter Ratcliffe (1999) hace a las investigaciones que establecen correlaciones simples y mecánicas entre indicadores macro de segregación social y los procesos subjetivos en que se manifiesta las dinámicas de “exclusión”; en especial cuando se crean agrupaciones analíticas a partir de los datos macro que no se corresponden necesariamente con aquellas que ordenan los procesos micro:

“La investigación académica continúa influenciando el pensamiento en esta área. Un conjunto importante de temas está concernido con las necesidades y aspiraciones de diferentes comunidades. Estos últimos grupos a veces son asumidos erróneamente no sólo como homogéneos internamente sino culturalmente estáticos e imbuidos de ciertos valores tradicionales y de actitudes fijas. Esta estereotipación, si no es demostrada (por la investigación) sería sesgada, y puede ser problemática en el sentido de que adopta un conocimiento de sentido común que tiene reales efectos materiales en términos de una panoplia de *procesos de exclusión*” (Ratcliffe, 1999: 17 [traducción nuestra]).

Igualmente, quisiéramos matizar una posible interpretación que fácilmente se podría desprender de la lectura de este texto: la de que nuestros entrevistados son individuos “incompletos” cuyas vidas giran en torno a la construcción y reivindicación de una identidad particular –individual o colectiva-, tal y como suele pasar cuando se estudian jóvenes (cf. Amit-Talai y Wulff, 1995) y/o minorías étnicas o raciales (Mistry, 1999).

Unas poblaciones pobres, negras y jóvenes

Según la encuesta del Banco Mundial-Cidse, los hogares afrocolombianos² constituyen el 37.2% de los hogares de Cali. Sin embargo, en los cuatro conglomerados geográficos las variaciones son importantes³: la franja oriental de la ciudad concentra el 48% de los hogares afrocolombianos y ellos representan el 45% de los hogares de ese conglomerado; el centro oriente el 24% del total de los hogares afrocolombianos y el 38% de los hogares de esa área urbana; mientras en la zona de ladera apenas residen el 8% de todos los hogares afrocolombianos, siendo el 28% de los hogares en esta zona y finalmente en la zona del corredor de clases medias, medias-altas y altas, habitan el 20% de los hogares afrocolombianos con un 28% de los hogares de este conglomerado. En cuanto a la distribución de la población total por conglomerados, hay una significativa sobreparticipación de los hogares afrocolombianos en la franja oriental, una casi igual participación de hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en la zona centro oriente y una caída en la participación de hogares afrocolombianos en las de ladera y corredor.

Ahora bien, en términos socio-raciales (fenotípicos), el 32% de la población de la ciudad es negra-mulata –un 13% negra y un 19% mulata. En el caso de la franja oriental esta población alcanza el 40%, mientras en la zona centro oriente es del 31%, en ladera el 22.4% -destacando aquí la población mulata- y en corredor el 24%. En el caso de la franja oriental las categorías “negro” y “mulato” juntas constituyen un valor porcentual mayor que las otras dos categorías significativas, “blanco” (37%) y “mestizo” (22%). En definitiva, el eje que se desplaza desde el centro hacia el nororiente y suroriente de la ciudad marca un aumento considerable de la población

² Aquel en que por lo menos un miembro del grupo familiar primario ha sido clasificado fenotípicamente por los encuestadores como “negro” o “mulato”. Sobre esta metodología, también usada por la encuesta Cidse-IRD, véase Urrea, 2000.

³ Cali puede ser dividida en cuatro corredores urbanos que conforman regiones que combinan el imaginario moral de la ciudad y las condiciones *objetivas* de calidad de vida, diferenciales de ingreso, estructuras ocupacionales, etc.; a ellos les corresponden también patrones socio-históricos de desarrollo urbano muy distintos: a) zona de ladera, en su mayor parte un área residencial precaria en terrenos muy pendientes y erosionados, con una gran concentración de población en altos niveles de pobreza; b) franja oriental, conformada por antiguos terrenos anegadizos y lagunas, bordeando el río Cauca, la segunda región con los peores niveles de pobreza; c) zona centro-oriente, conformada por barrios de clases medias-medias, medias-bajas y bajas, son sectores populares típicos con asentamientos estables y urbanizados; y, d) corredor central de la ciudad, que se extiende de norte a sur, de clases medias-medias, medias-altas y altas, con las mejores condiciones de urbanización (Urrea, 1997; Urrea y Ortiz, 1999; Henstchel, 2000).

negra-mulata, sobre todo negra. Por otra parte, el eje hacia la ladera (occidente) es más mulato y mestizo, con una participación también de población blanca; la población mestiza participa tanto en la franja oriental como en la zona del corredor central y de ladera; finalmente, la población blanca es dominante en el corredor medio-alto, parte de la zona de ladera y en algunas comunas del centro oriente. Se evidencia así la existencia de una segregación espacial socio-racial, con incidencia en los patrones de desigualdad social⁴.

Por otro lado, la población negra-mulata es más joven que la blanca-mestiza, para el conjunto de la ciudad, y tiene índices de masculinidad totales ligeramente menores. Los tamaños promedio del hogar son ligeramente mayores en los afrocolombianos (4.5 frente a 4.2 personas por hogar en los no afrocolombianos). Además, se constatan datos significativos de desigualdad social: los hogares afrocolombianos presentan una mayor concentración en el primer quintil de ingresos, así como los índices de hacinamiento promedio son también más altos. Igualmente hay una acumulación desigual de la población menor de 20 años en el primer quintil de ingresos (un poco más del 60% de la población masculina en los hogares afrocolombianos del primer quintil que viven en el oriente es menor de 20 años, mientras las mujeres alcanzan un poco menos del 50%). Lo sobresaliente es que se trata de una población muy joven asociada a condiciones de extrema pobreza y con una sobre participación de población masculina en edades menores a los 20 años. Cabe destacar que se trata de una población masculina extremadamente joven y con un fuerte desbalance de figuras masculinas en edades superiores a los 20-25 años, lo cual es un elemento que incide, como veremos, en la construcción de las subjetividades masculinas de los jóvenes negros a partir de la recurrencia de una fuerte competencia entre pares, especialmente si –como es el caso– una buena parte de ellos está por fuera del sistema escolar y las condiciones de trabajo son precarias, especialmente en un contexto donde se da también la segregación laboral en términos socio-raciales, con peores ocupaciones y más escasas posibilidades de encontrar empleo para los afrocolombianos (cf. Urrea y Ramírez, 2000; Urrea, 2000).

⁴ Lo anterior amerita matices a partir de la relativa alta mestización de los hogares afrocolombianos, dado que ellos contienen por lo menos un 18% de miembros blancos, mestizos y de otras características. Este mestizaje es una expresión de dinámicas interraciales presentes en todos los ámbitos de la ciudad. Además debe tenerse en cuenta que los límites de la categoría “mulato” son difíciles de fijar.

El *ghetto*, una comunidad inventada en el oriente de Cali

Aquí en el ghetto

Aquí del Ghetto
no entran extranjeros
a no ser que sean duros
y se ganen el respeto del Ghetto.
Díganme si no es cierto,
he visto con mis ojos
muchos bravos que se han muerto
con su boca llena de tierra
y su rostro incompleto
por la falta de respeto al Ghetto

Aquí en el Ghetto
es primero quien es tropelero
sólo los vivos sobreviven
a todo este mierdero.
Les quiero rapear
cómo es el Ghetto:
es oscuro, es peligroso.
Mejor dicho es un infierno.
A veces ni el mismo diablo
asoma por aquí sus cuernos...

Mi barrio

Mi barrio, que va
mi barrio es mi barrio
mi barrio, que va
no es el escenario
donde se roba y se mata
la gente a diario,
como lo escriben en la prensa
y lo dicen en la radio
o se ve en la TV,
medios falsarios.
Mi barrio no es nicho
ni cuna de sicarios,
no es un albergue de los
mercenarios.
Mi barrio, que va,
mi querido ghetto
es un hogar
y como tal merece respeto...
Gente que madruga
a cumplir con un horario
365 días del calendario
sin descanso, diario a diario,
trabajando fuertemente
por un injusto salario
luchando para comer...

Fragmentos de líricas rap, grupo Ashanty, Diciembre 1999, Charco Azul, Cali.

Al preguntársele a los jóvenes del barrio Charco Azul (franja oriental de Cali) qué significa “ghetto”, expresión que se usa frecuentemente en los temas musicales, dan respuestas del siguiente tono: “es el barrio bajo”, “barrios de negros”, “la gente de los barrios del Distrito de Aguablanca”, “la gente de por aquí”, “donde hay muchos ladrones”, “la gente pobre o humilde”, “barrio donde se vive la violencia”, “Ghetto por ser negro y pobre, esos nombres se los colocan a las invasiones”⁵. Al lado aparecen las que hacen referencia a la existencia de lazos de vecindario, en el sentido de residir entre “gente como uno”: “para mí la palabra es por ser negros y pobres, porque las personas negras somos de sabor y hacemos lo que

⁵ Asentamientos ilegales, con condiciones precarias de acceso a servicios públicos y baja calidad de vivienda.

nosotros queremos y no lo que las otras personas quieren, y también por pobres porque todos somos humildes y tenemos el mismo nivel de vivienda y no nos importa y como todos somos iguales en el ghetto entonces hacemos lo que queremos”. Precisamente este tipo de visión es la que se expresa en la segunda lírica, donde son resaltados los valores del vecindario y del trabajo. En ambas líricas se expresan las condiciones de la exclusión social ⁶.

El ghetto reúne dos caras ambiguas en el proceso social de percepción y autopercepción: una cara de afirmación de los componentes negativos, que se oponen al resto de la ciudad por exclusión; la otra, de afirmación positiva, por la cual se resaltan los aspectos coincidentes con los del conjunto urbano, pero que al mismo tiempo son negados por las precarias condiciones de vida. Hay una autopercepción como población excluida del conjunto de la ciudad, la cual se ha venido construyendo a partir de un sentido de alteridad desde diversos espacios urbanos por quienes no viven en los barrios de la franja oriental. Se trata de un mecanismo de estigmatización de ciertos espacios urbanos a la manera de “regiones morales” peligrosas. Como anota M. Agier (1999: 147) en relación con una lírica de rap que hace referencia a la existencia “del monstruo de Charco Azul”, “los autores presentan el monstruo como una metáfora de la exclusión del barrio, considerando (es la explicación que los autores le dieron al investigador) que el mismo barrio era visto como una forma monstruosa en la mirada del resto de la ciudad”.

Se trata así de un dispositivo de exclusión por alteridad radicalizada que produce imágenes en doble juego entre los estigmatizadores y los estigmatizados. Este imaginario, que se teje alrededor de una serie de barrios del oriente de Cali, está asociado al elemento socio-racial: en forma visible la presencia de población negra es allí mayor que en el resto de la ciudad. En contrapartida, hay una relación entre espacios de sobreconcentración de población negra-mulata y el uso de la expresión “ghetto” por parte de los jóvenes. Por supuesto, hay un factor de base pre-existente: la mayor pobreza en esas áreas de especial concentración racial (esta afirmación no debe llevar a desconocer a la zona de ladera, con

⁶ Un elemento a destacar es la denuncia a los medios de comunicación en forja de esa imagen del barrio, crítica que es planteada también por jóvenes de otros barrios, tanto de clases populares como de medias, quienes son capaces de matizar las características atribuidas a estos barrios y de denunciar las condiciones de exclusión vigentes en la ciudad (cf. Muñoz, 1999). Una rápida mirada a las formas en que estos barrios son presentados en la prensa local evidencia un grave proceso de estereotipación y estigmatización.

características sociales similares –aunque con menos peso de la población afro- y donde también el rap es una forma expresiva con cierta presencia, aunque allí la expresión ghetto está menos extendida). En segundo lugar, la estrecha relación en las representaciones entre pobreza y color de piel está indicando que la producción de un imaginario “moral” excluyente y los procesos de segregación socio-racial y económica no son separables o autónomos. La asociación para determinadas áreas residenciales entre pobreza y color de piel está indicando que si bien la desigualdad social se sustenta en factores de clase, no puede reducirse a esta dimensión. Esto quiere decir que la discriminación racial bajo la modalidad de segregación socio-espacial opera en la ciudad como un dispositivo que afecta la desigualdad entre las clases. Según Wade (1993 y 1999), refiriéndose a la experiencia del grupo Ashanty y de los barrios de mayoría negra del Distrito de Aguablanca, “el racismo y la mayor parte de los problemas generales de pobreza y violencia eran experimentados en forma unificada, sin poderse separar en problemas de “raza” y “clase” o identidad y recursos materiales (...) Sugeriría que la experiencia es vivida de una manera integrada pero en constante tensión con objetivaciones las cuales fragmentan la experiencia en los componentes de raza y clase”.

Se trata de un fenómeno de segregación espacial con una fuerte estigmatización a partir de lógicas particulares de exclusión en el sentido señalado por Norbert Elias (1997), junto a la dispersión -con presencia difusa pero visible, sobre todo a un nivel individual más que colectivo- de hogares afrocolombianos de clases medias, con altos niveles de escolaridad y vinculación socio-laboral en carreras técnicas y profesionales. En el caso de estos últimos hogares la discriminación racial se experimenta a través de dispositivos más sutiles, a escala de la estructura ocupacional en empleos calificados, en los niveles de ingresos dentro de esos empleos y en la

jerarquía social de cargos de mando empresarial⁷ y del mismo sector público, donde se hace visible una desigualdad a partir del color de piel, pero permitiendo procesos de movilidad social ascendente articulados a mecanismos de mestizaje. No es casual por ejemplo que entre los hogares afrocolombianos de los quintiles de ingreso cuatro y cinco la presencia racial sea casi exclusivamente mulata y muy poca negra. Se trata por tanto de un tipo de racismo que, a la vez que integra a través del mestizaje jerarquizado y del *blanqueamiento* en las capas sociales medias y altas, segrega en las capas populares (Wade, 1993)⁸.

En Cali la expresión anglosajona “ghetto” procede del rap y del movimiento “hip-hop” de Estados Unidos y Europa. Los grupos raperos la han incorporado en sus letras desde inicios de la década de los noventa, existiendo algunos antecedentes de mediados de los ochenta por parte de grupos como Ashanty⁹. Aunque su expansión está asociada de alguna forma a la influencia de los medios masivos de comunicación y a las modas culturales que participan de circuitos tanto comerciales como “alternativos”, los raperos caleños resignifican el término “ghetto” de acuerdo con sus experiencias. Ello ha facultado ampliar su uso en el Distrito y en las comunas vecinas, deslizándose de las canciones al lenguaje corriente. Lo interesante es que dicha expresión parece permitirles captar y expresar adecuadamente las condiciones de su existencia: alta proporción de población negra-mulata, extrema pobreza, sobrepeso de la población juvenil, altas tasas de deserción escolar, vinculación temprana al mercado laboral y, por lo tanto, altos índices de desempleo o subempleo –rebusque

⁷ Sobre la poca o ninguna presencia de grandes o medianos empresarios negros en la región, cfr. Urrea y Mejía, 2000.

⁸ Todo ello significa que la expresión “ghetto” utilizada por estos jóvenes no es estrictamente equivalente a su uso en sociedades con un tipo de racismo histórico institucionalizado, como es el caso de la sociedad norteamericana o del modelo del “apartheid” sudafricano; en otras palabras, no podemos asimilarlo a los modelos de segregación socio-racial americano o sudafricano donde se presenta cierta homogeneidad socio-racial. Para la discusión sobre el “ghetto” negro americano y otras experiencias de discriminación racial urbana, consúltese a Loïc J.D. Wacquant (1993A y 1993B).

⁹ Los integrantes de Ashanty – hombres negros en la franja etárea entre los 25 y 30 años –, han terminado el bachillerato y hecho cursos postsecundarios, aunque no continuaron estudios universitarios. En el contexto barrial, sus integrantes se constituyen en una especie de “intelectualidad cultural”. Ellos, además, reciben la influencia de ONG’s y de organismos de cooperación y se articulan a programas sociales, desarrollando una gran capacidad en la elaboración y gestión de propuestas locales (cf. Wade, 1999).

en actividades tanto lícitas como ilícitas-, así como existencia de una violencia extrema.

Los grupos de pares (llamados “parches” o “combos”) de hombres negros y mulatos en edades pre-adolescentes y adolescentes -incluyendo también a jóvenes mestizos y blancos que viven en esos barrios- son un espacio social por excelencia de puesta en acción de las (auto)representaciones. En dichos grupos se ha (re)producido y extendido el término “ghetto”. Se trata de una creación colectiva que trabaja como elemento clave en la constitución de una comunidad imaginada o inventada (Anderson, 1991), articulada en este caso alrededor de la música rap y del movimiento “hip hop”, los que operan a su vez como vehículos culturales de invención de identidades de los sectores juveniles excluidos en otras ciudades con alta segregación socio-racial, étnica, por grupos de origen o debido a condiciones socioeconómicas de intensa marginalidad social (cf. Weller, 2000; Garcia Castro y Abramovay, 2000):

“O rap é mais do que somente lazer e consumo: o rap é o símbolo da juventude revolucionária da periferia e um instrumento que “fala a verdade de cara” ou seja, que denuncia as desigualdades e as injustiças vividas enquanto negros e moradores de bairros periféricos. O rap é também uma forma de “desabafo” e partilha das experiências vividas. Deste modo as experiências individuais passam a ser divididas e trabalhadas com os outros integrantes da banda e com o público, fazendo do rap uma espécie de terapia de grupo..... E é este sentimento que gera uma satisfação de estar cantando para um público, onde a letra de um rap não é apenas a história de um indivíduo, mas a história de muitos outros jovens que estão ouvindo e cantando uma música juntamente com a banda” (Weller, 2000: 9).

En torno a las masculinidades de los excluidos

La muerte es una constante en la vida cotidiana de las personas que viven en los barrios populares de Cali, pero especialmente para los hombres menores de 25 años. Su presencia forma parte del cálculo en las estrategias de sobrevivencia de las familias: la mayoría de las madres sabe que en cualquier momento le puede llegar la noticia de la muerte violenta de un hijo.

No es que ellas y los demás miembros de la red familiar acepten pasivamente dicha situación; por el contrario, son continuas las prevenciones que hacen a los hijos sobre los riesgos que corren, incluso con choques verbales y a veces con situaciones de violencia menor en la casa, a la vez que incrementan los esfuerzos por buscarles alternativas cuando abandonan el sistema escolar. Sin embargo, las madres y demás miembros del hogar se dan cuenta que la situación no cambiará mientras continúen residiendo en el barrio. Pero la violencia se puede constituir también en un elemento constitutivo de identidad.

D. Poole (1991), en su estudio sobre Chumbivilcas (Cusco, Perú), aporta elementos analíticos para comprender por qué los más pobres –vistos en la región también como más atrasados y “salvajes”- hacen énfasis en la violencia a la hora de distinguirse respecto a otros grupos regionales, lo que les permite así construir una serie de “valores consensuales de identidad y comunidad moral”.

Dos jóvenes hermanos negros, Sidney y Michel, son representativos de la puesta en juego de una masculinidad centrada en la hombría, la bravura, y en el constante desafío en el que la vida puede perderse. Ambos se identifican de forma explícita como “aletosos”. El aletoso es una figura masculina que hace parte del ghetto, mientras que a la figura opuesta, el “gomelo”, se la excluye del mismo: “para los jóvenes del Distrito de Aguablanca los aletosos son del ghetto, pero un gomelo no puede pertenecer al ghetto” (Fernando Murillo, co-investigador).

Sidney es un caleño de 17 años, que estudió hasta 5º de primaria y vive temporalmente en Charco Azul, en una casa propia de la abuela, con la madre, una tía materna de 23 años y un hermano menor, Michel de 15 años y con una escolaridad también de 5º de primaria. Ambos hermanos son desertores escolares. La abuela y la madre nacieron en la zona rural de Tumaco, en las riveras de un río donde tenían una finca. Las dos migraron directamente desde la zona rural a Cali hacia finales de la década del sesenta y formaron parte de los primeros invasores de tierras urbanas en Charco Azul, junto a otras gentes negras procedentes de Tumaco.

La mamá tiene 43 años, estudió 5° de primaria y trabaja en una casa de familia; la abuela materna, con 3° de primaria, también trabaja en lo mismo, aunque ahora está desempleada. Entre las dos sostienen el hogar. De su padre no saben nada. Ambos hermanos se dedican al rebusque ilícito, básicamente en la forma de pequeños hurtos y atracos.

Sidney

Aunque reconoce los esfuerzos que la madre ha hecho por criarlos, no acepta de buen grado las advertencias que le hace respecto a las actividades ilícitas en que anda en estos últimos tiempos. Entre los 10-14 años se dedicó a la venta de frutas y jugos en el centro de la ciudad, así como se insertó en pequeños empleos ocasionales, aportando sus ingresos al hogar. Sin embargo, y quizás por influencia del grupo de pares (algo que otros jóvenes del barrio también expresan, incluido su hermano Michel), el rebusque ilícito se convirtió después en una mejor alternativa: *“estos trabajos dan (ventas de frutas, jugos, etc.), pero en el rebusque uno se hace la plata en un día”*. El rebusque es también, para él, un asunto de “hombres”, que marca el pasaje al mundo de la calle y del grupo de pares, y una mayor independencia respecto a la esfera de la casa y el grupo doméstico.

Ahora bien, los dos hermanos siguen dependiendo de la familia. Los ingresos que logran a través del rebusque “duro” (participación en robos zapatillas, ropas, bicicletas, motos, electrodomésticos, joyas, carteras o maletines de transeúntes, etc., y en ocasiones asaltos a buses) no entran a formar parte de los gastos del hogar. Con ellos hacen algunos aportes al sustento del hijo(a) en asuntos muy puntuales (leche, pañales, ropa, etc.), y eso bajo presión de la misma madre y la familia de la joven que embarazaron. Pero sobre todo los ingresos son gastados en ropa y zapatillas para su uso personal, en diversión, y en obsequios para la muchacha con quien mantienen algún romance o relación erótica -por supuesto diferente a la mujer que han embarazado.

Pese a cierta ambivalencia respecto a estas actividades delictivas -“*quiero trabajar en lo que sea. No quiero más robar, porque eso es hasta pecado, ¡hasta pesar me da, hay veces!*”-, sin embargo encuentra una justificación suficiente a sus ojos: “*nadie roba a nadie. Si yo le digo a un man ‘entrégume’ (un objeto) y él me lo entrega, es porque quiere. Porque todos dos tenemos las mismas huevas (testículos)*”.

La participación en estas actividades, asociadas a la exposición a peligros y hasta a la muerte violenta, se articula a una concepción particular del hombre y de la hombría. Sidney afirma no temer a la muerte, y como ejemplo de hombre pone a uno de los compañeros del parche que “*ya se murió, era el más parado, el que encañonaba y todo, el que se encendía con los tombo (policías). Ese era el más hombre. No le daba miedo, lo respaldaba a uno. Él decía, ‘no se azaren que todo es conmigo’. Él tenía 19 años cuando lo mataron*”. Y aunque Sidney afirma que él nunca ha herido a nadie, sí enfatiza que “*en su parche nadie es cagado (miedoso), todos son decisión*”. Frente al parche la hombría se demuestra haciendo “*vueltas*” (actividades delictivas). Pero si esa es la tabla de medición de la hombría, lo cierto es que él no siempre está a la altura: a veces prefiere que le digan “*cagado, peo (cobarde) y no de carácter (hombre decidido), porque de carácter más de uno está allá bajo tierra*”. Atributos asociados a esas actividades, como tener un arma, son también señales de hombría; en este caso el arma sirve para hacerse respetar como hombre, “*porque de esa forma todo el mundo lo va a tratar serio*”. Dentro del parche se clasifican entre sí según el cumplimiento de los acuerdos y la fidelidad al grupo. La traición es evaluada como falta de hombría y acarrea graves consecuencias –venganzas que van desde la expulsión del grupo hasta la muerte-; en el fondo domina la idea de hacerse respetar también por los compañeros.

Los robos son distintivamente masculinos, pues “*uno puede más que ellas. Son muy fáciles de coger. En algunos casos uno se escapa y a ellas las cogen. Me ha tocado que devolverme. Uno es más vivo. Ellas son muy bobas, no corren nada, uno es más parado*”. Esfera masculina puesto que los atributos asignados a las mujeres no son allí convenientes.

Según Sidney, aún cuando los hombres pueden aceptar la invitación de una mujer para salir a bailar, no es aceptable que sea ella la que tome la iniciativa en la relación erótica, pues se la considerará “bandida”, “fufurufa” o “perra” -la excepción es si se trata de la pareja con quien viven y con quien tienen hijos. Pero por otro lado el hombre no puede ser “bobo”: si una mujer se lo pide, debe acceder pues ese es un indicador de hombría, “*los hombres que no se van con esas mujeres dejan de ser hombres*”. El temor a ser calificado de “poco hombre”, tanto por parte de la mujer rechazada o insatisfecha como por parte de otros hombres, es una amenaza constante; dentro del parche el más hombre es aquel que más mujeres conquista.

A partir de los estilos y gustos Sidney establece diferentes categorías de personas. Por ejemplo, en el grupo prefieren la salsa, en cambio el “*trance no, porque es como de los gomelos*”, y continúa: “*el gomelo es como bobito y uno es más aleta, uno sabe más que el bobito*”. La “pinta” (vestimenta, accesorios y acicalamiento del cuerpo) es otro diferenciador, aún cuando hay prendas que ambos tipos de jóvenes usan: “*Las zapatillas nunca pasan de moda. Hay muchas zapatillas bacanas y caras de 300 y de 250 mil, pero yo no le meto toda esa plata, mejor me compro un fierro (revólver) y le saco más plata. Los gomelos son otra cosa: cogen los pantalones y los tapean (rasgan) en la bota y los usan achingados (ajustados al cuerpo). Yo los uso anchos*”. Antes del nacimiento de su hijo el dinero que conseguía era exclusivamente para comprarse ropa y para sus gastos personales, pero desde que nació su hijo se ve presionado por la madre del bebé, por la madre de la chica y por su propia madre a dejar un remanente de los ingresos que consigue con el rebusque; aunque con frecuencia su madre y su abuela asumen los gastos para el bebé.

Según Sidney los aletosos son jóvenes de sectores populares, “de barrios pobres”, mientras que los gomelos son más de clases mejor asentadas ya que poseen más recursos. Pero también entra una dimensión racial: “*Los gomelos tienen más. Los aletosos somos pobres. Los gomelos viven en barrios buenos, (como) Villa del Lago, y además los gomelos son blancos, negros casi no*”.

Michel

En Michel la concepción de hombre está marcada por la posibilidad de hacerse respetar y de imponerse sobre los demás, tanto dentro del grupo de pares como fuera de él. Así, la hombría se reconoce en ciertas situaciones extremas: *“cuando vamos a ganar (a robar), salir carácter, salir decidido (sin miedo) a lo que vamos a hacer”*; se la demuestra generando actitudes de imposición hacia los demás. En consecuencia, el temor es un sentimiento que no se puede mostrar ni siquiera en el parche: *“el más bravo es el que lo encañona, el que va carácter, porque va más de uno que va cagao. Si uno le sale primero y lo coge hay que llevarlo porque va carácter”*.

Nuevamente se teje la hombría con relación a la violencia, especialmente en la calle más que en los espacios del hogar. La construcción de la figura masculina se da a partir de la calle y de los valores que ahí se promueven; en ningún momento se menciona la educación en el hogar como aporte importante en la construcción de modelos de identidad: *“yo aprendí viendo a Harold, un amigo mío, ¡ ufj Ese man cuando los coge hay veces le da puño. Entonces yo aprendí viéndolo a él y allí más de uno lo respeta allá en el barrio”*. El modelo es el del hombre que más pelea, roba, anda con las mejores “pintas”, tienen las mejores mujeres y es respetado por todos por ser peligroso. En una época, algunos de los integrantes del parche al que pertenece Michel se vieron relacionados con las violaciones de algunas jóvenes del barrio o de sectores vecinos. Pareciera que de esa forma querían mostrar su poderío y hombría en el barrio.

Pero esa imagen del hombre de la calle parece incidir en la construcción del modelo del hombre de la casa: aquel que puede defender su hogar de cualquiera que esté interesado en irrespetarlo, molestando o agrediendo a algún miembro de la familia. El hombre es quien, hacia fuera, sale a defender el honor familiar y quien es respetado en el seno de la casa. Sin embargo esta imagen no se asocia a la generación de recursos para el hogar: *“tener a todo bajo cuerda. Si pasa un problema en la casa, salir el hombre. El hombre salir carácter a evitar los problemas o a pelear, a guerrear por la familia”*.

A pesar de que Michel no genera ingresos, supuestamente pelea por su familia: él se considera el hombre de la casa. Como en el caso de su hermano, el dinero que consigue es utilizado para comprar ropa y zapatos para estar bien presentado, para “tirar percha”. Pero además el hombre de la casa no hace oficios del hogar. A aquellos que los hacen los considera “niñeras”, siendo catalogados como menos hombres. El hombre de la casa, a su entender, solo debe “comer, dormir y ver televisión”. Eso sí, debe salir a defender el “honor” de la casa.

La participación en delitos de alto riesgo constituyen otro marcador reconocido por Michel: existen “trabajos” para los más “hombres” -como los asaltos que él realiza en estos momentos. Asegura que desde que desarrolla esta actividad se considera mucho más “hombre” que antes, cuando vendía frutas: *“era menos hombre”*.

Era un miedoso. Pero yo no me creo hombre, hombre para pelear con un man más grande que mi, que ya tenga la huevas bien puestas. Pero sí me hago respetar de todo mundo. Expresa que los ingresos generados por el rebusque ilícito se reparten equitativamente: no importa quién sea el más “hombre” o quién sea el más “parado en la vuelta”; sin embargo, ello se contradice con otras versiones que explican que el dueño del arma de fuego tiene derecho a una parte mayor. Sí reconoce, por otra parte, que el dueño del arma más efectiva es casi siempre considerado como el más “hombre” .

El temor es, en general, considerado como una actitud que marca una menor hombría. Quien lo muestra o reconoce tenerlo se convierte en cobarde. Se teje un constante juego de temores y acciones alrededor del ideal del hombre más “parado”, del más hombre: uno siempre debe estar dispuesto a *“echarse pa’delante”*. Sin embargo, la jerarquía existente en el parche –como ha sido descrita para este tipo de asociaciones, cf. la obra ya clásica de Whyte, 1955- es relativamente estable, en este caso en una estructura de “cacicazgo”. En consecuencia, el “cacique” es quien impone las normas y las actividades a ser desarrolladas, pero sobre todo quien asume las mayores responsabilidades y, en situación extrema, quien debe asumir los mayores riesgos.

Sea en pequeños robos o en acciones de mayor calibre, se percibe la necesidad permanente de demostrar la hombría a través de actos: es la forma de estar posicionado en el interior del parche y demostrarle fidelidad al mismo, aunque no sea algo que en todo momento se esté dispuesto a realizar: *“yo no mantengo aficionado (asfixiado). Hay días que me dicen que la vamos a hacer y yo digo ‘¡No, Ahorita qué voy a robar!’ Yo soy carácter. Yo robo, pero en el barrio más de uno lo quiere monopolizar de que roba... Cualquier robo sale un combo bravo, somos como ocho”*.

El otro gran momento de puesta en escena de la masculinidad es en los distintos momentos de ocio, en especial la rumba. De nuevo se reitera la idea de que el más hombre es el más “parado”; en este caso *“más hombre es el que consigue sus hembras que tales y toma también y pa’ delante. Hay manes que están tomados y caen ya, ya están tirados. Hay manes que toman y siguen parados en la raya y con sus hembras ahí al lado que tales”*. No obstante, ello se debe acompañar del “hacerse respetar”, en especial en los retos (agresiones, burlas,...) que se reiteran en las fiestas.

El hombre *“sigue siendo hombre por lo que vale y es. Llegar carácter donde vaya; donde vaya, llegar decisión. El que se la pique a loco hay que mandarlo de operación. Ése es más hombre siempre”*. Hacerse respetar es tanto defenderse uno mismo como defender fielmente a los amigos y compañeros de grupo, así como a las mujeres que los acompañan.

En cuanto a las relaciones con las mujeres, Michel tiene novia “oficial”, así como otras amigas. La oficial es aquélla a quien se va a visitar a su casa casi todos los días, en especial los fines de semana, y a quien es importante dedicarle tiempo para conquistarla, al punto que no es prioritario tener relaciones sexuales con ella. A ella hay que cuidarla, y se espera que sea una muchacha de casa: *“original es cuando tiene su virgito ahí, no anda con uno ni con otro; si es una mujer que haya estado con uno y con otro no sirve (...) claro, porque no mantiene en corrinches (situaciones vergonzosas o en habladurías), ni con groserías ni pichangas (promiscuidades)*.

Por allá salen bochinches que la colocan a mamar, ... en cambio a ella nunca le han salido bochinches así. Esa peladita es dura, no ve que yo ya la he tocado que tales y esa peladita nada. Por el contrario, a las otras, consideradas de menor importancia, se las clasifica como “bandidas”; con ellas se tienen casi exclusivamente relaciones sexuales. Por lo general, y a diferencia de la novia oficial, son ellas las que deben ir a visitarlo. El tipo de actividad erótica desarrollada marca no sólo nominalmente sino moralmente a las mujeres: mientras es bien visto que el hombre sea “bandido”, a la “bandida” se la identifica como “perra”, “fufurufa” y “puta”.

En los tratos con las mujeres, la violencia parece jugar un papel importante. Según Michel, a las mujeres hay que pegarles para que respeten a los hombres; no sólo es normal, sino que, a su entender, a ellas les gusta que les peguen. Contra esta imagen de la mujer sumisa, surge otra figura femenina, la de la “igualada”. Los hombres hoy en día se sienten “igualados” y en algunos casos superados por las mujeres, ya que ellas están participando en las mismas actividades de los hombres. Él trata de marcar de manera permanente las diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en el campo erótico y en otras esferas de la vida cotidiana en donde ellas deben jugar un papel casi anónimo y de completa pasividad, y para ello se apoya en los castigos físicos: *“ellas tratan sí, tratan de igualarlo a uno, pero uno las calma, uno les mete su golpe y las calma”*.

Al igual que su hermano, se identifica con la figura del aletoso: *“Ser aletoso para mí es vestir lámpara, vestir camisa por fuera, buzos así sabrositos y caminar lámpara y todo el que se la pique a loco sacarle cuchillo y desafiarlo a pelear, eso es ser aletoso. A mí si es como si ganara más fama cuando me dicen aletoso, lo respetan a uno en el barrio, dicen que es una lámpara, a uno lo respetan, le dicen ‘vos sos una lámpara, una aleta’*.

*'Una realta', les digo yo'*¹⁰. Para Michel, los aletosos no tienen género, ya que también hay mujeres y homosexuales "aletosos", pero esta apreciación no es compartida por su hermano, para quien el hombre de prácticas homoeróticas es un "gomelo". Estas diferencias de apreciación indican precisamente la ambigüedad de las clasificaciones y su continua redefinición a nivel empírico.

Como su hermano, rechaza en general a los hombres con prácticas homoeróticas, a pesar de que asume que entre los compañeros del parche quizás *"hay algún marica. No, no hay problema, después que sea carácter en sus hechos"*, es decir, que se comporte adecuadamente en las actividades del grupo. Por otro lado, los homosexuales pueden ser aceptados ocasional y discretamente para establecer una relación de prostitución ocasional. Aunque discursivamente se asevera que quien tiene una relación homoerótica pierde su hombría, reconoce que en el parche hay quienes las practican a escondidas por dinero. Incluso Michel deja entrever que esa alternativa existe y puede ser apetecible: *"cuando yo los veo así que me van diciendo 'Ay papi, usted está muy bueno', yo de una vez le saco mi palo (el garrote). ¿Cómo me va a estar diciendo que yo estoy bueno?"*. Pero advierte inmediatamente que *"si me ofrecen plata tampoco... Aunque si me ofrecen unas diez lucas (diez mil pesos)... ¡Sí, diez luquitas!"*.

En definitiva, ser de "carácter" se convierte en aquello que distingue al hombre. Es una perspectiva cercana a la de M. Herzfeld (1995), en su estudio sobre resentimiento colectivo y reconocimiento mutuo entre los griegos. La idealización pragmática de la figura del aletoso, para estos jóvenes desertores escolares de sectores populares excluidos, opera mediante la inversión de los valores negativos en positivos. Pero en esta inversión hay un efecto marcado de "exageración", a partir del hecho de dar

¹⁰ Pareciera, sin embargo, que el estilo "aletoso", por razones de seguridad y de protección, habría venido decayendo. Sí se usan aún formas particulares de hablar o de caminar y, sobre todo, de reaccionar ante cualquier agresión.

juego a una hombría colectiva apoyada en el grupo de pares, cuyos miembros son quienes evalúan en las acciones riesgosas al más “hombre”. La valentía es osadía para las acciones violentas. Un “hombre carácter”, “parado”, “echado pa’delante” es aquel que juega con una lógica que enfatiza el riesgo: no es que la vida no importe –nuestros entrevistados no dejan de expresar temor a perder la vida– sino que esa representación de la masculinidad implica poner constantemente en marcha acciones riesgosas para el individuo y para el grupo de pares.

Las fisuras: la *emergencia* de otras masculinidades

Otros jóvenes, también del barrio, en las entrevistas dejan entrever formas distintas de modelar y plantear su identidad. Y en ese proceso parecen forzar las fronteras en que ella se establece en el barrio que acabamos de ver. Se trata de chicos y chicas que con sus palabras expresan el deseo de escapar a las constricciones y coerciones que en ese ámbito están vigentes, y para quienes las rendijas del barrio aparecen como demasiado estrechas. Son también del "ghetto" pues en él mantienen relaciones -familiares y de amistad-, viven, sueñan, esperan; quieren, aspiran quizás, a ser de otro lado y de otra manera... "deseo infinito", dirá J. Duvignaud, que nos acerca a esa condición, la anomia, tan cara a la sociología:

“Muerto muy joven, un filósofo del siglo pasado olvidado por los doctores de la universidad, Jean-Marie Guyau, sugirió el término de ‘anomia’ para las situaciones y para los hombres al borde de un mundo que termina y de un mundo que apenas comienza, y para los cuales no existe aún ninguna definición, por lo que escapan así a todo concepto. Matrices de emociones, de pasiones, de pensamientos que anticipan lo venidero, aquello que place al sentido común. Una difícil e incierta anticipación de aquello que puede ser pero que, sin embargo, aún no es.” (Duvignaud, 1995: 171 [traducción nuestra]).

Si además nos aproximamos a algunas interpretaciones realizadas desde los estudios de género, en concreto a algunas que revisan los procesos de conformación de identidades de género, se nos abren vías cuanto menos sugerentes. Así, L. Alcoff, en un intento por trascender las limitaciones de los dos enfoques en lucha dentro de las teorías de género (el “feminismo cultural”-esencialista- y el “feminismo posmoderno” -nominalista-) propone el concepto de “posicionalidad”: el género es una de las posiciones desde las que se actúa, se hace práctica:

El concepto de mujer como posicionalidad muestra cómo las mujeres usan su perspectiva posicional como un lugar desde el que los valores son interpretados y construidos más que como un lugar con una serie de valores ya determinados.” (Alcoff, 1994: 117 [traducción nuestra]).

En ese tomar posición hay un proceso de demarcación, que ella llama de identidad, un punto de partida –cambiante a su vez- y cuyo uso puede ser metodológicamente adecuado para nuestros análisis pues desestima las propuestas de orden positivo o empiristas que creen poder investigar o establecer una teoría de la subjetividad simple (Alcoff, 1994: 113). Entronca así con la propuesta de De Lauretis (“Alice Doesn’t”, 1984; cfr. De Lauretis, 1992), quien se preocupa por el proceso continuo (histórico, biográfico) de construcción de la subjetividad, la que cambia constantemente, es continuamente renovada a partir de las interacciones con el mundo, mediante lo que ella llama “experiencia” –la que no es ni puramente biológica, ni totalmente libre-, “un complejo de habitus resultantes de la interacción semiótica de nuestro `mundo externo` y nuestro `mundo interno`, el constante engarce de un yo [*self*] o de un sujeto en la realidad social.” (Cfr. Alcoff, 1994: 108-110; cita de la p. 109; cfr. De Lauretis, 1992: 259-260).

Algunos valores y comportamientos surgen evidentemente del carácter restrictivo de las actividades que un sujeto realiza, más evidentes para ciertos grupos subordinados (por ejemplo, la crianza de los hijos en las mujeres), lo que implica la tendencia a “esencializar” y solidificar ciertos patrones: actividades diferenciales que, sin embargo, no quedan nunca estrictamente enjauladas en las categorizaciones vigentes o al uso (así sean de clase, raza o, también, de género) en una determinada sociedad.

Las actividades y las categorizaciones, así pertenezcan a diferentes esferas, pueden entrar en contradicciones y en tensión (por ejemplo, pueden existir grandes diferencias entre las mujeres, a partir de tener en cuenta, por ejemplo, solo las condiciones raciales y de clase). Pero las categorías no se disuelven fácilmente, no son de por sí flexibles. Y aquellas referidas al género no son una excepción: se basan en lo que G. Rubin (1986: 97) llama “sistema sexo-género”, el “conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.” Ese sistema establece clasificaciones asimétricas y categorías de género, así como asigna determinados roles a cada uno, so pena de pasar a ser incluido dentro del otro o –cuando existen- o a ser sumado a categorías alternas –igualmente rígidas-. Su transformación, aunque posible, no es sencilla, y supone conflictos, como muchos han reclamado contra las tendencias teóricas reproductivistas (cf. Dollé, 1998).

Aplicado en forma similar desde algunas entradas feministas que postulan un orden sexual rígido, ello les ha sido también criticado: no habría una única posición desde el cuál los sujetos viven el mundo, ni tan siquiera los hombres. Ubicados siempre en procesos sociales, en situaciones cambiantes, las identidades de género y los regímenes de control que definen la “normalidad” no establecen mecánicamente la perspectiva adoptada por el individuo: todos tenemos en algún momento una mirada masculina/femenina/gay/lesbiana, aparte de que pueden existir diferentes formas de vivir individualmente cada una de esas identidades sexuales (cf. Burston y Richardson, 1995); además, esas perspectivas están atravesadas por otras dimensiones (por ejemplo raza o clase). Más que posiciones fijas, tendríamos entonces flujos, desplazamientos constantes (Hall, 1994; Evans y Gamman, 1995). Así, en los últimos tiempos surgen nuevos códigos visuales para la expresión de la masculinidad, modelos simultáneos, en ocasiones no del todo bien delimitados (ni tan siquiera binarios), indefinidos y, a veces, incluso contradictorios (cf. Nixon, 1997: 304-314 y 327-329).

En el caso de estos personajes que ahora presentamos, su presencia da lugar a una fuerte tensión social que es por ellos expresada oralmente en términos (trágicos y/o cómicos) individuales –como acontece por lo general al inicio de los procesos de cambio social, a la espera de que el cambio se convierta en rutina y se generalice (cf. Duvignaud, 1991: 32-36).

Y si, para el caso de los creadores culturales la salida de la casa y el aprendizaje de la escritura se convierten en "autobiografemas" a partir de los que se relatan esas rupturas (Ramírez Lamus y Muñoz, 1995: 10), nos preguntamos ¿cuáles son los "autobiografemas" con que nuestros entrevistados expresan las suyas? Veamos un ejemplo a modo de ilustración.

Edwin “Mancini”

Residente en una de las casas más pobres del barrio Sardi, Edwin, de 17 años, está dedicado al modelaje, mundo en el que se hace llamar “Mancini”. En su relato biográfico se observan todas las tensiones y constricciones que encuentra en el barrio así como su intento de huida vía el modelaje, actividad que aun no le genera ingresos, lo que hace que dependa de su mamá, con quien vive. Mancini estudió hasta 11º grado y asistió a cursos de modelaje en una academia, y ha sido animador juvenil en el barrio. Gracias al modelaje ha conocido otros ambientes por fuera del barrio, donde tiene también amigos de clases medias bajas. La figura de Mancini es relevante si se tiene en cuenta además que su padre estaría mucho más cerca del modelo de masculinidad hegemónica en un barrio popular¹¹.

Destaca en primer lugar su mayor escolaridad. Esta situación a su parecer lo pone en ventaja frente a sus vecinos de Sardi, pero en su comunidad es considerado como una persona débil o frágil que la gente del barrio asocia con una condición homosexual (la que él niega totalmente), ya sea por su manera de caminar, por el uso del cabello alisado, las lentes de contacto y la ropa ceñida al cuerpo (vestimenta que es usual entre los “gomelos”; por el contrario, los jóvenes del barrio visten zapatillas, camisetas y pantalones relativamente anchos). Por ello es sometido a burlas en su barrio, *“yo, como todos los negros, tengo una cola grande. Me coloqué un pantalón ajustado y me decían que tenía silicona.*

Me dicen ‘la barbie’, ‘Naomy Campbell’, el ‘modelo de la noche’, me silban”

¹². La percepción como persona débil le ha causado continuas agresiones

¹¹ El padre, hoy en prisión, fue líder de un famoso “grupo de limpieza” que operó entre 1992 y 1997 en estos barrios. Estaba conformado por personal residente en su mayor parte en Sardi, hombres negros adultos y jóvenes, y era financiado por los mismos vecinos. El grupo evolucionó hacia otras actividades relacionadas con el narcotráfico y el sicariato –asesinos a sueldo.

¹² Su figura es, para otros entrevistados, una especie de paradigma de lo que no puede ser aceptado. Mancini es, según la descripción de un joven líder rapero, un “plasti-pobre” o “gomelo pobre”. El término “plasti” hace referencia a ser “plástico”, o sea, superficial, “light”. Los “gomelos” son identificados como jóvenes “plásticos” y “homosexuales”.

violentas en el barrio, bien para robarle, bien para maltratarlo. Él manifiesta con orgullo que no le preocupan dichos comentarios; por el contrario, los toma como una afirmación de su condición diferente al resto de los jóvenes del barrio y explica, además, que en el grupo de amigos y amigas modelos lo estiman y lo admiran, y lo tratan con cariño por ser el más joven, “*en el modelaje me dicen ‘príncipe’ por ser el más joven del grupo*”.

Mancini se sale de los patrones establecidos para el barrio. En términos de condiciones, además de su mayor nivel educativo, el núcleo familiar (pese a faltar el padre) es bastante compacto y los varones realizan labores domésticas con asiduidad. Por otra parte, el barrio se aleja, tanto mental como físicamente, del mundo que vive y quiere vivir Mancini. La casi totalidad de sus amigas y amigos no son de este barrio ni de la zona cercana; con ellos pasea y visita otras partes de la ciudad, escucha otras músicas, baila otros ritmos y en otras discotecas¹³. Nunca, ni cuando era niño, ha participado de parches del barrio.

Pero veamos algunas de sus actitudes. Así por ejemplo, en su definición del ser hombre en los diferentes espacios del barrio observamos que usa términos que ha incorporado a partir de una serie de factores externos al barrio y muy seguramente creados y transmitidos a partir del grupo de compañeros de modelaje. Ser hombre “*es manejar un criterio social, físico, estético, la seguridad en el sostenimiento de una familia, y el desenvolvimiento en la sociedad*”. Su respuesta es más cercana a las de un grupo de mujeres entrevistadas en esta misma investigación que al modelo antes presentado para los jóvenes del barrio. Según él, existen varias categorías de hombres asociados con ciertos comportamientos: “*conozco muchos; el patán, el amable, el elegante, clásico, deportivo, estudiado*”.

¹³ Claro que ese mundo exterior no es necesariamente un paraíso terrenal. Aún cuando describe sus muchas amistades blancas, refiere también múltiples situaciones de discriminación racial (en el trabajo, pero incluso por parte de sus compañeros) que, cree, ha aprendido a superar. Es consciente, sin embargo, que en determinadas circunstancias, su condición racial puede ser convertida en un factor positivo, pues en ocasiones “*se busca la imagen no del negro ‘fino’ sino del ‘rústico’, antes los negros que ingresaban al modelaje se hacían cirujías; ahora no, en Europa se busca el negro ‘original’, ‘natural’, ñato, narizón, de boca grande. Me he sentido discriminado pero no en todo el esquema, posibilidades de surgir las hay, en Colombia son muy pocas*”.

Ser hombre, según explica, no pasa por la violencia; al contrario, los actos violentos contra las mujeres son situaciones de poca hombría. Su explicación es que los comportamientos dependen de los niveles educativos formales, así como de otras formas de educación, principalmente en el.

La opción de los muchachos es agredirlo a uno porque creen que lo que uno hace no lo trabajan los hombres. (...) hay hombres que les gusta el otro hombre, mas nunca han perdido su masculinidad, pero hay unos que quieren ser parecidos o iguales a la mujer, optan por pintarse, ponerse pelucas, vestidos... hay muchos que se ven

muy masculinos y en su intimidad a nivel personal, sentimental son otra cosa, son señores que andan con pantalón y hablan fuerte, caminan recto y a nivel sexual son distintos”.

Quizás, como proponía R. Hoggart (1990 [1957]: 26) se trate uno de esos casos encajables dentro de esas "biografías excepcionales" que -en su interpretación- escapaban a los constreñimientos de clase (y que, por tanto, no eran representativos de la condición obrera); sin duda las circunstancias particulares de la vida de cada uno de estos jóvenes ofrecen indicios para correlacionar las rupturas con las condiciones y demandas más generales del barrio. Pero insistimos en que, al mismo tiempo, se trata de la apertura de posibilidades de un orden y mundo distintos por la vía del cambio suscitado por la anomia, por lo menos si la tomamos en su versión como "teoría

generalizada" que plantea Duvignaud¹⁴.

Pero los procesos de cambio y mutación implican un complejo de pasos, con avances y retrocesos, idas y vueltas, difícilmente legibles como lineales. Las situaciones anómicas son sentidas, tanto para los que las viven directamente como para aquellos que son interpelados socialmente por ellas, de forma ambigua y tensionante: las sombras del pasado pesan, pues aun se piensa bajo el anterior modelo y se actúa bajo él; la ruptura es siempre en primer lugar individual y coloca al sujeto por fuera de los acomodos del orden social; y, por último, se trata primeramente de matrices de actitudes nuevas que se expresan sobre todo en la imaginación y el deseo antes que en la acción (Duvignaud, 1991: 64-67). Ello matiza no tanto las posibilidades de la ruptura como los alcances de su expresión. En otras palabras, esas actitudes "anómicas" antes referidas pueden ser identificadas, en términos psico-sociales, con aquellos comportamientos "distónicos" (G. Devereux) que, en ciertos grupos sociales, llevan a algunos individuos a vivir angustiosamente esas tensiones que resultan de quedar ubicados por fuera de categorías sociales reconocidas, validadas o aceptadas:

“... a cambio de esta cerrazón, el individuo exótico recibe cierta seguridad de la que el miembro de la cultura occidental no puede disponer. No es libre ‘para’, pero está en gran medida libre de la angustia de la nada: su sociedad tiene previstas todas las posibles salidas, incluso aquéllas más indefinidas, como pueda ser la homosexualidad”. (Cardín, 1989: 44).

No es extraño que la huida del barrio se convierta en un camino a seguir, así sea a nivel de expectativas de futuro o a nivel de práctica y cambio de vida (Mancini, ayudado por su madre, viajó hace aproximadamente dos meses a Bogotá para tratar de abrirse camino allí en el modelaje).

¹⁴ Duvignaud (1991: 50 y ss.) distingue entre la teoría limitada de la anomia -las actitudes y comportamientos estadísticamente marginales, los residuos deleznable de los procesos sociales- y la teoría generalizada mediante la cual esas actitudes y comportamientos son interpretados como puntos de inflexión y motores de los cambios y las mutaciones sociales.

Las tensiones y las angustias de la identidad dominante

En una sección anterior veíamos como la identidad masculina dentro del barrio era reforzada, precisamente, por contraste con estas figuras en los límites: las figuras del homosexual, del gomelo o de las mujeres "igualadas". Pero la presencia de estos modelos "negativos" crea también temores: pues esos jóvenes "distintos" son y viven en el barrio, se les tiene cerca, se crean lazos y relaciones mutuas. Aunque negados en primera instancia, están junto a ellos constantemente y su presencia muestra que, en el fondo, son también como ellos. Así, los relatos de otros entrevistados dejan entrever las tensiones; veamos un par de ejemplos, relacionados especialmente, por límites de espacio, con la homosexualidad.

Es el caso de *Biloncho*, hombre negro de 24 años, nacido en Tumaco pero que ha pasado la mitad de su vida en Cali y reside ahora en Sardi. Dado su muy bajo nivel de escolaridad, su subsistencia la ha suplido mediante trabajos poco cualificados en la construcción, como mesero y, sobre todo desde hace 2 o 3 años, mediante todo tipo de rebusque, especialmente con pequeños recados y mandados que hace a los vecinos del barrio. Pero entre otras actividades, ha apelado también a la prostitución homoerótica, especialmente en salas X del centro de la ciudad y, en ocasiones, dentro del barrio. Ahora bien, según el entrevistado, hacerle el amor a otro hombre no le quita lo hombre, más bien el problema es de quién se lo deja hacer; o sea, el amante pasivo es quien pasa a ser mujer: *"si uno le está haciendo el amor a otro pues sí, ya el que se lo deja hacer es mujer"*. Y aclara que hay hombres que se acuestan con otros hombres y tienen sus familias, y que le han salido hombres así y le piden que les haga el amor. La iniciación sexual y vida erótica y amorosa del entrevistado ha sido más amplia con hombres que con mujeres desde los 13 años. No tiene hijos. Aparentemente le ha ido mejor con hombres que con mujeres: *"yo no me la rebusco así (que lo demanden otros hombres), sino que tuve un tiempo que era como de malas para las mujeres y me salía mucho, sí. Entonces yo soy un pelado de alta temperatura y me tocaban cualquier visaje y ¡lleve pa'l rancho! Hay veces por satisfacerme lo hacía"*.

Aunque lo acepta en la entrevista, en público ha disimulado todas estas actividades, o las acepta discretamente cuando está con amigos muy cercanos. Lo que sí niega a las claras es su orientación homosexual: *"hay homosexuales hombres y declarados"*.

El declarado es el que anda con ropa de mujer y el reservado es el serio. A mi me lo pidió el reservado yo le dije que no. A mi me tienen que coger entre varios, ¡me tienen es que matar! Desde que me salieron con esa yo me he abierto (retirado)... porque de pronto un fierro (un revolver) y quede tocado. Yo tengo entendido que el que da es cacorro.” Por lo mismo acepta su opción de “cacorro”, “pues cacorro (el hombre que penetra al otro hombre) es el hombre”. Aclara que “yo ya me porto serio porque desde que esa loca me salió que tales que yo (pedirle que se dejase penetrar), porque pueda que uno esté de malas y le salga uno que le gusta 50 y 50, por eso trato de evitar”.

Por último, ciertas tensiones se irían generalizando y complejizarían los procesos de socialización, por los menos así aparece en el caso de los entrevistados más jovencitos, como es el caso de *Mauricio Jr.*, joven negro de 15 años y residente en Charco Azul, quien se siente aún en tránsito hacia el mundo de los adultos y la hombría. Para él el hombre es, en primer lugar, el que cumple en la cama: “*como hay mujeres que dicen que malo p’al huevo entonces hay que ponerlas a traquear para poder que ellas digan “éste sí es bueno para la cama”. Para mí esto es ser hombre, hay muchas mujeres que uno ha hecho el amor con ellas y le dicen a uno que malo p’al huevo, lo recochan así*”. Hay que demostrar que se es “hombre”, pero en la cama, para que la mujer se sienta bien y le diga a las otras mujeres y hombres que estuvo con un “verdadero hombre”; de lo contrario, el joven se verá sometido a todo tipo de comentarios que cuestionan su hombría. Idea dominante, se debe evitar que “le recochen a uno”, pero en segundo lugar aparece la idea de “que nadie se la monte a uno”, es decir, la de hacerse respetar por los amigos y vecinos. Pero en su relato aparece inmediatamente la idea de que también el hombre debe ser responsable de su familia, trabajar por mantenerla dignamente; expresa entonces su intención de formar un hogar apacible, criando un par de hijos. La ambigüedad de los espacios le lleva a distinguir entre esferas de hombría -la calle y la casa- cuyos distintos requerimientos no aparecen a sus ojos como contradictorios.

Enfatizando en la idea de que es en el espacio público donde uno es medido y calibrado, tiene expresiones ambiguas acerca de los homosexuales: son hombres, pues tienen órganos genitales de hombre, y se les acepta como tales, pero no pueden formar parte del ámbito inmediato y cotidiano en que él se mueve, pues existe el riesgo de ser identificado con ellos: *“un amigo de saludo, no que parche conmigo, ¡nooo! Porque la gente va a pensar que yo también soy marica, únicamente de saludo, pero de andar nada. Son humanos igual que uno pero están deshonrando la hombría”*. Pero también acepta la posibilidad de tener relaciones homoeróticas si como contraparte se consigue dinero, así esa relación implique la asunción de ciertos riesgos: *“sí, que se los comen por plata, a mí que un marica me diga te doy tanto, por ahí unos 50, yo me lo como, porque es plata que me está dando, me pongo un condón”*. Tal práctica no deshonra ni pone en entredicho su hombría. Pero también advierte el riesgo en el que puede colocarse: *“hay maricas que le dan plata a uno para que se los culeen y cuando uno terminó, ´volteáte que a vos te toca´. Y uno se tiene que dejar o si no le dan duro, ¡hay maricas que tienen una fuerza! De pronto me queda gustando y me vuelvo como él. Dios hizo los hombres para que le dieran a la mujer, no para que otro hombre se dejara dar de otro”*.

Algunos planteamientos finales

Creemos que una serie de ideas conclusivas se desprenden de todo lo expuesto aquí:

- a) Es en un contexto de fuerte presencia de violencia que estos jóvenes construyen modelos de identidad específicos: la violencia es un factor que marca la conformación de sus masculinidades, así como para el conjunto de los demás actores sociales que residen en los barrios populares. Un joven no puede “hacerse hombre” sin que esté en juego el poder que inspira temor, ya sea para el control territorial frente a otros grupos y para coaccionar a otros hombres en la ejecución de los delitos, ya sea frente a los miembros del propio grupo (hombres y mujeres) para hacerse “respetar”.

La hombría está cercana a la exposición al riesgo (incluso mortal): no importa quien le rete a uno, debe enfrentársele siempre. Para ello, disponer de un arma, pero sobre todo ser capaz de ponerla a funcionar, se convierten en elementos claves. Se vive en un ambiente envolvente de riesgo real, que es también sostenido por los mismos jóvenes.

- a) En cuanto a la incidencia del componente socio-racial en las condiciones de vida de estos jóvenes, es claro que no se observan diferencias entre estos jóvenes negros y los otros jóvenes, mestizos y blancos, de los sectores populares. En términos de “hallazgos”, las características son comunes a las de los jóvenes de barriadas pobres de cualquier ciudad. Sin embargo, hay un elemento que complica el análisis -analizado en otro documento de tipo más contextual (Urrea, 2000). Se trata de la intensa autopercepción de exclusión, según la expresión de los mismos jóvenes negros –hombres y mujeres-, de vivir en el “ghetto”. Por otra parte, hay que recordar el factor sociodemográfico de una población masculina mucho más joven que la femenina y con una concentración de los hombres superior al 60% en edades inferiores a los 20-25 años. Esto constituye un elemento presente en la construcción de las subjetividades en la medida en que puede favorecer la presencia de una situación de fuerte competencia y disputas entre pares, especialmente en un contexto de alta deserción escolar masculina. Si las anteriores subjetividades son construidas en un contexto de fuerte segregación socio-racial y exclusión social por parte del resto de la sociedad, el énfasis se hace sobre aquellos atributos que no sólo caracterizarían al barrio, sino especialmente sobre aquellos que hacen al barrio diferente: surge el reconocerse como residente de un barrio “que sí suena” pero por un cúmulo de aspectos negativos. La idea de “ghetto”, espacio propio así no sea maravilloso, es contrapuesta al mundo exterior. En él se combinan el “infierno” y el “cielo” de la vida barrial con lazos de vecindario y de solidaridad.

- a) En la producción de las subjetividades, a partir de la autopercepción como segregados por parte de los jóvenes, el término “ghetto” sería una clave semántica de comunidad inventada. Podríamos adelantar como hipótesis que en la resignificación de “ghetto” – captada a través de las entrevistas- es probable que ciertas percepciones de masculinidad estén más asociadas a formas excluyentes respecto a una oposición de conductas masculinas versus femeninas o de “poco hombre”. Por lo mismo, son más visibles los sentimientos colectivos homófobos entre los grupos de pares y, también de ese modo, las individualidades que se separan de la “norma” son percibidas y vividas de una forma más intensa. El primero significa una masculinidad de “ghetto”, agresiva, de sectores populares excluidos, marginados, mientras el segundo es construido como negación de “hombría”, cercano a comportamientos femeninos y “homosexuales”, como negación de la condición de joven negro de barriada. Se crea así una sobre-representación de ciertos atributos masculinos relacionados con las expresiones del “parado”, de hombre “carácter”, del “frentero”, que en buena medida sintetiza la figura del “aletoso”, contrapuesta a la del “gomelo”. Se produce así un tipo de masculinidad en un mundo excluido. Pero la tensión entre los dos modelos, “aletoso” frente a “gomelo”, es vivida con ansiedad, tanto por unos como por los otros. Por debajo de esa dicotomía podría percibirse la presencia de la polaridad derivada de la segregación espacial: entre “aletosos”, los de adentro del “barrio bajo” frente a los “gomelos”, los de “barrios buenos”, cruzándose así los ingredientes de clase social y discriminación racial.
- a) En términos de identidad de género, el modelo hegemónico que parece dominar entre los jóvenes varones del barrio es rígido en el sentido de que no admite situaciones ambiguas: las mujeres “igualadas” son rechazadas, de la misma forma que las expresiones discursivas homofóbicas son reiteradas. La cercanía con individuos cuya hombría esté en duda es asumida como peligrosa: persiste el temor a ser identificado con ellos. Ahora bien, existen ciertas posibilidades de juego con el modelo: aún los jóvenes más “duros” admitirían mantener relaciones homoeróticas (siempre que no implique ser penetrados) si se trata de una relación monetaria.

Una masculinidad desafiada en el contexto colectivo (por exclusión racista y desigualdad social) y desafiada en el espacio inter-género (las mujeres a las que tienen acceso se comportan crecientemente en forma más autónoma) se relacionaría con una afirmación de los atributos masculinos antes mencionados, mediante mecanismos de inversión en la escala valorativa y de imagen en el campo micro al punto de radicalizar o extremar una serie de comportamientos “masculinos”.

- a) Aunque no se puede establecer un vínculo mecánico entre las condiciones estructurales y los procesos de creación de subjetividades y de identidades, es evidente que éstas son construidas también a partir de las experiencias de vida y las posiciones que socialmente los individuos ocupan. Por un lado, la mayor recurrencia de ciertos modelos (masculinidades conformadas sobre la violencia y la idealización pragmática de algunas figuras, los “aletosos”) está relacionada con las condiciones de vida marginales y de exclusión que estos jóvenes ocupan en el contexto caleño; pero igualmente, las discontinuidades que se evidencian también están asociadas al hecho de que, sin embargo, las posibles experiencias de los jóvenes de sectores populares en Cali hoy en día pueden ser disruptivas respecto a las modalidades hegemónicas de las masculinidades de la exclusión. La presencia de grupos culturales, como Ashanty, por un lado, o de figuras que están en los límites del barrio, como el caso de Mancini, son ejemplo de esas otras experiencias que son vivibles en el barrio. En la dirección anterior: los jóvenes de estos barrios no son homogéneos. Se observan fisuras y fugas en el orden de las sociabilidades, no obstante la aparente asociación que aparece, a primera vista, entre el contexto de pobreza, violencia y exclusión y una forma de vivir la masculinidad de los jóvenes bajo moldes en los que se privilegian las imágenes de virilidad-fuerza y coacción como elementos de la hombría y la subordinación de las mujeres a la esfera doméstica al servicio de los hombres, con discursos recurrentes de tipo homófobo e incluso acciones de violencia ejercidas en contra de las mujeres y contra aquellos hombres que se apartan del patrón de comportamiento modélico.

Las fisuras y fugas, a menudo individuales, se dan tanto en el orden de las prácticas como en el de las actitudes y, especialmente, de las expectativas. Aparecen *contrafiguras*, tanto masculinas como femeninas, que se disocian de la "norma". La presencia de personajes que desafían ese orden y ponen en cuestión los estereotipos dominantes de la masculinidad así como los roles tradicionales domésticos de mujeres y hombres muestran que la dinámica micro-social en el barrio es muy compleja; y aunque esas versiones diferentes están asociadas a proyectos de movilidad social individual que implican búsquedas de formas de vida y expresión por fuera del barrio, se convierten en actos de desacato al "sistema de sexo-género" dominante en el barrio y, por eso mismo, fuertemente rechazados. Estos jóvenes son quizás, usando palabras de Duvignaud, compuertas de una exclusiva que puede llenar esos barrios de aguas distintas.

Bibliografía

AGIER, Michel (1999) *L'invention de la ville: banlieues, townships, invasions et favelas*. Éditions des Archives Contemporaines, France.

ALCOFF, Linda (1994) "Cultural feminism versus post-estructuralism: the identity crisis in feminist theory", en N.B. Dirks et al. *Culture/Power/History. A reader in contemporary social theory*, Princeton U.P., Princeton, pp. 96-122 [1ª ed. 1988].

AMIT-TALAI, Vered y WULFF, Helena (1995) *Youth cultures: a cross-cultural perspective*, Routledge, London.

ANDERSON, Benedict (1991) *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso, London [2ª ed. Aumentada, 1ª ed. 1983].

BURSTON, Paul y RICHARDSON, Colin (1995) "Introduction", en P. Burston y C. Richardson (eds.) *A Queer Romance. Lesbian, Gay Men and Popular Culture*, Routledge, London, pp. 1-9.

BARBARY, Olivier (1999) "Afrocolombianos en Cali: ¿Cuántos son, dónde viven, de dónde vienen?", en *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali. Estudios sociodemográficos*. Documentos de trabajo no. 38, CIDSE – IRD, Universidad del Valle. Cali.

BARBARY, O. (2000) "*Mesure et réalité de la segmentation socio-raciale: Une enquête sur les ménages afrocolombiens à Cali*". Inédito, Marseille, 26 páginas.

BARBARY, O.; RAMÍREZ, Hector Fabio; URREA, Fernando (1999) "Población afrocolombiana y no afrocolombiana en Cali: segregación, diferenciales sociodemográficos y de condiciones de vida", en *Desplazados, Migraciones Internas y Reestructuraciones Territoriales*. Centro de Estudios Sociales –CES, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

BARBARY, O.; BRUYNEEL, Stephanie; RAMÍREZ, H.F.; URREA, F. (1999) *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali. Estudios sociodemográficos*, Documentos de trabajo no. 38, CIDSE-IRD, Universidad del Valle. Cali.

BRUYNNEL, S.; RAMIREZ, H.F. (1999) "Comparación de indicadores de condición de vida de los hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en Cali", en *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali. Estudios sociodemográficos*. Documentos de trabajo no. 38, CIDSE-IRD, Universidad del Valle. Cali.

CARDÍN, Alberto (1989) *Guerreros, chamanes y travestis. Indicios de homosexualidad entre los exóticos*, Tusquets Editores, Barcelona [1ª ed. 1984].

DE LAURETIS, Teresita (1992) "La tecnología del género", en C. Ramos (comp.) *El género en perspectiva*, Universidad Autónoma de México, México, pp. 231-278 [1ª ed. Inglés, 1986].

DOLLÉ, Jean-Paul (1998) "Histoires de domination", en *Magazine Littéraire* 369: 32-33, Paris.

DUVIGNAUD, Jean (1991) *Herejía y subversión. Ensayos sobre la anomia*, Icaria, Barcelona [1ª ed. francés, 1973 y 1986].

DUVIGNAUD, J. (1995) *L'Oubli ou la chute des corps*, Actes Sud, Paris.

ELIAS, Norbert (1997) *Logiques de L'exclusion*, Fayard. France.

EVANS, Caroline y GAMMAN, Lorraine (1996) "The Gaze revisited, or reviewing queer viewing", en P. Burston y C. Richardson (eds.) *A Queer Romance. Lesbian, Gay Men and Popular Culture*, Routledge, London, pp. 13-56.

GARCIA CASTRO, Mary y ABRAMOVAY, Miriam (2000) "*Civil society, culture and youth in Brazil -sucesses and limits*", versión inédita, Salvador (Bahia), 27 páginas.

HALL, Stuart (1994) "The Question of Cultural Identity", en *The Polity Reader in Cultural Theory*, Polity Press, Cambridge, pp. 119-125 [1ª ed., 1992].

HENTSCHEL, Jesko (2000) "*Social Development*", capítulo 4 del "Informe del Banco Mundial sobre Pobreza y Desarrollo en Cali", en prensa, Washington.

HERZFELD, Michael (1995) "It takes one to know one. Collective resentment and mutual recognition among Greeks in local and global

contexts", en R. Fardon (ed.) *Counterworks*, Routledge, London, pp. 124-142.

HOGGART, Richard (1990), *La cultura de la clase obrera*, Grijalbo, México [1ª ed. Inglés, 1957].

MISTRY, Reena (1999) "*Can Gramsci theory of hegemony help us to understand the representation of racial minorities in western television and cinema*", University of Leeds (www.theory.org.uk).

MUÑOZ, Sonia (1999) *Jóvenes en discusión. Sobre edades, rutinas y gustos en Cali*, Fundación Restrepo Barco/Fundación Social/ProcivicaTV, Bogotá.

NIXON, Sean (1997) "Exhibiting Masculinity", en S. Hall (ed.) *Representation. Cultural Representations and Signifying Practices*, SAGE, London, pp. 291-336.

POOLE, Deborah (1991) "El folkllore de la violencia en una provincia alta del Cusco", en H. Urbano (comp.) *Poder y violencia en los Andes*, CBC, Cusco, pp. 277-297.

RAMÍREZ LAMUS, Sergio y MUÑOZ, Sonia (1995) "Introducción", en *Trayectos del consumo. Itinerarios biográficos y consumo cultural*, Escuela de Comunicación Social, UniValle, Cali.

RATCLIFFE, Peter (1999) "Housing inequality and `race`: some critical reflections on the concept of `social exclusion`", en *Ethnic and Racial Studies* 22 (1): 1-22, Routledge, London.

RUBIN, Gayle (1986) "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo", en *Nueva Antropología*, vol. VIII no. 30: 95-145, México [1ª ed. Inglés, 1975].

URREA, Fernando (1997) "Dinámica sociodemográfica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las décadas de los años 80 y 90", en *Coyuntura social*, FEDESARROLLO/Instituto SER de Investigación, Número 17: 105–164, Bogotá.

URREA, F. (1999) "Algunas características sociodemográficas de los individuos y hogares afrocolombianos en Cali, en *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali. Estudios sociodemográficos*. Documentos de trabajo no. 38, CIDSE–IRD, Universidad del Valle. Cali.

URREA, F. y MURILLO, Fernando. (1999) "Dinámicas de poblamiento y algunas características de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali", en: *Desplazados, Migraciones Internas y Reestructuraciones Territoriales*. Centro de Estudios Sociales -CES, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá .

URREA, F. y ORTIZ, Carlos Humberto (1999) *Patrones Sociodemográficos, Pobreza y Mercado Laboral en Cali*, documento de trabajo para el Banco Mundial. Cali.

URREA, F. y MEJIA, Carlos Alberto (2000). "Innovación y cultura de las organizaciones en el Valle del Cauca", en VV.AA. *Innovación y Cultura de las Organizaciones en Tres Regiones de Colombia*, Colciencias/Corporación Calidad. Bogotá.

URREA, F. y RAMÍREZ, H.F. (2000) “Cambios en el mercado de trabajo de Cali (Colombia), reestructuración económica y social del empleo de la población negra en la década del 90: un análisis de segregación socio-racial a partir de las transformaciones más recientes del mercado de trabajo”, ponencia a ser presentada en el III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Buenos Aires, 17-20 de Mayo.

URREA, F. (2000) “Relaciones interraciales y clases en la construcción de ciudadanía: el caso de Cali (Colombia)”, ponencia presentada en el I Simposio Internacional “O desafio da diferença. Articulando gênero, raça e classe”, Salvador de Bahia, Universidad Federal de Bahia, 9-12 de abril.

WACQUANT, Loïc. (1993A) “Banlieues françaises et ghetto noir américain. Éléments de comparaison sociologique”, en M. Wieviorka (dir.) *Racisme et Modernité*, Éditions La Découverte, Paris, pp. 263-277.

WACQUANT, L. (1993B) “De l’amérique comme utopie à l’envers”. En *La Misère du Monde*, 169-204. Sous la direction de Pierre Bourdieu. Editions du Seuil, Paris

WADE, Peter (1993) *Blackness and race mixture: The dynamics of racial identity in Colombia*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

WADE, P. (1999) “Making cultural identities in Cali Colombia”. En: *Current Anthropology*, vol 40, Number 4.

WELLER, Wivian (2000) “A construção de identidades coletivas através do HipHop: uma análise comparativa entre rappers negros em São Paulo e rappers turcos-alemães em Berlim”, ponencia presentada en el I Simposio

Internacional “O Desafio da diferença: articulando gênero, raça e classe”, Salvador de Bahia, 9-12 de abril.

WHYTE, William F. (1955) *Street Corner Society. The social structure of an Italian Slum*, University of Chicago Press, Chicago [1ª ed. 1943].

LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA: VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN

NORA SEGURA ESCOBAR¹

Introducción

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX la violencia colombiana se ha desplegado prioritariamente en las zonas rurales y, con ritmos variables, ha impuesto un éxodo continuo de campesinos y colonos aunque no exclusivamente de esta población. Actualmente se dan flujos migratorios en múltiples direcciones (campo-ciudad, intra-urbanos, inter e intra regionales) como expresión de la móvil y creciente geografía de los conflictos sociales y de la presencia de los grupos en armas en una escala inédita. En efecto, desde inicios de los años ochenta la magnitud y la degradación de la confrontación armada han hecho del desplazamiento la única opción de seguridad para muchos sectores de los habitantes de los territorios en conflicto².

No obstante, el “problema de los desplazados” no proviene solamente de la confrontación entre fuerzas insurgentes, paramilitares y el Estado. Subsidiarias de éstas en grados diversos, otras formas de ejercicio violento del poder actúan también en la expulsión de pobladores, como ocurre en regiones insertas en megaproyectos de desarrollo, definidas como objetivos de control territorial por su valor estratégico, económico y/o militar o ligadas a intereses sobre la tierra y a la consolidación de poderes regionales.

¹ La autora es profesora titular –jubilada- de la Universidad el Valle. Actualmente trabaja como docente de la Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

² En un trabajo anterior, en relación con algunas tensiones que gravitan en los estudios sobre *el desplazamiento* y sobre *la población desplazada* decía que “..los análisis políticos y económicos generalmente más formalizados e interpretativos tienden a situarse en el eje del primero mientras que los que focalizan los individuos y los hogares tienden al análisis psicológico y cultural, a los enfoques fenomenológicos, a la descripción de los casos mediante el recurso a historias de vida y a formas testimoniales...”. Cfr. “Desplazamiento en Colombia: perspectivas de género” en *Revista FORO*, No. 34, junio de 1988. En el presente documento pretendo situarme entre estas dos aguas analíticas con los riesgos inevitables que eso implica.

Se trata, pues, de una muy compleja interacción de distintos tipos de violencia que en su conjunto incrementan los niveles de inseguridad y propician nichos para el florecimiento y/o la intersección con la delincuencia común.

Por esto, el desplazamiento violento no necesariamente remite a un evento catalizador concreto y puntual. Con frecuencia se trata más de cadenas de experiencias que configuran un clima de zozobra, y de desestructuración que (en todos los casos) implican fracturas en los modos de vida y debilitamiento del tejido social en distintos niveles, esferas y grados de la organización social individual y colectiva.

Por otra parte la geografía de la violencia condensa nudos de conflicto, grupos en armas y articulación de poderes, en estrategias de despoblamiento-repoblamiento para el control territorial y para la construcción de lealtades, fatalmente articuladas a la estructura y dinámica regionales, de manera que en algunas regiones como el Magdalena Medio y Urabá, y más recientemente las zonas sur de Bolívar y Cesar, se da una lamentable continuidad en los conflictos armados y en los éxodos poblacionales, mientras que en otras como el noroccidente del Chocó o la zona cafetera se han presentado episodios más bien recientes, discontinuos o puntuales.

Desde comienzos de los ochenta las cifras y las formas del conflicto, de la violencia y del desplazamiento, comienzan a elevarse en forma inédita: se amplían a un mayor número de regiones (incluidas las zonas urbanas), crece el número y tipo de actores, se dispara el volumen de recursos económicos y tecnológicos comprometidos, la capacidad destructiva y los niveles de degradación de la guerra y, en consecuencia, se hace más aguda la asimetría entre los grupos en armas y la población desarmada, todo lo cual repercute en los patrones de expulsión poblacional.

En sus orígenes aparece una coyuntura muy compleja en la que convergen los intentos fallidos de paz de la administración Betancur (1982-1986), el nacimiento y aniquilación de la Unión Patriótica, las estrategias de expansión de las FARC, la diversificación de fuentes de financiación de la insurgencia, la consolidación del paramilitarismo (con el común denominador de la coca) y la acción de los narcotraficantes con su doble estrategia de infiltrar y de enfrentar al Estado.

Diversidades y diferencias.

Pese a que en términos abstractos los desplazados pueden ser tratados como una categoría social, es claro que en el terreno empírico se trata de una población heterogénea compuesta por personas, familias y comunidades expulsadas de su territorio y desarraigadas de su hábitat bajo múltiples modalidades de fuerza³.

Si bien muchos eran habitantes rurales de entraña campesina, muchos otros corresponden a población flotante con limitado arraigo local o regional; un número importante viene de poblados y ciudades intermedias, estaban insertos en la economía local y regional a través de muy distintas formas ocupacionales y de relación con la tierra u otros recursos naturales; ideológicamente pudieran tener más cercanía a alguno de los polos en conflicto; y, aunque todos han sido víctimas de la inseguridad y del miedo, tienen también especificaciones de tiempo, lugar y condición social. Por tanto es difícil elaborar perfiles generales, caracterizaciones comunes u otras formas similares de construir una población pretendidamente homogénea

³ El énfasis en la heterogeneidad pretende contrarrestar la visión estereotipada del desplazado como sinónimo de problema, inseguridad o amenaza, justificatoria del estigma que los acompaña en su tránsito hacia la reimplantación social.

a partir de muestras limitadas⁴.

En las construcciones imaginarias y en la visibilidad de los desplazados, aparte del papel de los medios de comunicación, han jugado un papel crucial igualmente las cifras que se divulgan y las formas de su recolección. Esta se fundamenta en el proceso de reconocimiento, registro y acreditación ante la autoridad competente que constituye la puerta de acceso a la ayuda de emergencia de origen estatal. De manera similar operan las ong's nacionales e internacionales y las iglesias que proveen servicios y ayuda humanitaria a esta población. Así los desplazados reconocibles como tales son sólo quienes no tienen una red familiar o fuente de apoyo alternativo y, por tanto, deben recurrir a la oferta institucional pública o privada⁵.

En otro nivel, el de los hogares, la presunción de homogeneidad también desdibuja diferencias que, como el *género* y lo *generacional*, se traducen en formas de inserción social, de exposición a modalidades y efectos de la violencia, de probabilidades de morir, ser desplazado, reclutado, etc., de manera diferente para hombres y mujeres, por una parte, y para ancianos,

⁴ Es claro que bajo la óptica militarista imperante, la población civil se instrumentaliza y se reduce a las categorías de amigo o enemigo en las cuales se desdibujan los matices y se anula el espacio para la neutralidad. Pero con un simplismo similar, otra visión igualmente dicotómica separa los grupos armados y la población desarmada como si se tratara de categorías sociales independientes. Por el contrario, en estas circunstancias signadas por la guerra, el miedo, la polarización y la inseguridad para sobrevivir es necesario aprender a nadar entre dos aguas y acudir a estrategias que combinan el pragmatismo, el silencio y otras formas de búsqueda de seguridad o de no confrontación. Pero también operan lealtades y simpatías reales hacia los distintos ejércitos por parte de segmentos particulares de la población, se desarrollan vínculos (no siempre deseados) mediante el reclutamiento de miembros de la familia o vecindario, circulan sentimientos humanitarios frente al dolor, etc.

⁵ Varios analistas coinciden en afirmar la muy limitada riqueza de relaciones extra-domésticas de los colombianos de modo que las redes familiares constituyen su primera y más importante forma de inserción social y su fuente primordial de sentido de lo colectivo. También para la población desplazada por violencia, la parentela constituye el principal nicho de soporte y en muchas ocasiones de distancia con la indigencia total.

adultos, adolescentes y niños, por otra⁶.

El *género* es una construcción simbólica de diferencia entre hombres y mujeres, que actúa como principio dicotómico de estructuración de las relaciones sociales y que, en las circunstancias de la guerra, también se hace evidente. En la situación anterior al desplazamiento los hombres (más que las mujeres) son actores armados y por tanto más proclives a ser víctimas directas. De igual manera, su mayor frecuencia y visibilidad como agentes de organizaciones cívicas, comunitarias, sociales, sindicales y políticas los hace más fácilmente objetivo militar. A su turno las mujeres experimentan la violencia, en cuanto tales, prioritariamente por sus relaciones supuestas o reales con combatientes o por razones que no aluden a la condición de actor social o de agente comunitario. En cambio, son más frecuentes víctimas de violencia sexual, forma específica y atávica de afirmación del macho y de humillación del enemigo.

En cuanto a las mujeres combatientes y/o involucradas en organizaciones de distinta índole (asimilables al mundo masculino en el esquema dicotómico del género) tienden a asumir un doble riesgo. En el período posterior al desplazamiento también el diferencial de género se manifiesta en la órbita ocupacional, en las estrategias de supervivencia y en otras fuentes de fortaleza o debilidad. Mientras las mujeres logran *monetizar* sus destrezas domésticas a través de los servicios personales y el comercio de alimentos, los hombres se enfrentan a un mercado laboral no-agrario a partir de calificaciones poco pertinentes. Del mismo modo, el “rebusque” expone a la mujer a nuevas experiencias y formas de sociabilidad, más amplias mientras que la maternidad la impulsa a la no derrota. A su turno, los hombres ven disminuida su función de proveedores y, con ella, erosionadas su autoridad familiar y su identidad masculina, pérdidas éstas que se añaden a las ya constituidas por el desplazamiento.

Como es de suponer, la re-elaboración de proyectos de vida rural-agrarios o urbanos, así como la mayor propensión al retorno, a la re-ubicación o a la permanencia en el lugar de llegada, están mediados por el género y atravesadas por las experiencias diferenciales en el antes y en el después como se acaba de sugerir. Por otra parte los hogares de las poblaciones desplazadas por violencia desarrollan rasgos propios de las situaciones de guerra, a su turno paralelos a los identificados como producto de la pobreza: bajos índices de masculinidad, altos índices de dependencia, sobre-representación de mujeres, de menores de edad, de viudas y huérfanos, de familias uniparentales y de jefatura femenina con la consiguiente desprotección y fragilidad provenientes conjuntamente de la guerra y la pobreza.

⁶ Cfr. Nora Segura Escobar, *Desplazamiento en Colombia: perspectivas de género*. **Opus cit.** También Segura, Meertens. *Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia*, en *Nueva Sociedad*, No. 148, Marzo y Abril de 1997, Caracas.

También lo *generacional* opera como principio constructor de relaciones, de delimitación cronológica de actividades y, bajo el imperio de las armas, maximiza los riesgos de reclutamiento y muerte para los (y las) jóvenes mientras impone una sobre-representación de niños (as) y de mujeres adultas entre los sobrevivientes y desplazados. Las personas de edad avanzada tienen una modesta presencia tanto en la población armada como en la desplazada.

En el período de transición posterior al éxodo y en relación con la re-estructuración de proyectos de vida, es claro que la menor edad tiende a favorecerla, mientras que la mayor edad puede ser un obstáculo para la superación del desarraigo.

Miradas y actores.

El mundo percibido corresponde a formas de construcción selectiva por parte de los actores sociales, en contextos y relaciones particulares, de manera que, en los escenarios de la guerra y de profunda polarización, es muy difícil suponer que las percepciones del “yo” y del “otro”, y de sus relaciones, no estén profundamente permeadas por los términos del conflicto y por su correlativa imputación-exoneración de responsabilidades. Por eso, más allá de sus connotaciones, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, y de sus significaciones éticas, el desplazamiento violento no es un término unívoco ni sus víctimas reconocibles como objetivo prioritario de la responsabilidad pública o de la solidaridad para el conjunto social.

- Desde la perspectiva de sus *víctimas* los éxodos poblacionales pueden verse como acciones preventivas o como reacciones defensivas frente a eventos específicos de agresión⁷. En el primer caso, se da algún margen de preparación que puede disminuir la magnitud de las pérdidas y aliviar en algo la incertidumbre de la salida; no así en el segundo caso, marcado por su carácter súbito y por los signos de terror que lo acompañan.

- Por otra parte, su auto-percepción también se rige por las experiencias de violencia simbólica que acompañan a los desplazados en las etapas posteriores y en los lugares de llegada. Distintos grados de estigmatización proceden de la definición del desplazado como amenaza, competencia y/o pasado comprometedor y actúan como mecanismos de rechazo y de exclusión en sus distintos recorridos.

* Desde la óptica de los *actores armados* los desplazamientos forzados pueden corresponder a estrategias de guerra para despoblar y repoblar un territorio y consolidar su control; para debilitar los apoyos reales o supuestos del “enemigo”; para apropiarse de bienes apetecibles, etc. Y aparecen en la conciencia como costos inevitables del conflicto cuya responsabilidad es básicamente del enemigo⁸.

Para las *administraciones municipales* los flujos sucesivos de inmigrantes, que reclaman seguridad y protección, son normalmente un problema presupuestal y de gestión (cuando no de orden público) que viene a agravar situaciones deficitarias. En ocasiones, pese a lo anterior, pueden darse medidas de protección puntuales.

Para los residentes de las *zonas de llegada*, dentro de su enorme heterogeneidad y dependiendo, entre otros, de la frecuencia y volumen de la inmigración por violencia, las actitudes frente a ellos pueden estar más o

⁷ La idea del desplazamiento como “prevención” parece obvia en cuanto las víctimas son los sobrevivientes de eventos amenazantes que buscan preservar su vida y seguridad (quienes no lograron hacerlo hoy están muertos). No obstante, con la idea de prevención se quiere acentuar una diferencia muy sutil pero importante con la mera “reacción” de terror. Examinada a la luz de los eventos precipitantes de la salida manifestados por las víctimas, puede verse en los finales de los años ochenta el predominio del tipo reactivo en la violencia contra la militancia de la UP y otros crímenes selectivos, y a todo lo largo de los años noventa, precipitado por las masacres ejemplarizantes. El primer tipo, preventivo, se asocia actualmente más con las amenazas y el riesgo de reclutamiento forzado.

⁸ Impresiona la simplicidad con que se reducen a “errores” y a “costos” los múltiples casos de muertes de personas y grupos inermes, en las declaraciones de los distintos voceros de los grupos en armas.

menos teñidas de solidaridad u hostilidad⁹. Las relaciones de vecindario pueden ser muy diversas pero, en todo caso, la movilidad residencial, muy frecuente en estas poblaciones (acorde con la inestabilidad de los ingresos), favorece el ocultamiento de la condición de desplazado.

Desde la visión de los *analistas* las migraciones forzadas suelen examinarse según la siguiente tipología que, entre otros rasgos, permite diferenciar sus orígenes, procesos, consecuencias, costos y el carácter reversible o irreversible del movimiento:

- a. Exodos que emanan de la acción de fuerzas *económicas* (desempleo, desarrollo tecnológico, agotamiento de nichos productivos, etc);
- b. Expulsión por fuerzas de la *naturaleza* (inundaciones, derrumbes, terremotos, crisis ambientales etc) y, finalmente.
- c. El desplazamiento por razones de *violencia* (confrontación armada, amenazas, bombardeos, masacres, peligros de reclutamiento armado, etc).

⁹ Al respecto cabe mencionar, entre otras, las recientes manifestaciones racistas en Suba contra familias desplazadas del Pacífico, la polarización socio-espacial en Barrancabermeja que rige también sobre los desplazados según su lugar de llegada, la concentración en barrios como Cantaclaro en Montería o Mandela en Cartagena, con tensiones distintas en cada caso.

Esta tipología también permite dar cuenta del movimiento migratorio en cuanto expresión coyuntural de dinámicas independientes que pueden afectar a segmentos de la población no relacionados entre sí¹⁰. Su utilidad, en el terreno empírico y para efectos de las políticas y las prácticas de intervención social públicas y privadas, es evidente.

No obstante el énfasis en las diferencias, propio de un instrumento de esta naturaleza, una tipología puede tener efectos perniciosos cuando se pierden de vista puntos relevantes de conexión o se ignora la dinámica que subyace a las expresiones fenomenológicas particulares. Así, cabe preguntarse hasta que grado existe un común denominador entre pobreza y exclusión que pueda operar como correa de transmisión entre estos tres tipos de éxodo y producir impactos acumulativos e interactivos sobre segmentos selectos de la misma población¹¹. Porque en efecto, en el caso colombiano, muchos desplazados por violencia o presionados por razones económicas se ven forzados a instalarse en terrenos no urbanizables de las periferias urbanas (insalubres, inundables, de suelos deleznales); muchos de ellos provienen de familias expulsadas hacia zonas de colonización, que abandonaron sus tierras en períodos anteriores de violencia o que circulan como población flotante por diversos enclaves económicos, ciclos agrícolas o regiones de bonanzas donde imperan la ausencia del Estado y la ley de las armas.

Así, la *pobreza* y la *violencia* proveen elementos de continuidad transgeneracional al tiempo que operan como palancas homogenizadoras dentro de un muy complejo mapa de desprotección e incertidumbre. Como ya se dijo, en los hogares desplazados por violencia se desarrollan rasgos similares a los reportados en situaciones de guerra convencional, a su turno paralelos a los que se identifican como productos de la pobreza, con la consiguiente desprotección y fragilidad provenientes conjuntamente de estos dos mecanismos de exclusión histórica.

¹⁰ Los desplazamientos poblacionales más frecuentemente politizados (refugiados y desplazados internos) se relacionan conceptualmente con fenómenos de nacionalidad, religión, etnia y clase y con eventos de violencia. Su visibilidad remite, entre otras cosas, al carácter episódico y masivo de los movimientos, en forma similar a lo que ocurre en los desastres naturales. Por el contrario, en las expulsiones por razones económicas, el desplazamiento cae dentro de los parámetros de lo normal, tiende a ser individual-familiar, a cuentagotas, de ahí su propensión a ser invisible para la conciencia pública.

¹¹ Sobre la correlación entre exposición al riesgo y pobreza véase Mary Douglas, *La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales*, Paidós, Barcelona, 1996. Para el caso colombiano, María del Rosario Saavedra, *Desastre y riesgo: actores sociales en la reconstrucción de Armero y Chinchiná*. CINEP, Bogotá, 1996.

Ahora bien, en apariencia las huellas del desplazamiento se mimetizan rápidamente con las de la pobreza urbana¹² pero es claro que los efectos deteriorantes permanecen activos y afloran de múltiples maneras. El carácter intempestivo y el terror en la salida, las experiencias de muerte, las amenazas y hostigamientos, el quiebre de las solidaridades entre vecinos en muchas ocasiones, las pérdidas materiales y simbólicas, la erosión de los fundamentos de la identidad y de la auto-estima, entre otras, hacen de la expulsión por violencia una forma particular y muy traumática de emigración, agudizada por la muy precaria o nula ilusión del retorno. Todos estos elementos se traducen inevitablemente en más altos niveles de incapacitación, indefensión y dependencia, por los menos en las etapas iniciales.

* Desde la *perspectiva gubernamental*, y para efectos de las políticas públicas, el desplazamiento poblacional generado por la violencia, hasta los años noventa, no tuvo un pleno reconocimiento en cuanto tal, pese a que desde la década anterior la escalada de la violencia hacía evidente los desplazamientos masivos de población en algunas regiones.

Durante la llamada Violencia de mitad de siglo se hacía referencia a los “migrantes forzosos” en los marcos conceptuales de la marginalidad urbana y, en consecuencia, las estrategias se dirigían a lograr su integración en la sociedad moderna. También la colonización dirigida y la ampliación de la frontera agraria constituyeron estrategias para lidiar con la población campesina expulsada de sus tierras. A lo largo de los años setenta la pobreza, como paraguas conceptual, desdibujó otros elementos diferenciadores de las víctimas de violencia, al tiempo que el volumen (relativamente bajo) de los desplazados también tendía a invisibilizarlos. Así, con relación al Estado las estrategias globales del desarrollo incluían a los pobres de múltiples orígenes sin identificar los elementos selectivos de la violencia.

¹² La pregunta obvia es hasta cuando una persona o familia puede llamarse desplazada. La política pública, según la Ley 387 de 1997, fija un criterio temporal de 1 año susceptible de ampliación de manera excepcional. Desde otras perspectivas cabe suponer que las huellas materiales, emocionales y generacionales del desplazamiento pueden persistir por largo tiempo dependiendo de la relación entre la profundidad de las pérdidas y la riqueza de recursos internos y externos (de diverso orden) a disposición de las víctimas. Sus señales externas, por el contrario, pueden desaparecer muy rápidamente u ocultarse intencionalmente como mecanismo de autoprotección y seguridad personal.

Hacia mediados de los años ochenta, una emigración masiva provocada por la erupción y posterior avalancha del volcán-nevado de El Ruiz¹³, y otras catástrofes naturales, impulsaron una diferenciación en el marco de la acción estatal para incluir a las víctimas de los desastres naturales, que luego se amplió para incorporar a las víctimas del terrorismo de los narcotraficantes.

También estos años y el comienzo de los noventa vieron una escalada de las violencias y del volumen de víctimas. En la esfera oficial se asumió el término de desplazados como denominación específica de la población expulsada de su hábitat y progresivamente se diseñó una política particular para su atención¹⁴. Bajo la actual administración la política de atención a la población desplazada hace parte del Plan Colombia compuesto además por un plan especial para las zonas en conflicto y por un programa de sustitución de cultivos ilícitos¹⁵.

Estos avances en el reconocimiento del “problema de los desplazados” y su codificación como cuestión de responsabilidad pública traducen, indudablemente, una nueva conciencia social a favor de sus víctimas e iluminan las formas de acción; pero cabe preguntarse hasta qué punto hay más de retórica que de auténtica voluntad política; en qué medida la letra escrita tiene continuidad con las decisiones presupuestales y con la institucionalidad administrativa. Sin ignorar los obstáculos generados por las situaciones de guerra, y sin subestimar las prioridades que ella implica, la respuesta no es alentadora, a juzgar por la calidad de la información disponible sobre el problema como se verá más adelante.

¹³ Cfr. Saavedra, *Ibíd.*

¹⁴ Bajo la administración Gaviria la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos impulsó un primer diagnóstico del desplazamiento a través de una *misión in-situ* del Instituto Americano de Derechos Humanos. Sus recomendaciones, conjuntamente con las de organizaciones eclesíásticas y no gubernamentales, fueron trabajadas por una Comisión gubernamental y posteriormente recogidas como *Programa nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia* (Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES No. 2804 del 13 de septiembre de 1995, del Departamento Nacional de Planeación). La crisis gubernamental de la administración Samper impidió el desarrollo institucional y legislativo de ese programa de modo que tras otro documento CONPES (2924 de 1997) finalmente se dió a la luz pública una política con fuerza de ley al ser aprobada por el Congreso de la República la Ley 387 del 18 de julio de 1997.

¹⁵ Véase Presidencia de la República-Departamento Nacional de Planeación, *Cambio para construir la paz 1998-2002. Bases*, Bogotá, noviembre de 1998, especialmente el Capítulo 4- Desarrollo y Paz: Instrumentos y prioridades para la construcción de la paz. Pags. 225-331.

Cifras e información

Es obvia la importancia de determinar la magnitud y localización de los fenómenos migratorios vinculados a los conflictos armados. Pese a que, como ya se ha dicho, desde comienzos de los años ochenta se operó un cambio muy notable en la escala, extensión y características de la confrontación armada, el primer intento sistemático de registro y medición de la expulsión poblacional por esas razones apenas apareció en 1995 y no por cuenta del Estado sino de la Iglesia Católica¹⁶ y de una ong.

Desde 1993 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el apoyo de fondos y de asesoría internacional, había iniciado la instalación de un sistema nacional de registro de las violaciones a los derechos humanos de los colombianos, que desde luego debería incluir el desplazamiento forzado; pero como ya se ha mencionado antes, la crisis que acompañó la casi totalidad del período presidencial (1994-1998) opuso enormes barreras al desarrollo de esta iniciativa. Con el cambio de administración en 1998, además de la discontinuidad y parálisis temporal suscitadas por el relevo partidista en la jefatura del Estado, otras interferencias ligadas a la prioridad de los diálogos con las FARC han repercutido en un muy limitado avance del sistema informativo.

Como resultado de estos conteos independientes (gubernamentales y no gubernamentales), se presentan enormes discrepancias en las cifras. Así, mientras las ong's que se ocupan del tema estiman que los desplazados por violencia entre 1985 y 1998 ascienden a 1.500.000 (de los cuales la mitad corresponderían a los tres

¹⁶ Conferencia Episcopal de Colombia *Derechos Humanos. Desplazados por violencia en Colombia*. Bogotá, 1995. Este estudio cubre el período 1985-1994. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODEES) ONG ha realizado actualizaciones posteriores y publica periódicamente un Boletín, el último de los cuales (No.11) incluye información sobre el primer semestre de 1998. A su turno, Diego Pérez del CINEP (Centro de Investigación y educación popular) cubre los 10 primeros meses de 1997 en su "Informe sobre el desplazamiento forzado en Colombia". Bogotá, noviembre de 1997. En virtud del sistema de capilaridad de la organización diocesana y de la centralidad de las parroquias en la vida local, el clero diocesano presenta enormes ventajas comparativas, respecto de las instituciones del Estado para captar información sobre el desplazamiento.

últimos años del período con incrementos que oscilan entre el 103 % y el 20 % según el año) en mayo de 1998, aún bajo la administración Samper, el Consejero Presidencial para los Desplazados, en una reunión sobre el tema, se refería a las 340.000 personas desplazadas entre 1996 y 1998, “cuyos niveles de necesidad los hacía absolutamente dependientes de la ayuda estatal”.

El Plan de Desarrollo de la presente Administración no asumió un compromiso con cifras oficiales (que necesariamente serían las heredadas del período anterior) o con las del CODHES y optó más bien porque “en el corto plazo el gobierno establecerá y posteriormente aplicará una metodología única y oficial para cuantificar e identificar con precisión el número de familias desplazadas, su lugar de origen y las causas que ocasionaron el desplazamiento...”¹⁷. Como puede verse, no sólo las cifras sino los esquemas metodológicos mismos suscitaron desconfianza en la presente Administración con el efecto de prolongar una muy desafortunada inmovilidad frente al problema.

Así, como evidente expresión de la baja prioridad del tema, el sistema de información gubernamental apenas comenzó a fines de 1998 a sistematizar los cerca de 12.000 registros ya acumulados, correspondientes al período 1996-1998. Estas son las personas que en el lugar de llegada, a todo lo largo del territorio nacional, han realizado el trámite para ser acreditadas como desplazadas y que constituye la condición para acceder a la ayuda de emergencia.

En resumen, la discrepancia de las cifras publicadas sugiere que en alguna medida la polarización política también pasa por ellas y que probablemente una cifra razonable puede sobrepasar los dos millones de desplazados contados a partir de 1985, grosso modo equivalente al 2% de la población colombiana.

Desplazados: crisis y exclusión

¹⁷ Presidencia de la República-D.N.P. **opus .cit.** pag. 236.

Por definición el desplazamiento violento es una experiencia individual y colectiva muy traumática por la serie de fracturas, discontinuidades, pérdidas y heridas profundas que lo acompañan. La degradación del conflicto armado y las estrategias de control del territorio y de su población por parte de los distintos actores armados, han desatado un clima de terror y de mecanismos que quiebran la solidaridad entre vecinos, que instalan la suspicacia y la delación en las relaciones sociales y que en conjunto debilitan el tejido comunitario, los procesos organizativos, los rituales de integración y la fluidez de la cotidianidad.

Como movimiento migratorio, el desplazamiento entraña una temporalidad variable con un antes y un después analíticamente muy importantes tanto para calibrar la profundidad de la destrucción y del desarraigo como para evaluar las condiciones y recursos hacia la reconstrucción. Numerosas crisis, de distinto distinto, se pueden identificar a lo largo de este tránsito, tanto para las víctimas directas como para el entorno colectivo del antes y el después. Veamos algunas.

* Las pérdidas múltiples incluyen la muerte o desaparición de familiares, amigos o vecinos, el abandono de la tierra y los bienes, el quiebre de las actividades, las relaciones y el entorno físico, en fin, todo cuanto marca la cotidianidad y alimenta la construcción de la identidad individual y colectiva. Por eso, la salida física no garantiza que el miedo y sus impactos desaparezcan (dolor, desorientación, desconfianza en las capacidades personales y en las relaciones con los demás, incertidumbre); por el contrario, y en relación con la precaria recepción de en las zonas de llegada, es probable que esas marcas permanezcan y se enquisten en la herencia generacional.

- Para el mundo rural y la economía agraria la tierra es simultáneamente medio de producción económica, cultural y simbólica y constituye un eje privilegiado de las relaciones, las actividades, los proyectos de vida, las fuentes de identidad de la población, en particular para quienes logran construir una vocación campesina, condensada en la propiedad sobre un pedazo de tierra. La tierra, las cosechas, los animales, la vivienda, como materialización patrimonial del trabajo y la fuente de su seguridad presente y futura, en pocos casos logran ser protegidos gracias a la proximidad de parientes o amigos.

En otros casos la tierra y la casa se abandonan en espera de mejores vientos, pero se pierden las cosechas y los semovientes; finalmente en otros se logran vender a menosprecio los haberes y se comienza la nueva vida con alguna base monetaria.

Múltiples crisis arraigan en la destrucción de este espacio vital doméstico y extradoméstico. Las condiciones de violencia y degradación actuales hacen prácticamente impensable la reconstrucción de ese entorno, de manera que los impactos a corto y a mediano plazo sobre la vida personal, local y regional son incalculables.

No debe olvidarse que la consolidación de la gran propiedad y la concentración de la riqueza han corrido parejas con las prácticas de despoblamiento territorial y que, por otra parte la redistribución entre los desplazados de los bienes confiscados como enriquecimiento ilícito, sigue siendo una imposibilidad real.

En la órbita ocupacional y del empleo se presentan las más profundas debilidades de la población desplazada para enfrentar el presente y el futuro. La diversidad ocupacional previa al desplazamiento (empleados públicos, maestros, comerciantes, profesionales, desempleados, al lado o en combinación con ventas ambulantes y una miscelánea de actividades de “rebusque”) implica una composición socioeconómica heterogénea

con segmentos de población flotante¹⁸. En todo caso se trata de niveles ocupacionales medios y bajos de remuneración modesta para los hombres, más bajos aún en el servicio doméstico para las mujeres¹⁹. En el período posterior a llegada el panorama ocupacional es más frágil, discontinuo e inestable y consecuentemente lo son sus ingresos monetarios²⁰.

El esfuerzo de inserción laboral en un mercado estrecho, saturado de informalidad, es quizás el nudo más crítico en el lugar de llegada. Como se indicó antes, para quienes vienen de una actividad agropecuaria, en su mayoría hombres, sus calificaciones y experiencias resultan generalmente inútiles para la competencia en la vía salarial no agraria. Se impone entonces la pluralidad de actividades de escala mínima y de muy bajo retorno, que comúnmente se engloba bajo la idea de “rebusque”. Para otros, que desde antes han estado recorriendo esta senda, quizás la crisis sea menos profunda en cuanto privación relativa.

Para las mujeres por lo regular aparecen líneas de continuidad existencial que se relacionan con la generación de ingresos. Las calificaciones y destrezas desarrolladas en las tareas domésticas y en el espacio privado pueden traducirse rápidamente en servicios personales, pequeño comercio de comidas y otras formas de empleo y de autoempleo, cuyos efectos rebasan la dimensión meramente económica.

¹⁸ Camilo Echandía, en su análisis del ELN asocia la explotación de recursos naturales con una rápida y amplia inmigración laboral y con la ampliación de su influencia sobre gente con expectativas laborales frustradas y desafección hacia las compañías que operan en esas regiones.

¹⁹ En estos casos hay una doble fuente de subregistro para la participación femenina e infantil en el trabajo: una, relativa al trabajo doméstico (que como se sabe solo pasa por la conciencia y el bolsillo cuando se trata del servicio doméstico) y dos, el trabajo agropecuario que no pasa por la economía monetaria y por consiguiente tampoco se asimila como trabajo.

²⁰ El empleo doméstico constituye un nicho laboral femenino equivalente al trabajo masculino en la industria de la construcción. Ambos representan el escalón más bajo de la escala ocupacional respectiva, con ingresos económicos muy limitados e inestables, pero con desventaja para las mujeres en cuanto a la vigencia de los derechos laborales. Normalmente se trata de empleos al día, en distintos hogares, con tarifas inferiores al salario mínimo legal y sin ninguna de las garantías laborales (vacaciones, cesantía, prima de navidad que en su conjunto equivalen a 2 y ½ salarios adicionales).

* Aún cuando el trabajo infantil y adolescente es un lugar común en las zonas rurales y semirurales y los proyectos educativos no son ejes centrales en los proyectos de vida en muchos hogares, la escuela y sus promesas imaginarias de inclusión social futura también entran en crisis con el desplazamiento. Antes del éxodo se dan niveles altos de des-escolarización entre la población infantil y juvenil desplazada, como efecto de la interacción entre las dificultades de acceso (físico, económico, etc) a la escuela, la no valoración o aún la desvalorización familiar a la educación y la presión hacia la generación de ingresos²¹¹.

En franca competencia con su escolaridad (independientemente de la oferta de cupos escolares y de la accesibilidad), en el lugar de llegada se acentúa la vinculación de niños y adolescentes a las tareas del rebusque y a los empleos temporales para ambos sexos. Las niñas y adolescentes mujeres, adicionalmente, substituyen a sus madres u otras mujeres adultas en los oficios domésticos, el cuidado de infantes, las pequeñas ventas de servicios y alimentos.

Pese a que no existe información confiable sobre el impacto actual del desplazamiento en la exclusión de estos menores del aparato educativo, es claro que, hacia el futuro, el acceso a la cultura escrita que rige muchas de las relaciones con las burocracias pública y privada, con las coordenadas urbanas y con las formas laborales acentuarán las exclusiones para quienes son analfabetos por desuso o por ausencia total de aparato escolar²²².

- A partir de lo anterior se presentan cambios visibles en las relaciones de pareja y tienden a entrar en crisis los esquemas de división del trabajo por sexo y por edad. La provisión económica, como fundamento de la identidad y de la autoridad masculina adulta, decae con su deslizamiento a la órbita femenina o juvenil. Por eso, recursos muy incrustados en la masculinidad tradicional como el alcohol y la violencia pueden agudizarse e incrementar los episodios de violencia intrafamiliar y extra-doméstica. Pero también otra respuesta, nada novedosa en nuestras tradiciones, es la deserción del hogar por parte del esposo-padre. A su turno, las mujeres

²¹ Por ejemplo, en un grupo focal desarrollado en Bogotá con 12 jovencitos y jovencitas (12-16 años de edad) desplazados de varias regiones distantes y cercanas a Bogotá y con un tiempo de desplazamiento entre 2 y 25 meses, encontré que tan solo 2 de ellos no tenían experiencia laboral previa al desplazamiento, varios combinaban estudio y trabajo (relativamente continuo) y 3 de ellos habían desertado definitivamente de la escuela antes de la salida.

²² Debe mencionarse el proyecto *Escuela y Desplazamiento. Una propuesta pedagógica*, Ministerio de Educación Nacional, Agosto de 1999 como un buen esfuerzo de reconocimiento de las interferencias de la violencia en los procesos educativos.

pueden encontrar en su trabajo un amarre a la economía monetaria, una fuente de poder para renegociar su posición en la familia o una manera de ampliar las fronteras de información y sociabilidad, pero también la duplicación, o en todo caso una extensión de su jornada laboral, y una enorme soledad que en muchos casos intenta resarcirse en uniones sucesivas e inestables.

La jefatura femenina del hogar bien por viudez o por abandono físico o funcional del hombre, es otro de los impactos sobre estos hogares de la violencia y del desplazamiento²³³. Como ocurre con otras características de los hogares desplazados, aquellos a cuya cabeza está una mujer, comparten muchos rasgos con los hogares definidos como pobres a través de las metodologías convencionales (NBI: necesidades básicas insatisfechas o línea de pobreza), pero las rutas por las cuales se encuentran en ese fondo común pueden tener diferencias importantes de registrar en los análisis y en las intervenciones.

* La indefensión precipitada por el desplazamiento impone un nivel muy fuerte de dependencia respecto de fuentes públicas y privadas de protección y de solidaridad.

²³ Es ya bien amplia la discusión sobre la jefatura femenina del hogar particularmente con relación a la “feminización de la pobreza”, pero en lo que respecta a los fenómenos de la viudez masculina y femenina es apenas incipiente el interés académico. En razón de la violencia política, en particular contra la Unión Patriótica y del terrorismo de los narcotraficantes, las “viudas de la violencia” tuvieron en los años anteriores alguna visibilidad pública y organizativa. Cfr. Nora Segura Escobar, *Mujer y narcotráfico. Consideraciones sobre un problema no considerado*. Revista FORO, No. 14, Abril de 1991. Bogotá. Otra arista interesante y peculiar la constituyen los hogares monoparentales a cuya cabeza está un hombre, porque en manera alguna parecen corresponder a esquemas simétricos a los encabezados por mujeres. Cfr. Nora Segura, otros. *La mujer desplazada y la violencia*. Opus Cit. 1996.

La capacidad diferencial para movilizar redes de soporte personal y familiar establece variaciones importantes frente a la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, la inestabilidad²⁴. Además de su carácter puntual los programas estatales brindan un apoyo muy limitado en cantidad y extensión de modo que en lo esencial la población desplazada depende de la solidaridad privada, bien por la vía del parentesco, el compadrazgo u otras lealtades afectivas, o por la vía de la filantropía social canalizada a través de las iglesias y de las ong`s nacionales y extranjeras. A su vez, la solidaridad de organizaciones políticas, sindicales o eclesiásticas es muy limitada. Otros estudios y fuentes corroboran la primacía de la solidaridad familiar en el proceso de transición y en segundo término de las ong`s laicas y eclesiales.

- La experiencia previa en organizaciones o en estructuras formales, la familiaridad con una cultura institucional, la exposición a relaciones secundarias e impersonales y la información sobre el mundo extra local, resultan de gran utilidad en el período posterior al desplazamiento. No obstante, solo de forma excepcional algunos de quienes tuvieron trayectoria política, sindical o cívica, son proclives a reeditar su vinculación organizativa. Para la mayoría de los desplazados rige una enorme resistencia a participar en organizaciones sociales y mucho más cuando se trate de organizaciones de desplazados²⁵. Los efectos del miedo se interceptan de diversos modos con las experiencias de desconfianza y de rechazo en los lugares de llegada. El estigma del desarraigo los acompaña en sus recorridos y por tanto buscan desdibujar en sí mismos los rasgos de ese “otro” no bienvenido.

²⁴ La gestión paternalista de la ayuda humanitaria, desafortunadamente muy frecuente, tiende a prolongar la dependencia, a adormecer la búsqueda de autonomía y a reforzar la propensión a una cultura de la mendicidad cuyos antecedentes se inscriben en el clientelismo político tradicional.

²⁵ Desde luego este individualismo defensivo y suspicaz no es privativo de la población desplazada ni parece ser producto del desplazamiento. La afiliación a organizaciones extradomésticas es muy baja para el común de la población colombiana, así como lo fueron en sus lugares de salida para los desplazados. Paradójicamente en los segmentos pobres de la sociedad colombiana coexiste con claras formas de solidaridad manifiesta en expresiones comunes como "el “pobre ayuda al pobre”.

Lo anterior no obsta para que también en los lugares de llegada, y de forma puntual, se dé el encuentro con otros desplazados en la circulación de información sobre ofertas institucionales de apoyo, reclamación de derechos, presencia de ong's. y de otras agencias filantrópicas. Así mismo esta identidad común se teje en cuanto objetos de solidaridad recibida de personas y organizaciones (cívicas, de ayuda mutua, ong's) en su tránsito a la vida actual. En todo caso se trata de niveles individuales de relación, de instancias puntuales y no de una valoración a la acción colectiva.

* La visión de futuro, difícil de construir de cara a la absoluta prioridad del presente, gira necesariamente alrededor del retorno o de la permanencia dentro de un marco de incertidumbre realista y de esperanza ilusoria. Desde luego que la persistencia de los factores de expulsión para la mayor parte de las regiones y localidades de origen, hacen del retorno una posibilidad no viable por fuera del deseo y la fantasía (incluidos los del gobierno)²⁶⁶.

²⁶⁶ En sus distintas versiones y momentos, la política pública ha operado con una definición implícita de la población desplazada como campesina o rural y en consecuencia ha tenido como perspectiva de fondo el *retorno voluntario* a los lugares de salida o en su defecto la *reubicación* en zonas equivalentes. Pero es claro que mientras no se hayan avanzado los procesos de paz y aclarado los caminos de la convivencia y la seguridad, la primera alternativa es inexistente para la inmensa mayoría de los desplazados y la segunda virtualmente imposible si se piensa en la reubicación de la totalidad de ellos. En este aspecto son paradigmáticos los casos de Pavarandó (Chocó) y de La Miel (Tolima), como ilustración de experiencias de retorno y de reubicación respectivamente, y de las enormes dificultades y costos políticos, económicos, institucionales y técnicos involucrados. Como se mencionó antes, en Pavarandó hay dos experiencias con resultados divergentes: un proceso de *retorno* bajo la propuesta de "Comunidades de paz" y la reivindicación del derecho a no ser desplazado que incluye el acompañamiento por parte del CINEP (ONG de los jesuitas) y la capacitación para construir esa comunidad. Esta experiencia fue respaldada por Francia mediante el otorgamiento de un Premio de los Derechos Humanos, un dinero en efectivo y un esquema solidario de comunidades hermanas entre Chocó y Francia. Paralelamente un proceso de *re-ubicación* bajo los auspicios iniciales de la Consejería Presidencial y la discontinuidad posterior por el cambio de administración nacional, muestran resultados insatisfactorios para las comunidades y con muy baja probabilidad de consolidación. En el caso de La Miel, el gobierno adquirió dos haciendas paneleras en el Tolima para la reubicación de 70 de las 280 familias campesinas desplazados de la Hacienda Bella Cruz en el Departamento del Cesar. Probablemente la suma de errores y los muy elevados costos (de diverso orden) constituyen la mejor ilustración de cómo no debe ser un proceso de intervención estatal. A su turno, en el caso de Bogotá, parece haber una tendencia importante a regresar al lugar de salida o a la reubicación en poblaciones cercanas, por iniciativa personal, al parecer por imposibilidad de garantizar la subsistencia y de tolerar la inseguridad de la ciudad.

La visión del futuro en un entorno específico (rural o urbano) o el delineamiento de proyectos de vida en cuanto superación del desarraigo se amarra en la combinación de la acción estatal, la divina providencia encarnada en las ong's y, por sobre todo, en su inagotable capacidad de rebusque. Resulta muy claro que mientras los adultos calibran la permanencia o el retorno con referencia a las posibilidades laborales, las fuentes de ingresos, la abundancia o escasez de alimentos para los (o las) adolescentes, los referentes prioritarios aluden a los muy altos niveles de inseguridad en los barrios y calles urbanos que imponen un régimen de control familiar muy fuerte, restricciones de tiempo y lugar para los encuentros con los pares, limitaciones sobre las actividades lúdicas y, desde luego, también un constante peligro de atracos, robos, peleas y violencia.

* En el espacio colectivo y en distintos ámbitos de la vida nacional aún no se han calibrado los impactos de los desplazamientos por violencia. En los puntos de llegada la presión sobre el suelo urbano, los servicios públicos y las redes domiciliarias, la infraestructura educativa y de salud, el empleo y las fuentes de subsistencia agudizan situaciones normalmente ya deficitarias. En ciudades como Cartagena, Montería, Barrancabermeja y Cali son evidentes los cambios en la fisonomía urbana y en la expansión del sector informal. En Bogotá, el crecimiento de las localidades periféricas resulta bien notorio, entre otros en las cifras de inseguridad y delincuencia cuyas víctimas primordiales son los sectores más pobres.

* Acciones colectivas de los desplazados, tomas de oficinas públicas, marchas, y otras maneras de hacerse visibles en reclamo de atención, han tenido lugar en varias regiones del país y se confunden en ocasiones con otras causas. La presencia masiva de desplazados y su visibilidad actúa en múltiples direcciones de conflicto, cuya primera víctima es nuevamente esta población. El estigma que los asocia con inseguridad, problema, subversión, delincuencia, etc. los convierte en autores de su propia desgracia y en responsables de su desprotección.

Por todo lo anterior, y visto en algunas de sus caras y significados, el desplazamiento por violencia condensa quizás la más refinada forma de exclusión social, en tanto ciudadanos, con un lugar físico, social y simbólico de pertenencia. Esa condición puede verse en la ausencia del Estado (antes del

desplazamiento, como garante de vida, bienes y seguridad; y después del desplazamiento como fuente de condiciones mínimas para la reconstrucción del entorno vital). También en el desdibujamiento de los principios de justicia y de reparación, expresados en la identificación y el castigo de sus responsables, la eventual recuperación de algunas pérdidas y el exorcismo de los fantasmas del pasado y el presente que presumiblemente pasarán a una dimensión simbólica en la etapa posterior del conflicto. Entretanto la perversa articulación de la confrontación armada y la pobreza los debilita en sus iniciativas, espacios y mecanismos de autonomía (política, cívica o social) y enturbia sus visiones de futuro.

SALSA, RUMBA Y CREACIONES CULTURALES NEGRAS EN LAS LOGICAS SOCIALES DE IDENTIDAD Y EXCLUSIÓN DE LA CIUDAD DE CALI

Elías Sevilla Casas¹

*Creo que la música te acerca a Dios.
La música me ha permitido acercarme a un mundo que no se puede tocar.
Cuando los músicos son profundos
se comunican con un más allá que de pronto está más acá.
Más acá, dentro de uno.*

Yuri Buevaventura²

Introducción. Esa otra dimensión de la experiencia

En el prólogo a un libro de ensayos sobre la literatura-arte escrita por mujeres en Colombia hay un breve párrafo, referente a la Colonia, que llama la atención:

Estudiar los textos femeninos, en este período, lleva también a ejercitar una mirada escrutadora. Esta debe establecer las fisuras por las cuales emerge el “yo” escondido de cada escritora y cómo éstas revierten las coerciones estéticas a su favor.

Por no estar firmado ese prólogo, atribuyo la cita a las tres mujeres colombianas, María Mercedes Jaramillo, Angela Inés Robledo, y Flor María Rodríguez (1991) que son las autoras de los cuidadosos y bien documentados estudios; son doctoras en letras y desconocidas en Colombia porque ejercen docencia en Norteamérica. El párrafo llama la atención porque, con referencia a la literatura colombiana, junta admirablemente dos temas recurrentes en la literatura de Occidente, el de

¹ Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. El presente ensayo es un producto del Proyecto “Razón y Sexualidad” patrocinado por Colciencias. El ensayo forma parte de un conjunto más amplio de textos que cubren aspectos importantes de la vida sexual, erótica y amorosa en la ciudad de Cali; algunos de estos textos, que son complemento importante de lo que aquí se expone, son mencionados en las notas.

² Yuri Buenaventura es el nombre artístico de Yuri Bedoya, un joven músico mestizo, nacido en Buenaventura, que hoy difunde con notable éxito música afro y mestiza experimental colombiana en Francia. La cita procede de una entrevista en *La Palabra*, (Cali, Universidad del Valle) No. 85, agosto 1, 1999, pag. 9.

las grietas en la construcción del mundo que vivimos, y el del yo femenino, fracturado él mismo³, que emerge de entre las fisuras para decirnos que ese mundo es cuestionable.

Creo que desde un episodio de la novela de Hawthorne *The marble faun* (1961 [1859]), recordado por Borges (1983 [1949]), el tema de la grieta abierta en el lomo del mundo, construido por quienes han tenido dominio de la palabra definidora, surgió como alternativa de percepción de la experiencia de la vida humana. Borges, en una de sus discusiones de (1974a: 258 [1932]) recuerda el memorable apunte de Novalis de que el mayor hechicero sería aquel que llevara a tal punto su hechizo que tomara sus propias fantasmagorías como apariciones autónomas. Se pregunta el ensayista si ese no es nuestro caso; nuestro, el de todos los humanos, o mejor, digo yo, de los que tienen una visión masculina de las cosas. Agrega que “la indivisa divinidad que opera en nosotros” ha soñado el mundo y lo ha soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo. Pero nos recuerda que en esta arquitectura soñada se han dejado tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que ese mundo es falso. En otros ensayos de la misma serie Borges aporta un elemento adicional que cae bien dentro del argumento que deseo hacer: nos trae la paradoja de que un hecho falso puede ser esencialmente cierto (1974b: 252 [1932]) y presenta como ejemplo la verdad que el Quijote y Sancho son más reales que el soldado español que los creó (1974c: 265-266 [1932]) . Pocos años más tarde de que esto escribiera, y de seguro sin conocerlo, Virginia Woolf escribía en *A Room for one's one* (1935) que “La ficción tiende a tener más verdad que hechos”. Concluyo que hay: hechos, los del mundo sólido, soñado, masculino; una verdad que no coincide siempre con los mismos; y ciertos personajes, usualmente mujeres escritoras, que gustan de mostrarlo.

³ El tema del yo femenino fracturado lo estamos trabajando con Alejandra Machado en el ensayo “*El papel de la puta/prostituta en la fragmentación y reunificación de la figura femenina en la ciudad de Cali*”; y con Catherine Rosero y Zoraida Saldarriaga en el ensayo “*Autonomización del erotismo y el fantasma de la maternidad en un conjunto de mujeres de la ciudad de Cali*”; ambos ensayos se preparan en paralelo dentro del Proyecto “Razón y Sexualidad”, Cidse, Universidad del Valle, Cali.

Cito a Virginia Woolf porque es la autora que, a mi juicio, mejor hizo la denuncia al hacer patente el hechizo: fascinación paralizante, (la frase le gustaba) como la de un conejo nocturno enceguecido por los faros de un auto en el camino (Woolf 1994: 162 [1932-1941]). La ejerce el círculo de tiza que circunda ese mundo sólido y masculino. Al fin de su vida Virginia trató explícitamente de llenar con ficciones los intersticios de ese mundo construido por los hombres: su última novela, concebida con otro nombre, terminó llamándose “Between the Acts” (1970 [1941]). Se dedica a mezclar los actos “serios” pero facticios de una representación dramática popular de la historia de Inglaterra con actos “no serios” pero muy humanos y “femeninos” que corresponden por lo menos a la mitad de la experiencia humana.

Y ¿qué tiene que ver todo lo anterior con una mesa sobre exclusión social y construcción de identidad que pertenece a un importante coloquio de sociología? Mucho, por dos motivos al menos. Primero, porque la ciencia social —sí, la sociología, la antropología y la historia aquí representadas— han contribuido con su racionalismo abstracto a la construcción de ese mundo sólido masculino y se han olvidado de las grietas. Como bien lo recuerda el antropólogo francés Jean Duvignaud (1980), con excepción de iluminados algo excéntricos como Roger Caillois y Georges Bataille, o investigadores de temas exóticos como Durkheim y Eliade sobre el tremendum de lo sagrado, Mauss y Dumezil sobre las fiestas, Perrens sobre los libertinos, y Charpentrat sobre el barroco, la razón abstracta de los especialistas de estas disciplinas se han dedicado a los asuntos serios de la vida, los que están dentro del hechizado círculo de tiza: asuntos de poder, de riqueza, de funcionalidades y estructuras.

El segundo motivo para aducir pertinencia es mi propio reto y la paciencia de ustedes. En mis proyectos actuales como etnógrafo estoy rompiendo la tradición de estudios “serios”, que creo sabía hacerlos. En este ensayo, por ejemplo, me dedicaré a algo aparentemente trivial y sin utilidad. Quiero discurrir sobre la salsa y la rumba, como espacio en donde se construye identidad y se practica la inclusión/exclusión social en la ciudad de Cali.

Abro el argumento con la conclusión de un editorial reciente de la prensa local que nos decía que “*salsa y política no riman*”. Trataré de mostrar que *sí riman*, si modulamos el enunciado con dos condiciones que constituyen sendas secciones de mi exposición: primera, si se mira la salsa como instancia precaria de la lógica cultural más permanente y profunda que es la rumba caleña; segunda, si se toma la rumba como espacio alterno de la experiencia citadina –floración maravillosa de las fisuras y mundo alterno de que nos hablan las mujeres escritoras. En una sección tercera y última intentaré argumentar que, en consecuencia, la rumba puede ser un espacio sui generis de inclusión y, que paradójicamente, la rumba-salsa se convirtió en una instancia de exclusión. Mostraré que su adopción en la ciudad llegó hasta el grado de que algunos quieren verla como emblema local, lo que implica excluir, por la lógica de las oportunidades, la muy rica y original tradición cultural negra, y propia, del Pacífico colombiano.

Salsa como instancia que fue de la rumba caleña

“*Salsa y política no riman*” concluía hace poco el subdirector de Opinión de el diario El País de Cali (Restrepo. L. G., 1999) en una referencia a los propósitos de los políticos de turno de oficializar la salsa en la ciudad, pues se le mira como “*fenómeno nuclear*” de la ciudad y “*expresión más pura de la cultura vernácula*”. Argumentaba que la libertad de expresión, la creatividad y el virtuosismo han sido los rasgos principales de la salsa y que la mercenarización de este producto cultural a favor de mezquinos intereses electorales, o su asunción como emblema oficial, es una medida que coarta, mutila y acelera su decadencia; por tanto “*ojo caleños que quieren clientelizar el guateque*”, quitarle lo que tiene de arte y vida. Otros editorialistas, dos con base académica en esta Universidad, han terciado en el asunto, discutiendo la legitimidad y actualidad de la pretensión de Cali de ser “*la capital de la salsa*”.

Se organizó incluso hace poco por parte del Departamento de Estética de la Universidad un debate y allí el colega Jaime Escobar presentó una ponencia (Escobar 2000) que precisa enfoques y propone interpretaciones. Debo reconocer que la ponencia y la permanente conversación con Jaime han enriquecido la presente reflexión.

Nuestra conversación ha coincidido en varios puntos, por ejemplo, que la salsa es un complejo musical-dancístico con estética propia y definida; que la salsa encajó en Cali más como danza que como música porque Cali no tiene una tradición musical propia; que la danza o “el baile” caracterizan al caleño porque como decía su señora madre “*aprender a bailar es parte de la educación*” y “*caleño que se respeta sabe bailar bien*”; que hay en todo esto un importante factor de juego corporal, y de juego corporal con ancestro negro; y que la salsa fue algo importante en el pasado pero “*desde el primer lustro de los años ochenta empieza a mostrar un profundo agotamiento*”.

Como la salsa interesa aquí no por sí misma sino como instancia de rumba, cae bien ampliar un poco el tema de su agotamiento, porque afirma la precariedad de las instancias singulares frente a una lógica cultural más profunda y permanente, la de la rumba como proceso cultural genérico.

Sabemos que el fenómeno de la salsa no puede entenderse al margen de la apropiación que de ella hicieron las orquestas y las casas disqueras y de la eficacia de su estrategia mercantil. Debemos además superar el parroquialismo y ubicar el asunto Cali-salsa como un fenómeno menor y marginal dentro del esquema mundial de la apropiación capitalista de la llamada *World Music* o música alterna de origen tercermundista, en la cual la música latina, incluida la original cubana y sus transformaciones neoyorkinas, tuvieron hasta hace poco una participación reducida frente al éxito mundial de otros ritmos afro como el jazz y el *rhythm-and-blues*.

Con los cambios recientes en la macropolítica comercial de Cuba con el mundo capitalista la música original afrocubana, y por tanto no la salsa, está mostrando síntomas de recuperación en ventas. Los especialistas opinan que con el ascenso de la música cubana otras músicas latinas pueden beneficiarse, colateralmente, del mercado (Pacini, 1998; Watrous, 2000).

Debemos recordar, también, que aparte de los argumentos aducidos por Escobar para el florecimiento de la salsa en la ciudad, hay un argumento importante sobre el que él, paradójicamente, no hace hincapié como economista: el perfil cultural de esta ciudad no puede entenderse si se deja de lado su muy temprana vocación mercantil, su ubicación estratégica (Vásquez 1991; Valdivia 1992), y la “terciarización” de su economía, que tuvo su penúltimo impulso comercial en el mercado de narcóticos. Como ocurrió con los víveres, la miel, y el tabaco en el siglo diecinueve, el café y azúcar en dos primeros tercios del veinte, el fútbol y los narcóticos, en el tercio siguiente, la sociedad caleña recibe, compra y vende cualquier cosa a la que se le pueda sacar una ganancia. Específicamente, esta sociedad ha negociado bien y desde hace décadas con las emociones, y más concretamente con las emociones centradas en la rumba, el sexo y el erotismo, que refuerza con el mercado abierto de alcohol y con el ocasional y clandestino de narcóticos. Esta especialidad mercantil es bien conocida por propios y extraños y no se puede olvidar en ningún análisis del fenómeno de la salsa. Tampoco pueden olvidarse en esta compleja historia cultural las conexiones que tiene: con el deporte como expresión y disfrute corporal, y como industria en el caso del fútbol organizado; con el turismo nacional e internacional que halla sus mejor

exposición en la Feria de finales de año; y con el comercio de bienes eróticos y sexuales⁴.

Ahora bien, la especialidad mercantil de la ciudad escondió para La salsa una trampa que ayuda a explicar su agotamiento. Para decirlo en una frase: la mercantilización le consumió la sangre. La metáfora, que es fuerte, la tomo de un artículo que bajé del internet y es menos cauto que la ponencia de Escobar porque en vez de agotamiento, se atreve a diagnosticar “*La muerte de la salsa*”, como reza el título. Abel Delgado (2000), un especialista en músicas latinas que tiene base en Nueva York, sostiene que si la señorita salsa todavía deambula y gana dinero, lo hace como un muerto viviente que se alimenta de la sangre de los vivos, como Drácula. Cito textualmente:

“Muerte de la salsa”. Bastante dramático el título ¿no? ¿Qué sigue, la Tocatta y Fuga en Re Menor de Bach acompañando esta pieza en MP3? Después de todo, la música de salsa todavía hace plata. [...] Aun musicalmente, mucha de la salsa de hoy todavía te hace mover los pies, todavía suena briosa y viva. De modo que ¿qué pasa con la dramática declaración? Lo siguiente: Sostengo que esta música tiene cierta estética establecida a lo largo de los años que constituye su sangre, su esencia. Y aunque esta música ciertamente ha cambiado a lo largo de los años, ha mantenido sin embargo esa estética. Pero ahora esa estética se ha perdido porque la comercialización transformó su carácter para hacerla más mainstream, más pop. Así como secó a Lucy de sangre la novela de Bram Stoker, este proceso ha secado La salsa lentamente, dejando una criatura bonita, que camina, habla y es no-muerta.

La sangre de la salsa, según Delgado, es triforme porque tiene por lo menos tres componentes vitales que se perdieron en el proceso que, en vez de desangramiento, llamaré de *desencarnación*: *primero*, el afrocentrismo de fuertes conexiones con la santería; *segundo*, la improvisación o efecto de escenario para la creación en vivo; y *tercero*, la narrativa de eventos amorosos

⁴ El estudiante Ramiro Agudelo está terminando dentro del proyecto “Razón y Sexualidad” una tesis de sociología sobre el tema de la distribución espacial y las modalidades del comercio erótico-sexual en la ciudad de Cali.

o de historia popular como parte esencial de la estructura textual. Yo agregaría otro componente cuya ausencia es decisiva para la desencarnación: el de los cuerpos que la danzan. Salsa sin baile no vale para Cali. Cualquiera que asista hoy a los recordatorios de la salsa, en el Parque de la Música, o en las salsotecas, se encuentra con un espectáculo nostálgico en donde la desencarnación ocurre al pie de la letra: desapareció la sustancia corporal en movimiento concertado, como expresión de vida, de erotismo, de arte y de pasión y quedó una confluencia de suspiros y mementos. Uno no sabe si interpretar el evento como rito exclusivo y raro de iniciados o como curioso mercado de coleccionistas. La salsa se baila aún, es cierto, pero en lugares con olor a ghetto, o en las viejotecas en donde –como lo supone el nombre—se disfruta la música de antaño.

Para concluir la sección debo agregar un matiz importante que pone en términos más amplios y abstractos el asunto de la desencarnación. Al hacerlo me encuentro con un autor inesperado, Max Weber, citado por Bourdieu (1980:124), en el capítulo “La creencia y el cuerpo” de su excelente estudio *El sentido práctico*. Bourdieu nos hace ver cómo la objetivación de la memoria cultural de los pueblos, por ejemplo en la escritura, implicó un retraimiento gradual del cuerpo a segundo plano desde la centralidad que las culturas arcaicas le otorgaban. Hace referencia a la idea de Weber sobre la desencarnación de la música mediante el recurso de la partitura; ésta nos permitió, en el caso de los clásicos, separar el instrumento y el cuerpo ejecutante del texto musical el cual pudo ser plasmado de manera precisa y objetiva en un papel para beneficio de las generaciones venideras; bien, pero se acentuó de manera talvez irreversible la separación de la música y la danza como procesos creativos.

La tecnología moderna basada en la digitalización del sonido, en particular desde la aparición en los años ochenta del MIDI (Musical Instrument Digital Interface), de las máquinas como *synthetizers*, *samplers*, *sequencers*, *keyboards*, y *drum machines* (Verna 1994) inició un proceso de cambio irreversible.

La amplia aplicación de *hardware* y *software* de computadores a la producción, mezcla, grabación, archivo, reproducción, difusión y comercialización de los sonidos (Mathews and Peirce 1987; Taylor 1991) ha llevado la cuestión de la desencarnación de la música no sólo a su literal desmembramiento sino a replanteamientos radicales de lo que es hacer música como arte, y en particular como arte popular (Holm-Hudson 1996). Nos encontramos, pues, ante un cambio cultural que bien puede equipararse, por las magnitud de sus implicaciones, al del Neolítico con la invención de la escritura.

Desde luego, la salsa como producto comercial competitivo no podía eximirse de este juego; en particular, sufrió la anulación del efecto de tarima, su producción “en bloque” se hizo anacrónica, se homogeneizaron sus sonidos, se quitó, en el caso colombiano, el típico brillo de la percusión (Tannembaun⁵). Todo para ajustarse a la demanda mercantil. Estas exigencias, que anulan la improvisación creadora propia de músicas tan afines como las originales de Cuba y el jazz (Arnedo⁶) significaron el desecamiento de la vitalidad interna de la salsa, es decir sorbieron la sangre triforme a que se refiere Delgado. La supresión de la danza no hizo sino completar, de modo literal, la desencarnación del complejo musical dancístico.

Un compositor-productor tan reconocido como Jairo Varela confirma, en sus entrevistas⁷, estas realidades. El impacto de la digitalización, la rigidez del

⁵ Israel Tannembaun es un pianista y músico “newyorriqueño” que trabajó varios años con Alexis Lozano de *Guayacán*, uno de los grupos musicales caleños que trata de hacer valer la tradición afro-colombiana y todavía produce al estilo antiguo. Se le hace una entrevista en *La Palabra* No. 62 (julio 1997).

⁶ Antonio Arnedo es un saxofonista y clarinetista mulato colombiano compositor de un “jazz latino” que tiene buena acogida nacional e internacional. Al respecto de la improvisación dice: “El jazz hace que el músico, cuando está metido en la improvisación, sienta el tiempo, y el tiempo pasa. Lo que sucedió no se volverá a repetir, eso hace que, a través de mis sentidos, yo trate de absorber lo mejor y transmitirlo igual con la música”. Véase la entrevista “El jazz y la música colombiana en una sola propuesta”, *La Palabra*, No. 76 (octubre, 1998).

⁷ Jairo Varela es director y propietario del bien conocido *Grupo Niche*. De origen chocono, Jairo es consciente de la enorme potencialidad de la música del Pacífico pero es franco al reconocer la esclavitud comercial: “Además está de por medio lo comercial y uno empieza a valorar una idea como esa de retomar la pachanga y se da cuenta de que no es conveniente. Es preferible dejar de lado los proyectos que uno

modelo impuesto por la salsa comercial cuyos modelos ya están y no pueden cambiarse, y la esclavitud impuesta por el gusto del mercado condicionan los “arreglos”, pues se trata de arreglos. Los de su último CD “*Señales de humo*” fueron hechos literalmente en la cárcel (en donde estuvo recluido por sindicación de vínculos con narcotráfico) con ayuda de un pequeño computador y del teléfono, sacrificando impulsos artísticos originales de fuerte sabor “Pacífico” para responder a lo que pide el mercado. Más aún, arguye que la producción “*con los instrumentos verdaderos*” y en la forma viva y en bloque no está a su alcance, como sí lo está al “*de los viejos*” de Cuba y Puerto Rico; ellos graban en vivo en sus países y luego van a terminar, con ayuda electrónica, en laboratorios muy desarrollados.

Pero la rumba continúa moviendo a la ciudad

Uso el término “rumba” con un sentido mixto que procede de los dos originales que nos aporta el diccionario del castellano americano. El sentido genérico de rumba (sustantivo común) es de parranda, jarana o evento festivo de orden colectivo; el sentido de “La Rumba” como nombre propio es el de un complejo musical dancístico que con el danzón, el son, el zapateo, y el campesino forman importantes creaciones culturales todavía vigentes en Cuba (Daniel 1995: 29); esos complejos, en particular el son, fueron importantes antecedentes de la producción del híbrido llamado “salsa”. Esta en rigor debe mirarse como un complejo musical dancístico diferente de los mencionados, y de procedencia “newyoriqueña”, no cubana.

Cuando decimos en Cali “me voy de rumba” (con minúscula) queremos significar que salimos de la cotidianeidad laboral y “seria” de lo que llamaríamos el “mundo sólido de la vida productiva y estratégica”, el de los trabajos y negocios de todo orden, para entrar en un orden (o desorden) lúdico, despreocupado, que está fuera del círculo de tiza a que se refería Virginia Woolf. Duvignaud (1980:49) llama a este dominio “el terreno baldío de las actividades inútiles”, y en esta amplia franja de la experiencia humana él ubica la fiesta, lo sagrado, el amor, el encuentro místico, la creación artística, los sueños, el teatro, la poesía, la palabrería y el juego.

lleva en el corazón porque tiene que despertar a la realidad. A mí también me gusta el danzón pero no es comercial”. Véanse los Nos. 62 (junio 1997) y 78 (diciembre 1998) de *La Palabra* dedicados a su biografía y producción.

El autor decimonónico Nathaniel Hawthorne, que se ganaba la vida como supervisor de aduanas, es bien conocido por el contraste fuerte que establece entre la cotidianidad de los negocios que atendía en la terraza de La aduana de Salem, iluminada por la profana luz del día, y la franja experiencial dedicada a la producción artística. Milton Stern (1965: xii) ha caracterizado el contraste como la tensión entre el “noonday self” y el “twilight self” en que se debatía el autor. La franja artística aparecía en su estudio de escritor en donde la luz de la luna, al ingresar por la ventana, le permitía advertir figuras insospechadas en la trama del tapete; tenía una luminosidad inusual que mostraba un mundo extraño, remoto, neutral, espiritualizado, en que lo Actual y lo Imaginario (ambos con mayúscula) lograban encontrarse para generar un nicho en que ocurriera el milagro de la creación literaria (Hawthorne 1979: 59-60).

Para Hawthorne este era el dominio simbólicamente “nocturno” del arte puro, bien deslindado del estratégico espacio “diurno” de los negocios ordinarios y mezquinos. La rumba para quienes es ludus (ocio, fiesta, disfrute, despreocupación y descanso) pertenece a este dominio simbólicamente nocturno. Siguiendo a Hawthorne, a Duvignaud y a los demás autores por él mencionados, en este espacio crepuscular, “reino de lo imaginario,” “de intencionalidad cero”, se dan estrechas conexiones entre el arte, el erotismo y lo sagrado; paradójicamente, la rumba por su arte y erotismo puede ser entonces una ventana a cuestiones trascendentes. Obviamente, la rumba, la misma que unos disfrutaban como ludus, puede ser para otros un trabajo y un business, y pertenecer por ello al mundo simbólicamente diurno de la funcionalidad y la estrategia productiva de riqueza, de prestigio. La rumba caleña puede ser también, y desafortunadamente tiende a ser, una pendiente resbalosa que lleva directo al remolino de intrascendencia, prosaísmo, banalidad y consumismo en donde giran como corchos muchos habitantes urbanos⁸.

No tenemos en Cali un complejo musical dancístico de nombre propio, con mayúscula, equivalente a la rumba cubana; ésta, en su clave y estructura, como fenómeno colectivo y ritual, es única entre los congéneres mencionados. Sin perder su identidad como un género, acepta variaciones

⁸ El tema de la trascendencia e intrascendencia (con sus formas contemporáneas de banalidad, prosaísmo, y consumismo) que es paralelo a esta ponencia lo estoy trabajando en el ensayo “Erotismo, banalidad e intrascendencia en la ciudad de Cali” como parte de los materiales finales de Proyecto “Razón y Sexualidad”.

como el yambú, el guaguancó, la columbia, la rumba del tiempo de España, la batarrumba y la giribilla. Yvonne Daniel (1995), una antropóloga norteamericana de ancestro africano, que a la vez es bailadora y maestra de danza, describe así ese complejo en la Cuba contemporánea:

“La rumba es un baile apasionado, por muchos tenido como bello. Con frecuencia punto culminante de un evento comunitario o reunión social en Cuba, ella encarna importantes elementos de la vida: movimiento, espontaneidad, sensualidad, sexualidad, amor, tensión, oposición, y a la vez libertad con restricción. Requiere juego y también deliberación. Involucra al cuerpo humano, a la voz humana, y un tremendo sentido del ritmo. Y desde la Revolución Cubana de 1959, la rumba se ha vuelto más enigmática, llena de contrastes y contradicciones, pues refleja la vida y proyecta los objetivos de la Cuba contemporánea. La danza parece ser extremadamente simple, pero mirada de cerca resulta extraordinariamente compleja. Como aúna movimientos sutiles y discretos, parece libre e improvisada – y, hasta cierto punto, lo es. Pero también es estructurada, casi rígida, en sus reglas (pag. 1).

La rumba cubana, según Daniel, se presenta hoy en dos contextos: Por un lado está el espectáculo coreográfico al que el Ministerio de Cultura le pone mucho cuidado como arte nacional que representa la nación ante turistas y extranjeros y genera importantes divisas; esta forma halla su expresión rutinaria en los institucionalizados “sábados de la rumba”. Por otro lado sigue siendo una expresión popular espontánea que surge como fiesta en cualquier barrio o rincón de las ciudades. No es el momento de ahondar en las implicaciones sociopolíticas de la rumba como se ha vivido en la Isla a partir de la revolución, ni en el ascenso que la música cubana, en general, está teniendo en el mercado internacional de las músicas alternas, de alta demanda; tampoco nos detenemos en la interacción estrecha que se da entre esta expresión popular, de marcado origen negro, y el elitista círculo del Ballet Nacional en donde brilla con luz propia la diva y maestra Alicia Alonso. Basta citar, para el propósito del presente ensayo, el comentario que la antropóloga Daniel hace a partir de sus recientes observaciones:

“El baile, y la rumba en particular, ofrecen la posibilidad excepcional de un nexo entre la *communitas* y la ideología, entre los sentimientos y las metas. En la medida en que los cubanos blancos o mulatos participen en la rumba de manera plena y entusiasta al lado de los cubanos negros o morenos, en que las mujeres bailen la columbia y bailen menos defensivamente el guaguancó, en que los sábados de rumba y los talleres de rumba por fuera del país generen divisas y prestigio, en que la Rumba continúe implicando materiales dancísticos religiosos, el complicado proceso de cambio de valores en Cuba puede ser identificado y medido (p. 147).

El matiz que deseo rescatar de la rumba cubana como género, y en especial de su versión espontánea y popular, queda bien sugerido por el comentario que hace setenta años hizo el etnólogo Fernando Ortiz (1993 [1936]: 234-235):

“La verdadera y tradicional rumba es viva escena de un sagrado teatro primaveral, donde los bailadores, músicos y coro de circundantes integran el acto dramático, desde las primeras fases miméticas del coloquio amoroso hasta la apoteosis de la posesión carnal y demoníaca, y el transporte de la colectividad enajenada al paroxismo orgiástico. La rumba es un bello pandemonium; y lo es sólo por la absoluta sinceridad de su espíritu panhumanum. Es un desenfreno de las tensiones humanas sólo contenido en su

frenamiento de orbitación suprema. Es lo que nuestro pueblo, con una espontánea, elocuente y admirable expresión paradójica, dice ser un “relajo con orden”; relajamiento de las inhibiciones hasta el límite consentido por la armonía vital. El arco humano tendido para lanzar los flechazos de la vida a todos los horizontes, hasta a tirantez máxima cuyo traspaso sería el crujido de la rotura”.

Como lo acabo de decir, la rumba en Cali no tiene el soporte estructural de un complejo musical-dancístico equivalente a la rumba-género cubana; mi punto es, sin embargo, que algo de ese espíritu descrito por Ortiz aflora cuando se hace verdadera rumba popular en la ciudad. Más aún, me atrevo a sugerir la hipótesis de que la ausencia de una estructura cultural como la cubana, en cualquiera de sus géneros, ha generado un vacío u orfandad que explicaría la acogida que la salsa, como complejo musical-dancístico, tuvo en su momento.

Pero si Cali no ha tenido un complejo musical-dancístico propio sí ha mostrado ser un espacio en que se privilegia la danza como expresión popular típica, y como creación artística, es decir en las dos modalidades que prospera la danza-música en Cuba. Ya dijimos que en Cali aprender a bailar se considera parte de la buena educación; y en Cali se baila con gusto y pasión en cantidad de espacios cuya caracterización ya formuló Ulloa (1992) en su estudio sobre la salsa en la ciudad. Esos espacios van desde la salas domésticas hasta las verbenas callejeras de la Feria, en las que se desborda el barrio: hay fiestas familiares, “agüelulos”, bailes de cuota, discotecas, verbenas de cuadra, verbenas oficiales, salsotecas, minitecas, viejotecas, y conciertos. La gran proliferación de formas musicales y dancísticas hoy vigentes en la ciudad, al lado de la salsa, es un testimonio fiel del gusto local por el baile, entre niños, jóvenes y viejos.

Por otro lado, la existencia y fortalecimiento de instituciones como Incolballet y Ballet de Cali, y la creación de obras colectivas como Barrio Ballet y El Puente, o el importante elenco de bailadoras caleñas, hombres y mujeres, que están hoy brillando en escenarios nacionales e internacionales, permiten entrever el motivo por el que Cali se precia de ser la única ciudad colombiana con tradición propia en danza-artística. Este perfil de danza-arte tiene rasgos singulares de los cuales menciono los siguientes: primero, la proclividad de los caleños por ejecutar la danza en pareja y en seguimiento de la melodía (en vez de la percusión) a que hace

alusión Vanessa Bass, bailadora cubana, cuando compara lo observado aquí que con lo que ocurre en la Isla; segundo, la importancia que ha adquirido en la ciudad la danza contemporánea frente al ballet clásico, tendencia que culminó con el proyecto El Puente, dirigido por Alvaro Restrepo; y, tercero, el estrecho vínculo de intercambio artístico que se ha dado, tanto en el plano de la danza-música popular afro, como del ballet, entre la ciudad y la Isla de Cuba⁹.

⁹ Véase la nota periodística de Domenici en *La Palabra* No. 60 sobre “La muerte y resurrección de la danza clásica”, y los números 58, 60, 64, 69 y 77 del mismo periódico para detalles sobre el baile y la danza en la ciudad. Sobre el proyecto *El Puente* véase el especial del No. 58 del mismo periódico.

La rumba de Cali como instancia de inclusión y de exclusión

Más de dos millones de personas tienen a Cali como el lugar propio en donde intentan afirmarse en la existencia y asegurar un mínimo nivel de calidad de vida. De ser genuina esta inclusión social implicaría por lo menos dos condiciones: que los caleños tengan un punto de referencia adecuado para la construcción de la propia identidad, personal y colectiva, y que aseguren un modo equitativo de participación en el uso y disfrute de los recursos socialmente disponibles. Aunque aquí no se ha avanzado mucho, como se ha hecho en Cuba alrededor de la cubanidad y la cubanía¹⁰, los caleños sí parece que están tomando en serio las marcas de identidad que caracterizarían, más allá de una “caleñidad” creada por las imágenes mediáticas, una “caleñía” como construcción histórica de identidad local, consciente y positivamente respetuosa de la diversidad y riqueza cultural de quienes convergen en la ciudad y la construyen habitándola.

Las investigaciones de la ciencia social permiten inferir que las múltiples imágenes de la ciudad, que eventualmente surgieron como recurso mercantil, no son consumidas acríticamente por la población (Restrepo, M., 1997, Velásquez 1996). El debate puntual sobre Cali como “capital de la salsa” se debe mirar en esta perspectiva. Los estudios sociodemográficos y sociológicos más recientes (Urrea 2000; Barbary 2000; Velásquez 2000) confirman y describen una situación grave de desigualdad y exclusión social y racial que sería insostenible si no existiera un aliciente de utopía que alimenta los esfuerzos por mejorar las condiciones de la propia existencia. Pero hay un hecho paradójico: se ha observado que, en contra de la imagen lejanamente idílica que proyecta la ciudad, la mayoría de los caleños no sólo son conscientes de los niveles exagerados de desigualdad social y

¹⁰ Aunque la distinción entre cubanidad y cubanía no es aún clara entre los especialistas, percibo que cubanidad tiene una connotación más esencialista y cubanía, en su sentido ordinario, más folclorista. Sin embargo, a partir del trabajo profundo de los artistas, sobre todo de los grandes poetas cubanos (Heredia, Martí, Guillén) ha venido apareciendo una noción más refinada de cubanía como construcción sintética, histórica y consciente, de la identidad nacional mediante una resignificación radical de los elementos raciales, y culturales en general, que convergen en una nación, en este caso los elementos de ancestro africano e hispano. Guillén con “*Los Motivos del Son*” (1931) inició un proceso de resignificación y aceptación positiva de lo negro como negro, que no necesita blanquearse, para contribuir con sus valores a la construcción de la cubanía. Resignificación radical y síntesis consciente de una construcción de identidad local o nacional que valora positivamente la diferencia sería lo que está a la base de la cubanía y la caleñía. Sobre las ideas de Guillén véase (Augier 1972; Melon [1970] 1994) y sobre la “síntesis” actual cubana véase De la Fuente (1998) y Guanche (1998).

racial que los oprimen sino que son altamente críticos de las variadas deficiencias, durezas y debilidades de su entorno físico y social. Pero —y ésta es la paradoja—ello no obsta para que desde su rincón barrial o residencial, quieran su ciudad, que aunque extraña y dura, sigue siendo seductora (Restrepo, M., 1997). Nadie, o muy poca gente, se va de Cali; en cambio muchos llegan, y los que llegan pronto se declaran, y son declarados, caleños.

Y no se trata de una mera adicción romántica; diría, al contrario, que se trata de un sano realismo que equilibra la crítica al entorno mordiente con el sueño por cambiarlo. La verdad, nos la dice, al estilo de Borges y Virginia Woolf, un relato de ficción. Fue para mí intrigante que un hombre común, de 25 años, del Distrito de Aguablanca, en una entrevista con destino académico sobre la caracterización de la ciudad a fines del noventa (Restrepo, M., 1997: 112), respondiera textualmente que “Cali es una ciudad que espera, pero no le abre las puertas a los desesperados”. La frase, atípica para un vecino cualquiera de barriada, es una cita literal de Andrés Caicedo en el cuento “Infección” de la serie Calicalabozo (Caicedo 1998); la forma completa de la frase dice: “Odio a Cali, ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados”. El cuento “Infección” es el exabrupto brutal de un caleño que llegó al punto de saturación del odio y la desesperanza: “...no dejo de odiar a nadie, a nada... sin excepción”. El relato había comenzado así:

“El sol. Cómo estar sentado en un parque y no decir nada. La una y media de la tarde. Camino, caminas. Caminar con un amigo y mirar a todo el mundo. Cali a estas horas es una ciudad extraña. Por eso es que digo esto. Por ser Cali y por ser extraña, y por ser a pesar de todo una ciudad ramera”.

Sin embargo, otro relato de la misma serie, “De arriba abajo, de izquierda derecha” cuenta cómo Mauricio, en la noche de la ciudad y a la orilla del río,

sobre el pasto verde y fresco, le dice a Miriam, mientras inicia una caricia, “Bonita la ciudad, no es verdad?”, y diciéndole que Cali era el sitio más hermoso del mundo, no se cómo fue que hizo, ah bruto, y en esa posición, y permitió que la boca de ella encontrara la suya, para no decirlo de otro modo mucho más confuso. No te pongas a echar carreta hombre: sencillamente abrí la boca y adelanté la lengua.

Y otro relato, “Los mensajeros”, dice que “ese caño que ves allí, es el río Cali, el río más hermoso del mundo”, que “en Cali todo el mundo está dispuesto nada más a que lo amen, eso lo sabe todo el mundo”; y el protagonista termina diciendo a su Lalita que desea regresar a la ciudad porque “regresar a Cali quiere decir encontrar la inmortalidad, eso ya lo sabemos.” La serie Calicalabozo concluye con el relato “Berenice”, la prostituta amada, del que extraigo este párrafo, que completa en el libro de relatos un alambique ambiguo, pero generalizado, que destila odio y amor por la ciudad:

“No sabemos a qué obedece tu presencia, pero estás allí, amor, totalmente desarraigada de lo que nos rodea, estás allí solamente para que podamos amar, dispuesta nada más a que nuestros cuerpos pataleen enfrascados en el tuyo y se revuelquen por turno o a un mismo tiempo en tus entrañas dulces y jugosas, y ya lo ves, estamos hablando de ti nuevamente, sabiendo que no se puede, que es imposible, pero no importa, nada importa, si total, hundimos la cabeza entre tus senos y chupamos tu pelo como si fuera apio, humedecemos íntegra tu piel para mordisquearla así, para sentirla dentro o debajo o encima de nosotros. Adivinamos lo que está sintiendo tu cuerpo cuando tus rodillas nos golpean, nos maltratan en su orden de que convirtamos todo lo que te pertenezca en una hermosa masa líquida, y veremos nuestras caras, retratadas allí donde sabes que está la palabra felicidad escrita de la manera más desconocida”.

Después de un juicioso repaso de las posiciones asumidas por entrevistados del barrio Siloé y del Distrito de Aguablanca con respecto a su barriada y a la ciudad como conjunto, el relato etnográfico de M. Restrepo (1997) concluye con lo que “todo el mundo sabe”: que hay identificación con el lugar propio, que la ciudad es seductora aunque rechaza, que se la quiere

y se la odia, o por lo menos que se la mira “allá”, y a distancia es deseada. Hay más identificación con la metrópolis en Siloé y menos en el Distrito en donde es muy claro eso de que “nosotros estamos aquí”, y “allá está Cali”. Posiblemente nos encontramos ante una función del tiempo de presencia inmigrante en la ciudad; de todos modos todos caleños quieren caminarla, y algunos, los más, la caminan: en bus, a pie, en bicicleta, moto o carro. No otra cosa había dicho el odiador de Cali en “Infección”: “Sí, odio a Cali, una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan..y piensan en todo, y no saben si son felices, no pueden asegurarlo”; caminantes que sin embargo terminan diciendo que el caño hediondo denominado “Río Cali” es el río más hermoso del planeta.

Conviene entonces que miremos, en esta última sección, cómo los caleños se apropian de su ciudad metrópolis, la que está más allá de los límites barriales y, específicamente, cómo parece que lo hacen con la rumba. Anuncié que la rumba parece ser en Cali espacio de inclusión, pero también, que con La salsa resultó ser un espacio de exclusión. Terminaré, entonces, mi exposición con sendas notas sobre estos dos opuestos enunciados.

Primero, la rumba como espacio de inclusión.

Preciso, para comenzar, que entiendo teóricamente por esta forma alterna de apropiación de la ciudad que asocio con la rumba. No se trata de beberse con la vista la ciudad-panorama o simulacro teórico, panóptico, a que se refiere de Certeaux (1996:103-122) cuando mira a Nueva York desde lo alto del World Trade Center. Es la apropiación otra, desde abajo, a partir del punto donde termina la visibilidad y comienza la extrañeza (Cali, ciudad extraña, como lamenta Caicedo).

Porque creo con Lefebvre (1978) y con muchos otros que lo siguen, que la ciudad es la objetivación material de un ente social muy dinámico, lo urbano, que es forjado, creado palmo a palmo, no simplemente consumido, por quienes de él se apropian; y lo hacen, precisamente, en el acto de creación. Más aún, con Viviescas (1999) creo que desde Cali, y en Cali, estamos participando de un inédito proceso planetario, el de la metropolización de la existencia:

“La conformación planetaria de la metropolización de la existencia individual y colectiva hacia el próximo siglo estaría necesariamente ligada a la perentoriedad de una refundación de la sociedad contemporánea como concepto y como realidad, y nuestro proyecto colombiano, y caleño, haría parte, así, de una perspectiva que ha empezado a ser asumida por el conjunto del orbe”.

Con este asunto de la rumba estoy tratando de mostrar, que aparte de la apropiación tan desigual hecha a la luz simbólica del día, en los campos laborales y de juegos de sobrevivencia, de poder, de prestigio, o de riqueza, sobre los que Urrea (2000), Barbary (2000), Velásquez (2000) han dado abundantes pruebas, existen modos alternos de apropiación, que son subversivos por cuanto son maneras heterodoxas de construir también, con el cuerpo danzante, el body politic centrado en la ciudad. Así retorno al tema de la salsa, para complementar la idea del subdirector de El País con que inicié la exposición: salsa y política sí riman, si miramos la salsa como instancia, históricamente lábil, de ese espacio otro, el de la apropiación subversiva por la rumba. Y si es por la rumba, y si es en Cali, lugar privilegiado de las epifanías del cuerpo, el body politic se apropia mediante el ejercicio danzante del body physic, de la hexis vibrante de sus hombres y mujeres mientras bailan.

Dije, hexis, término sin duda desconocido para muchos. Quiero insertar aquí un llamado breve sobre el importante tema de Cali como ciudad que privilegia la manifestación del cuerpo masculino y femenino como “estructura y porte” que expresa la cultura en el movimiento, en este caso hecho cadencia musical y erótica. Eso es hexis, concepto que tomo de Bourdieu (1980) y que aplico a la ciudad en un ensayo paralelo a esta ponencia¹¹. El otro concepto, de origen joyceano, es epifanía de los cuerpos, manifestación extática para quien los observa y disfruta. Dentro de

¹¹ El ensayo, que es parte de los materiales del Proyecto “Razón y Sexualidad” está en preparación y se llamará “Cali erótico y las epifanías del cuerpo masculino y femenino”.

la tendencia contemporánea a recuperar el valor simbólico del cuerpo, complemento del creciente valor mercantil que propician la moda, los body images y los body concepts, Cali aparece como un sitio digno de particular atención. Y, agrego, Cali parece deber este rasgo peculiar de su fisonomía, a sus hombres y mujeres de ancestro africano porque son ellos los que de modo particular han acentuado, en su cotidianeidad y en su disfrute, la importancia del cuerpo, de la danza, de la poliritmia, y de la música a ellos asociada (Losonczy 1997).

Decía que la ciudad se convierte en el espacio de las “conductas oscuras” de los “practicantes ordinarios de la ciudad”, como los llama de Certeaux (1996: 105): Wandersmänner; “caminantes” en la traducción artística y ficticia de Caicedo (1998); Muñoz (1998) ha escrito ya algo desde el punto de vista de la comunicación sobre los jóvenes como caminantes de Cali. Estos caminantes escriben un “texto urbano” sin poder leerlo, complementa de Certeaux. Invito, para perfeccionar la idea, a pensar la siguiente frase del autor francés, puesta en paralelo con la ya leída de Caicedo sobre Berenice :

“Esos practicantes [de la ciudad] manejan espacios que no se ven; tienen conocimiento tan ciego como en el cuerpo a cuerpo amoroso. Los caminos que se responden en este entrelazamiento, poesía inconsciente de las que cada cuerpo es un elemento firmado por muchos otros, escapan a la legibilidad. Todo ocurre como si la ceguera caracterizara las prácticas organizadoras de la ciudad habitada. (p. 105).

Vemos, entonces, que apropiarse de la ciudad es, -en la imaginería de estos autores (de ficción y de ciencia social) hijos varones de Occidente- como recorrer amorosamente un cuerpo de mujer: Berenice sería, en los relatos de Caicedo, la ciudad extraña pero amada por los caminantes cansados. Seguir esta línea de pensamiento –“*apropiación de Cali como de un cuerpo de mujer*”—nos daría para otra ponencia, pues no sólo las feministas reclamarían, sino otros que consideramos que también las mujeres tienen derecho, y lo están ejerciendo con la rumba, de apropiarse, como sujetos, de sus espacios, estratégicos y lúdicos. Como un abre bocas deo planteado, para futura crítica, una afirmación hecha por una socióloga, profesora de la Universidad, en los años 80 (Segura 1981):

“Ya en la salsa caliente, ya en la brisa refrescante, ya en la serena noche tropical o en la alocada fiebre de la Feria, Cali es la mujer”.

Y agrego, para volver al tema de hoy, que la literatura contemporánea sobre los cuerpos masculinos y femeninos (Csordas, Ed., 1994; Suleiman, Ed., 1985) insiste en que éstos –siguiendo la noción original de Barthes sobre texto-trabajo y textualidad—se pueden tratar a la vez como textos que expresan un sentido, pero también como escritores en el body politic de la ciudad. Esa es precisamente, la función de la rumba: servir de instrumento para que los cuerpos escriban, con su danza, en el body politic local.

Antes habíamos dicho que en la literatura contemporánea se habla de la danza, en especial de la danza moderna, como un “no-lugar” donde se forjan utopías. Debo hacer ahora la precisión teórica de que si acogemos esa idea, la rumba como “no-lugar de utopías”, el sentido de “no-lugar” es diferente del propuesto por Augé (1995) como lugares del anonimato. Es más apropiado decir que la rumba, como forma de música y de danza, es un “no-lugar” en el sentido propuesto por de Certeaux (1996): como espacio dinámico de prácticas urbanas, no mapa estático, sino itinerario activo de los Wandersmännner, de los caminantes de la ciudad de Cali: caminantes-danzantes que copan los intersticios del mundo-otro (el de Borges, Caillois, Huizinga, Duvignaud), el del ludus que brilla con luz diferente a la que rige los asuntos prosaicos de la luz del día.

Segundo, la rumba-Salsa como espacio de exclusión.

Reconozco que la que sigue es una interpretación valorativa, una toma de posición, frente a un hecho histórico del reciente pasado. Puede ser polémica, como usualmente lo son las posiciones en materia de exclusión, pero me parece que tiene sustento en la base argumental que he presentado. Vimos que la salsa fue una instancia que acogió Cali como expresión de su vivencia rumbera, y que hoy está en decadencia, para decir lo menos, sujeta al proceso de substitución por otros complejos también de procedencia exógena.

Voy ahora a exponer y sustentar brevemente mi hipótesis: se me ocurre pensar que el fenómeno de la salsa en Cali puede leerse como una instancia de exclusión racista; sí, de exclusión de complejos musicales dancísticos de origen africano Pacífico, tales como el currulao, el aguabajo, la juga, el mapalé, pues se prefirió otro, también africano y distante pero “de más categoría” llamado salsa.

Se me ocurre que Cali, del modo a veces inconsciente como se actúa ante los condicionamientos económicos, políticos, sociales y culturales, olvidó por un tiempo largo, digamos por tres décadas, esa maravilla de complejos musicales-dancísticos que aporta un conjunto de habitantes que son tan caleños como los cerros tutelares. A cambio, bajo los efectos hechizantes del mercantilismo de bienes culturales venidos de la “gran manzana”, acogió un complejo que tiene distantes raíces africanas, transformadas y digitalizadas. Aún más, los epígonos de la salsa hicieron tanto alarde de su adicción que han querido bautizar la ciudad con el pomposo nombre de “Capital de la salsa”. La pregunta dura es ¿por qué no “capital del Pacífico, con las implicaciones totales que ello tiene? ¿Será que Cali se avergüenza de sus propios negros? ¿Será que los voceros culturales y políticos locales no son conscientes de la discriminación subyacente, y del poder de estos fenómenos “no serios” para la constitución del body politic, como por ejemplo sí lo han sido los líderes políticos en la Cuba postrevolucionaria? O, lo que sería casi cínico, ¿sí son conscientes pero optan por una alternativa de conveniencia mercantil y racismo disimulado?

A pocos kilómetros de la ciudad, una numerosa población tan de ancestro africano como las otras poblaciones negras de América, que desde el comienzo de la ciudad estuvo estrechamente asociada a su formación, y cuyas avanzadas urbanas forman más o menos un tercio de la demografía local, ha producido maravillas de creación artística que, en sentir de los entendidos¹² no sólo están a la altura de las mejores creaciones del Caribe sino que conservan vivos los preciosos rasgos, hoy perdidos de la música colonial, y ofrecen peculiaridades en su estructura que le aseguran una vigorosa identidad. El maestro Guillermo Abadía, con motivo del III Festival de Música del Pacífico decía del Currulao¹³:

“El currulao es la más importante de todas las danzas de Colombia, por encima del bambuco. Es danza colectiva, una planimetría prodigiosa, una exteriorimetría magnífica, es decir como danza, es la

¹² Los entendidos hablan de “músicas hermanas”, y reconocen a cada una rasgos peculiares que tienden a perderse con la homogeneización mercantil. Véase los Nos. 59, 62, 64, 76, 77, 78, 85 y 86 de *La Palabra* sobre detalles acerca de esta música, y del Festival de Música del Pacífico “Petronio Alvarez”. Ulloa (1992) trae una relación detallada de la historia local de la salsa y otras músicas latinas en la ciudad, hasta los 80.

¹³ Entrevista a Guillermo Abadía, Separata de *La Palabra*, No. 86, sobre III El Festival de Música del Pacífico.

más completa que hay en Colombia; típicamente africana, además de conserva puro en el litoral Pacífico”.

Los músicos y productores de primera talla como Jairo Varela del Grupo Niche, Alexis Lozano del Grupo Guayacán, Antonio Arnedo productor de “jazz latino”, y el maestro Francisco Zumaqué coinciden todos en la apreciación de la riqueza, originalidad y potencialidad de estas creaciones de nuestro Pacífico. Algunos, como lo vimos en el caso de Varela, reconocen el valor original, pero optan por la conveniencia comercial, para sobrevivir como Grupo, continuar con arreglos digitalizados. Dejan a otros el

proyecto utópico de trabajar esa materia prima, adecuarla y tecnificarla para amplia circulación, e introducirla en el circuito de la World Music. Otros productores se debaten en la ambigüedad, y otros como el maestro Hugo Candelario González y su Grupo Bahía –ganador indiscutido de los Festivales de Música del Pacífico—manifiestan decisiones como ésta:

“En Bahía está muy claro que nunca vamos a prostituirnos en el sentido de buscar hacer lo más comercial para surgir rapidito, sin embargo, creo que hay un precio que pagar como en cualquier desarrollo musical donde haya transformación”.¹⁴

Debo reconocer que desde hace algún tiempo hay en algunos funcionarios y entidades culturales de la ciudad, como la Dirección de Cultura y Corfecali, y en uno que otro vocero cultural, plena conciencia de estas potencialidades y han asumido el reto. El ya mentado festival de música “Petronio Alvarez”, que lleva su tercera edición, es el inicio de un programa de política cultural que tiene ante sí tareas tan enormes como las que se propuso en Cuba hace cuatro décadas el Ministerio de Cultura frente a sus propias creaciones populares con resultados que ya comienzan a brillar.

Pero vuelvo al fenómeno de la curiosa exclusión en el inmediato pasado, porque todavía sigue vigente, a pesar de las tendencias contrarias arriba mencionadas, y porque –aunque dolorosa y delicada—es preciso airearla para saber qué hacemos al respecto. Peregoyo, el legendario compositor de Buenaventura, fue directo al punto en una entrevista de 1998 cuando dijo: “Para el resto de Colombia parece que sólo existiera la Costa Atlántica. Aquí

¹⁴ Entrevista en *La Palabra* No. 77, p. 17.

también hay música y hasta mejor que allá”¹⁵. La pregunta dolorosa, sin duda molesta para muchos, debe repetirse: ¿será que Cali se avergüenza de sus negros, los del Pacífico y suroccidente, y, ante la presión social y conveniencia mercantil, prefiere rendir culto a los ancestros africanos a través de las obras, modernizadas y digitalizadas, de otros negros, distantes, los del Caribe?

Insisto, aunque duela, en el punto de discriminación racial, que esta vez, distingue entre dos conjuntos de población negra colombiana, la del norte, los llamados “costeños” que pertenecen al Caribe y la del suroccidente. El diagnóstico sobre esta discriminación negativa no es mío, sino de un investigador británico, muy respetado, especialista en relaciones socioraciales de América Latina, y buen conocedor de la situación colombiana, Peter Wade (1993: 92); simplemente la repito y la pongo en la mesa como ayuda para analizar, en esta mesa, una instancia de los complejos mecanismos de exclusión social. Wade alude a la ambigüedad que se da en el paisaje semántico nacional con respecto a la condición de “negros” que tienen los costeños y los del suroccidente de este modo:

“Los costeños mismos, aunque conscientes de la presencia de negritud en su región, o en algunos casos identificándose a sí mismos como negros, no ven La Costa como una región negra de la misma manera como ven la Zona Pacífica, casa de los verdaderos negros”.

No tengo nada en contra del Caribe, al contrario, me parece una región cultural admirable por cantidad de razones y por la calidad de sus gentes, negras y no negras. Lo que me deja pensando es la extraña lógica mediante la cual Cali ha olvidado la riqueza de su propia producción cultural por ceder, dentro de la onda del consumismo mercantil, en favor de otro ideal cultural que en definitiva vino del norte aunque trae sabores, bastante transformados, del Caribe.

¹⁵ Entrevista en *La Palabra* No. 76, p. 14.

Y termino con la referencia a dos mecanismos, uno de acción institucional, y otro de construcción discursiva en el orden de la “cultura”, porque a mi juicio este tipo de acciones tienen efectos importantes en las dinámicas de inclusión-exclusión. El primero simplemente lo menciono, para dedicarme al segundo con mayor amplitud.

Primero, todos escuchamos y gustamos de las ocasionales emisiones por radio y TV de “música colombiana”. Hago la pregunta, usando la categorización semántica que trae Wade: ¿Al lado de las músicas andinas y llaneras han escuchado ustedes como parte “normal” de esos programas alguna creación “de negros”, sean de los “negros menos negros” de La Costa Caribe, sea de los “negros más negros” del Pacífico? Creo que hay base empírica para concluir que los ritmos afro, de la Costa y del suroccidente, con la innegable importancia que en ellos tiene la percusión en sus diversas formas y su entronque con las hexis locales, no hace parte del canon nacional de la “música colombiana” porque es “música de negros”. Creo que hay que reconocer, aquí entre nos, que las programadoras culturales de Cali, cuyos negros propios son de “los más negros”, no sólo son responsables de la misma actuación sino que los son de manera especial, por ser Cali quien es con respecto a la presencia histórica de sus negros.

Segundo, ronda desde hace algún tiempo, por efecto de la acogida que se tuvo aquí de los ritmos afrocaribeños, la idea de que “Cali es una ciudad caribe lejos del Caribe”. Un artículo de profesor Cruz Kronfly (1989) dedicado a difundir la idea, divide la ciudad en dos por el Río Cali y ubica al pueblo simbólicamente “negro”, por lo rumbero y lúdico, al lado sur del río, en las barriadas; el norte es de los blancos. Pero ese negro simbólico, por una transformación curiosa, no es el de Pacífico sino “el negro menos negro”, y distante, el del Caribe. En su obra Andrés Caicedo hace continua referencia a ese río como el “río de la ciudad”, el del socorrido cliché “sueño atravesado por un río”. Se me ocurre entonces que ese río-caño-sueño parece ser el del Cali-Caribe, imagen poética pero ideologizadora y excluyente, que se ha construido con poderosos símbolos, y que fue reforzada por La salsa, complejo que con antecedentes del Caribe fue diseñado en Nueva York.

A la imagen de la Cali excluyente, con su río-caño-sueño se le opone otro Cali incluyente, el de los negros “más negros” el cual tiene también su río propio, el Cauca, a donde concluyen los otros seis ríos de la ciudad, de los cuales uno es el “caño-río”. El Cauca para en Juanchito y apunta desde allí, como una saeta que busca el corazón, a la zona de El Calvario en mitad de la ciudad. A esa zona, en donde funcionó la original plaza de mercado, la llamaron “negra”, y dieron al término una innegable connotación despectiva (Carvajal, 1990). Si leemos con cuidado la historia de la traza urbana, la famosa t inicial que describe Vásquez (1982; ver Luna, s.f.) se desdibuja hasta hacerse irreconocible porque desde hace más de cien años se le insertó por su costado oriental un eje vial de primer orden que venía desde Juanchito: en las primeras décadas del siglo veinte por ese eje vial entraban numerosos inmigrantes, indios, negros, mestizos, y casi todas las mercancías de entonces, entre ellas el café que se exportaba luego por Buenaventura. El eje tenía en su trayecto notables “rumbiaderos” como hitos, y su tranvía demarcaba luego en la ciudad un circuito que encerraba El Calvario, la Plaza de Mercado y la zona de prostitución (Ulloa 1992).

El tranvía murió pero la carrera octava, concreción actual del eje, no perdió su fuerza y sigue uniendo el corazón de la ciudad con el Cauca por el “Puente de Juanchito”; éste, siguiendo la costumbre oficial, no popular, recibió por decreto el nombre de uno de los tantos próceres locales. Ese puente, el “de Juanchito”, no el “de Carlos Holguín”, fue cantado en salsa por el Grupo Niche y se me ocurre que sirvió de paradigma, no sé si de modo consciente, para el proyecto El Puente de Alvaro Restrepo, que instaura posibilidades bellas, en danza contemporánea, para la epifanía corporal de nuestros hombres y mujeres. ¿Será que por este nuevo puente, que une a Cali con su río nutricio, con su música, con sus cuerpos, y con sus propios negros, llegará danzando currulao la “caleña” que debemos construir?.

Creo que contamos con suficientes elementos para preguntarnos si todavía puede sostenerse de manera inocente, o cínica, la campaña de “Cali, capital de la salsa”, o si es tiempo ya de iniciar una campaña total a favor de “Cali, capital del Pacífico colombiano”.

Llevar esta nueva campaña hasta consecuencias concretas en el orden de actuaciones de política cultural y educación popular es, a mi juicio, la mejor manera no sólo de obviar el deslizamiento de la ciudad hacia la inconsciencia del racismo, de la banalidad y el prosaísmo, sino de sentar bases sólidas para una "caleña" que por definición es inclusiva, no exclusiva de sus, por fortuna, variadas tradiciones culturales.

Apreciados amigas y amigos: como ven, creo que tenemos argumentos de sobra para decir que, en definitiva, "salsa y política sí riman."

Bibliografía

AUGÉ, M. (1995) *Los "no lugares": espacios del anonimato*. Barcelona: Editorial Gedisa.

BARBARY, O. *Mesure et réalité de la segmentation socio- raciale: une enquête sur les ménages afrocolombiens à Cali*. Manuscrito. Cali: Proyecto Cidse-IRD.

BORGES, J. L. (1974a [1932]) *Avatares de la tortuga*. Discusión. Obras completas. Buenos Aires: Emecé Editores.

(1974b [1932]) *Nota sobre Walt Whitman*. Obras completas. Buenos Aires: Emecé Editores.

(1974c [1932]) *Flaubert y su destino ejemplar*. Obras completas. Buenos Aires: Emecé Editores.

(1983 [1949]) *Nathaniel Hawthorne*. En J. L. Borges, Nueva antología personal. Buenos Aires: Editorial Bruguera.

BOURDIEU, P. (1980), *Le sens pratique*. Paris: Les Éditions de Minuit.

CAICEDO, A. (1998) *Calicalabozo*. Bogotá: Editorial Norma.

CARVAJAL, A. (1990) *La Zona Negra de Cali*. Trabajo de Grado en Sociología, Programa de Sociología Pregrado, Universidad del Valle, Cali.

CIDSE, (Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica), (1999)

Patrones sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali. Documento para el Banco Mundial. Cali: Universidad del Valle.

CRUZ, F. (1989) *Cali, Ciudad Caribe lejos del Caribe*. Gaceta (Colcultura)4:29-32.

DANIEL, Y. (1995) *Rumba: dance and social change in contemporary Cuba*. Bloomington, Ind.: Indiana University Press.

DE CERTEAUX, M. (1996) *La invención de lo cotidiano: 1, artes de hacer*. México, D. F.: Universidad Iberoamericana.

DELGADO, A. (2000) *La muerte de La salsa* (<http://www.descarga.com/cgi-bin/db/archives/Article19?tlsoKGTu.;120> // may0100)

DUVIGNAUD, J. (1980) *El juego del juego*. México: Fondo de Cultura Económica.

ESCOBAR, J. *Salsa e identidad en Cali*. Ponencia en la Mesa Redonda “La salsa al Debate”, Departamento de Estética y Oficina de Extensión Cultural, Universidad del Valle, febrero 23 de 2000.

HAWTHORNE, N. (1961 [1859]) *The marble faun: Or the romance of Monte Beni*. New York: Penguin.

(1979 [1850]) *The scarlet letter*. New York: Dell Publishing Co.

HOLM-HUDSON, K. (1996) *John Oswald's Rubayat (Elektrax) and the politics of recombinant Do-Re-Mi*. Popular Music and Society 20(3): 19-38.

JARAMILLO, M. M., ROBLEDO A. I. y F. M. RODRÍGUEZ-ARENAS *¿Y las mujeres? Ensayos sobre literatura colombiana*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

LEFEBVRE, H. (1978) *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Ediciones Península.

LOSONCZY, A. M. (1997) *Du corps-diaspora au corps nationalisé: rituel et gestuelle dans la corporeité négro-colombienne*, Cahiers-d'Etudes-Africaines 37, 4(148), 891-906.

LUNA, M. s. f. *De Cali colonial a la Cali de 1960: los nuevos ejes de organización urbana y social de Cali; selección y criterios de una tipología cultural*. Cali: Cidse, Documento No. 3.

MATHEWS, M. V., and J. R. PEIRCE (1987), The computer as a musical instrument. *Scientific American* 256: 126-134.

MUÑOZ, S. (1998), Visiones de una joven en la urbe. *En H. J. Cubides et al., Eds., Viviendo a toda: jóvenes territorios culturales y nuevas sensibilidades*. Bogotá: Universidad Central, Siglo del Hombre, Editores.

ORTIZ, F. (1993 [1936]) *Etnia y sociedad*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

PACINI, D. (1998) Dancing with the enemy: Cuban popular music, race, authenticity, and the world-music landscape. *Latin American Perspectives* 25 (3): 110-127.

RESTREPO, L. G. *Se la van a tirar*. *Diario El Pais*, 27 de noviembre, p. A4.

RESTREPO, M. (1997). *Cali cívica: la heterogeneidad de una imagen*. Trabajo de Grado en Sociología, Programa de Sociología Pregrado, Universidad del Valle, Cali.

SEGURA, N. (1981) *Cali: una Sultana en vías de modernización*. *Boletín Socioeconómico* (Cidse, Universidad del Valle) 5: 36-41.

STERN, M. (1965) Introduction. *En N. Hawthorne, The house of the seven gables*. New York: Viking Penguin.

TAYLOR, C. *Synthesising the sound of music*. *New Scientist* 132 (1800): 37-40.

ULLOA, A. (1992), *La salsa en Cali*. Cali: Ediciones Universidad del Valle.

URREA, F. (2000) *Relaciones interraciales y clases en la construcción de ciudadanía: el caso de Cali* (Colombia). Ponencia presentada en el simposio "O desafio da diferença: articulando gênero, raça e classe", Salvador Bahía, abril 9-12 de 2000.

VALDIVIA, L. (1992) *Economía y espacio en el Valle del Cauca 1850-1950*. Cali: Centro Editorial de la Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.

VÁSQUEZ, E. (1982) *Historia del desarrollo urbano de Cali*. Cali: Editorial de la Universidad del Valle. *Historia del desarrollo histórico y urbano en Cali*. Boletín Socioeconómico (Universidad del Valle) 20: 1-28.

VELÁSQUEZ, F. *Ciudad y participación*. Cali: Editorial Universidad del Valle. (2000). *Exclusión social y política urbana: a propósito de Cali*. Ponencia para el VII Coloquio de Sociología, Universidad del Valle, Cali, Mayo 3-5 de 2000

VERNA P. (1994) *The ghost in the machine*. Billboard 106: 204-212.

VIVIESCAS, F. *El siglo XXI, el reto para la ciudad colombiana: un contexto para pensar a Cali*. Ponencia en el simposio "Pensar Cali: contextos urbanos", 17-19 de noviembre de 1999. Cali: Bellas Artes, Entidad Universitaria.

WADE, P. (1993) *Blackness and race mixture*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.

WATROUS, P. (2000) *Eye of the Storm: The Artist and Cuba's Music Industry* (The Cuban music industry and its developing relationship with the capitalist world). <http://www.descarga.com/cgi-bin/db/archives/Article3?tlsokGTu::162//may0100>

WOOLF, V. (1990 [1935]) *A room for one's one*. New York: Harcourt Brace.

(1970 [1941]) *Between the acts*. New York: Harcourt Brace.

(1994 [1932-1941]) *Diario íntimo, III* (1932-1941). Barcelona: Editorial Grijalbo.

PROCESOS SOCIALES Y VIOLENCIA EN COLOMBIA: EL CASO DE URABA

Carlos Miguel Ortiz Sarmiento¹

La subregión interfronteriza conocida con el nombre de Urabá, es producto de una migración masiva bastante reciente que cuenta con escasos cuarenta años. Los hechos preliminares de esa migración fueron la puesta en funcionamiento de la carretera de Medellín al mar (al puerto de Turbo) y la iniciación del cultivo de banano para exportar en fincas de propietarios colombianos, organizado en sus inicios con préstamos, infraestructura y comercialización de la multinacional "Frutera de Sevilla".

Sin embargo, los primeros procesos de colonización remontan mucho más atrás. Caribeños de Cartagena de Indias y de su área rural de influencia, mestizos de las sabanas del Sinú y negros de la olvidada región occidental del Chocó habían sido colonizadores a comienzos de siglo y habían roturado tierras tras los pasos de las compañías extranjeras madereras y comercializadoras de tagua y de raicilla: la Emery de Boston, el consorcio Albingia de Alemania y otras. A la sombra de este comercio se fundaron muchos caseríos, que hoy persisten sumados a los caóticas agrupaciones urbanas que, desde los años sesenta, crecieron desorbitadamente en el eje de atracción bananero.

¹ Profesor del Departamento de historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

El banano, que sigue siendo el sector más dinámico de la economía (legal) de la subregión, ocupa menos de 30.000 hectáreas² de las 1'052.500 hectáreas que suman los once municipios del Urabá antioqueño, entre los cuales sólo cuatro son bananeros: Apartadó, Carepa, el área norte de Chigorodó y la zona intermedia de Turbo.

Grandes haciendas ganaderas (ganadería extensiva) predominan en el norte y el sur del corredor bananero: en Chigorodó, en el extremo norte de Turbo, en Arboletes y en los dos extensos municipios del Darién en el Chocó, Unguía y Acandí; en algunos municipios del norte de Urabá, como Necoclí y San Pedro de Urabá, la ganadería aún se halla sustentada en fincas medianas. Cerca de 300.000 hectáreas en total se encuentran ocupadas con ganadería extensiva en el conjunto de los once municipios; 100.000 hectáreas se dedican a la agricultura que comprende, en unos lugares, los cultivos de banano en los municipios más dinámicos y populosos y, en otros, la economía campesina típica de la colonización.

El proceso de concentración ha sido muy notorio, tanto en el área de las grandes haciendas ganaderas como en el corredor bananero que se extiende en dirección occidental, desde la carretera hasta el mar. En el cultivo del banano se mantiene, en general, como unidad de producción, la finca de 100 a 150 hectáreas y la concentración consiste en la apropiación de varias fincas por parte de los grupos empresariales.

La concentración ganadera, al igual que la bananera, es el resultado de procesos que se iniciaron a comienzos de los años sesenta. De las 50 mayores fincas bananeras de Turbo, 31 provienen de baldíos titulados sólo en el primer quinquenio de los sesenta, pese a que la municipalidad data de 1847. En la actual jurisdicción de Apartadó la titulación de baldíos, en que se han organizado 26 de las 35 mayores fincas, es de la misma época, en un momento en que apenas si existía Apartadó como caserío.

² En 1997 (año de terminación de nuestra investigación) el dato exacto era de 28.000 hectáreas, correspondientes a 299 predios que, desde el punto de vista de la propiedad, se aglutinaban según grupos empresariales. Desde entonces hasta hoy esta cifra ha podido variar algo pero no considerablemente, dados los controles del gremio (AUGURA), sobre los topes del área cultivada.

En la zona dedicada hoy en día a la ganadería las titulaciones son un poco más viejas, aunque no se remontan más allá de los años cincuenta y cuarenta. El proceso continúa todavía y estamos asistiendo, paralelamente, a una acentuada concentración de la cual han sido beneficiarios los capitales originados en el tráfico de cocaína en los años ochenta y noventa. En Arboletes una sola firma, cuyos principales socios son narcotraficantes que se acogieron a la "política de sometimiento" del gobierno Gaviria, compró 48 grandes haciendas entre 1981 y 1989³, simultáneamente con la adquisición de muchas otras en distintas zonas del país como el Bajo Cauca Antioqueño y el Magdalena Medio.

En el proceso de concentración del banano han sido grupos empresariales de Medellín y Bogotá, principalmente, los que han ido comprando paquetes de fincas; lo han hecho, igualmente, algunos grupos endógenos cuyas fortunas iniciales dicen provenir del contrabando en Turbo y del negocio de la marihuana de los años en que éste tuvo su auge en Urabá, es decir, durante los últimos años de la década del setenta.

La extracción andina de los accionistas bananeros, tratése de los refinados hombres de negocio antioqueños y bogotanos o de los "nuevos ricos" raizales, contrasta con la pluralidad étnica de los grupos colonizadores que se sucedieron a lo largo del siglo y que, como hemos dicho, eran costeños (caribeños), negros afro-chocoanos y andinos (sólo desde finales de los años cincuenta). Esta pluralidad étnica sin integrar, que no se refleja en la concentración pero sí en la diversidad cultural de los colonos (e incluso de los obreros bananeros de los últimos cuarenta años), puede ser un factor de fragmentación y atomización sobre el cual podría descansar una parte de la violencia⁴.

³ Consulta de los libros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, actividad desarrollada en el marco del proyecto de investigación "Violencia contemporánea en Colombia 1955-1990: el caso de Urabá", a cargo de Carlos Miguel Ortiz y con la asistencia de John Jaime Correa.

⁴El libro que contiene los resultados de la referida investigación, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes 1955-1990 (Santafé de Bogotá, ICFES, 1999) abunda en citas de documentos que reflejan bastante bien la violencia interétnica, al menos la que se expresa de manera verbal. Los alcaldes del interior enviados por Medellín para gobernar localidades de Urabá de mayoría negra o sinuana utilizan muchas veces apelativos de "animales", "bestias", etc., para referirse a los gobernados que no ven como pertenecientes a lo que ellos consideran su "raza" (raza mestiza, con pretensiones de blanca).

La anterior afirmación no quiere decir que los hechos en los que finalmente se exterioriza la violencia tengan una naturaleza claramente interracial; se trata, más bien, de afirmar que la fragmentación, como imposibilidad de una identidad social construida pluriétnicamente y políticamente diversificada, se expresa en las dos direcciones que toma la violencia:

Una, que lleva a la proliferación del homicidio basado en múltiples y banales móviles, en el que baten record algunos municipios de la región desde el comienzo de su existencia (Apartadó, Chigorodó, Turbo);

Otra, que favorece el fortalecimiento de los actores organizados de violencia (guerrilla, fuerzas regulares, paramilitares) sobre un fondo de miedo y carencia de identidad.

La guerrilla irrumpe en los años sesenta en un conglomerado de gentes de diversos orígenes, amorfo, con un gran espíritu de osadía y aventura, donde impera la justicia privada por absoluta ausencia de la estatal, y en una aldea como Apartadó, donde hay muchos empleos que ofrecer pero no existen instituciones a las cuales acudir, donde se presenta un elevado número de homicidios los fines de semana, y donde hay más prostitutas (4000 aproximadamente) que médicos, maestros o jueces.

La guerrilla de aquella época era más politizada que la de ahora y tenía más credibilidad; llevaba a cabo un trabajo partidista de politización en lugares apartados como estos hasta el punto de que hoy en día es difícil distinguir, en esas veredas y caseríos, a los guerrilleros de los comunistas; el Ejército utiliza esta confusión cuando se le envía a defender las fincas bananeras. La politización del Ejército en la guerra Este-Oeste ha ayudado a convertir los enfrentamientos locales en batallas de una guerra planetaria y a aumentar su parcialidad.

La guerrilla de los años sesenta y setenta llegaba, a estos territorios lejanos, ofreciendo funciones propias de la acción estatal: hacer justicia a su modo; prevenir delitos como el abigeato (tan frecuente); combatir el consumo de droga; castigar a los infractores muchas veces con la aplicación unilateral y cruel de la pena de muerte; reducir los homicidios del ámbito privado aunque aumentarían los que eran resultado de sus propios requerimientos de permanencia y desarrollo.

No hay que creer que sólo eran los colonos pobres los que apoyaban la presencia guerrillera; no pocos hacendados, ante la proliferación del delito y de la inseguridad, y la lejanía e ineficacia de las instancias estatales, decidían colaborar financieramente con cuotas periódicas o circunstanciales a cambio de su seguridad. Los guerrilleros, por su parte, se detenían cada vez menos a examinar éticamente la proveniencia de las contribuciones, a la luz de sus criterios políticos, y ponían, cada vez más, el criterio económico por encima de todo (sobre todo en los años ochenta y noventa), hasta tal punto que resultaban protegiendo sin reato a poderosos hacendados que les garantizaran ingresos de consideración.

El Ejército y la Policía estaban sometidos a la misma lógica y se movían, más que por requerimientos institucionales, por la presión coyuntural de los políticos de Medellín o de Bogotá en la defensa de los intereses particulares, principalmente los de los bananeros. Se llegó a conocer, incluso, una especie de "vacuna" del Ejército consistente en cuotas periódicas pagadas por los empresarios por vía personal, al margen de los impuestos.

La "privatización" de la función pública de los cuerpos armados y de las actividades de los funcionarios oficiales conduce a la corrupción que se incrementa con el agigantamiento de los poderes privados resultado de la acción del narcotráfico, especialmente en los puertos de embarque de droga; favorece la complicidad con los grupos armados irregulares, los grupos paramilitares, y la infracción oronda de las normas constitucionales y legales por parte de los

agentes del Estado que, en la misma lógica de la privatización, se consideran ruedas sueltas hasta para delinquir (se conocieron casos de policías que en las noches, vestidos de civil, realizaban atracos a sucursales bancarias en pueblos vecinos).

Hasta hace unos años era frecuente encontrar, no sólo entre los soldados sino entre la oficialidad, la mentalidad de que en la guerra (y en este caso se trataba de la guerra sucia) todo estaba permitido para lograr el éxito. Este principio chocaba con el incómodo y entorpecedor "síndrome de la Procuraduría", como la oficialidad bautizó el efecto inhibitorio de la vigilancia del Ministerio Público sobre los derechos humanos durante las tareas

encomendadas al personal militar. Urabá es de las zonas con más denuncias sobre violación de derechos humanos por agentes uniformados, según fuentes de la Procuraduría; dos de sus municipios, Apartadó y Arboletes presentan, en distintos años, las cifras más altas de violaciones.

En esta lógica de rebatiña entre los poderes, en la cual las fuerzas regulares quedan atrapadas, los conflictos laborales de las empresas bananeras inherentes a la relación capital-trabajo en cualquier país del planeta y a fortiori en los del Tercer Mundo, pasan por la violencia, es decir, se traducen en homicidios en dos modalidades: el homicidio perpetrado contra dirigentes y activistas (aquel que el trabajo con fuentes del DAS de Echandía, Escobedo y Queruz registra como "asesinatos" o sea violencia de actores organizados⁵); y el homicidio anónimo, que se ensaña contra administradores de fincas, capataces y jornaleros rasos. Ambas

modalidades de homicidio han proliferado en los núcleos mayores de población bananera. El llamado homicidio anónimo (la segunda modalidad) hace parte, aunque no exclusivamente, de las altas cifras de homicidio que caracterizan a estos municipios aunque, como ya se dijo, las altas tasas de homicidio preceden al banano y a la llegada de las tres principales clases de actores violentos organizados.

⁵ Los cuatro municipios bananeros de Urabá, a saber Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó, hacen parte de los municipios de mayor violencia por "asesinatos", en primer rango tanto en el período 1987-1989 como en el de 1990-1992, en la clasificación de Echandía-Escobedo-Queruz (*Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Santafé de Bogotá, FONADE y Universidad Externado de Colombia); simultáneamente la proliferación de homicidios no selectivos, los hace figurar en las listas de violentos del libro de Cubides, Olaya y Ortiz, *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*: Apartadó, Turbo y Chigorodó, en la categoría de "muy violentos", Carepa en la de "relativamente violentos". Apartadó y Chigorodó, junto con Tarazá y Segovia en Antioquia, Muzo en Boyacá y Valle del Guamuez en Putumayo, constituyen los seis municipios de más elevada tasa de homicidios en todo el país, con índices que superan en mucho, no sólo las tasas nacionales, sino las tasas de los departamentos con más homicidios (Cfr. Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz, *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*, Santafé de Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, CES, 1998). No siempre coinciden, como en los municipios bananeros, altos rangos por "asesinato" con altos rangos por homicidio. Por ejemplo, los municipios antioqueños de Carolina, Gómez Plata, Don Matías, hacen parte del mapa de "asesinatos" de 1990 a 1992, pero, aunque registran sus homicidios, no sobresalen bajo este criterio ni como "muy violentos" ni como "relativamente violentos". Casos como los de marras parecen explicarse por el advenimiento reciente del narcotráfico a localidades cuya historia no ha sido antes particularmente violenta.

Pese a que la cadena de homicidios de la gente común y corriente se presenta, finalmente, en el marco de un enfrentamiento a muerte entre actores organizados, que tal vez no tendría la misma intensidad sin su presencia, esto no quiere decir que todos obedezcan a planes controlados, de uno cualquiera de los tres actores; sino que ese enfrentamiento a muerte crea las condiciones y el pretexto para hacer valer, por la fuerza, todo género de pretensiones atomizadas y dispersas, que resultan así mezcladas, de modo confuso, con las reivindicaciones supuestamente colectivas, políticas o sindicales. Dicho en otros términos, la disolución de lo colectivo, al amparo de la violencia, se traduce en un sinnúmero de estrategias individuales o, dicho más descarnadamente, en una forma más del "rebusque" a través del recurso de la muerte y a la sombra de la violencia política y de la confrontación entre sus actores.

Como si fuera poco a los homicidios mencionados se suman las muertes de civiles inermes a causa del enfrentamiento entre grupos guerrilleros, comprometidos en una verdadera guerra de territorios. La primera de las organizaciones guerrilleras que se hicieron presentes en la zona fueron las FARC. Desde la segunda mitad de los años sesenta se pueden rastrear los gérmenes de su presencia, en lo que fueron inicialmente las llamadas "autodefensas" campesinas del Partido Comunista, grupos armados con tareas de "limpieza" de cuatrerros y de provisión de finanzas. Estos grupos se formaron en el sector rural de Chigorodó, en veredas de Apartadó y del norte de Turbo.

Pero es en 1973 cuando, en cumplimiento de directrices de la IV Conferencia de las FARC, se constituye formalmente el primer núcleo del V Frente en el corregimiento de San José de Apartadó, localidad que hoy sigue representando una referencia fundacional. Debido al arraigado proceso de politización que precedió la implantación guerrillera, dicha presencia no ha tenido las expresiones de violencia (homicidio y secuestro), que conocemos en otros lugares de la región. Su base de apoyo fueron los colonos desplazados de la franja mediterránea hacia el piedemonte por los inversionistas bananeros (San José de Apartadó está al pie de la serranía de Abibe).

Desde este corregimiento el V Frente llevó a cabo un gran proceso de expansión, que no conoció sino el límite que le puso al norte, desde comienzos de los ochenta, la otra guerrilla fuerte (el antiguo EPL) en la frontera bananera de Turbo, en un corregimiento llamado Currulao, por eso mismo supremamente violento. Hacia el sur el V Frente no sólo se extendió hasta Mutatá y al lejanísimo municipio de Murindó, sino que traspasó los límites departamentales logrando controlar el Darién chocoano (en límites con Panamá); al sur de Urabá, logró extenderse a varios municipios del occidente del departamento de Antioquia. El crecimiento dio lugar al desdoblamiento de los Frentes 18, en el departamento de Córdoba en 1982, y posteriormente del 35 y del 34, en la región del Chocó, en 1985.

Si San José de Apartadó fue el foco de expansión del V Frente en los años setenta, la ofensiva de los ochenta y los noventa se sustenta especialmente desde el populoso corregimiento de Belén de Bajirá, al sur de Urabá, que es la avanzada de la colonización presente. A diferencia del foco original, en Bajirá si se ha visto que el crecimiento guerrillero se traduce en un incremento notorio de los homicidios, muchos de ellos fruto de las tensiones internas entre los militantes y, en especial, entre las "milicias", que se entregaron a una rebatiña por el control local. Este aumento del homicidio no pareció preocupar mucho al Ejército ya que, supuestamente, no ponía en jaque la seguridad estatal ni los intereses particulares de los influyentes bananeros.

La avanzada de las FARC en Urabá se comenzó a presentar en un momento de enorme decaimiento de las otras organizaciones guerrilleras. El EPL había intentado, sin éxito, penetrar en las mismas áreas rurales durante los años sesenta. El resurgimiento de esta organización en Urabá, a comienzos de los años ochenta, se hizo, precisamente, a partir de una disidencia de las FARC encabezada por el comandante cuyo alias era "Bernardo Gutiérrez", hoy "reinsertado" y exsenador de la República. El forcejeo entre las dos guerrillas comenzó por la búsqueda de la penetración en los organismos sindicales del proletariado agrícola bananero (SINTAGRO y SINTRABANANO), por el reclutamiento de votos para sus respectivas alas políticas legales y por el control de territorios. Hasta 1985, al menos, esta guerra aportó sus cifras a la ya ascendente curva de homicidios de los municipios bananeros.

Sindicalistas o simples obreros simpatizantes de uno y otro bando fueron sacrificados y, en un acuerdo tácito de las dos guerrillas, las hicieron sumar a las cifras de víctimas, ya de por sí significativas, de los grupos armados anticomunistas y de los grupos paramilitares.

El tercero de los grandes actores de violencia en Urabá son los grupos paramilitares. Configurados con alto perfil desde la época del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se constituyeron con el fin de intimidar con la violencia a los presuntos simpatizantes de las guerrillas, que cada vez más abarcaron a todos los adherentes de corrientes políticas de izquierda. Paradójicamente dichos grupos se fortalecieron durante un gobierno que planteaba un viraje hacia el diálogo y la negociación para el tratamiento del problema guerrillero.

Las primeras masacres -desafortunado signo de estos grupos- que se presentaron en Urabá se atribuyeron a paramilitares llegados de la zona del Magdalena Medio: las matanzas de Honduras y La Negra, en 1988. Luego ocurrió la de La Mejor Esquina y, entre 1989 y 1990, las de los corregimientos de Pueblo Bello en Turbo, con 42 víctimas, y Gilgal en el municipio de Unguía (Darién chocono).

En las masacres de Pueblo Bello y de Gilgal el protagonismo ya la pertenece a un grupo paramilitar de la propia zona, "Los Tanelas", al mando de Fidel Castaño, hermano del actual jefe de las "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC). Este ganadero, que en la época gozaba de estrechos nexos con las comandancias del Ejército y la Policía en Urabá, Chocó y Córdoba, mantuvo inicialmente un modus vivendi con la organización de narcotraficantes de Medellín mientras vivió el capo Gonzalo Rodríguez Gacha, pero poco después surgieron enfrentamientos que lo llevaron a convertirse en el enemigo número uno del capo Pablo Escobar.

Hoy en día los paramilitares han avanzado increíblemente en los municipios de Urabá, incluso en territorios que se consideraban inexpugnables de la guerrilla; han llegado a tener control, no sólo de Turbo sino de Apartadó, otrora fortín electoral de la "Unión Patriótica", nucleada por el Partido Comunista, de Riosucio en el Darién chocono y de gran parte de Mutatá, que en su frontera de colonización ha sido el nicho ecológico de los hombres del V Frente de las FARC.

Uno de los efectos, quizá el más perverso de esta guerra territorial que actualmente libran los paramilitares y las FARC en Urabá, es el desplazamiento de la población que, huyendo de uno u otro bando, llega a pequeñas poblaciones primero, más tarde a las ciudades para, después de haber abandonado sus escasos haberes, engrosar las filas de los indigentes.

HOBBS, EL CONFLICTO Y LOS JUEGOS EVOLUTIVOS

Boris Salazar¹

Los que interpretan el Estado hobbesiano de guerra de todos contra todos como una posibilidad situada en el pasado se equivocan. El estado de guerra de todos contra todos hace parte del presente porque no es más que la consecuencia lógica de una situación estratégica que puede concretarse en cualquier momento. Si esta premisa es aceptable (y es muy probable que muchos la encuentren equivocada, cuando no repugnante), los poderes analíticos de la teoría de Hobbes no se aplicarían tan sólo a aquellas épocas sangrientas, en las que "la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta" (Hobbes, 1994, 108), sino a toda situación presente en la que las condiciones estratégicas sean similares a las postuladas por Hobbes. Este artículo pretende aplicar el análisis hobbesiano del estado de naturaleza al conflicto armado colombiano. Intenta hacerlo en el contexto de los juegos evolutivos y no en el de la racionalidad sustantiva propia de la teoría económica contemporánea. Las razones de esta elección, espero, quedarán claras en la exposición que sigue.

Los argumentos de Hobbes

En el capítulo 13 de *El Leviatán* pueden encontrarse las premisas y las conclusiones de lo que hoy, en forma anacrónica, podríamos llamar el modelo estratégico de Hobbes. Trataré de presentar sus premisas en forma de proposiciones:

1. Todos los hombres son iguales.
2. Todos desean sobrevivir, poseer bienes y mantener o agrandar su reputación.
3. Cada hombre sabe que los otros saben que él conoce estas premisas.
4. Cada hombre elige, de acuerdo a lo que sabe, una acción apropiada a las premisas que describen la situación en la que se encuentra.

¹ Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. El autor le agradece a Rodrigo Romero varias conversaciones sobre Hobbes, a María del Pilar Castillo por sus observaciones precisas a una versión anterior de este borrador, y a los asistentes al grupo de Teoría Económica del Departamento de Economía de la Universidad del Valle por sus observaciones.

5. La acción más apropiada, en este contexto, es el ataque anticipatorio, pues cada uno conoce que, dadas las premisas anteriores, el otro sabe que la única acción apropiada es la de prevenir los ataques de los otros atacando primero.
6. El dominio público de la estrategia anticipatoria debe conducir a un estado de equilibrio: el estado de guerra de todos contra todos.

¿Cómo se llega al estado de guerra de todos contra todos? En Hobbes no hay un relato o un proceso que dé cuenta de cómo, a partir de las premisas expuestas, el estado de guerra se hace inevitable. Y no lo hay porque Hobbes optó por dotar a los individuos de su teoría de racionalidad sustantiva. Todo lo que hemos dicho ocurre, entonces, en la cabeza, o en las mentes, de los hombres comprometidos en la situación estratégica descrita. Con más precisión, ocurre en la mente del investigador que piensa, como Hobbes, desde la racionalidad sustantiva. Lo único que requiere es tener claras las premisas iniciales y proceder, de acuerdo a la lógica deductiva, hasta obtener todas las consecuencias. El que así busque deberá encontrar una única solución o estrategia superior. En el caso del estado de naturaleza esta estrategia superior es la anticipación activa.

Pero esta interpretación no es la única. David Gauthier (1990), uno de los más reconocidos especialistas contemporáneos en Hobbes, sugiere una interpretación alternativa. La pregunta que él se plantea es la misma: ¿Cómo puede justificarse, en forma racional, el estado de naturaleza de Hobbes? A diferencia de Hobbes, Gauthier recurre a un relato, y a un relato lineal con un comienzo y unos eventos que se suceden después de él en forma inevitable. El comienzo de Gauthier es un estado en el que los hombres descubren que los medios para sobrevivir son escasos. El autor no aclara si se trata de medios económicos o de medios de defensa, o de ambos. Me inclino por la segunda opción. Si los medios para asegurar la preservación de los individuos son escasos, estos tendrán que competir por ellos. Al hacerlo iniciarán un conflicto que puede generalizarse. Si así ocurre, tendremos el estado de naturaleza o de guerra de todos contra todos, en el que la estrategia superior es la anticipación de las acciones agresivas de los otros. Este relato, tan natural, presenta, sin embargo, varias dificultades.

La primera es que transcurre por una vía distinta a la de la lógica deductiva que Hobbes eligió. El relato de Gauthier supone un origen que debería conducir al estado de naturaleza, pero que, por sí mismo, no tienen por qué conducir a él. Supongamos que los mismos individuos hubieran decidido agruparse para compartir los medios de defensa escasos que tenían a su disposición. ¿Habría desembocado todo en el estado de guerra de todos contra todos? No necesariamente. El arribo al estado de naturaleza en Hobbes es consecuencia de su ejercicio lógico y de las fuertes premisas postuladas, no de algún relato plausible acerca del origen más realista de esa situación. Elegir la vía del relato, en lugar de la vía de la lógica, cambia las condiciones del problema y las consecuencias que se pueden derivar de él. La segunda es un corolario de la anterior. La argumentación de Hobbes no requiere de ese tipo de relato. Se trata de una argumentación lógica, que parte de unas premisas muy fuertes y de suponer la racionalidad de los individuos involucrados. El *Leviatán*, en estricto, puede leerse como una construcción lógica que conduce, en forma transparente e inevitable al Estado absoluto. Para lograrlo, Hobbes no sólo no requirió de ningún relato, sino que, en forma deliberada, los excluyó de su exposición. Y lo hizo porque había elegido otra forma de exposición y otra forma de alcanzar el conocimiento (la forma que él llama ciencia en el capítulo 5 de el *Leviatán*). Esa forma es la de la razón que calcula y que procede a través de un orden riguroso:

"(L)os lógicos nos enseñan lo mismo en las secuencias de palabras, añadiendo dos nombres para componer una afirmación, y dos afirmaciones para hacer un silogismo, y muchos silogismos para hacer una demostración; y de la suma, o conclusión de un silogismo, sustraen una proposición para hallar la otra (...) En resolución, que en cualquier orden de cosas en que hay lugar para la adición y la sustracción, hay lugar para la razón; y allí donde no hay lugar para la adición y la sustracción, la razón no tiene absolutamente nada que hacer" (Hobbes, 1994, 43).

Es el ejercicio de este tipo de razón lo que le permite a Hobbes derivar el estado de guerra de todos contra todos del conjunto de premisas planteado en el capítulo 13 de el *Leviatán*. Por eso, el que los hombres tuvieran suficientes medios de defensa también conduciría al estado de guerra de todos contra todos: individuos que se saben mejor armados e informados saben que la anticipación es ahora más crucial aún para mejorar sus probabilidades de supervivencia.

En últimas: es la forma del relato de Gauthier la que requiere de la escasez de medios de defensa para derivar el estado de naturaleza de Hobbes. La exposición de Hobbes no la requiere para nada, porque existe en el presente de una situación definida en términos lógicos y estratégicos.

¿Qué es lo que saben los agentes de la teoría de Hobbes? Algo muy simple y muy fuerte al mismo tiempo: saben que los demás son como ellos mismos. Es decir, saben que los otros son tan racionales como ellos lo son. Y eso es todo lo que requieren para actuar, en forma racional, en la situación del modelo. No se requiere saber nada más: ni quiénes son los otros ni qué sentimientos o afiliación política tienen ni qué planes concretos seguirán en sus vidas. Tampoco importa conocer sus valores. Para conocer, es decir, para entender la situación en términos estratégicos, sólo se requiere el conocimiento reducido y abstracto que el modelo exige. Por eso, en los términos del modelo, estaríamos ante una situación de juego caracterizada por agentes con un pleno conocimiento de ella. Vale la pena detenerse un poco en las implicaciones de la idea de conocimiento que hay en Hobbes y que puede encontrarse, también, en muchos modelos de la economía contemporánea. El punto es que el conocimiento requerido es el adecuado a las condiciones del modelo. Es una tautología, pero tiene sentido en este contexto. Si el investigador decide hacer un modelo con agentes dotados de racionalidad sustantiva, es decir, con agentes

que tienen a su disposición un algoritmo o un conjunto de procedimientos que les permite hallar la solución óptima para la situación en la que se encuentran, el conocimiento al que podrían aspirar ya está con ellos: es el proveniente de la racionalidad sustantiva.

Obsérvese, sin embargo, algo fundamental: la capacidad de "cubrimiento" del modelo es bastante limitada. Sólo podría dar cuenta de aquellas situaciones en las que todos los agentes involucrados disponen de racionalidad sustantiva. En ese sentido, los agentes sólo "tendrían conocimiento" acerca de aquellos estados del mundo que son relevantes para el modelo de referencia. Sólo tendrían en cuenta, entonces, dos estados: anticipar las acciones de los otros o no hacerlo. Si nos preguntáramos por la estabilidad del modelo desde el punto de vista de la racionalidad de los agentes, aparecerían ciertas dificultades.

Supongamos que algún agente, o algún grupo de agentes, decida desviarse de la estrategia dominante y realizar pactos de no agresión y de ayuda mutua en caso de ataque por otros grupos o individuos. Supongamos, también, que por alguna razón aleatoria esta nueva estrategia tiene éxito y comienza a extenderse por la sociedad. ¿Qué tan estable sería la antigua estrategia anticipatoria ante la "invasión" de la nueva estrategia "mutante"? Dentro del modelo racional de Hobbes esta pregunta no puede ni contestarse ni plantearse. De hecho, si todos los agentes son racionales, ¿por qué alguno habría de desviarse de la estrategia dominante? Lo que quiero subrayar es que en términos lógicos el modelo de Hobbes no puede ser atacado. Las posibilidades de desarrollo están en otra parte: ¿es posible modelar de otra forma la racionalidad en situaciones de conflicto estratégico? ¿Es posible dejar la racionalidad sustantiva y partir de una racionalidad limitada para arribar a otro tipo de soluciones? Como lo plantea Young (1998), invirtiendo los términos del problema y la estrategia de investigación:

"En la teoría de juegos, conceptos de solución de alta racionalidad pueden emerger en un mundo habitado por agentes de baja racionalidad".

El estado de naturaleza al que se llega por la vía de la racionalidad sustantiva tiene una característica paradójica: la más alta racionalidad genera un resultado terrible desde el punto de vista de la supervivencia de los hombres y de su civilización. ¿Qué consecuencias tendría el modelar la situación de conflicto desde una racionalidad más "baja" o limitada? Dos evidentes e inmediatas: ampliar el espacio de búsqueda de los agentes y convertir en un problema de investigación el estado al que se arribaría en esas nuevas condiciones.

Kayka visita a Hobbes

Desde otra perspectiva, sin entrar en el terreno de los juegos evolutivos, Gregory Kavka (1999) ha presentado una argumentación muy sólida cuya consecuencia fundamental es ampliar el espacio de búsqueda de los agentes del modelo de Hobbes.

La pregunta que se hace Kavka es la siguiente: ¿Puede haber una estrategia superior al ataque anticipatorio deducido por Hobbes? De inmediato surgen varias preguntas naturales: ¿En qué términos, o en qué contexto, sería superior una estrategia alternativa? ¿En el de la racionalidad pura o sustantiva del modelo de Hobbes? ¿O en el de otra racionalidad propuesta por el autor? Kavka no lo dice en forma explícita. No es difícil adivinar, sin embargo, que el autor se sitúa en el terreno de la racionalidad pura, aderezada con una cierta dosis de realismo o de plausibilidad en cuanto a los supuestos de los que parte. La misma pregunta con la que encabeza una de las secciones de su artículo confirma esta intuición: "¿Es la anticipación lo más razonable?" Lo más razonable apunta a la existencia de algún algoritmo o procedimiento que permita hallar una solución que sería la mejor a la luz de la razón. Al poner en cuestión la superioridad de la estrategia de la anticipación está suponiendo que la búsqueda de Hobbes, o fue incompleta, o se detuvo en una alternativa que no era la mejor o la más razonable. Supongamos, entonces, que la búsqueda de Hobbes fue incompleta y que una o varias alternativas superiores quedaron por fuera de su ejercicio y que, por lo tanto, su argumento a favor del estado de guerra de todos contra todos no es inexpugnable.

Una vez en su búsqueda, Kavka encuentra una primera alternativa: en lugar del ataque anticipatorio, ¿por qué no adoptar un bajo perfil, esperar, siempre alerta, y sólo atacar si es atacado? Esta estrategia mimética tendría la ventaja de maximizar la invisibilidad ante los ojos de los otros individuos. Si uno guarda un bajo perfil, y reduce a un mínimo su visibilidad, es probable que no se convierta en el objeto de la agresión de los que siguen la estrategia anticipatoria. Sin embargo, la estrategia mimética tiene una debilidad fundamental: no asegura nada con respecto a las acciones de los otros individuos. Al no tener en cuenta las creencias o conjeturas de los demás con respecto a la conjetura que conduce a la estrategia mimética, los individuos que así actúen se expondrán a las peligrosas consecuencias de una situación de expectativas mutuas inconsistentes. En la misma línea de razonamiento, el que un individuo decida unirse en un pacto con otros y arriesge su vida por defender la de aquellos, no asegura que los otros harán lo mismo por él en el futuro. Es probable que lo hagan, pero siempre hay una probabilidad de que no lo hagan. Es más: si todavía nos encontramos en el estado de guerra de todos contra todos, los acuerdos y contratos no tienen la fuerza suficiente y siempre se corre el riesgo de su rompimiento unilateral.

¿Qué podría asegurar el cumplimiento de los contratos y acuerdos en esta situación? El surgimiento de las instituciones que generen los

incentivos y los castigos correspondientes². Pero Kavka no se pregunta en forma explícita acerca de las instituciones que deberían surgir, ni mediante qué procesos lo harían.

Por eso, en su crítica de la alternativa anterior recurre a la aplicación de la racionalidad sustantiva a la situación que nos interesa. Lo hace a través del uso de varios argumentos provenientes de desarrollos del "dilema del prisionero" repetido o iterado. Los resultados de este ejercicio, desde el punto de vista de la racionalidad pura, como es bien conocido, niegan la posibilidad de cooperar y llevan, si el argumento se repite hacia atrás, en un número finito de encuentros, a que los jugadores siempre elijan no cooperar, o desertar, porque saben que su oponente hará lo mismo en la próxima interacción. Si el razonamiento se repite el número finito de interacciones acordado, el resultado será que en ninguna ocasión los jugadores cooperarán. En el lenguaje de Kavka, nadie ayudará a otro individuo porque sabe que en ninguna ocasión nadie vendrá en su ayuda, y porque sabe, también que la racionalidad pura de los individuos es de dominio público. Por lo tanto, la estrategia de aliarse o de hacer acuerdos para la defensa mutua no es viable a los ojos de la racionalidad sustantiva. Al autor le parece que la conclusión que se deriva de este tipo de razonamiento es "contraintuitiva y hasta paradójica". Pero no lo es. No al menos desde la racionalidad sustantiva en la que trabaja, sin ser explícito, Kavka. En ambas situaciones, si aplicamos la racionalidad sustantiva, no es difícil confirmar el resultado paradójico de Kavka.

² De paso, la riqueza analítica del modelo racional de Hobbes puede verse en las implicaciones que se derivan de adoptar una estrategia de mimesis. No es difícil ver que la adopción de ese tipo de estrategia debe modelarse en un contexto de señalización, en el que algunos agentes deciden enviar una señal que "esconde" o "hace invisible" su existencia.

La dificultad está, entonces, en la forma de modelar escogida y en la racionalidad que el autor le concede a los agentes de su modelo.

Kavka plantea otra alternativa: la formación de grupos de diverso tamaño para prevenir los ataques de otros grupos o individuos. De nuevo, se pregunta: ¿Se puede aplicar también la lógica hobbesiana de la anticipación a la interacción entre grupos? Desde el punto de vista de la lógica implacable de Hobbes, sí: los grupos se comportarían como agentes que saben que sólo si atacan primero tendrán una mayor probabilidad de sobrevivir a la agresión de los otros. ¿Qué ocurre, sin embargo, con grupos grandes, cuyo tamaño, en forma efectiva, puede disuadir ataques en su contra? Como lo plantea el propio Hobbes, un grupo de este tamaño requiere coordinación de funciones y centralización de mando. Otra vez, en la instancia de la formación de grupos de gran tamaño, aparece la sombra de un soberano absoluto: sólo si concede autoridad ilimitada a un cuerpo especializado podría el grupo ser efectivo en su papel de protector: la necesidad del aparato básico del Estado vuelve a establecerse³ (Kavka, *Ibidem*, 17).

Aquí, Kavka plantea un punto decisivo: la falsa dicotomía que Hobbes establece entre el individuo que lucha por sí mismo y los individuos protegidos por el poder concentrado en las manos de un cuerpo estatal único (Kavka, *Idem*). La implicación fundamental de esta dicotomía es desconocer todos los arreglos de protección que se sitúan entre esos dos

³ Nótese la similitud con el caso colombiano. Las Farc, la organización guerrillera más grande, con alto grado de centralización y de especialización en sus funciones, se está convirtiendo en un Estado primitivo, y aspira a convertirse en un Estado alternativo al Estado hoy existente en Colombia.

extremos⁴. Estos arreglos incluirían todo tipo de asociaciones, grupos y alianzas que los individuos formarían para incrementar sus probabilidades de supervivencia. Por supuesto, esta multiplicidad de arreglos, que se sitúan entre los dos extremos establecidos por Hobbes, es fundamental para entender la dinámica de conflictos reales. Pero, otra vez, la dificultad está en encontrar la forma más apropiada de modelar ese tipo de intuición. La argumentación razonada de Kavka permite pensar la posibilidad de ese tipo de arreglo y sus implicaciones, pero no da un camino para modelar el comportamiento de los agentes que arriban a ese tipo de arreglos. En particular, no permite pensar qué tan estables y duraderos pueden ser esos arreglos.

Instituciones y evolución en el conflicto colombiano

En un artículo anterior (Salazar, 2000) planteaba la necesidad de investigar la aparición de una vasta, multiforme y creciente capa de contratos de seguridad, acuerdos, alianzas y organizaciones civiles como respuesta de la población civil ante las amenazas provenientes de los agentes armados del conflicto. Para seguir en el terreno de Hobbes, reinterpretemos su primera premisa. En lugar de considerar a todos los hombres iguales, supongamos (como lo confirma diversa evidencia disponible) que los individuos están dotados de formas diversas para la guerra y la protección de sí mismos. Unos ya están agrupados y tienen armas, otros disponen de medios de protección más efectivos, otros no son visibles, otros disponen de medios económicos para obtener algún nivel de protección, otros no disponen de ninguna de las alternativas anteriores. Nótese que no se trata de negar la igualdad de los individuos desde el punto de vista de su racionalidad. Podemos suponer que todos disponen de un tipo de racionalidad limitada. La diferencia con respecto al modelo original de Hobbes está en suponer la existencia de dotaciones diversas para la guerra y para la supervivencia.

⁴ Kavka señala que Hobbes los asimila al extremo individual de su dicotomía. Pero esto es inevitable dentro de la racionalidad individual y sustantiva que Hobbes eligió para sus agentes.

Los demás elementos del modelo de Hobbes se mantienen. En particular, supongo que agentes racionales, conocedores de su dotación para la guerra y de su poder, elegirán entre depredar a sus oponentes o pagar, en diversas formas, por su protección. Presentaré el argumento teórico en varios niveles. Desde el punto de

vista de la teoría de juegos evolutiva más simple (Maynard Smith, 1982; Young, 1998), podríamos decir que la estrategia depredadora, que brinda un pago mayor al promedio de las otras estrategias observadas por la población en un cierto momento, tiende a imponerse y a desplazar a las estrategias “cooperadoras”. La razón es clara: encuentros entre organizaciones e individuos que observan la estrategia depredadora con individuos y organizaciones que siguen estrategias que favorecen la cooperación terminan con un pago mayor para los primeros y pérdidas de bienestar, o de pago, o de la vida, incluso, para los segundos. En el conjunto de la población, los individuos y organizaciones que favorecen estrategias cooperadoras terminan siendo víctimas de los que siguen la estrategia depredadora.

La proporción de la población que sigue la estrategia depredadora debe crecer, entonces, con respecto a la que no lo hace. La dinámica parece simple y contundente, pero enfrenta dificultades a la hora de explicar el comportamiento de la población en Colombia.

En primer término, una población compuesta de puros agentes depredadores, o en la que la única estrategia superviviente es la depredación sistemática, no puede sobrevivir en su conjunto. Es obvio que los agentes depredadores necesitan a quién depredar. Si estos últimos desaparecen en forma absoluta, o disminuyen con respecto a una cierta proporción crítica, los depredadores también tenderían a desaparecer. En segundo lugar, como ya lo había planteado, no todos los agentes están dotados de la misma forma para seguir la estrategia depredadora. Esta dificultad puede verse en forma más nítida si intentamos enumerar los probables componentes de una “función de dotación” que discriminara a los agentes de acuerdo a su mayor o menor probabilidad de seguir una estrategia depredadora creíble: ingresos, recursos económicos, capacidad militar, nivel de organización, acceso a la información.

Es obvio que en la Colombia de hoy estas variables están distribuidas de forma bastante desigual. Y es obvio, además, que los primeros en hacer uso de organizaciones armadas y de la capacidad militar para incrementar sus probabilidades de supervivencia y control tienen ventajas históricas duraderas sobre los que se iniciaron más tarde, o los que no tienen ni los recursos ni la experiencia para hacerlo. Se trata, en general, de un proceso dependiente de la trayectoria, y de las condiciones iniciales, con tendencia al encasillamiento y a la ineficiencia. En tercer lugar, la estrategia depredadora tiene su contrapartida necesaria en el comportamiento de la población civil, sobre todo en las regiones en disputa y en las de colonización reciente y de frontera. En esos lugares, la población “usa” la protección de los grupos armados con el fin de concretar sus aspiraciones económicas. Al no haber definiciones ideológicas definitivas (ni “etiquetas” permanentes y sólidas), la población fluctúa entre la protección de los distintos agentes armados. Incluso, como se verá más adelante, cuando ha debido desplazarse, siempre tiene la opción del regreso. Se da, entonces, un proceso de reforzamiento mutuo de expectativas entre las organizaciones armadas y la población civil.

¿Deben desaparecer, entonces, en forma irremediable los menos dotados para la depredación? No, y este es el otro punto fundamental que quiero defender aquí. Los agentes peor dotados, los que tienen menor acceso a la riqueza y al uso del poder militar, han ideado, a través del aprendizaje, otras formas de sobrevivir. La primera: unirse a los más fuertes, aceptar su protección, pagar incluso por ella cuando existen los recursos económicos, o intercambiar lealtad a alguna organización armada a cambio de protección, cuando no los hay. La segunda, derivada de la anterior: pagar por la información requerida para sobrevivir, pagar para disminuir el grado de incertidumbre en el que se vive. En aquellas regiones en las que la disputa territorial entre las organizaciones guerrilleras y paramilitares es más intensa, la población se enfrenta a la disyuntiva de escoger la protección más adecuada o desplazarse. Para tomar una decisión adecuada, en un contexto de tanta incertidumbre, requiere de información. Y la información, también, es costosa.

Un inmenso espectro de mercados, de contratos de seguridad y de intercambios de lealtad y apoyo logístico por protección ha crecido en las últimas décadas en Colombia (en especial en la última). Aprender a sobrevivir en nuestro país ha permitido crear una red de instituciones de intercambio y de regulación a través de las cuales la población intenta aumentar sus probabilidades de supervivencia en un contexto de alta incertidumbre. Podría decirse que para los menos dotados y para los más débiles, la estrategia elegida ha sido negociar la supervivencia.

Un primer modelo

En otro artículo (Castillo y Salazar, 1996) habíamos analizado el comportamiento de individuos que se enfrentaban a la siguiente situación: ante la amenaza de un agente armado, los individuos debían decidir entre pagar la suma exigida por la guerrilla (que podría ser, también, otro agente armado), y "comprar", por lo tanto, seguridad por un determinado período de tiempo, o no hacerlo y enfrentar la posibilidad del secuestro o de perder la vida. Aunque en la discusión de los resultados introdujimos algunos elementos de juegos evolutivos, estos no estaban integrados en forma explícita al modelo. Ahora intentaré modelar, desde la perspectiva de los juegos evolutivos, la situación que enfrenta la población mencionada.

El modelo es del tipo de modelos de aprendizaje en juegos de 2×2 , en los que se eligen al azar pares de jugadores (tipos o clases de agentes, en realidad) para que interactúen, escojan un curso de acción y obtengan unos resultados definidos en términos de sus funciones de pago o de utilidad. El objetivo del modelo es analizar si el comportamiento de los individuos de esta población converge o no, en el tiempo, a una estrategia pura (pagar o no pagar, en este caso).

La estrategia de pagar cubre un rango muy amplio de arreglos sociales: pago de impuestos, rescates, de extorsiones (boleteo, vacunas, secuestros), y contribuciones permanentes a grupos armados con poder de amenaza. La estrategia de no pagar cubre dos acciones básicas: no pagar en el sentido puro de no hacer nada y correr el riesgo involucrado, o contratar seguridad a un costo menor que la extorsión.

Sea S el conjunto de estrategias con que cuenta un grupo de jugadores finito y par (que representaría al grupo de individuos percibidos como de más altos ingresos por los agentes armados en un cierto territorio) $N = (1, 2, \dots, N)$, y sea s un elemento del conjunto S . Sea (s_1, s_2) el conjunto de estrategias puras del juego, y sean U_1 y U_2 las funciones de ganancias de los jugadores 1 y 2, respectivamente. Entonces, $U_1(s_1, s_1)$ es la ganancia que obtiene el jugador 1, o fila, si éste elige la estrategia s_1 y el jugador 2, o columna, hace lo mismo. El juego en su conjunto lo denotamos como $G = \langle N, S_1, S_2, U_1, U_2 \rangle$, y consiste en la selección aleatoria de pares de jugadores que deciden si pagan o no pagan el tributo exigido por algún agente armado.

Las ganancias de cada jugador, cuando elige una estrategia, se muestran en la casilla correspondiente de la matriz binaria (*Figura No.1*). Si ambos jugadores eligen pagar el impuesto a la guerrilla, formando el perfil de estrategias (pagar, pagar), la función de ganancia que recibe cada uno estará definida por la ecuación $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$ (1), en donde P es el prestigio derivado de permanecer en el país, K es el capital humano específico correspondiente a la situación colombiana, y S es el costo de asegurar la no agresión de la guerrilla por un período determinado, y todas las variables toman valores positivos. Si deciden escoger el perfil de estrategias (no pagar, no pagar), la ganancia de cada uno estaría determinada por $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K$ (2).

La implicación es clara: los individuos que deciden no pagar se rehúsan a "comprar" un período de seguridad (cuya extensión y términos es incierto, como se ha demostrado en muchos casos) al grupo armado que los amenaza, y optan por incurrir en el riesgo derivado de su decisión.

¿En qué consiste ese riesgo? En que el jugador que decide no pagar puede encontrarse con un jugador que elija la alternativa de pagar. En ese caso, el que decide no pagar, mientras que el otro ha elegido pagar, estaría corriendo un riesgo muy alto, pues quedaría expuesto a ser el blanco más fácil de la amenaza existente, y se vería obligado a contratar seguridad privada o, en últimas, a abandonar el país con la consiguiente pérdida de prestigio, haciendo que su función de ganancia (1) quede reducida a $-\beta_3 S$. Esto configuraría una situación típica de un juego de coordinación: Si un individuo elige pagar, la mejor estrategia que debe elegir el otro jugador es pagar y así cada uno obtendrá una ganancia $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$ (1), lo que indicaría que este individuo está conservando su prestigio y aprovechando el capital humano adquirido en esta sociedad. Del mismo modo, si el jugador elige la estrategia de no pagar, y el otro elige pagar, su ganancia ya no sería $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K$ (2), sino que se reduciría a $-\beta_3 S$, el costo derivado de correr el riesgo de no pagar mientras que el otro individuo sí lo hace. (De ahora en adelante, y por comodidad, sustituiré a $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K$ por F).

		JUGADOR 2	
		NO PAGAR	PAGAR
JUGADOR 1	NO PAGAR	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K ,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K$	$-\beta_3 S ,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$
	PAGAR	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S ,$ $-\beta_3 S$	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S ,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$

figura No. 1

Como se trata de un juego de coordinación, en principio no hay ninguna estrategia dominante, y por lo tanto, ninguna estrategia estrictamente dominada. Es evidente que para el jugador 1 la estrategia de no pagar domina a la de pagar en el caso de que el otro jugador también decida no pagar ($F > F - \beta_3 S$). No ocurre así en la situación contraria: si el jugador 2 decide pagar y el jugador 1 no lo hace, la estrategia escogida sería estrictamente dominada ($F - \beta_3 S > -\beta_3 S$). Pagar o no pagar dependerá, por lo tanto, de que el otro pague o no pague. Como en principio no hay acuerdos previos, sólo podría arribarse a una situación de expectativas mutuamente consistentes a través de un proceso de ensayo y error y de aprendizaje, cuya modelación más apropiada es de tipo evolutivo. Ya no se trata, entonces, de encontrar, por la vía de la introspección, mediante la aplicación juiciosa de la racionalidad sustantiva, la mejor alternativa posible (pues esta dependerá en forma estricta de lo que el otro jugador decida), sino de analizar cómo los eventos ocurridos, el orden de las interacciones, y la memoria efectiva que tengan los agentes del proceso (la relación entre el tamaño de la muestra de las interacciones anteriores y la memoria total de ellas) determina el resultado final del proceso de interacción entre ellos. En este contexto, la variable relevante ya no es la decisión individual de cada jugador, sino el número de jugadores que adoptan las alternativas de pagar o no pagar en la medida en que el juego se desenvuelve. Estos números constituyen los estados de la dinámica evolutiva que intentamos entender. Cada estado (el número de jugadores que adoptan la estrategia s_i en el tiempo t) sólo depende del estado anterior. Como es corriente en este tipo de modelos, se adopta una dinámica que Kandori et al. (1993) llaman darwiniana: la dinámica evolutiva conserva el signo de la diferencia entre los pagos o ganancias de las estrategias adoptadas por los jugadores. Vega-Redondo (1996, 134) lo presenta de esta forma:

"La frecuencia de cualquier estrategia que disfrute del pago más alto nunca debería decrecer, mostrando también alguna probabilidad positiva de incrementarse en forma estricta. Esto refleja una noción muy débil de monotonicidad."

Los desarrollos realizados en este campo en la década pasada (Mailath, 1998; Young, 1998; Fudenberg y Levine, 1998) permiten afirmar que en juegos pequeños de 2x2, dadas unas ciertas condiciones (inercia, choques aleatorios permanentes, relación muestra/memoria, $s/m < 1/2$), existe una dinámica evolutiva que converge a un equilibrio de Nash del juego original.

Siguiendo la estrategia de modelación de Young (1998, cap. 4), suponemos que una de las propiedades del aprendizaje adaptativo en juegos de dos personas (un resultado estocásticamente estable), en los que cada jugador sólo dispone de dos acciones, coinciden con la noción clásica de dominio en riesgo debida a Harsanyi y Selten (1988). Como es conocido, las condiciones para que una estrategia sea dominante en riesgo en un juego de 2x2 son las siguientes:

$$(a_{11} - a_{21}) (b_{11} - b_{12}) \geq (a_{22} - a_{12}) (b_{22} - b_{21})$$

El factor de riesgo (Young, *Ibidem*, 67) se define como:

"(...) la probabilidad p más pequeña tal que si un jugador cree que el otro va a jugar la acción i con probabilidad estrictamente mayor que p , entonces i es la acción óptima única a seguir."

Considérese el equilibrio (Pagar, Pagar) en nuestro modelo. Para el jugador 1 es óptimo elegir el equilibrio (P, P) si

$$\begin{aligned} a_{11}(1-p) + a_{12}p &= a_{21}(1-p) + a_{22}p \\ \text{esto es,} \\ p &= (a_{11} - a_{21}) / (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) \quad (3) \end{aligned}$$

Para el jugador 2, el p más pequeño satisface

$$\begin{aligned} b_{11}(1-p) + b_{21}p &= b_{12}(1-p) + b_{22}p \\ \text{y,} \\ p &= (b_{11} - b_{12}) / (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22}) \quad (4) \end{aligned}$$

En general,

$$\alpha = (a_{11} - a_{21}) / (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) \quad (5)$$

$$\beta = (b_{11} - b_{12}) / (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22}) \quad (6)$$

Como lo plantea Young (*Ibid*, 68), el factor de riesgo para la estrategia (2,2), en nuestro caso, (P, P) es $\alpha \wedge \beta$ (los valores mínimos de α y β). El factor de riesgo para la estrategia (NP, NP) es $1 - \alpha \wedge 1 - \beta$. Por lo tanto, el equilibrio (NP, NP) sería dominante en riesgo si y sólo si

$$\alpha \wedge \beta \succ 1-\alpha \wedge 1-\beta. \quad (7)$$

En nuestro modelo:

$$\alpha = \beta_3 S / (F + \beta_3 S)$$

$$\beta = \beta_3 S / (F + \beta_3 S)$$

Como ya vimos, (NP, NP) es dominante en riesgo, si

$$\alpha \wedge \beta \succ 1-\alpha \wedge 1-\beta.$$

Que es equivalente a:

$$(a_{11} - a_{21}) (b_{11} - b_{12}) \geq (a_{22} - a_{12}) (b_{22} - b_{11}) \quad (8)$$

En nuestro caso,

$$(\beta_3 S) (\beta_3 S) \geq (F) (0)$$

Y (NP, NP) sería dominante en riesgo. Sin embargo, (P, P) también habría podido ser dominante en riesgo si la probabilidad de que un jugador optara por una u otra alternativa variara. ¿De qué dependería esta variación? De la muestra de encuentros reales registrados en la memoria de los agentes y de sus resultados, y de los eventos que habrían llevado a que los agentes eligieran una de las dos alternativas en las distintas circunstancias de su interacción. Obsérvese que la muestra lo que hace es acumular los resultados relevantes de las pasadas interacciones. Si los

agentes se guían por lo que otros agentes han hecho en el pasado y por los pagos que han recibido, optarán por reforzar la tendencia que la muestra presente. Si, dadas las circunstancias del conflicto colombiano, las amenazas de los grupos armados son creíbles, y una parte considerable de la muestra ha optado por pagar, la opción de pagar se vuelve dominante. Pero esto no depende para nada de la capacidad de raciocinio de los individuos o de sus métodos para alcanzar expectativas correctas. Estas se forman sobre la marcha en el proceso real de interacción de la población amenazada.

¿Cómo justificar las funciones de pago de los agentes del modelo? No deja de ser contradictorio usar una forma determinística para modelar lo que parece un proceso de formación de expectativas con agentes de baja racionalidad. Una justificación inicial estaría en el aprendizaje realizado por los agentes en procesos de interacción anteriores. Una alternativa obvia habría sido modelar el proceso en una forma puramente aleatoria, en la que las elecciones aleatorias de los agentes se fueran acumulando hasta converger a una estrategia pura. Obsérvese que en nuestro modelo el espacio de búsqueda está reducido a dos acciones o estrategias. ¿Cómo se ha podido llegar a semejante situación? Por procesos de aprendizaje anteriores, y por un motivo que pesa de manera decisiva en este tipo de procesos: el que las amenazas que sufren los agentes y sus decisiones son de vida o muerte. Como lo plantea Samuelson (1997), el aprendizaje de los individuos está en relación directa con las consecuencias de las acciones que están eligiendo. Acciones de menor consecuencia reciben, por supuesto, menor deliberación. En caso del conflicto colombiano, individuos enfrentados a cuestiones de vida o muerte deben usar toda la información y la artillería lógica disponible para elegir el curso de acción más apropiado. Esta afirmación debe ser matizada, sin embargo. Una de las dos estrategias puras de este juego, no pagar, esconde un conjunto muy diverso de opciones organizativas, de contratos de seguridad y hasta de fortalecimiento del poder disuasivo y protector del Estado.

Yendo un poco más allá, tanto los pagos de los agentes como su forma de jugar van a depender de un factor que no he mencionado: las posibilidades de organización de la población civil, su capacidad para formar redes y grupos en los que la transferencia de información y el aprendizaje lleva a la estabilización de estrategias en el largo plazo. Sin embargo, de nuevo, no puede haber un resultado unívoco. Desde el comienzo de esta investigación entreveíamos la posibilidad de la aparición de organizaciones civiles que condujeran a la estabilización de la estrategia de no pagar. En general, no ha ocurrido así, pero en algunas regiones del país esa tendencia ha comenzado a despuntar. Hacia dónde cambie la situación dependerá de la evolución del comportamiento de los agentes y de las complejas interacciones entre los grupos armados y las redes y organizaciones de la población civil.

Contratos, redes y organizaciones

Según Arthur De Vany (De Vany, 1993, 5):

"(U)n estado Hobbesiano de contrato es uno en el que no hay acuerdos y en el que todos los agentes se encuentran en una relación totalmente falta de estructura con respecto a todos los demás".

La consecuencia fundamental es que todas las coaliciones posibles pueden tener lugar al mismo tiempo. Ningún acuerdo, por supuesto, es respetado y la incertidumbre alcanza sus cumbres más elevadas. Este tipo de situación no pretende tener consecuencias descriptivas acerca de la situación colombiana de hoy. Es muy útil, en cambio, en términos metodológicos: permite pensar un punto de partida ideal de extrema incertidumbre y superposición de coaliciones para preguntar, entonces, si es posible la formación de coaliciones permanentes, el surgimiento de contratos, con diversos grados de estabilidad, y la disminución de la incertidumbre dominante. La intuición es la siguiente: si la población ha estado aprendiendo a "negociar" su supervivencia y a disminuir la incertidumbre en la que debe vivir, una manera "natural" de estudiar el proceso, en términos analíticos, es la de verlo como un proceso de surgimiento de contratos, coaliciones y acuerdos en condiciones de incertidumbre, fuertes amenazas para la supervivencia y escasa afiliación ideológica. Se trata de inquirir, otra vez, qué es lo que podría ocurrir en el rango existente entre los extremos absolutos del modelo hobbesiano original: qué tipo de acuerdos o contratos podría surgir, en forma espontánea, entre el estado de guerra de todos contra todos y el Estado absoluto.

Regresemos a los agentes de nuestro primer modelo. La alternativa de no pagar (NP) debe ser reinterpretada. No se trata de que agentes propensos al riesgo decidan, contra viento y marea, no ceder ante la amenaza de los grupos armados. El punto es más sutil. La alternativa real es la de celebrar o realizar contratos que garanticen la seguridad de los agentes involucrados a cambio de una cierta cantidad de dinero, o de algún tipo de actividad que implique el apoyo o la lealtad hacia una organización armada de signo contrario. ¿Cómo justificar esa decisión? Comparando el pago recibido en el estado de guerra y el pago derivado de la realización del contrato.

Sabemos que si la estrategia dominante es pagar, los que no pagan corren el peligro de incurrir en pagos negativos (que pueden incluir la pérdida de la vida) como resultado de su acción. Si deciden pagar, recibirán un pago igual a $F - \beta_3 S$. Realizar el contrato tendría sentido económico si $\beta_3 S > C$, es decir, si el costo del contrato es menor que la pérdida de ingreso derivada de la amenaza extorsiva ($\beta_3 S$). En términos de Young (1998), un contrato es eficiente si no existe otro contrato (u otro arreglo, diría yo) que le dé un pago mayor a ambas partes.

En nuestro caso, para los individuos amenazados no habría, en principio, ningún contrato que les asegurara un pago mayor (a menos que existiera un Estado con el monopolio efectivo de las armas que los protegiera a cambio del pago de impuestos). Pero esto es sólo una percepción inicial. Obsérvese que el giro en las decisiones de los individuos no es el resultado de la aplicación de una poderosa racionalidad que los situaría, de un golpe, en la frontera de eficiencia de la negociación. Se trata de un proceso más complejo. Los que deciden contratar seguridad privada o hacer intercambios de dinero o lealtad por protección permanente con grupos de autodefensa aprenden que existe un vasto rango de contratos para mejorar los pagos que reciben por sus acciones. Es decir, si un número creciente de individuos contrata seguridad y no cede ante la extorsión, el pago por no pagar (NP) crecerá y NP se convertirá en una mejor alternativa y, eventualmente, en una estrategia evolutiva estable. Habrá, entonces, un continuo de contratos, con una característica crucial: a mayor número de contratantes, los costos de contratar seguridad serán menores (economías de escala) y habrá pagos mayores (condición darwiniana) por adoptar la estrategia de no pagar. Este continuo de contratos incluye, no sólo los ya conocidos contratos de seguridad, sino la creación de acuerdos y formas organizativas diversas (asociaciones de apoyo mutuo, cooperativas de seguridad, movimientos contra el secuestro).

Pero los efectos de la celebración de contratos de seguridad y de protección van más allá del incremento en los pagos recibidos por los individuos que escogen esa estrategia. En términos políticos implica el surgimiento de alianzas entre sectores de la población, los grupos paramilitares y las fuerzas armadas regulares, y el surgimiento de organizaciones de la llamada sociedad civil. Esta dimensión política (que ya empieza a vislumbrarse en ciertas regiones del país, como el Valle del Cauca, Urabá, el Magdalena Medio) de las decisiones estratégicas de la población, y de su

aprendizaje, será decisiva en el desenlace del conflicto colombiano. Debe observarse que este proceso tiene signos opuestos, de acuerdo al territorio del que se trate. Es decir, en otros territorios, con historias de inmigración y de construcción territorial diferentes, la perspectiva del aprendizaje de la población es, también, distinta. Allí, en donde las FARC han contribuido a la construcción del territorio (a través, por ejemplo, de la colonización armada) su relación de protección con los pobladores se mantiene en el tiempo. No se trata de afirmar la existencia de una población que seguiría ciegamente las órdenes de la guerrilla y la acompañaría en todos sus movimientos y decisiones. Por el contrario, aunque las relaciones contractuales estén mediatizadas por la tradición política y por la lealtad hacia una historia común, la racionalidad de las acciones de la población no deja de prevalecer. En realidad, los pobladores de un territorio aceptan la protección de un grupo insurgente siempre y cuando esa protección sea eficaz y no ponga en riesgo sus vidas. Si la protección se resquebraja y pierde solidez, si pone en peligro la viabilidad económica de la región y la supervivencia de sus habitantes, la alternativa de desplazarse o de cambiar de protector siempre está al orden del día.

¿Qué tan estables son, entonces, estos acuerdos y contratos? Como todo acuerdo realizado alrededor del poder de las armas y de la intimidación, su grado de fragilidad es considerable.

¿Cuáles son las relaciones entre los grupos armados y las organizaciones y redes de la población? Hasta ahora he discutido la elección de estrategias por parte de individuos que enfrentan una situación de incertidumbre de mayor o menor intensidad. Pero, ¿qué relación hay entre las estrategias de las organizaciones armadas, las decisiones estratégicas de los individuos, y las redes y estructuras sociales a las que pertenecen? Esta pregunta, que parece obvia, ha sido muy poco planteada en Colombia. En general, la tendencia ha sido a ver la población como una masa inerte y amorfa que es manipulada y atropellada por las organizaciones armadas. Otros, en forma un poco más sofisticada, consideran que los agentes armados han venido desplazando en forma sistemática a las organizaciones civiles hasta llegar a inutilizarlas del todo, o a hacer muy difícil y riesgosa su actividad. Aunque estas interpretaciones tengan algún grado de correspondencia con la realidad, el punto decisivo es que no dan cuenta de las muy diversas formas organizativas y contractuales con las que la población ha intentado asegurar la supervivencia en medio de las amenazas de los grupos armados.

¿Qué hacen las organizaciones armadas con respecto a las redes sociales existentes? Como buenas organizaciones centralizadas con objetivos de expansión definidos, las organizaciones armadas intentan maximizar su "conectividad" con las redes existentes a un costo mínimo. Esto quiere decir que intentan colocar un miembro en cada red. Si la relación toma la forma de estrella (de manera que el individuo de la organización armada se relacione con todos los componentes de la red) la organización podrá lograr la realización de acciones por parte de la población a un costo muy bajo. Siguiendo a Chwe (2000, 3), una red es suficiente si la población se "rebela", por ejemplo, a pesar de sus creencias previas (*prior*). Nótese que esta formulación tiene una consecuencia muy fuerte. Las acciones de la población no dependen de sus creencias o de su ideología. Es la pertenencia a una red lo que permite que una acción pueda realizarse. Para el caso del conflicto colombiano las consecuencias son evidentes. En un conflicto en el que la afiliación ideológica tiene tan poco peso, lo fundamental en las decisiones de la población no son sus creencias o sus lealtades ideológicas sino la forma en que se conecta a través de redes y la forma, a su vez, en que las organizaciones armadas se conectan a estas redes. En aquellas situaciones en las que los intereses inmediatos de sectores de la población coinciden con las consignas o los objetivos de un grupo armado las acciones públicas no se hacen esperar. El caso de las grandes marchas de raspachines y cultivadores de hoja de coca en el sur del país, hace unos cuatro años, pertenece a este tipo. Los desplazamientos "preventivos" de la población que

las organizaciones guerrilleras promueven ante la amenaza proveniente de la presencia de grupos paramilitares también lo son. Como también pertenecen a esta dimensión las movilizaciones de la población del sur de Bolívar en contra del uso de varios municipios para la zona de despeje pactada con el ELN

Pero una red no está hecha de individuos, está constituida por grupos interconectados de acuerdo a una cierta jerarquía. Y es la relación entre estos grupos lo que determina las relaciones entre los individuos. Como lo plantea el mismo Chwe (Opus cit., 4), hay una interpretación sociológica sugerente que ve a los grupos como portadores o representantes de papeles o roles sociales, y a la jerarquía de grupos como un jerarquía de roles sociales. Este tipo de estructura ha sido "explotada" en forma sistemática por las organizaciones guerrilleras en Colombia, en especial a partir de los años ochenta. Una de las prácticas más comunes es penetrar

la jerarquía social "desde arriba": el alcalde de un municipio es contactado y se le exige, a cambio de protección y de libertad para hacer política, la realización de obras públicas en aquellos lugares en los que la guerrilla intenta ganar influencia. Si el funcionario obedece (y, en general, ese parece ser el caso) y las obras se realizan, la organización habrá penetrado la jerarquía de redes sociales y habrá ganado una cierta aceptación en el territorio. En la década del ochenta esto se expresó, incluso, en forma electoral: los candidatos apoyados por las FARC lograron imponerse en los concejos de algunos municipios. Es lo que Andrés Peñate (1999) llama el "clientelismo armado", una práctica que el antes recalcitrante ELN también aprendió a usar. Peñate documenta la forma en que esta organización ligó su accionar al uso de las gigantescas transferencias derivadas del petróleo en regiones como Casanare y Arauca: alcaldes presionados convertían en obras las solicitudes del ELN.

Conclusiones provisionales

1. En un artículo que está por ajustar varias décadas, John Watkins (1974) hacía una observación muy aguda: en Hobbes, el uso de la racionalidad pura conducía a resultados oscilantes y a la imposibilidad para encontrar una salida clara al estado de guerra de todos contra todos. La clave del preocupante resultado obtenido por Hobbes estaba en su uso de una racionalidad pura que no permitía la modelación explícita de la interacción social entre los agentes. Varias décadas después de Watkins, y varios siglos después de Hobbes, puede decirse que la pieza faltante en la arquitectura teórica del segundo está en los juegos evolutivos. El punto es que la pura racionalidad individual no genera resultados definidos en contextos de interacción estratégica. Se requiere de otro elemento: cómo modelar la interacción estratégica de agentes racionales pertenecientes a una cierta población. Nótese la diferencia: han hecho su entrada la población y la interacción estratégica con racionalidad limitada. De allí pueden surgir procesos como los planteados más arriba. Procesos situados, además, en el rango comprendido entre los extremos hobbesianos: el estado de naturaleza y el Estado absoluto. Moraleja: la razón pura, pues, no es suficiente para generar orden en situaciones de conflicto y de interacción s estratégica.
1. En Colombia, a partir de un modelo sencillo de dos estrategias básicas, pagar y no pagar, pueden generarse resultados interesantes: la aparición de un continuo de contratos, organizaciones y arreglos que expresan el aprendizaje de la población en un contexto de incertidumbre y afiliaciones ideológicas débiles. Aunque esos arreglos son provisionales y cambiantes, hacen parte, sin embargo, de la emergencia de orden espontáneo en una situación de extrema incertidumbre.

Bibliografía

CASTILLO, M.P. y SALAZAR, B. (1996). "Jugando a la violencia en Colombia: El dilema de pagar o no pagar", *Cuadernos de Economía*, No 25: 185-197.

FUDENBERG, D. y D.K. LEVINE. 1998. *The Theory of Learning in Games*. Cambridge, Mass: MIT Press.

HARSANYI, J. and R. SELTEN. 1988. *A General Theory of Equilibrium Selection in Games*. Cambridge, Mass: MIT Press.

HOBBS, T. 1994. *Leviatán: La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil*. (Traducción, prólogo y notas de Carlos Mellizo). Barcelona: Atalaya.

KANDORI, M., G. MALAITH, and Rafael ROB. 1993. "Learning, Mutation, and Long-run equilibria in Games", *Econometrica*, 61: 29-56.

KAVKA, G. 1999. "Hobbes's War of All against All", in Christopher W. Norris (ed.), *The Social Contract Theorists. Critical Essays on Hobbes, Locke and Rousseau*. New York: Rowman and Littlefield.

MAILATH, G.J. 1998. "Do People Play Nash Equilibrium? Lessons from Evolutionary Game Theory." *Journal of Economic Literature*, 36: 1347-1374.

SMITH, Maynard J. 1982. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge: Cambridge University Press.

SALAZAR, B. 2000. "Vive y deja matar: Lecciones de supervivencia a la colombiana". Ponencia presentada en el Seminario sobre Guerra y Paz, Cali.

SAMUELSON, L. 1997. *Evolutionary Games and Equilibrium Selection*. Cambridge, Mass: MIT Press.

VEGA-REDONDO, F. 1996. *Evolution, Games and Economic Behaviour*. London: Oxford.

WATKINS, J. 1974. "Racionalidad Imperfecta", en R. BORGER y F. CIOFFI (eds.), *La explicación en las ciencias de la conducta*. Madrid: Alianza Editorial.

YOUNG, H.P. 1998. *Individual Strategy and Social Structure*. Princeton: Princeton University Press.

A PROPÓSITO DE LA GUERRILLA: SIMETRÍAS POLÍTICAS Y EXCLUSIONES RECÍPROCAS

Mario Luna Benítez¹
Fernelly Domínguez²

“Toda posición tomada contra la violencia, toda empresa por eliminarla (lo que ha sido siempre considerado como un aspecto constitutivo de lo “político”) a su vez deberá, en compensación, hacer frente a sus propios efectos”.

“La política, la misma civilización, no podrían ser pensadas *exclusivamente* como un programa de eliminación de la violencia, aunque ellas, la política y la civilización, no puedan jamás renunciar a plantearse la cuestión”.

E. Balibar, (1996).

Dentro de la amplia temática de *Violencia, conflicto y política*, elaboramos algunas ideas sobre la guerrilla. Es la perspectiva desde nuestra investigación dedicada a ella en los últimos años. Es claro que su acción organizada se desenvuelve en un contexto de actores cuya interacción, en el grado de intensidad y de circularidad política alcanzado en Colombia, hace difícil el análisis desde el punto de vista de un solo actor. Es nuestro reto explorar desde este ángulo algunas hipótesis, dejando en el trasfondo supuestos que se definen más ampliamente en el contexto. No obstante el título de la ponencia anuncia argumentos que son resultado de una comparación implícita con actores, institucionales y no institucionales, que han enfrentado la guerrilla en su larga y variada historia.

¿Es posible decir algo nuevo sobre la guerrilla en Colombia, sobre su historia y su actualidad?³. Abunda la literatura sobre el tema, lo que hace difícil la novedad. No la pretendemos, y apuntamos no más, al discutir algunos argumentos, a vencer la dificultad que propone dar cuenta de la relación entre el conflicto guerrillero, la exclusión y la construcción de lo público en Colombia. La mayor dificultad parte de la representación corriente de que la violencia implicada en ese prolongado conflicto, definiría de hecho procesos

¹ Profesor Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle

² Estudiante de Maestría en Sociología de la Universidad del Valle y profesor hora cátedra del Departamento de Ciencias Sociales de la misma.

³ El conflicto supone otros sectores que no estudiaremos aquí.

de exclusión de los adversarios (incluyendo la población civil) y la desestructuración de lo público o su destrucción. Así la temática se hallaría de antemano resuelta.

Para incidir en la temática del Coloquio nos aventuramos hacia interrogantes que requieren para su solución, un esfuerzo de renovación del punto de mira sobre la guerrilla y de la percepción periodística de la violencia que encierra su conflicto. Nos apartamos de esa idea general tentadora sobre el carácter meramente destructor de la violencia implicada en un conflicto armado y propendemos desde las limitaciones de nuestros estudios empíricos, por aclarar supuestos de su proceso social y político real. Tal vez una violencia portadora de exclusión absoluta y de destrucción de lo público sea lo típico del conflicto armado colombiano, en sus condiciones actuales.

La relación implicada en la temática nos llevó sobre dos conjuntos de interrogantes :

Primero, si se trata de la exclusión social, económica y política: ¿cómo replantear en la actualidad la emergencia y el desarrollo de la complejidad del movimiento guerrillero? ¿Es cuestión de repetir nuevamente el análisis de las exclusiones que se supone dieron origen a la guerrilla? Cuando al parecer los perfiles de la primera insurgencia de los grupos armados han quedado atrás luego de 40 años de existencia; cuando desde hace al menos dos décadas los contextos de acción de la guerrilla se han visto modificados por la emergencia de diversos actores institucionales y no institucionales; cuando de esa nueva concurrencia en la interacción se han producido entre los actores múltiples circularidades de procedimientos, operativos, formas de subsistencia y de reconocimiento público; cuando todo esto hace pensar que la guerrilla está más en el dominio de las *alteridades sociales y políticas* que en el de una *identidad política consolidada*, no es más enriquecedor preguntarnos ¿cómo la propia guerrilla ha reproducido y reproduce la lógica de las exclusiones de sus antagonistas?

En segundo lugar, si se considera que la construcción de lo público pasa por el proceso de lo político y de la movilización social cualquiera que sea su naturaleza, cómo proponer el carácter político de la guerrilla y de las relaciones sociales implicadas en él, cuando su existencia está atravesada de múltiples disociaciones y fracturas en lo social. ¿Es de esperarse que de su carácter político real, supuestamente distinto al institucional y tradicional,

resurja una conformación nueva de lo público? O ¿es que lo público en su novedad será algo del futuro como resultado del simple efecto racional de unas conversaciones y acuerdos de paz?

En realidad ambos tipos de preguntas confluyen en el examen de la naturaleza política de la guerrilla y por lo tanto en el interrogante: ¿de qué política hablamos cuando se vuelva a hablar que la guerrilla es política? Posiblemente al despejarlo aportaríamos indirectamente a esclarecer las dificultades para una reconstitución de lo público y una anulación de las exclusiones más fuertes y evidentes de nuestra sociedad.

Desde esos interrogantes avanzaremos hacia la presentación de un caso regional relacionado con las Farc, luego de una breve comparación con el aspecto político relevante en el M-19. Nuestra tesis central es que el M-19⁴ como las propias Farc, han actuado dentro de una *gran simetría política* con los adversarios que decidieron cuestionar y combatir y que, a pesar de sus muchas diferencias en su emergencia como en su desarrollo, tienen en común una cierta lógica política, indescifrable desde el análisis de las ideologías y de sus llamados proyectos revolucionarios. Es en una dimensión política práctica dada en sus lógicas de acción, en donde encontraremos su semejanza tanto como se podrían hallar sus diferencias. El uno, el M-19, desde su estrategia de inserción en el escenario nacional, las otras, las Farc, desde sus estrategias de inserción en lo local y regional. Ambos son actores políticos estratégicos⁵, como lo han sido y suelen ser hoy los colombianos en la política e incluso en sus acciones sociales cotidianas. Igualmente nos guía otra tesis derivada: desde la propia simetría política con sus adversarios, especialmente en el caso de las Farc, se desarrolla una lógica de exclusión⁶ y de anulación de lo público-democrático similar a aquella que se supone dio origen a su acción política armada.

⁴ Sobre el M-19 nos apoyamos en Luna, Mario, *Le M-19, un acteur politique armé*, Memoire de D.E.A. en Sociologie, EHESS, Paris, 1997. Sobre las Farc en Domínguez, J. Fernelly : *Las FARC, de la guerrilla partisana a la guerrilla militar, historia de la guerrilla 1982-1986*. Tesis en historia, Universidad del Valle, 1996.

⁵ La noción de estrategia remite inicialmente a Goffman : “esa especie de estimación recíproca a que se dedican los protagonistas de la interacción sobre la base de sus conocimientos previos de las percepciones, cálculos y conocimientos previos de su(s) adversario(s)”. Goffman, 1970, p.99.

⁶ La noción de exclusión que aquí empleamos se apróxima, por razones empíricas, a la de Norbert Elias, que coloca el énfasis en un proceso entre sectores sociales semejantes y donde están en juego relaciones de poder (Elias, Scotson, 1997).

La recuperación de la imagen política para el movimiento guerrillero

Aquí luego de recordar las coordenadas en las cuales se da el reconocimiento institucional actual de la guerrilla conducente a la negociación, proponemos que su aceptación política definitiva encuentra la dificultad de superar una asimilación generalizada de sus acciones con una violencia excesiva que no tendría relación con objetivos políticos y sociales. Discutimos como ese nivel de violencia -que a veces resuena de nuevo a *la Violencia*, y que se encuentra en todos los actores organizados del conflicto armado - se halla asociado con sentidos de poder y a su vez éste con procesos de exclusión profunda. Dejamos como norte la idea de que el exceso de violencia imposibilita un proceso de inclusión social, tendiendo a reducir, a su vez, una “esfera pública” a un dominio parcializado y autoritario que no cejaría en su empeño por ser absoluto. En lo concerniente a la guerrilla se necesitaría precisar su carácter político real y asociar el exceso de su violencia con el poder proyectado desde ese carácter.

Desde hace unos tres años, en el período de la reactivación de los nuevos debates electorales para la Presidencia, se comenzó a retrotraer la mirada sobre la guerrilla hacia una representación distinta a la de ser un movimiento marginal, apolítico y sin sentido histórico, a la que lo había reducido la iniciativa presidencial e institucional durante el proceso de la Constituyente de 1991. Dicha mirada la había hecho objeto de simple tratamiento militar y judicial. Dicha condena política había dejado a las FARC, y otros grupos, por fuera de la representación de una reconstitución política y social del país.

Por razones del azar ligado a la diversidad de los actores de la violencia y de la ilegalidad a la que había llegado el país, dicha condena había confluído con la nueva percepción intelectual de los especialistas sobre la complejidad de la violencia en Colombia (1987)⁷. Ellos habían criticado la reducción de los hechos de violencia, incluyendo la violencia política, a la percepción de un solo eje de violencia, entendido como *la Violencia* con mayúscula y cursiva. Sus resultados habían propuesto la multiplicidad de las violencias, desplazando a su vez el énfasis puesto en la época en la llamada “violencia política” hacia otro tipo de escenarios⁸.

⁷ Nos referimos a los resultados de la *Comisión de estudio sobre la violencia* designada por el gobierno de Virgilio Barco, en enero de 1987.

⁸ Subrayaban los autores: “los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado”, Comisión, 1987, pag. 27.

El conflicto de guerrilla que había encontrado un ciclo de solución política con el M-19 y otros grupos, a través del proceso de la Constituyente de 1991, pareció entonces pasar a un segundo plano bajo la idea motriz de la puesta en marcha de un nuevo país. Todo estaba dado para que dicho conflicto desapareciera del horizonte de las miradas públicas como tal. Además los contextos en los cuales se desarrollaba y en los cuales se hallaba ya insertada la guerrilla no colaboraban para recuperar su importancia política para el *establecimiento*.

En efecto la guerrilla restante, pasó en 1991 desde la Uribe⁹ de la escena política a lo profundo de las llamadas zonas de selva y colonización. Profundizaría su inserción en el contexto de las actividades que a la propia nación le daban y darían su dinámica económica y social principal, nos referimos a las ilegales de la droga, y, profundizaría la actividad del secuestro¹⁰ y la extorsión. Ya para 1997, época de los debates electorales, las Farc habían profundizado en el dominio vertical lo ganado con su extensión horizontal entre 1983 y 1991: una acumulación de recursos a movilizar y poner en juego posteriormente, incluyendo la expectativa de una especie de ofensiva final.

Con los debates de 1997, regresaron enfoques que sostenían que la guerrilla merecía la negociación porque nunca había perdido su aspiración política. Era marchar contra la corriente de los análisis de comienzos de los noventa, para los cuales la guerrilla “buena”, romántica y utópica, con proyectos políticos, había fenecido con los acontecimientos notables, nacionales e internacionales, de la década del ochenta. Se decía que lo que sobrevivía de ella marchaba por el camino de la degradación ante la falta de perspectiva histórica y social.

⁹ No hay que olvidar que Casa Verde en la Uribe se reconoció como sede política del Secretariado del grupo durante la tregua y negociaciones de paz, en el gobierno de Belisario Betancur. Esta huella de los diálogos políticos pasados fue borrado por la acción militar del gobierno de Gaviria, que se presentó triunfal en paralelo al momento de las elecciones a la Constituyente. Destruído el refugio y el símbolo político de las Farc, los efectos de la acción que preveía la anulación política y militar del grupo, revelaron su fracaso con el paso de los años.

¹⁰ Esta actividad legitimada internamente bajo una manipulada y reducida concepción de la “lucha de clases”, pasó a ser una forma instrumental de guerra extendida hacia la mayor parte de capas sociales de la población y por una variedad de objetivos.

La iniciativa de repolitización de las relaciones institucionales con la guerrilla no quedó en el aire de los “buenos oficios”: hacia mediados de 1996 hizo emergencia en la escena nacional el gran movimiento de pobladores de las zonas de colonización, en un territorio dominado por las Farc. La duración y extensión del conflicto indicaba la fuerza de la guerrilla detrás del movimiento. La incertidumbre sobre la continuidad de la ya resquebrajada unidad social nacional y la desconfianza sobre la capacidad y voluntad institucional para resolver el conflicto, suscitó el clamoroso efecto de un golpe de opinión masivo que apoyaba la iniciativa política por un nuevo ciclo de negociaciones¹¹. Sin embargo, la opinión sobre la recuperación de la guerrilla como actor político es contradictoria, no definitiva y despierta aún, no por azar, los recelos, las incertidumbres y las desconfianzas.

Ciertamente se crearon desde las orientaciones mediáticas y políticas las expectativas de una neutralización del proceso de guerra, a partir del montaje del escenario político e institucional de la negociación. Pero el aumento de los múltiples hechos bélicos en el campo y los diversos procesos de violencia ligados a ellos, en especial los ataques a la población civil, hacen pensar que la confrontación armada se profundice. Se intensificaría la violencia en el conflicto y con ello se profundizarían los recíprocos procesos de exclusión implicados en la guerra, propiciando una mayor dificultad futura de reconstrucción de una esfera pública para todos los colombianos.

La violencia implicada en la acción de las Farc no parece corresponder con la aspiración legítima al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. A la evidencia pública se aparece justamente como una gran dualidad entre lo que sucede en el escenario nacional de las negociaciones, con sus fraseos, discursos e imágenes, y aquello que acontece con su forma de guerra en lo local y regional. La sobrecarga de violencia presente suscita desde diversos ángulos la imagen del retorno del pasado, de la pesadumbre por una extraña prolongación de la llamada *violencia*, a pesar de ser tan distintos sus actores. En efecto, la percepción de los colombianos es asaltada de nuevo por la idea de un conflicto entre actores sin parámetros sociales y políticos claros y definidos. Aparece esa percepción como definiendo el contexto de los actores enfrentados. No parece entonces casual que no se suscite movilización ni adhesión abierta y masiva a las acciones de la guerrilla, en el momento de su acción o posterior a la acción

¹¹ Nos referimos a la papeleta que se insertó con el Mandato por la paz, en las elecciones de 1998.

violenta de sus contendientes¹², y, mucho menos, hay movilización y adhesión abierta y masiva a esos otros actores, incluyendo el ejército institucional. En general, los pobladores le huyen al contexto de la guerra, incluyendo los períodos previos de los procesos de consolidación del dominio que anteceden a los posibles y escasos enfrentamientos¹³.

Esta percepción reenvía esa violencia a un asunto más allá o más acá de la política. La hace aparecer como merecedora de un sometimiento por otras vías, en la búsqueda de una simple civilidad. A pesar de una relación explícita entre actor organizado y violencia, que pone en evidencia la estrecha relación entre violencia y despliegue de poder de dicho actor, se ha impuesto como principal esa recepción aislada y mediática que resalta el exceso de la agresión, un cierto plano de la crueldad, de la indiferencia y el cinismo.

Efectivamente, el tipo de violencia guerrillera tiende a percibirse como lo que quizás sea: una acción separada de una imaginación y motivación en una *ideación política*¹⁴ novedosa. Su forma de acción real es también, al unísono de sus adversarios, selectiva y autoritaria frente a la población civil, sus organizaciones y sus liderazgos. Ello pone en crisis la imagen de una ideación política “popular” ligada al conflicto: es de suponer que una ideación revolucionaria o al menos novedosa respecto a la violencia tradicional y la nueva de los otros actores, institucionales o no, impondría un límite a los niveles y formas de la violencia que dicha ideación propiciara y desencadenara. A pesar de todo, es necesario explicarse esta separación entre ideación y forma de acción violenta, como un efecto público irresuelto bajo el esfuerzo mediático y político de ciertos actores institucionales; pensamos es resoluble de otra manera, si nos interrogamos por el real carácter político de los movimientos guerrilleros, por su ideación real (independiente de los discursos ideológicos) y en correspondencia con cierta lógica de la violencia que se ha desarrollado local y regionalmente. Es necesario regresar a pensar la *relación efectiva* entre sus formas de

¹² Llama la atención este hecho por comparación al México insurgente de Zapata y otros, donde sí sucedían las adhesiones masivas, incluyendo el momento posterior al ataque de las bandas irregulares de los hacendados que asolaba los poblados y aldeas campesinas (Womack, 1987, 1969).

¹³ En realidad, la forma de la guerra hasta ahora puede reducirse a ese proceso de consolidación de dominio territorial bajo la lógica de someter la población. Esa es la guerra que tenemos! y por ello el principal blanco es la población civil.

¹⁴ Se entiende por ello las ideas, los ideales y las idealizaciones (Balibar, 1996).

violencia, sus dimensiones políticas reales y el tipo de poder que la guerrilla deriva de ellas.

Por lo demás si queremos avanzar en un futuro, en el desciframiento de esta dualidad entre ideación y violencia, debemos encontrarle un lugar real a ese tercer plano, el de la crueldad¹⁵, en el despliegue concreto del poder de la guerrilla y de sus contendientes. Por ahora recordamos como guía general que ese plano se realiza intrínsecamente en el momento de la materialización de las ideaciones por las cuales se ejerce la violencia y el poder, sean éstas la nación, el mercado, la propiedad privada, Dios, la tierra, el comunismo... Recordamos que el poder encuentra su resolución última en el recurso extremo a la crueldad, más allá del gozo de quienes la practican. Ese plano ingresa a suplir el faltante de aquella “economía de la violencia”, dibujada por Balibar, como lógica de poderes y de contrapoderes que se contestan mutuamente. Son formas de la violencia excesiva que no gravitan directamente sobre *las alternativas explícitas* del poder y del contrapoder; niveles que presentan un algo intraducible, nombrable apenas desde las metáforas de la patología. Responden a la insuficiencia del poder, revelada siempre en su práctica¹⁶. La crueldad copa lo que el poder no alcanza y llega acompañada de fraseos de una lógica simple, que brindan la imagen de lo absoluto: el Estado es el Estado, la ley es la ley, Dios es Dios, el fusil es el fusil, fraseos que a la manera de las metáforas del cristianismo encierran su verdad última en la proximidad de la muerte, simbólica y real¹⁷.

Esto que puede ser pensado en situaciones donde se juega la diversidad de poderes, de proyectos enlazados a ideaciones distintas que toman o quieren tomar fuerza en el plano nacional de la vida social, puede al igual ser pensado para las situaciones donde los poderes tienen a ser simétricos y donde las ideaciones quedan reducidas a la lógica pragmática de su desarrollo en focalizaciones locales y regionales.

¹⁵ Balibar opta por este término, luego de descartar el de terror por corresponderse a épocas históricas limitadas y, el de barbarie por su condición etnocéntrica, Balibar, 1996, pag. 71

¹⁶ “El poder no lo es todo, y al igual, él mismo es esencialmente <<no todo>>, es decir, es deficiente, igual si en él mismo incluimos su opuesto y su adversario, el contra-poder, es decir, la revolución y la revuelta, los movimientos <antisistémicos> (Wallerstein). Puesto que el contrapoder es todavía un poder, o al menos mantiene el mismo tipo de relación con el espíritu, con la trascendencia”, Balibar, 1996, pag. 69.

¹⁷ No es suficiente el poder y el aparato del poder, se requieren las “tautologías del poder”. Ver opus cit. pag. 79.

Recuperar el sentido de la iniciativa política

Discutiremos aquí el argumento principal que propone a la guerrilla como “producto de causas estructurales”. Tiene sentido para liberar de una lógica pasiva y refleja el análisis del proceso central de la *iniciativa política* en la emergencia y construcción de un proyecto político como el guerrillero. Discutimos en sus implicaciones analíticas y políticas un argumento esgrimido en los debates actuales para iniciar la negociación de paz, y que ya lo fue en la del año 1984.

Valga la pena aclarar que de nuestra crítica en este acápite y los siguientes, no se deduce negativa alguna a dichas negociaciones. Es un simple intento de desciframiento que al reubicar la dinámica de la guerrilla, permite examinar su complejidad y pensar con más realismo las dificultades que afronta la sociedad colombiana para recomponerse social y políticamente. De hecho implica una separación del análisis sociológico de los motivos legitimadores de los grupos armados. Permanecer en esa identidad corre el riesgo de abrir un puente para la continuidad futura de la violencia política, en cualquiera de sus formas¹⁸.

Interesa entonces volver de nuevo sobre los efectos políticos de la metodología implícita en la idea que explica la guerrilla como un efecto de causas estructurales (en especial, un problema agrario no resuelto, un cierre antidemocrático del régimen político, y, unas “masas urbanas” sumidas en la pobreza, que hoy se mencionan en el desempleo, etc.)¹⁹.

Detrás de la interpretación hay una idea simple de que todo fenómeno obedece a una causa y no es posible desactivarlo como tal si ésta permanece en el trasfondo, medio oculta a la mirada de los hombres. Las causas se vuelven principios originarios, como una esencia que permanece en el tiempo, dándole una connotación política especial, al fenómeno

¹⁸ Dejamos a un lado el análisis de las clases medias emergentes desde los sesenta, en fuerte ascenso social, que en las aulas universitarias hicieron ruptura social y política con la generación de sus padres (insertos en las décadas de la *Violencia*). Ese análisis explicaría en parte la conformación de los esquemas motivadores del conflicto armado de izquierda. No avanzamos sobre la reflexividad (Giddens, 1992) de las explicaciones intelectuales para el progreso del conflicto.

¹⁹ Algunos especialistas ya esbozaron una primera crítica de esta idea, no hacemos más que continuarla.

producido. Al ser efecto, de otros problemas sustanciales, la guerrilla se vería no solamente explicada, sino políticamente expurgada por anticipado de las responsabilidades por los impactos de su acción. El *leit motif* de su legitimación no estaría entonces en el curso de su propio desarrollo y centrado en ella misma, en sus decisiones y estrategias, sino en el ser producto de la externalidad²⁰ de otros procesos y políticas institucionales.

Es una mecánica racional sencilla que no parece sacarnos del vacío de una interpretación, cuando el fenómeno rebasa cualquier sentido común, y, cuando parece andar a la deriva política, y a los encuentros azarosos de las oportunidades políticas, de los recursos materiales y humanos. El argumento en esta dirección se vuelve en contra, cuando desde campos menos elaborados intelectualmente en nuestro medio se recrea la imagen de una causa ya desaparecida y perdida para la guerrilla. Con la misma lógica se responde pues desde posiciones conservadoras pretendiendo su invalidación política y su reducción a ser un residuo ajeno a la sociedad nacional. Por lo demás es difícil sostener una hipótesis que no se mueva en la sospechosa polaridad de este campo de las representaciones estructurales.

El discurso de las “causas estructurales” se vuelve un metarelato que cubre la carencia de un análisis con soporte investigativo. Los datos empíricos de dichas causas son presentados de acuerdo con la noción de contexto de los economistas: un listado de indicadores en lo económico, lo político y lo social, que se quieren presentar con efectos directos sobre la dinámica política y social²¹. Se olvidan así para el análisis todas las *mediaciones* propiamente sociales y políticas, que hacen que no haya una sociedad fija en su rigidez objetiva, sino contextos dinámicos interactivos, históricos y sociales, de actores individuales y colectivos, institucionales o no, agenciando sus estrategias, sus políticas y decisiones (entre ellas la reproducción de tradiciones cuando se pretende avanzar a algo nuevo)²².

²⁰ Importamos esta noción del discurso de la economía.

²¹ Así los indicadores formales lo son de materialidades estáticas, que constreñirían a los hombres como un marco para su acción y les definirían directa y mecánicamente sus coordenadas de resistencia, los ejes y horizontes impulsores de sus decisiones, como si fueran actores pasivos y reflejos.

²² La crítica de ese modelo ha avanzado bastante. Ver Dobry 1988, Friedberg 1997, Crozier y Friedberg 1977.

La literatura colombiana sobre el tema redonda en este esquema, bajo un hábito intelectual que recrea siempre dentro de un determinismo simple la relación causa estructural - efecto subjetivo. Incluso en los estudios regionales del fenómeno, donde es posible reconstruir las iniciativas, las decisiones y las dinámicas autónomas de los grupos, esto es, reconstruir la *invención* de la violencia política, se lo retoma como la última explicación. Un ejemplo notorio es el texto de Manuel Alberto Alonso (1997) sobre el Magdalena Medio. A pesar de sus virtudes analíticas y de reivindicar las estrategias de lo grupos en la creación de su entorno, y, en los ciclos que ellos mismos viven, se devuelve al causalismo, para sostener que las fuerzas sociales se sienten - sin mediaciones - *empujadas* a la violencia, o que los grupos “son *un producto lógico* del modelo de configuración histórica del país” (subrayado nuestro). Como si sus acciones fueran inocuas para dicha configuración, y a pesar de ser grande la evidencia de su impacto²³. Citamos :

“El movimiento guerrillero, como forma de expresión y como producto de lo social, *responde a* la configuración estructural y a las relaciones políticas y sociales que se dan en una sociedad determinada, es decir, *expresa* lo que es política y culturalmente el país”. (cursiva nuestra)

Esa lógica de lo causal roza el límite de la definición de la guerrilla como centro del *mal* nacional. Es un facilismo que no se detiene en el hecho de que la guerrilla no es más que un actor, con múltiples redes, que actúa estratégicamente en un contexto de diversos actores, si se quiere, igual de “malignos”, contexto interactivo donde tienen gran circularidad las lógicas políticas, los procedimientos prácticos y sus formas culturales, citamos:

“El movimiento guerrillero *condensa y manifiesta* ese proceso histórico de militarización, privatización y degradación del Estado y la sociedad colombiana” (cursiva nuestra)

Mientras no se replantee la pluralidad de esas ‘condensaciones’ y su propia fluidez, el riesgo de una caracterización adjetiva del ‘mal’ no desaparece.

²³ La idea de que los grupos se mueven hacia un cambio futuro que re configuraría al país, no deja pensar los efectos reales de las nuevas realidades del país producida bajo los determinantes de su acción, por más dramáticos que sean. Para nosotros estos actores armados han perfilado regional y nacionalmente el país.

El esquema tuvo sentido político como idea fuerza en la emergencia y desarrollo de la guerrilla. Se buscaba la conquista de su legitimidad a nivel general. Era como si la proyección del deseo de una sociedad diferente, la crítica de la existente y la propuesta alternativa de una vida social distinta (nunca fue elaborada) no fuera suficiente para legitimar su acción política.

Ese esquema niega de plano el carácter propio de la iniciativa de la guerrilla²⁴, su capacidad creadora, su eficacia práctica en la materialización de sus proyectos y en el impacto de sus acciones y, finalmente, su capacidad epistemológica política de definir “la verdad” y “lo verdadero”²⁵. Niega la especificidad de la política y lo político. La relación de la *iniciativa política* con su contexto se reduce, entonces, para ese esquema, a ser expresión pasiva o reflejo directo de factores sociales, económicos y políticos; se deja de lado, que los propios actores armados, pueden crear a través de la invención intrínseca a su iniciativa, su propio contexto social y político de acción, violenta y no violenta. En el caso de la guerrilla en Colombia esto fue más claro en y después de los años ochenta.

Un complemento del modelo es la reducción de la llamada “iniciativa política” a la elaboración ideológica inicial del llamado proyecto revolucionario, que puede ser agenciado directamente en la escena política institucional y/o en los movimientos sociales (las condiciones subjetivas). Esta reducción sesgada de la política, condena cualquier desarrollo armado a una noción de lo militar sin lugar en la representación de lo social y lo político (a pesar de la frase de “lo militar es lo político agenciado por otros medios”). Este no lugar de lo militar tiene a ser nombrado hoy como perteneciente a los fundamentalismos de una subjetividad extrema²⁶, por fuera de las relaciones sociales y sin las posibilidades históricas de conformación de sociedad. En la forma de organizarse y operar militarmente la guerrilla se expresa intrínsecamente un cierto carácter político, que avanzaremos en descifrarlo.

La *iniciativa política* dentro de lógicas reales de la acción, que dependen de los contextos particulares de actores presentes en la escena, ha sido algo más que grandes conjuntos ideológicos justificativos: es en la práctica elaboración fluida de dispositivos y procedimientos que responden en alguna medida a cálculos racionales pero también al uso no racionalizado de recursos sociales y políticos activados en dicha escena; es también, la

²⁴ Un esfuerzo ambiguo aunque notable por recuperar la idea de la iniciativa política se encuentra en Alejo Vargas (Vargas, 1990); sin embargo, mantiene la idea de un causalismo de los orígenes de la guerrilla y una reducción de la iniciativa política a la decisión de sustituir el Estado en pos de un proyecto revolucionario.

²⁵ Para citar un ensayo sobre el asunto ver Gerstenberger (1994).

²⁶ Sobre esta noción ver M. Wieviorka (1988).

creación de redes de apoyo para la acción, el montaje de formas de interacción según un conjunto de oportunidades logrado en los espacios de la acción, que no tienen fijeza y sufren el influjo de la misma actividad de los grupos (no hay contextos pasivos, ni recursos cuantitativamente fijos, ellos dependen de la posición estratégica lograda por el grupo).

Así se vuelve clara la diversidad y variabilidad en el panorama del movimiento guerrillero en Colombia a lo largo de sus 40 años, especialmente en las dos últimas décadas cuando los grupos cambiaron radicalmente en la forma de reconocerse a sí mismos y a sus entornos, y, en sus lógicas para situarse respecto a una también cambiante escena institucional del Estado y de la dinámica social. El caso de las Farc es ejemplar, después de zafarse a comienzos de los ochenta., bajo el “son” de la acción del M-19, del letargo rural en la que lo había mantenido su relación con el P.C. Las Farc toman la iniciativa directa de la acción política, en lo nacional pero también en lo local y regional, donde se expresó y se reconoció públicamente el alcance de su poder bajo la emergencia de la Unión Patriótica.

Desde este punto de mira, que más adelante desarrollamos, se reivindica la localización de lo político en los contextos sociales y políticos de la emergencia y desarrollo de la guerrilla, en general en contextos de escala local y regional. Así todos los grupos insurgentes del país han tenido un carácter político, aunque tengan referencias societales, incluyendo el Quintin Lame (no hay que olvidar que en contextos de violencia como los del Cauca la tendencia a la hiperpolitización de los movimientos sociales era un hecho). Las propias Farc desde la previa autodefensa tenía un elemento societal campesino íntimamente ligado con las formas del hacer político en lo local y regional. Estas, por algunos autores, fueron definidas como políticas en forma limitada por su relación estrecha con el P.C..

El lugar real del llamado proyecto revolucionario

Avanzando en los presupuestos de una reformulación del carácter político de la guerrilla, discutimos aquí otros dos aspectos centrales de los análisis tradicionales, tratando de reubicar el sentido que tienen en la dinámica real de los grupos. Al final especificaremos el caso del M-19, para luego dar paso al análisis de la condición política real de las Farc.

En primer lugar conviene poner en su lugar, otra representación sobre el conflicto armado, acentuada desde su emergencia: aquella que polariza el conflicto entre unos actores que defienden el orden institucional y otros que buscarían sustituirlo²⁷. Es una idea que se puede criticar desde sus dos polos, cuando múltiples redes han atravesado el accionar de unos y otros. No sólo para la guerrilla sería señalable el cierre de una búsqueda de grandes proyectos apoyados en elaboraciones ideológicas fuertes. Respecto a los actores institucionales y no institucionales que la combaten sería de interrogarse si ellos poseen grandes proyectos políticos de reconstrucción nacional. Al igual que interrogarse si están defendiendo una institucionalidad como nacional y abierta a todos los colombianos. Esto no parece ser así, y, lo que se siente es una cantidad de actores sociales y políticos en pos de gestionar estratégicamente sus intereses. De los institucionales es remarcable el que no hayan perdido sus arraigos ideológicos aunque si perdieron ese sentido de la política entendida como una orientación específica que pugna por la construcción de proyectos colectivos en el ámbito nacional. En ambos polos es constatable que *la política* ha cambiado de sentido y de lugar, tanto como pueden haber cambiado los actores en la propia confrontación. Ya tendremos la oportunidad histórica de constatar las dificultades para la creación de nuevos bienes públicos y de espacios públicos que cierren definitivamente las viejas y nuevas exclusiones sociales y políticas.

En relación con el anterior, el segundo punto a proponer, es la dualidad presente en la emergencia y el desarrollo de los grupos guerrilleros, entre lo nacional y lo local y regional, para no ir al examen del plano internacional²⁸. Dualidad que remite igualmente a la dualidad, en sus ideaciones para la lucha y el conflicto: entre aquellas que mencionaban un orden nacional de transformaciones y aquellas efectivas resultado de su existencia en los contextos reales de su acción. Si bien la mayor parte de los grupos armados han pretendido tener una existencia nacional²⁹, su realidad desde el comienzo ha sido la de una ubicación local y regional. Esta distancia entre pretensiones y existencia real, es mal cubierta por las ideaciones legitimadoras que acompañaron su emergencia (los grandes metarelatos).
Mientras

²⁷ Un ejemplo desde el ángulo de la guerrilla : “iniciar una larga marcha hacia la construcción de un actor militar alternativo al Estado, que lo confronte, le dispute la *influencia* política sobre la sociedad civil y eventualmente lo sustituya” (Vargas, 1990, pag. 250).

²⁸ Un análisis distorsionado de este plano en J. Castañeda (Castañeda, 1994)

²⁹ Incluso el Quintín Lame era una autodefensa con aspiración más allá de lo local y comunitario (Luna, 1997).

tanto en su transcurrir regional y local se crean otros órdenes de ideaciones más pragmáticos.

Es así como en el análisis de la guerrilla, apreciar la ideología de los proyectos revolucionarios -jugando un papel como fundamento imaginario en su presentación pública nacional - no es suficiente para establecer su naturaleza política y mucho menos las formas de su hacer político³⁰. Estos dos aspectos sólo pueden establecerse en sus lógicas de implantación y desarrollo en lo local y regional (faltan muchos análisis empíricos, históricos y actuales). Estas lógicas son resultantes, en dichos contextos, del juego de interacciones, de identidades y alteridades, entre los actores particulares implicados en ellos. Según esta reformulación, retomamos *la tesis principal* que orienta nuestra reflexión : *las dimensiones políticas efectivas poseen una gran simetría entre los actores en conflicto*, histórica y socialmente definidos como mutuos adversarios, en lo local y regional, y a veces en los nacional.

El papel práctico de los grandes metarelatos de los grupos es, en un principio, una débil fuerza de apoyo para materializar esas ideaciones políticas más locales y regionales que se anudan en los procesos de los actores armados y no armados en esas zonas. Sin embargo es de anotar finalmente que en la creación y desarrollo inicial de todos los grupos se aprecia el drama de la distancia vivida entre la realidad de sus posibilidades de supervivencia en el esfuerzo cotidiano realizado en el plano local y regional, respecto de su deseo imaginario de desarrollo nacional, colocado bajo el supuesto de la aspiración de una transformación general. Cada grupo trata de cerrar la brecha o disociación a su manera, y, fracasa en una y otra ocasión³¹. Un caso excepcional es el de las Farc, que tenían un lazo relativamente sólido con una historia de treinta años del PC y quince años de autodefensa orientada por él, y, que actualmente trata de no reproducir el drama de esa distancia (la reciente puesta en la *escena pública mediada* del Movimiento Bolivariano apunta indirectamente en este sentido, aunque puede orientarse más a la consolidación política en sus territorios, cosa distinta a la interpretación de *El Tiempo* en la edición del jueves 27 de abril, de ser el lanzamiento de un partido para la acción armada, haciéndose eco y manipulando el supuesto sentido militar fundamentalista).

³⁰ Un ejemplo: "la guerrilla revolucionaria tiene un *referente fundamentalmente político*, es decir, la búsqueda del control del poder político en la sociedad... para posibilitar la construcción de su propio modelo de Estado y de sociedad" (Vargas, 1990, pag. 250).

³¹ Es en otro trabajo que examinamos el drama de esta disociación en los diversos grupos.

El otro caso relevante, no por ser excepción para el mencionado drama, sino por la forma especial en que lo vivió, fue el del M-19. Para éste grupo, la presentación en la escena política nacional, llegó a ser primordial no sólo como una estrategia a realizar en el tiempo, sino como una táctica reiterada. Fue el primer grupo armado que se propuso impulsar *directa e indirectamente* con su acción militar y política la crisis del régimen político colombiano³². En esta empresa las escenas del juego político y de la opinión pública fueron los espacios buscados y trabajados como norte de su acción. Lo local y regional no tenían un sentido político (que incluye el sentido dado a lo militar, valga la pena aclararlo) similar al de los otros grupos, incluyendo las Farc. Su gran movilidad, llamémosla rural y también urbana, y su gran fluidez en los movimientos estratégicos puestos en la mira de dichas escenas, directas y *mediadas*, lo diferenció desde su emergencia, conservando continuidades de la tradición de guerrilla no mencionables ahora. No se trata de que no viviera el drama de la distancia y la dualidad, sino que para este grupo no fue el mismo drama. Sus dramas fueron vividos justamente en el plano de la escena política nacional, y expresaron la gran dificultad de hacer corresponder la presencia en ese plano, con sus diversas estrategias, las referidas a los sectores sociales, a la opinión pública, al desarrollo de lo militar y a sus propios entornos organizativos. El M-19 se desarticulaba en la escena pública de la misma manera, y quizás en la misma medida, como colaboraba a que se desarticularan los otros actores y las propias instituciones políticas antagonistas. El M-19 estuvo imposibilitado para articularse y darse coherencia en su acción política-pública como lo fueron estando a su vez en su respuesta las propias instituciones del Estado, entre ellas el gobierno, los partidos y las Fuerzas Militares, trenzadas en un complejo contexto de violencia, y, haciendo énfasis en su lucha con el propio M-19. Este mostrándose como un actor estratégico transaccional, introdujo en el plano de la resistencia y la rebeldía una nueva manera de hacer presencia en la política nacional y en la manera de realizar la política.

El M-19 puso a su vez sobre el tapete del reconocimiento público, la manera similar como funcionaba la política en sus formas institucionales y en los partidos, insertados en las lógicas transaccionales de las intermediaciones clientelistas. El M-19 dejó de lado los discursos sobre proyectos ideológicos y con gran pragmatismo adoptó como las ideaciones que anudarían su acción, las que percibía garantizaban “la colombianidad”, integradas a

³² Diferimos en este punto del análisis de E. Pizarro (Pizarro 1996)

través de su desarrollo práctico y en los perfiles de la cultura que espontáneamente se revelaba entre sus miembros. Es claro que dichas ideaciones

se encontraban como “flor silvestre” en el plano de lo local, regional y nacional, y abrían la puerta de su acción organizada a la variedad de colombianos (algunos pudieran reducirlo a una forma simple de populismo). Un hacer político que no tenía nada que ver con el contenido que acompañaba a esa otra idea racionalista de hacer la política, como postuladora de grandes proyectos de cambio social general, esto es, como futura transformadora de relaciones sociales estratégicas (Luna, 1997).

La condición política de las Farc

En este punto nos concentramos en el análisis de las Farc. Reformulando la idea que las define como guerrilla partisana, esto es, que deriva su carácter político de la ligazón con el PC, pasaremos a proponer otra alternativa de definición. Desembocamos luego en un estudio de caso que mostrará algunos perfiles de la acción política del grupo.

Se ha querido presentar el carácter político de las Farc en una relación de dependencia con el PC. Se ha supuesto que en ella el grupo armado rompía su aislamiento local y marginal y obtenía una orientación política nacional por la que guiaban sus estrategias y acciones³³. Por un lado, se ha dado por un hecho la fundamentación nacional (como proyecto político) del quehacer político del propio P.C.. Sin embargo, aún carecemos de un análisis histórico independiente que permita enfocar este quehacer del PC y ver también en él una forma de acción centrada en lo local y microsocioal con muchas simetrías con las formas de acción política liberales. En lo pertinente, creemos que más allá de los organismos de dirección nacional, el campo de acción local y regional era relativamente autónomo y tuvo mucha incidencia en la existencia política del PC, creando muchas tensiones especialmente con la militancia más joven. Por otro lado coincidía algunas veces en este aspecto con la forma de existencia y de actuar relativamente

³³ En el nivel de desarrollo de nuestro análisis no es posible señalar que el PC haga un uso instrumental de la guerrilla, en determinadas coyunturas nacionales, como sí acontecía en otros países latinoamericanos (Touraine, 1988).

autónomas de las Farc³⁴, en lo local y regional. Retrospectivamente pueden

aclararse estos niveles de autonomía de las Farc, lo que le permitía usufructuar los trabajos políticos paralelos o previos de inserción del Partido y de la Juventud Comunista, imprimiéndoles su lógica y su dinámica, remodelándoles su perspectiva política. El caso del Valle del Cauca fue notable en los ochenta.

El caso de las Farc, ilustra sobre ese sentido de la política cuyo espacio de definición son los contextos regionales y locales. Es el grupo que más desarrolló *desde sus inicios*, en esas escalas, ese sentido de la política “nuevo” entre comillas para la rebeldía armada, pero que ya hacía parte de la lógica política de los grupos dominantes y tradicionales. Es otra dimensión de la política, que haría real irrupción pública con la Unión Patriótica que apareció fuerte y dominando variados escenarios regionales a mediados de los ochenta³⁵.

Se podría decir que insertas en ese tejido de poderes locales y regionales en conflicto, las Farc desde sus antecedentes, reproducían la lógica de la adhesión política a través de la defensa de la tierra. En las autodefensas armadas, la lucha por conservar la redistribución de la tierra estuvo identificada estrechamente con la adhesión al PC en una gran similitud como lo hacían los propietarios de la tierra con los partidos tradicionales, especialmente el liberal. Esta estrecha relación con la adhesión política fue también el camino para quienes querían ingresar a la tierra en zonas ya institucionalizadas. Aunque en un principio esas autodefensas coexistían con los campesinos de otras coloraciones políticas e incluso llegaban a movilizarlos. Avanzada la formación de las Farc y ubicadas en zonas de colonización y de frontera, era clara la exigencia, no de la adhesión política,

³⁴ Subrepticamente, Jacobo Arenas lideraba estas tendencias ya hacia finales de los sesenta y comienzo de los setenta, según el testimonio de los líderes fundadores del M-19, forjados de alguna manera en esa autonomía cuando trabajaban en lo urbano bajo la comandancia de aquél (Lara, 1982). Esta relativa autonomía, profundizada en la década de los ochenta, le permite sobrevivir a la depresión que sufre el partido luego del colapso de la Urss.

³⁵ El exterminio de la U.P., justificado por sus gestores en el hecho de su vinculación con las Farc, tiene a nuestro parecer una razón política de mayor peso : los desplazamientos en el poder local regional de las viejas clientelas liberal y conservadoras, producidos por la rápida emergencia del poder de dicho grupo.

pero si de la neutralidad para asentarse y tener propiedad en el territorio. Esta forma debió competir con los efectos de la gran oleada de colonización, inicialmente con la marihuana luego con la hoja de coca y la amapola, que aportó una variedad de actores que rebasaban los límites del poder territorial de las Farc, insertando la heterogeneidad en sus dominios y acentuando quizás como respuesta su lógica autoritaria.

En la atribución de una simple connotación campesina para su movimiento, se olvida que en Colombia *no existían campesinos a secas*, que relativamente nunca ha habido una política agraria que fuera *apolítica*. Resaltamos esta tesis sobre una lógica de doble sentido en la definición de lo agrario: *la distribución de la tierra pasa por la mediación de la política, y, a su vez la creación de un dominio político local y regional, pasa por una redistribución de la tierra*³⁶. Este modelo tiene mucha fuerza en los inicios de las Farc, siendo simétrico a como actuaba el liberalismo. Pero las simetrías no se agotan con esa época inicial.

Bajo otro tipo de recursos y oportunidades locales el modelo permanece: cierta adhesión, ya no ideológica sino pragmática al poder del grupo, define su presencia en las zonas y las posibilidades de supervivencia de la población, o de establecimiento de actividades productivas y comerciales. Es una forma del hacer político distanciado de la expectativa de transformaciones revolucionarias de relaciones sociales y políticas estratégicas, maneniendo eso sí la propensión moral sesgada de defender los intereses de los de abajo (¿pero que sucede cuando uno de los de abajo no comparte la adhesión política ni el juego de poder del grupo?). Dependiendo de las condiciones políticas, sociales y económicas, según cálculos de inserción y asentamiento del dominio, las Farc refuerzan o manipulan ciertas relaciones sociales y políticas presentes en lo local y regional.

Esta dimensión de la política de las Farc, es entonces una orientación en lo local y regional, hacia la creación de redes como formas de intermediación, para participar, con otros actores incluyendo las comunidades, en la creación y gestión de recursos e intereses de diverso orden presentes en los espacios de su asentamiento. Al mismo tiempo se consolida, intrínsecamente en el ejercicio de esta orientación, el despliegue de su fuerza y su capacidad militar. Esta orientación apunta a lograr una desobediencia respecto al Estado y una influencia del grupo armado gestionada a través

³⁶ Un estudio notable sobre Trujillo en el Valle del Cauca, el de A. Atehortúa (Atehortúa, 1995).

de las redes. Un sentido de la política similar es examinado por F. Escalante para el caso mexicano (Escalante, 1993 y 1995).

Una definición general de las Farc

“El señor territorial en cuanto tal pretende ser la
autoridad por medio de la cual el soberano ha de entrar
en relación con los súbditos”.
Escalante, (1995).

En principio podemos proponer a las Farc como un sistema de redes, creado y manejado con gran fluidez -dependiendo de las condiciones locales y regionales - por un núcleo central histórico y de militancias probadas y definidas. Este sistema ha sido variable en el tiempo, incluso desde la época de las autodefensas campesinas, funcionando por períodos más como una acción organizada (Friedberg, 1997, Crozier , 1977) que como una organización definitiva y estática, a pesar de la imagen política del “adormecimiento” rural, que se le atribuye para ciertas épocas. En especial el examen histórico de la conformación de los frentes a partir de 1982 da cuenta de esa gran fluidez y variabilidad creativa del modelo.

Sobre esta *acción organizada*, podríamos pensar su relación con los *territorios* en su despliegue de fuerza: al menos por ahora no se trataría de una guerra de posiciones, tal como una lucha por el control de espacios geográficos, demarcados por medio de mapas. Emerge, si nos atenemos a la *fluidez* en la formación de sus *redes*³⁷, otra manera de pensar el desarrollo de la guerra. La *posición* es entendida por las Farc como la orientación hacia un dominio social y político sobre personas, familias o comunidades, donde la fuerza juega un papel de límite constrictor y de imperativo normativo para la acción; cubre la posición no sólo el sitio donde aquellas habitan o laboran sino también los espacios que ellas recorren y en donde interactúan. El entorno de cada militante, adherente o simpatizante de las Farc, tiene una significación política expresada intrínsecamente en el control militar. Les da un respaldo que puede abarcar incluso zonas urbanas, claramente controladas por el Estado. Se trata de un “territorio”

³⁷ Recuerda esta noción de redes, la de Dobry de *redes colusivas*. (Dobry, 1988)

completamente flexible, en la intención de garantizar la dominación sobre zonas virtuales de “colonización” o de dominio social y político.

Las Farc buscan acomodarse en mejores condiciones dentro de un sistema social más complejo, insertándose en las relaciones sociales existentes, apropiándose bajo el imperio de la fuerza de todos los recursos, institucionales o no (por ejemplo la acción comunal, los grupos ecológicos o deportivos, religiosos o de otro tipo). La participación en los inmensos recursos patrimoniales, conseguidos en la transacción y la negociación con los actores locales, bajo diversas formas, no es más que un aspecto principal de su acción estratégica focalizada en ciertas zonas. Además su dominio les permite con los mismos procedimientos y a través de las redes, la legalización y legitimación de su patrimonio, económico, social, cultural y político.

La creación de las redes de adhesión, bajo la pretensión ideal de un control total del territorio, se realiza a través de las propias redes familiares (donde el puente son sus propios militantes pertenecientes a las zonas), impulsando que dichos núcleos y sus extensiones tengan el contacto con la mayor parte de la población y definan su influencia y control.

La conformación de las redes a veces implica la pertenencia de sus miembros al núcleo central de la guerrilla o a las llamadas *Milicias Bolivarianas*. Para quienes están integrados directamente al grupo armado, puede reportarle las ventajas y beneficios que trae el intercambio clientelar: un empleo que puede representar ingresos económicos; status político y social, respaldo armado para la satisfacción de sus deseos y necesidades, etc. Es un intercambio que semeja la tradicional red de clientela consolidada. Pero aquellos no pertenecientes a esta dinámica de la red o a su entorno, corren el riesgo del extrañamiento (expulsión del territorio) que comienza por la sospecha de pertenecer a otra red, militar o del tradicional clientelismo político. Se extraña también por el rechazo de los implicados a ejercer sus roles a nombre de la guerrilla. Un extrañado son dos o tres núcleos familiares desplazados, sobre todo cuando el extrañado tiene una antigüedad en su asentamiento en la región o un papel de relevancia en la comunidad al ser tendero, líder comunal, religioso, ecológico o político tradicional, etc. Según el dominio de las redes no hay circulación de ciudadanos como simples individuos: el individuo aislado corre un riesgo mayor que el extrañamiento.

Sus territorios están dominados por la paranoia colectiva de la guerra y no por la confianza de estar construyendo una sociedad para una mejor convivencia para todos. El sentido individual del “estar alerta” perteneciente

al método de la autodefensa ha perdurado, determinando el tipo de comunidad que se debe construir aún en zonas rurales muy cercanas a las grandes ciudades y con presencia plena del Estado³⁸. Las sociabilidades normales del espacio público, el café, el bar, la discoteca, el río... se vuelven escenarios de su dominio y poder. Luego en la confrontación se transforman en escenario de guerra por la acción de los antagonistas.

Mucho se habla de su “vocación de Estado”. Es cierto que más que política creativa realizan funciones similares. También se sabe que las Farc aplican los mismos sistemas autoritarios tradicionales, propios de las zonas de guerra o de la violencia en Colombia, y siempre en función de la autodefensa y no de la invención de formas alternativas de auto-organización de las comunidades. Pero hay un detalle a destacar. No es la conformación de una entidad pública, de una regulación por encima de los intereses particulares (según la exigencia del buen liberalismo) sino la creación de un dispositivo que establezca su fuerza y la influencia de sus intereses particulares, que defina las desobediencias y las obediencias respectivas. Además el ejercicio general de la intervención en la vida de la zona, no se puede dar sin el cumplimiento de los diversos intercambios contruidos con las redes.

Las propias redes de clientela especifican la particularidad del control político sobre la zona en medio de una presencia general, que recuerda al Estado. Pero a su vez el núcleo central requiere estabilizar y darle cohesión a dichas redes. Existiendo sus redes en las dimensiones de la vida privada y hasta íntima de los pobladores, el grupo armado requiere de su control en estas esferas. Es también en función de esas necesidades políticas, que interviene en los conflictos suscitados entre la población, en sus instituciones, y, especialmente entre los núcleos familiares (sean íntimos, de negocios, de disputas por cualquier cosa...). *No es una simple vocación por*

³⁸ En Piñalito, zona de los Llanos Orientales dominada por las Farc, las construcciones son efímeras (hechas las casas en latas y en forma desarmable, recuérdese la imagen televisiva del desplazado cargando una puerta) cuya explicación es la zozobra sobre el “esto se va dañar de un momento a otro”, “esto no va a durar mucho”.

crear una regulación general que cobije a todos. En medio de la apariencia de un “gobierno general” se concretan los intereses particulares del grupo y de sus redes. No es un espacio público donde puedan circular y reconocerse los ciudadanos, no es un espacio indiferenciado e impersonalizado para todos. Tiende a ser un espacio de exclusión³⁹.

Su forma de gobierno a través de dichas redes, permite los manejos diferenciales de los diversos recursos, de los beneficios y de las ventajas según las mayores adhesiones a su dominio. Existe una simetría abismal con los manejos políticos conocidos en lo urbano, en nuestro país, manejos que siempre potenciarán por si mismos las lógicas de exclusión política y social generadoras de violencia⁴⁰.

En síntesis esta dimensión de la política puede pensarse en varios aspectos que podemos resumir:

a) la presencia de la fuerza armada de la guerrilla y en muchos casos de otros actores violentos, crea la demanda de protección y a su vez la oferta de la misma. Es dentro de esta lógica de intercambio con actores locales que toma sentido explicativo la lucha contra la drogadicción, la delincuencia común, el abigeato y en general, la moralización de la vida privada dentro de las zonas.

b) Su hacer e intervención política se centra en la creación de un sistema de redes para realizarse como un trabajo de intermediación complejo entre actores e instituciones diversas implicados en el orden local y regional del asentamiento.

c) Se gestiona la desobediencia de unos hacia el Estado y la ley, pero en los marcos de una obediencia obligada autoritariamente hacia el grupo armado. La tarea del Frente guerrillero es la de cortar toda comunicación directa entre los pobladores de una comunidad y el Estado. No es aceptable ci)

³⁹ “La autoridad no dependía de un vínculo genérico con el Estado, porque no era aquél un *público de individuos*. El orden arraigaba en sistemas de lealtades particulares: comunitarias, corporativas, señoriales, patrimoniales, clientelistas. Y ninguno de ellos podía conformarse con el modelo cívico. Porque nadie esperaba, para empezar, una ley que fuese igual para todos”. Escalante 1993, pag. 289.

⁴⁰ “Las redes ofrecen el control de cierto tipo de recursos y cuentan siempre con mecanismos de inclusión y exclusión.... Las redes son forma de vinculación social y de reconocimiento, que producen orden por medio de la confianza”, Escalante, 1995, pag. 35.

ninguna gestión que no pase por el filtro y el control del comandante local. No es factible ningún desarrollo ni iniciativa que no sea aprobada por él.

d) Se gestiona, además, en medio de una transacción indirecta o directa con la comunidad o actores de relevancia locales, la obediencia hacia normatividades de lo institucional, delitos o infracciones (por ejemplo frente al robo, relaciones extra maritales, el desorden). La diferencia está en que su incumplimiento lleva a castigos que exceden la ley del Estado. Este exceso que cuenta con la simpatía de los implicados en la transacción, redobla en la sociedad civil el autoritarismo tradicional de sectores populares y de elite.

e) Se intermedian recursos y políticas para lo local y lo regional ante instituciones más generales que las locales, actuando con eficacia al desalojar procesos de corrupción mayores ligados al clientelismo tradicional. El núcleo central del comando en la zona, donde al menos hay un comandante de lo político-militar y un comandante encargado de la moral, es la instancia final y oculta de la decisión sobre inversión y destino de los recursos. En ocasiones dicho núcleo central es el gestor directo ante las autoridades institucionales, otras veces la gestión recae en las propias instituciones locales formales, influenciadas por la red de intercambios y adhesiones, pero siempre bajo la vigilancia de aquel núcleo.

f) Se asegura así un orden público y político - no una esfera pública - que gira alrededor del núcleo central del comando en la zona, y a través de los intermediarios y de las redes.

Pasaremos a continuación a un estudio del caso regional sobre las Farc, que pretende consolidar la interpretación que acabamos de realizar. Es un estudio no agotado en sus perfiles.

Algunos aspectos de un *dominio* de las Farc

La región

Nuestro estudio de caso sucede en una región de alta montaña, paramuna, cerca de una mediana ciudad capital de Departamento. Es una zona ambiental investida socialmente de sentido recreativo para la población urbana, pero también zona de reserva natural, más allá de los 1.800 metros de altura. Resulta estratégica tanto por el recurso del agua, como por el valor futuro de sus tierras ubicadas del costado del desarrollo de los barrios de elite de la ciudad⁴¹. Es una región con antecedentes de comunidad indígena

y de asentamiento de negros cimarrones dedicados antiguamente a la minería del oro. De esta doble presencia aún quedan las huellas, en las veredas más pobres, especialmente San José, aunque los negros venieron muchas de las propiedades a comienzos del siglo pasado.

La región era autosuficiente con productos de pan coger, y, permaneció inaccesible hasta la construcción de una carretera en los años 60, con la finalidad de darle salida al café de la zona. En la cabecera del corregimiento San Antonio, ubicado en el vallecito donde comenzaba lo más alto de la montaña y hasta donde llegaba la tradicional *chiva*, se instalaron las 3 o 4 familias extensas más acomodadas que habían acumulado su riqueza en la explotación del recurso maderable y en el comercio de ladrillo y de abarrotos. Estos además localizaron sus negocios principales en la ciudad. Alrededor del pueblo se fueron instalando con los años algunos ricos y profesionales de clase media alta que ubicaron sus fincas de recreo en el valle que se formaba entre las dos grandes montañas. Ellos constituyeron el sector de los notables y sus vínculos políticos los tenían con los grupos de clientela de la ciudad y sus fracciones, liberales y conservadoras.

⁴¹ Sus bienes ambientales son su principal recurso, aunque el valor de la tierra la hace un recurso de apropiación por los capitales ilegales. Dichos bienes han sido una dotación fundamental de una esfera pública democrática para la recreación social popular y de élite. Especialmente el río ha sido fuente de vida social, relevante simbólicamente como comunicación popular e intercambio democrático de población rural y urbana, y en especial de acción cultural de generaciones de jóvenes. Ha sido fuente de sentido público e identidad social para la propia ciudad, además de soporte material de otros bienes comunes. El conflicto armado pone en juego su reproducción, su compatibilidad y su sostenibilidad pública. Para un soporte teórico Donolo (Donolo, 1997).

En muchos sitios del pie de monte del páramo se desarrolló la caficultura con mucho éxito entre los años 60 y los 80s.. Se formó sobre todo un pequeño y mediano caficultor. La infraestructura de San Antonio se construyó al parecer bajo iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros. Con la entrada de la roya y con la baja en los precios internacionales del café, la región entró en una gran depresión económica, a mediados de los ochenta, coincidiendo con el auge del narcotráfico. Las propiedades de los caficultores quebrados y empobrecidos fueron poco a poco adquiridas a muy buenos precios por sus agentes, o bien bajo las presiones consabidas. Se reconstruyeron las fincas para el descanso y la recreación de sus propietarios. Pero hacia el final de la década sus actividades de compra de la tierra era algo más que una forma espontánea de crecimiento de las posesiones. Parecía haber un proyecto sistemático de apropiación de la región y ellos mismos se mostraban interesados en proyectos de integración de la zona bajo proyectos conservacionistas.

Con la caída del café disminuyeron dramáticamente las fuentes de empleo para toda la masa campesina. Muchos campesinos se quedaron en las mismas fincas como jornaleros o vigilantes y otros siguieron sobreviviendo con pequeños ingresos por la venta de comestibles a los visitantes cuyo número aumentó con el tiempo. Sin embargo, las familias más acomodadas dominaban los puntos estratégicos de venta, concentrando en sus manos los bailaderos, las ventas de cerveza y de fritanga, las tiendas. Esto despertaba los celos de los pobres que sacaban sus toldos a la orilla del río y de la carretera. El turismo creció con el ingreso de nuevas empresas transportadoras. Los picos de las alturas de más de cuatro mil metros, las numerosas cascadas, los senderos ecológicos, etc, atrajeron montañistas y turistas de río con el aumento de los balnearios. A los empleos generados en el turismo, se sumó el del auge de las nuevas construcciones campestres de las zonas cercanas al plano y la parte alta próxima al pueblo. Junto a los pobladores aparecieron nuevos inmigrantes, algunos de origen paisa que culminaban ahí su recorrido luego de haber pasado por el deprimido sur del país.

También con la quiebra de las fincas cafeteras, los hijos de los campesinos que habían accedido a la educación primaria y secundaria se resistieron a volver a las actividades agrícolas de sus padres. Se emplearon en la ciudad durante el día, para retornar a dormir a las veredas, convertidas entonces en pequeños poblados-dormitorio. A comienzos de los noventa, la región era mucho más compleja e intrincada socialmente, que el paraíso idílico de

un río que había atraído desde los setenta la atención de los desarraigados hippies y que hacía del lugar el mejor balneario de la ciudad.

Las respuestas a la crisis

Al finalizar la década de los 80s., ante el aumento del desempleo, la comunidad se motivó para encontrar fuentes económicas alternativas, liderados por pobladores medios de la zona y con la anuencia de los notables, que no sólo influían enormemente desde siempre en la Junta Comunal, sino que tradicionalmente tenían sus vínculos con las autoridades de la ciudad para la consecución de los recursos. Se propusieron muchos proyectos: de reciclaje comunitario de basuras, con componente de educación ambiental; de creación de casa-hoteles, para habilitar, con la ayuda de la Corporación de turismo, el alojamiento de los turistas (la ayuda nunca llegó); de creación de un retén turístico, con el objetivo de recaudar dineros para invertir en obras que mejoraran la atención para los visitantes;

de creación de un sistema de tratamiento de aguas residuales y excretas, contra la contaminación del río. Todas estas iniciativas estaban enmarcadas en un gran proyecto de creación y explotación de un Ecoparque, que brindara garantías de explotación económica del turismo sin dañar el medio ambiente y que redujera el impacto de la crisis provocada por el desempleo. Al mismo tiempo se protegería la reserva forestal y el futuro del agua para la ciudad colindante por ese costado.

Los proyectos fueron entorpecidos en parte por la negligencia estatal, pero también por las intrigas intestinas entre las familias con influencia económica y política y con algún nivel de liderazgo en la región; intrigas relacionadas con las disputas de clientelas de los partidos tradicionales y de sus fracciones. Las tensiones dificultaron el apoyo de los demás miembros de la comunidad para la iniciativa de cualquiera de los grupos familiares que la liderara. Así los antecedentes de corrupción de muchos personajes de la Junta Comunal en el pasado, creaba la desconfianza sobre estas iniciativas, dificultándose la solidaridad y el apoyo para presionar su ejecución ante el Estado.

Con los fracasos se cerraron las posibilidades de nuevos empleos, aumentó la delincuencia común y juvenil en la región, incluyendo el vicio y la

drogadicción. Las necesidades de protección aumentaron. El número de policías en la inspección, pasó de cinco en 1981, a treinta en 1991. La inspección de policía se volvió una entidad ostensible en la región.

Paralelamente al fracaso de las iniciativas comunitarias surgió a fines de los ochenta una fundación ecológica, que recibió un importante aporte de dineros del exterior; era una ayuda económica para la compra de terrenos que serían destinados para una reserva en la parte alta de la cuenca del río que atravesaba la región. La Fundación contaba con algo más que el beneplácito de los grandes propietarios de la región, incluyendo los nuevos agentes del narcotráfico. También tenía el apoyo de las autoridades civiles de la ciudad. Apoyado por la Fundación un grupo ecológico creó un centro de educación ambiental y se iniciaron estudios sobre la fauna y la flora. Este grupo inició funciones de intermediación entre el Estado y los particulares en la compra de las tierras, abajo y arriba de los 1.800 metros de la reserva forestal, donde se encontraban colonos residentes de décadas atrás. El beneplácito mencionado suscitó la desconfianza de los campesinos más antiguos de la zona alta, por temor a ser expropiados al estar asentados un

área de reserva forestal. Es un campesinado relativamente pobre, que nunca ha salido de la zona, analfabeta, ni conoce el montarse a un bus.

La emergencia de la guerrilla en la región

El movimiento guerrillero no era cosa nueva en la región. Ya desde los ochenta, el M-19 había conquistado las simpatías entre los pobladores, y, desde mucho antes de la llegada de las Farc, el Eln circulaba con regularidad por esos territorios. Las propias Farc tenían la simpatía de algunos de los pequeños campesinos hoy empobrecidos que guardaban sus rencillas con los poderosos locales. A estas simpatías se fueron ligando poco a poco nuevas redes creadas en la región, migrantes o hijos de los desempleados, ellos mismos desempleados. Más tarde, hacia el año 1997, confluían los jóvenes educados en el ambientalismo, que no tenían opción escolar universitaria, pero que ya educados en esa experiencia no eran los mismos. Algunos de ellos ingresaron luego al propio Ejército, en desacuerdo con las formas de reclutamiento de las Farc, donde ganarían también una forma institucional de solventarse.

Es justamente en medio de los procesos de depresión y tensión social, de cambios en las propiedades y de conflicto en la zona, que confluyó en 1991 el primer ataque de las Farc, dirigido por el Frente encargado de penetrar en la localidad. Fue un ataque al cuartel de policía ubicado en el pueblo. Era una gran edificación que incluía a la caseta comunal y una escuela privada donde asistían los niños que no alcanzaban a matricularse en la pública. Caseta comunal y escuela fueron destruidas en el ataque, no así el propio cuartel.

Desde los meses anteriores se habían sucedido atentados y asesinatos de personas pertenecientes a familias de pequeños propietarios de la región, que habían invadido predios desde hacía mucho tiempo, y que tenían litigios de propiedad con algunas familias poderosas (éstas les habían ofrecido compra por las tierras y los habían invitado a abandonar la zona). Según diversas versiones de la comunidad el origen de la muerte y la amenaza provenía de un grupo de agentes corruptos de la policía, que habían sido trasladados como “castigo” a la zona a comienzos de la década. Había aparecido igualmente una *lista negra*, señalando a varios miembros de la Junta Comunal y de la región como pertenecientes a la guerrilla.

Fue un mismo miembro de la policía quién denunció todos estos hechos, ante la personería y la Secretaría de gobierno en la ciudad. Esta *banda* de policías contribuyó a aumentar el estado de zozobra y de terror que se vivía en las gentes del pueblo. Aunque los atentados cesaron, según los entrevistados, el ataque de la guerrilla fue asimilado, por sectores de pobladores, como un acto justo de venganza por todos los vejámenes realizados. Más tarde muchos de los miembros de la banda resultaron ajusticiados en la ciudad.

La presencia de la guerrilla vino a confluir con el aumento de actos delincuenciales por otros factores, con el secuestro común, el robo y algunas violaciones ocurridas. Ante las limitaciones de la policía y por las sospechas de enraizamiento de la guerrilla entre la comunidad, algunos propietarios de la región, reunidos desde antes en un comité comunitario para labores ambientales, se vieron ante la oferta de alguno de ellos de crear una organización de autodefensa. La oferta no prosperó y al parecer se logró algo mejor por la vía de la negociación con la guerrilla para detener los secuestros y a su vez asegurar la expulsión de la delincuencia común. Actualmente, ya consolidado el dominio guerrillero, muchos de los grandes

propietarios siguen visitando sus propiedades aunque otro tanto ha migrado de la zona.

Justamente por esa época, 1996, cuando las Farc ya habían engrosado sus filas con pobladores de la región e iniciado sus redes, se tomaron definitivamente el pueblo. Fue un atardecer, cuando llegaron y citaron a toda la población y bajo el lema de que “quien nada debe nada teme” y la invitación a permanecer tranquilos y adherirse al movimiento, se declararon la única autoridad. Para ese momento ya habían notificado a la policía que desalojara y había intensificado el boleteo hacia los grandes propietarios, la mayor parte raizales de la comunidad. Pero especialmente dirigieron su ofensiva hacia los propietarios considerados en la zona como posibles facilitadores del montaje de paramilitares y con vínculos estrechos con los partidos tradicionales, y que además tenían cuentas pendientes por los malos manejos comunitarios. Los invitaron a abandonar definitivamente el pueblo.

Se inició un nuevo éxodo en la región, esta vez por la decisión política de la guerrilla. Y fueron verdaderos éxodos por cuanto la mayor parte de las familias raizales estaban interrelacionadas en parentelas bastante amplias de familia extensa y dispersada por la zona. Estas redes familiares eran las dueñas de la mayoría de los negocios que funcionaron en el pueblo hasta 1996 y de buena parte de las tierras de la región. Según los entrevistados el extrañamiento de una persona significó el abandono de cuatro o cinco casas habitadas por sus familiares. Con estos éxodos el dominio de la guerrilla se consolidó.

Muchas de sus casas de habitación fueron arrendadas posteriormente. Luego los cánones de arrendamiento dejaron de pagarse paulatinamente, con la complicidad de la guerrilla que aumentaba así su influencia y su fuerza en la población. Se dice que algunas fueron ocupadas por personas que son sus protegidas directas.

Al mismo tiempo, las Farc iniciaron su campaña de moralización, más conocida como limpieza : mataron a la prostituta del pueblo, y, fue suficiente con cegar la vida de uno de los drogadictos para que los otros desalojaran el lugar; a los “sapos” (llamados así por su cercanía con los poderosos que salieron del pueblo), quienes se reunían cotidianamente en el billar les dispararon en las piernas luego de haberles dado un plazo para desalojar la

zona. Lo propio hicieron con los delincuentes comunes, a quienes impusieron el imperio de su ley.

Pero la venganza estuvo también metida en medio del nuevo dominio de las Farc. A la guerrilla habían ingresado jóvenes que habían heredado el viejo resentimiento social de sus padres y habían acumulado la rivalidad con los poderosos locales en las nuevas actividades comerciales del turismo y por los contratos con el municipio para el arreglo de las carreteras (los poderosos habían monopolizado el empleo para sus familias excluyendo a los más pobres, pero además al parecer ocasionado la muerte). Bajo la capucha y la noche reinó el resentimiento social de esos jóvenes y vino la amenaza de muerte a esas familias.

Pero no solamente se desplazó gente asimilada a los adversarios o a la 'descomposición social' sino algunos líderes que trabajaban con la comunidad, como Orlando el ambientalista universitario y el otro que realizaba los programas de educación sobre los jóvenes y los campesinos. Teniendo ascendiente en la comunidad, a Orlando lo llamaron y le dijeron que trabajara para ellos, que le tenían reservado un lugar para él. El rechazó la oferta y les dijo que no trabajaba para ninguna organización política. Así que lo extrañaron de la zona al año y medio de asentar las Farc su dominio. La comunidad reaccionó y se le respondió que sus conocimientos eran peligrosos en el orden de lo militar. Pero en la intimidad se confesaba que su liderazgo independiente era una fuerte competencia. Y en lo público difundieron la especie de que 'trabajaba para los militares', esquema reiterado en la expulsión de gente querida para la comunidad, como pasó con Tomás el educador del grupo ecológico.

Los efectos de la nueva situación se sintieron para las elecciones de 1997 y de 1998, según la opinión de algunos pobladores, cuando se registra no sólo la decisión de la guerrilla de impedir las sino además la falta de respaldo en la región para dichos eventos políticos:

"No... no hubo elecciones... dicen que la guerrilla no los dejó subir, pero allá no hubo mesas de votación allá no hubo nada... mirá! cuando hay un problema, sí? ellos mismos lo resuelven. Yo creo que por eso es que la gente no le interesa nada de lo demás, ni partidos tradicionales, ni nada, nada"

En medio de la difícil situación, la reserva de los pobladores frente a las clientelas que miraban como obstáculo para el progreso de la comunidad por su incapacidad política puesta al descubierto y por sus arreglos y componendas, que terminaban siempre en el uso particular de los fondos públicos - se tradujo de inmediato en una aceptación de la acción moralizadora de la guerrilla y de su presencia general (se definió “la demanda de guerrilla” desde varios costados). Desde entonces la percepción de los pobladores sobre la guerrilla es bastante compleja:

“Si o sea... la gente se comporta, porque bueno, los ‘muchachos’ aparecen, o se hace esto malo y hay un problema, ellos tienen miedo y respeto... y simpatía, bueno... la gente piensa, sí, que el pueblo está tranquilo por ellos, no?... Pero es... es que yo creo que la gente

es como tan ‘maldadosa’ hoy en día, cierto? Entonces yo creo que es lo único que, como que los frena?... Si hago esto... aparecen! y que ellos son sin agüero... la gente vive contenta, eeh... se respeta mucho... que si vos ponés un negocio, que se respete el otro, no llegar a arrasar, que porque vos llegaste con mucha plata, puedes montar un restaurante así! Que arrase, no! ellos no permiten eso... para que a todo el mundo le llegase plática”.

[¿Los llaman ‘los muchachos’?] “...es admiración, no? El muchacho es como el ‘chacho’, ja, ja, ja... el que dice ‘vengo de hablar con los muchachos’ ya se considera... *que tiene una importancia mayor!* Claro!! eso lo pusieron ... la misma gente del pueblo. Llega gente de la ciudad y está por allí... de pronto dice alguien vea lo mejor es que se porten bien porque aquí los muchachos... en la discoteca... la gente se siente muy importante, de que ellos hubieran estado en el momento en que ellos llegaron...”.

La Intervención de las FARC en los conflictos entre sectores

El poder de las Farc en la región estaba orientado hasta mediados de 1998 por un triunvirato: un comandante político y militar, un comandante moral y un notable de la región con gran influencia económica y ascendiente social en la comunidad. Después de 1995 por la comandancia política y militar pasaron personajes de la propia zona con vínculos familiares y de amistad

con los pobladores que permanecieron luego de los primeros éxodos; uno de ellos, ya muerto, era hijo de un paisa que había llegado cerca de quince años atrás con el auge de las actividades del turismo; el actual comandante también es un joven raizal reconocido del pueblo, quien se ganó la comandancia, más que por su capacidad militar, por la insistencia ante sus jefes, según el mismo cuenta, sobre sus capacidades para hacer y mantener relaciones. El comandante moral, era también un pequeño campesino asentado en el lugar hacía un buen tiempo. En el ejercicio de su autoridad moral, que pasaba por estricta, llegó a enredarse sentimentalmente con las mujeres de miembros de las redes de apoyo, cayendo en el desprestigio y desertando de la organización con una de ellas. Era también un paisa por más veras, quien terminó en el bando de los militares, apoyando luego, junto con otra guerrillera desertora, la primera incursión del ejército en 1998.

El notable generoso y filantrópico dedicado a varias actividades, había extendido sus posesiones en la zona y era importante por su influencia dentro de los pobladores.

La presencia de la guerrilla y la consolidación de sus redes mantuvo la preexistente estratificación social de la población. Para un ejemplo, tenemos el caso del corregimiento de San Antonio y de la vereda de San José. Al coincidir su mayor inserción y asentamiento con el sector de San Antonio, con los pobladores mejor dotados social y económicamente, el beneficio de su acción tiende a concentrarse en ellos, mientras al permanecer más retirada de San José, sus pobladores alejados de los nódulos de las redes de las Farc, siendo los más pobres, siguieron olvidados. Los pobladores de San Antonio, lograron orientar hacia el espacio de su residencia el flujo de los recursos y de las políticas comunitarias. Es la zona donde los pobladores tienen hijos, familiares o amigos formando parte del grupo armado.

Así los pobladores de San Antonio, acrecientan su poder, observando como los pobres de la vereda de *San José* se plegan o desisten en sus aspiraciones en pos de los recursos deseados. Es cierto que el vacío de *confianza*, dejado por la salida de los viejos grupos clientelares, es llenado por las nuevas redes del grupo armado. No obstante esta confianza va en proporción al relativo aumento de la tensión entre los propios pobladores, en quienes se reproduce la exclusión por la acción de dichas redes. La

intermediación de las Farc genera decisiones muchas veces parcializadas a favor de intereses coincidentes con sus propias redes, debilitando los vínculos y reproduciendo la desconfianza de los otros sectores. La legitimidad de la guerrilla fracturando se va en favor del aumento del ejercicio de la fuerza frente a la población.

De ese modo la intermediación de las Farc se asentó sobre las viejas rivalidades entre las veredas, al buscar su mayor inserción sobre la Junta de Acción Comunal, tradicionalmente en manos de la gente poderosa de San Antonio. Esta continuidad garantiza la continuidad del mayor desarrollo del casco urbano más estructurado. En San Antonio se concentra más población y una mayor proporción de casas de veraneo y fincas pertenecientes a sectores de clase media y alta de la ciudad, permitiéndole tener una mayor base social para la Junta Comunal, y el conseguir mayores recursos de la alcaldía del municipio. Según los informantes:

“San Antonio capitaliza y capta todos esos dineros y esas cosas y no promueven desarrollo, ni trabajo, ni actividades en todas esas veredas... se manejan muchos rencores... San José no quiere trabajar con San Antonio, la gente maneja unos rencores y unos odios impresionantes”.

Son los conflictos tradicionales por la competencia normal por los recursos para la vida comunitaria, sobre los cuales intervendrá la guerrilla con el sesgo señalado y resolviéndolos de la misma manera clientelista, reproduciendo la exclusión social y cerrando el espacio público al concurso de los variados intereses.

El caso del transporte

Es cierto que las Farc intervienen eficazmente sobre ciertas dotaciones públicas que generan beneficios colectivos, tal el arreglo de las vías y el funcionamiento del transporte :

“Ellos están muy... así! que les cumplan, que suban, que las carreteras se arreglen... Hace poquito los niños estaban llegando

tarde al colegio... el tipo por llenar el cupo se demoraba, cierto?... entonces inmediatamente lo llamaron, ¡Se va con los muchachos, tenga o no tenga pasajeros!...

“... que no tenían transporte? Se les arregló el horario para que los muchachos que están en la Universidad aquí, lleguen a la hora que tiene que ser... Por la noche no había transporte, entonces les pusieron transporte... entonces como que todo se les soluciona o se les da, entonces es por eso que la gente no...”

Sin embargo buena parte de sus intervenciones se realiza en otras ocasiones según el peso de las redes que imponen en su propio beneficio (tal como sucede en las Juntas comunales urbanas dominadas por el clientelismo liberal o conservador). Los bienes públicos llegan a ser de nuevo dominados a favor de un sector determinado. Las dotaciones que son soporte de una esfera pública que debe ser un soporte de una libre circulación y garantía de beneficios colectivos equilibrados entre diversos

sectores de la población, dejan de ser regulados por la competencia espontánea para regularse por la “influencia política” de un sector.

Así sucedió con las busetas cuyo terminal estaba ubicado en San Antonio: ellas bajaban desde ahí con el cupo completo y a los habitantes de San José, les tocaba el viaje de pie hasta la ciudad. Pasando primero por San José las busetas en la subida, sus habitantes optaron por cogerlas desde abajo para asegurar el puesto y regresarse cómodos desde San Antonio hasta la ciudad. El hecho provocó la ira de los habitantes de San Antonio, quienes con improperios y amenazas de “uso de la fuerza” bajaban a quienes ya venían ocupando un puesto. En el conflicto la decisión del comandante de la guerrilla favoreció a los pobladores de San Antonio prohibiéndose a los de *San José* que tomaran la buseta desde abajo. Y para todos quedó claro que toda norma establecida por los habitantes de la primera vereda es ley que debe cumplirse, al estar respaldada por las Farc.

El caso de la escuela

Según la misma entrevistada la escuela de la vereda San José estaba ubicada dentro del cauce del río, lo cual la coloca en situación de alto riesgo; por ello desde hacía dos años la comunidad había estado luchando por su reubicación en medio de múltiples evasivas y obstáculos por parte de la Alcaldía de la ciudad. Sin embargo a mediados de 1998, mediante la colaboración de Orlando, líder ambientalista de la zona y de la Fundación, se logró llevar allá a todas las entidades públicas concernientes, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas y a la Secretaría de Educación, para que confirmaran la situación de alto riesgo de la escuela. Así se consiguió el inicio de los trámites y el dinero para su reubicación. Algunos miembros de la comunidad, habían hablado ya con una vecina para que vendiera un lote de terreno con este propósito, y se había acordado el monto con la aceptación de la Secretaría de Educación Municipal. La ubicación era adecuada y tenía algunas instalaciones que podían ser aprovechadas. En la reunión donde finalmente se iba a cerrar la transacción se aparecieron encapuchados los miembros de la guerrilla :

“se presentaron los muchachos con un señor y le dijeron a la gente: ¡la escuela no se va a ubicar allí!. Ya tenemos el lote, don fulano de tal... hablamos con él y él nos vende el lote más barato, es más grande y él ofrece que construye la escuela y construye la casa para el maestro y construye un espacio para la Junta de acción Comunal... don fulano se compromete en tres meses en entregar las llaves... Aparecieron en la última reunión y dijeron eso!... dieron esa orden...”.

La Secretaría de Educación canceló la iniciativa y se apartó del proyecto. Días después intervino la Personería y determinó el cierre de la vieja escuela. Sin haber construido la nueva escuela, los niños dejaron de asistir a clases. Ante esto miembros de la comunidad volvieron a hablar con la señora propietaria del lote inicialmente negociado; sin embargo días después se reiteraron las amenazas :

“a la casa de la señora llegó un tipo en una moto a decirle ¡ni se le vaya a ocurrir negociar de nuevo con la comunidad de ‘San José’ el lote suyo porque la matamos, no disfruta ese dinero!... entonces uno se pregunta, ¿bueno y detrás de eso que hay? ... yo escuché una

susplicacia que alguien dijo 'no! es que ese lote es de fulano de tal. que es de la guerrilla o es simpatizante' algo así tiene que haber detrás ...".

Este tipo de acciones donde se favorecen transacciones con miembros de las redes problematiza la percepción sobre la guerrilla, de manera similar al uso instrumental tradicional de "la política", para favorecer intereses particulares en el desarrollo de los bienes públicos, negando los intereses de sectores de la población:

"Entonces eso a uno le da una piedra...! que tanto luchar la comunidad para resolver esa vaina de la escuela y en la última reunión...! Nunca participaron, nunca intervinieron... nunca buscaron soluciones, no estuvieron con la comunidad! La gente de la Junta de Acción comunal yendo diariamente a la Secretaría de educación, buscando, mediando, llamándolos trayéndolos... para que vieran y dieran el visto bueno de que la escuela estaba en alto riesgo... haciendo todas esas diligencias que vos sabes eso cómo es de horrible... y a última hora vienen y desbaratan todo...! Entonces cómo es eso?"

Sencillamente la comunidad de San José se había saltado a la guerrilla en su papel de intermediación frente al Estado y frente a los demás particulares

y posiblemente la negociación del lote iba a beneficiar a alguien que no estaba comprometida dentro de sus redes de influencia.

El caso de instalación de una oficina de pagos de servicios

Luis es un personaje quien según comentarios de personas de la comunidad era el padre del primer comandante de la zona⁴². Vive en La Virginia (vereda ubicada más abajo de San José). Algún día le comentó a nuestra entrevistada (esto fue hace unos años) que la administración municipal iba colocar una oficina de pagos y que 'la gente de San Antonio quería que se instalara allá arriba':

⁴² Al parecer desaparecido a finales de 1999 en otra zona rural cercana.

“Yo le dije, Don Luis y la comunidad que dice? Y el me dijo, ‘nó, es que a la comunidad nosotros la podemos convencer si pedimos el apoyo y la presión... que los *niños* presionen un poquito para que se haga en La Virginia”. Él está interesado en que se haga en La Virginia porque él vive en La Virginia. Entonces yo pienso que el comandante se va a ver en un lío, en un momento dado porque, respalda a la Junta de Acción Comunal pero su papá le está pidiendo que sea aquí”.

La Junta Comunal como micro Estado

Hacia 1995, consolidado el poder de las Farc en el pueblo, la Junta de Acción Comunal se constituyó en el organismo principal de la administración del poder local. Funciona como Inspección de Policía, como instrumento de organización comunitaria legal, de prevención de desastres, también como aparato asistencialista especialmente en la atención primaria de la salud. Y también como organismo recaudador de impuestos y embrión de entidad financiera. Una de nuestras entrevistadas nos arrojó igualmente algunas luces:

“Vea ellos, los de la Jac, por ejemplo ahora en Diciembre, ellos tienen un sistema de préstamos, que maneja la Junta; si la persona tiene un desastre, si el río se le lleva la casa, ellos le prestan con el uno y medio o dos por ciento a la gente... Ahora en Diciembre el

regalo para los niños y para los grandes... le regalaron una... el sistema ese de Sky? de los canales de televisión con pantalla gigante, se los dieron a ellos en la caseta comunal, entonces en el día está prendido funcionando, todo el día y los sábados para los niños y en la noche para los grandes. Cuando hay partidos allá, ellos tienen donde ir... eso fue un regalo de la Acción Comunal... y los préstamos es lo que yo sé”.

“... la atención médica es muy linda, si vos no tenés plata, si la gente no tiene plata, nadie te cobra, si el niño está enfermo te dan la droga, si tiene... por ejemplo los sueros para diarreas y todo lo regalan; las vacunas allá son completamente gratuitas... eso es a través de la Acción Comunal”.

A través de la Junta se realiza el control sobre las distintas actividades del pueblo, cuando no interviene la propia guerrilla directamente en la formación del orden y controlar todas las formas de sociabilidad en el orden de lo público social. En una noche de Diciembre de 1998, en una de las dos discotecas del pueblo, San Antonio, sucedió un hecho que muestra la forma como ejercen las labores de policía y se regulan los conflictos intrafamiliares.

“Hace poquito paso que un tipo llegó con la esposa a bailar y le llegó según ellos “la moza”, y empezaron a hacer escándalo, entonces la esposa empezó a pegarle a “la otra”, ahí mismo cogieron al tipo, a la señora, y a “la moza”, los llevaron y los amarraron en la cancha de fútbol y allá los dejaron amarrados toda la noche hasta las 4 de la tarde del otro día...”

“Las discotecas no se abren allá para la gente del pueblo si no el Sábado y el Domingo, porque el viernes no pueden usarla, porque el viernes es para que la gente compre mercado..., o sea primero su casa y lo que le sobre la discoteca... el viernes solo pueden usarla los turistas”.

[¿cómo controlan que la gente no baile los viernes?] “Hay una persona, la discoteca nunca está sin esa persona.... Cada noche hay una persona diferente, se hace en una mesa con en un altico, sólo, y

vos lo ves con una libreta anotando lo que esté pasando... por ejemplo si a uno lo están molestando, mandan a llamar al tipo, que se quite de la mesa y que no moleste... siempre hay una persona allí controlando...”

Pero la vigilancia de la discoteca tiene otro sentido además del control disciplinario. Es una, vigilancia de tipo fiscal sobre los ingresos de la taberna:

“... además que ellos controlan también, porque ellos piden una ayuda, un impuesto para la Acción Comunal, que ni siquiera es para la guerrilla... eso si es muy claro porque ya nosotros lo vimos. Entonces piden por tanta venta un porcentaje, cierto?... ellos controlan porque mucha gente no les da la plata que es, siendo que es para los mismos.... Por eso yo creo que también está la persona allí, para ver exactamente la venta... para que les entre su impuesto”.

El peso de las redes se siente en la propia Junta comunal y la pertenencia a ellas domina la circulación pública de los individuos, además de su intermediación en todas las actividades señaladas. La “esfera pública” cuenta con el poder fuerte de dichas redes, de tal manera que cualquier asentamiento en la región, tendiente a permanecer en la zona o a transitar temporalmente, debe pasar por una identificación donde juega su respaldo y protección. Es normal la pregunta a los recién instalados o en general a la población civil, ‘y... ¿por usted o ustedes quien responde?’, para referirse a la pertenencia y a esa acreditación de la red. Estar por fuera implica la zozobra, la inseguridad y la desconfianza.

Conclusiones

En las coordenadas de la larga interacción con sus adversarios, las Farc han dado paso, con gran pragmatismo, a un cierto “proyecto” social y político, que crea una gran dificultad para reconstruir una esfera pública más incluyente que excluyente, más diversa y permisiva que intolerante y autoritaria; seguirá así, si el propio proceso de paz no proporciona cambios en la ‘filosofía’ y el *modus operandi* de la guerrilla tanto como de sus propios antagonistas.

La dificultad también deriva de la acción de los propios actores institucionales y no institucionales que contienden a las Farc, especialmente cuando los primeros han diseñado con el tiempo un modelo de respuesta del Estado hacia la guerrilla, que incluye procesos de intensa violencia y autoritarismo con la población civil, especialmente la que simpatiza con la guerrilla. Si bien esos procesos obedecen a las dimensiones interactivas propias del conflicto armado, se relacionan también con el impulso consciente de propuestas para el país atinentes a cambios que quieren ubicarlo en términos más globales e internacionales. Desde lo institucional se ha venido gestando un modelo fuerte con grandes exclusiones que en su curso se ha impuesto sin grandes intercambios de comunicación con los llamados sectores de la sociedad civil, especialmente los populares, diluyéndose una esfera pública democrática.

En lo que por ahora nos compete, la radiografía desde la lógica de la guerrilla, resumimos:

a) Las Farc son políticas por la adquisición de dominio local y regional. Operan con una gran fluidez, y, en el ejercicio poder recuperan ideaciones tradicionales de autoridad, conservadoras y campesinas. Este ejercicio que se mira en el espejo de las propias lógicas de exclusión de los tradicionales “valores colombianos”, resulta a su vez excluyente de quienes han accedido por otro camino a los valores de la modernidad⁴³. La disociación entre lo

⁴³ Desde una mirada clásica de creación de una esfera pública, no son sólo dotaciones de orden material las que les sirven de soporte sino también las culturales (ambas definen su carácter); estas últimas también se encuentran en las credenciales que como carta de presentación exhiben individuos y colectividades en su formación como *sujetos*, lo que sólo es posible en lo público (Donolo, 1997). Son soporte también de sus formas de acción y de comunicación. ¿Qué se puede esperar como esfera pública bajo la lógica de esa reapropiación permanente de las Farc de los llamados “valores tradicionales”?

nacional, lo regional y lo local, se recrea en ese dominio de las Farc, tanto como las múltiples fragmentaciones que vive el país. Es una distancia marcada entre un ruralismo tradicional y violento, reformado con la práctica de actores ilegales urbanos (igual de tradicionales en su subjetividad en medio de sus lógicas transaccionales y de su relocalización en lo global); es una distancia que se contrapone también con aquellas formas de sociabilidad que el país a “grandes tropezones” históricos, ha venido definiendo como lo público en lo urbano nacional. Su estilo se opone a una civilidad en la definición de lo público político y de lo público social.

b) La inserción política de las Farc en una zona no recrea relaciones sociales estratégicas nuevas, que cambien al país en sus diversas formas de circulación social, de distribución de los recursos humanos y materiales, lo que implicaría la creación de nuevos bienes públicos colectivos y una reformulación de la esfera pública bajo nuevas relaciones de reciprocidad, solidaridad e intercambio social y de intercambio con la naturaleza. Las Farc juegan un papel reproductivo de las lógicas sociales y políticas tradicionales, recuperadas bajo la acción de otros actores que degradan la vida social. Se sustituyen poderes simétricos, apropiándose de los bienes públicos y gestionándolos en función del dominio de la población, cerrando con el juego de otras lógicas las dimensiones de la esfera pública.

c) El rol de autoridad y de “Estado” es una intervención en los conflictos microsociales, bajo la imperiosa necesidad de regulación de sus redes, para darle estabilidad a su intermediación y a su dominio sobre ellas. El dominio sobre las redes garantiza el dominio sobre la región (incluyendo su población), y la intermediación negociadora a través de ellas permite la estabilidad de la fuerza y de la influencia de sus intereses.

d) En el variado intercambio social que implica la acción individual y colectiva, una “esfera pública” debe contener múltiples mecanismos que brinden la confianza de sentirse seguro y protegido, lugar donde a su vez los individuos o colectividades, deben portar sus credenciales y valores de diverso orden que le son correspondientes. En este caso dichos mecanismos materiales y subjetivos pasan por la intermediación de las redes y la intervención directa del mando de la guerrilla, y, al igual, se inicia y consolida un proceso de cambios en las credenciales y valores que portan individuos y colectivos, hacia aquellas formas aptas para la intermediación y

la transacción del grupo armado; en últimas es un proceso que define los soportes culturales propios de la lógica clientelar (mientras esto sucede lo propio de “el estar y permanecer en la zona” es una gran inestabilidad, inseguridad y desconfianza)..

e) Bajo esta forma política las Farc, adquieren definitivamente un carácter de actor transaccional. Traslada esta lógica al plano de la escena de las conversaciones de paz, puede consolidarse como un actor estratégico que gestionaría con gran fluidez, acrecentándolas, las capacidades adquiridas. Este tipo de condición política arroja incertidumbres sobre la posible reconstrucción de lo público, nacional, regional y local, más aún, cuando los propios actores institucionales, sociales, políticos y gubernamentales, se mueven dentro de la misma orientación. Esta anotación nos propone la hipótesis, de que los actores armados en la solución del conflicto y en la reconstrucción del Estado, consolidarían su rol de intermediarios entre el orden institucional y las propias poblaciones reducidas a su dominio territorial, algo así como el papel desempeñado por el señor territorial (Escalante, 1993, p.108). Sería la reconstrucción definitiva de un espacio público de transacciones, que dictaría la continuidad de los múltiples dominios de las redes de clientela y de los “barones” de la política.

Bibliografía

ATEHORTÚA, Adolfo, *El poder y la Sangre*, P.U.J. y Cinep, Bogotá, 1a. de., 1995.

BALIBAR, Étienne, "Violence, idéalité et cruauté", en Françoise Héritier *De la Violence*, Éditions Odile Jacob, París, septiembre 1996.

CASTAÑEDA, Jorge, *La Utopía desarmada*, TM Editores, Bogotá, 1994

Comisión de estudio sobre la violencia : *Colombia : Violencia y Democracia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.

CROZIER, M., FRIEDBERG, E. *L'acteur et le système*, Éditions du Seuil, Paris, 1a. ed.1977.

DOBRY, Michel, *Sociología de las crisis políticas*, CIS y Siglo XXI Editores, Madrid, 1a. ed. 1988.

DONOLO, Carlo : *L'intelligenza delle istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 1997.

DONOLO, C. : "Sull'incontro tra capacità e beni comuni nello spazio pubblico", *Rassegna italiana di sociologia*, Anno XXXVIII, N.2, Aprile-Giugno 1997, Ed. Il Mulino.

ELIAS, N., Scotson, J. *Logiques de l'exclusion*, avant-propos de M. Wieviorka, Fayard, Paris, 1997 (1a. de. inglesa, 1965).

ESCALANTE, Fernando : *Ciudadanos imaginarios*, Colegio de México, México, 2a. ed. 1993.

ESCALANTE, Fernando : "Clientelismo y ciudadanía en México. Apuntes sobre la conceptualización de las formas de acción política", *Revista Análisis Político*, N° 26, U.N, Iepri, Sept/Dic, 1995.

DOMÍNGUEZ, J. Fernelly : *Las FARC, de la guerrilla partisana a la guerrilla militar, historia de la guerrilla 1982-1986*. Tesis en historia, Universidad del Valle, 1996.

FRIEDBERG, Erhard : *Le pouvoir et la règle*, Éditions du Seuil, Paris, 2a. edic.1997.

GERSTENBERGER, H. : “La violence dans l’histoire de l’État, ou la puissance de définir”, *in : Violence et politique (Colloque de Cerisy, 1994)*.

GOFFMAN, I. *Strategic Interaction*, Oxford, Basil Blackwell, 1970.

LARA, Patricia : *Siembra vientos y recogerás tempestades*, Planeta, Bogotá, 1986.

LUNA, Mario, *Le M-19, un acteur politique armé*, Memoire de D.E.A. en Sociologie, EHESS, Paris, 1997.

PIZARRO, E., PEÑARANDA, R.: *Las FARC, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, TM Editores, Bogotá, 1a. de. 1991

PIZARRO, Eduardo, *Insurgencia sin revolucion, la guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*, TM Editores, IEPRI (UN), Bogotá, 1a. de. 1996.

ROMERO, Mauricio : “Elites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú”, en *De las armas a la política*, R. Peñaranda y J. Guerrero editores, TM Editores – IEPRI, 1999.

TOURAINÉ, ALAIN : *La parole et la sang. Politique et société en Amérique latine*, Éditions Odile Jacob, Paris, 1988.

VARGAS, Alejo: “Guerrilla, Régimen político y Estado: Lecturas y Re-Lecturas” en *La irrupción del paraestado*, Ensayos sobre la crisis colombiana, Palacio Germán, compilador, Cerec - Ilsa, Bogotá, 1990

WOMACK, Jr., John : *Zapata y la Revolución Mexicana*, México, Siglo Veintiuno editores, 1987, décimoquinta edición en español (primera en inglés y en español en 1969).

MODELOS DE DESARROLLO Y EXCLUSION

Gabriel Misas¹

Quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Esta es la tercera vez que participo en estos coloquios; siempre me ha encantado participar ya que para los economistas es una buena ocasión de trabajar e intercambiar ideas con los sociólogos. Pocas son las veces que se hace en Colombia un intercambio entre economistas y sociólogos.

Voy a presentarles hoy una interpretación de la situación colombiana actual a partir de las características que tuvo el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo, que funcionó desde mediados de la década de los cuarenta hasta los años noventa, dio lugar a la configuración de unas formas institucionales específicas que entraron en conflicto, a partir de los años noventa, con el nuevo modelo de apertura económica. El choque de estos dos modelos ha dado lugar a grandes conflictos en la sociedad colombiana. El nuevo modelo, como lo veremos enseguida, exige unas condiciones particulares para su funcionamiento y los compromisos institucionalizados, contruidos a lo largo de la vigencia de la política de sustitución de importaciones, no pueden dejar de funcionar de un momento a otro.

La sociedad colombiana tiene una serie de conflictos que la atraviesan de tiempo atrás, y es en el marco global definido por esos conflictos donde se desenvuelve la economía. Son cuatro los grandes conflictos que atraviesan la sociedad colombiana: la insurgencia armada, la situación de los derechos humanos, el narcotráfico y la corrupción. Estos conflictos se venían presentado en la sociedad colombiana desde tiempo atrás, unos con mayor o menor fuerza; sin embargo, si bien la sociedad no había logrado resolver los problemas que de ellos se derivaban, si había logrado manejarlos, a través de procesos adaptativos. Los cambios en el entorno internacional, a partir del fin del mundo bipolar (este-oeste) con la caída del muro de Berlín a finales de la década de los ochenta, modifica radicalmente la situación y los problemas que eran de ese entorno empiezan a ser percibidos de otra manera por los países desarrollados. Los problemas de derechos humanos y narcotráfico se transforman, entonces, de un problema de policía en un problema de seguridad nacional, primero para los Estados Unidos y posteriormente para los países europeos.

¹ El autor es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Vicerrector Académico de dicha institución.

El problema de los derechos humanos, que Colombia siempre había tenido con mucha agudeza desde los años cincuenta, es un problema que se consideraba interno del país y para su tratamiento teníamos siempre el apoyo de los aliados americanos. A partir de un cierto momento el problema empieza a ser debatido ampliamente y, como consecuencia, los problemas que eran internos del país empiezan a ser vistos globalmente. Se crea así una situación nueva que se asocia, además, al proceso de apertura.

A lo largo de los cincuenta años que van desde los años cuarenta hasta los años noventa, construimos un modelo de desarrollo caracterizado por los siguientes elementos:

1. A diferencia de otros países de América Latina que lograron un proceso de sustitución de importaciones a partir de alianzas de clase que permitieron que el sector agrario financiara el proceso de industrialización, nosotros tuvimos un modelo particular. La fracción hegemónica, y al mismo tiempo central, la burguesía cafetera, logró aliarse con la naciente burguesía industrial y manejar un modelo profundamente excluyente; desde el principio los cafeteros lograron manejar el modelo de sustitución de importaciones.

Robert Bates, un politólogo americano que ha publicado un trabajo sobre economía política del café donde presenta distintos casos², nos muestra cómo en muchos países (Argentina pero igualmente Brasil y México), a través de la inflación y del manejo de los precios internos se lograba extraer el excedente a los productores de bienes primarios para financiar el proceso de acumulación de capital y el proceso de sustitución de importaciones. En Colombia tuvimos una característica totalmente distinta. La férrea alianza entre agricultores y cafeteros (la burguesía cafetera y la burguesía industrial), hizo posible que lleváramos a cabo procesos similares por un camino totalmente diferente, a través de tres mecanismos. En primer lugar, se estableció el Fondo Nacional del Café, manejado por los cafeteros y su público, que se sostuvo gracias a dos elementos: la sobrevaluación de la moneda (los cafeteros aceptaban sobrevaluar el peso y no aumentar la devaluación como se hizo en otros sitios) que implicaba menores ingresos a los cafeteros, aceptados por ellos mismos, debido al hecho de que desde los cuarenta hasta finales de los ochenta hubo un convenio internacional del café que obligaba al país a no producir más café del que se podía colocar

² Bates R. [1997], "Instituciones y Desarrollo", en Pizano D. Y Chalarca J. (edición y compilación) [1997], *Café, Instituciones y Desarrollo Económico*, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá.

en los mercados internacionales de acuerdo, con el monto de la cuota; volúmenes de ingresos muy grandes de los cafeteros hubieran generado volúmenes

gigantescos de café que hubieran sido imposibles de colocar en los mercados internacionales y el Fondo del Café se hubiera quebrado al tener que asumir la compra de millones de sacos de café que no podía colocar en el mercado internacional.

Esta situación condujo a desarrollar una arquitectura institucional muy interesante en la cual el eje central era el precio interno del café. Los dos elementos centrales del modelo de sustitución de importaciones fueron, por una parte, la protección elevada, casi infinita, a la producción nacional, primero de bienes manufacturados y después de la agricultura comercial; no se permitía la importación de un bien que fuera producido en Colombia; no sólo había altos aranceles sino bienes de prohibida importación.

Por otra parte, el precio interno de compra del café se convirtió en otro elemento de ese arte institucional. El Fondo Nacional del Café se comprometió desde los años treinta a comprar la totalidad de las cosechas cafeteras a unos precios determinados; de esta manera, independiente de la evolución internacional de los precios del café, los precios Internos de compra del café siempre se mantenían y la productividad hacía crecer los ingresos de los cafeteros. Protección a la producción nacional y precios internos de compra del café fueron los dos elementos centrales que organizaron toda la macroeconomía desde los años cincuenta hasta los años noventa. Durante ese largo periodo Colombia presentó la tasa de crecimiento más elevada de América Latina, en promedio, con la menor volatilidad y al mismo tiempo la menor tasa de inflación.

La alianza entre cafeteros e industriales se complementaba con el hecho de que los precios macroeconómicos eran administrados por el Estado: las tasas de interés y las tasas de cambio. Siempre tuvimos control de cambios durante cincuenta años, con pocas excepciones; en algunos periodos por negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se eliminaba el control de cambios, pero durante cincuenta años, por lo menos en cuarenta y ocho tuvimos control de cambios. Al mismo tiempo tuvimos tasas de interés administradas por el Banco Central que fijaba los intereses.

Esto dio como resultado que durante un periodo largo, que va desde mediados de los años cuarenta hasta inicios de los años sesenta, tuvimos una inflación inferior a un dígito; pero también tuvimos serios problemas con el gasto público, que tendía a ser muy reducido y, por consiguiente, la participación del Estado en el proceso de desarrollo también era muy reducido. Si observamos la evolución de los indicadores

de desarrollo social hasta los años setenta, las tasas de cubrimiento de educación y de salud, por ejemplo, podemos constatar que eran mucho más reducidas en Colombia que en el resto de América Latina. En Colombia sólo se puede hablar de Estado a partir de los años sesenta cuando empieza a aumentar la participación del gasto público dentro del PIB. Durante largos periodos, hasta finales de la década de los sesenta, la participación del gasto público en el PIB fue inferior al 4.5%, cuando en el resto de países de América Latina estaba en ese mismo momento alrededor del 12%, niveles que solamente logramos obtener nosotros al terminar la década de los setenta.

2. Esto dio lugar a una forma particular de desarrollo. La migración campo ciudad es radicalmente diferente a como se presenta en el proceso de industrialización en Europa, donde hubo una migración muy fuerte de la agricultura al sector manufacturero. Aquí la migración se presentó del campo a la ciudad con una altísima tasa de participación del sector informal, entendido como un sector no moderno ligado con una débil relación salarial. En el crecimiento económico que conocimos en Colombia la industria nunca pudo pasar del 20 o 22% del producto interno bruto (hoy podemos estar alrededor del 16 o 17%). Entonces Colombia nunca pudo consolidar un modelo de industrialización serio por varias razones, entre ellas una fundamental: la demanda interna creció lentamente por falta de una generalización de la relación salarial.

Alrededor de los años cincuenta (1948-1949), una misión del Banco Mundial, presidida por el profesor Currie, encontró una extraña situación en la agricultura colombiana: las mejores tierras, las cercanas a las vías de comunicación y a las ciudades estaban utilizadas en una ganadería super extensiva, con muy poca incorporación de proceso técnico. La misión Currie recomendó establecer altos niveles de impuesto predial a las tierras mal explotadas de forma tal que los terratenientes se obligaran a vender las tierras so pena de pagar impuestos compensatorios debido a que el impuesto se iba a facturar en función de los rendimientos que podían dar

esas tierras. Se buscaba así obligar a los terratenientes a explotarlo adecuadamente o a vender parte de las tierras para conseguir recursos para explotarlo comercialmente. La alianza estrecha entre agricultores y terratenientes (el mundo hacendatario de que nos habla Guillén Martínez), y la nueva burguesía industrial, funcionaban perfectamente.

El gobierno de Laureano Gómez nombra una comisión de notables (siete u ocho personas muy notables de la época), para que evaluara la propuesta y, obviamente, muchas de las recomendaciones, sobre todo en lo relacionado con las obras de

infraestructura, se llevaron a cabo. Pero no se hizo nada con relación a los impuestos a la tierra; por el contrario, la comisión evaluadora de la propuesta recomendó reducir los impuestos a la tierra y, (oh paradoja! estamos hablando del año cincuenta cuando la comisión se reúne), propuso eliminar la leyes laborales porque encarecían el costo de la producción en la agricultura. La misma comisión, tomando los datos de la misión Currie, decía que si se aumentaba en un 20% la productividad de la agricultura, eso daría lugar a quinientos millones adicionales que podían ser invertidos en el incremento del consumo (como el total del PIB del año cincuenta fue de cuatro mil ochocientos millones, quinientos millones eran el 12 o 13% del PIB total, que significaba más o menos el 35% de la producción industrial de la época). Desde ese momento se tomó la decisión de crecer en la agricultura, pero sin redistribuir el ingreso, ni generalizar la relación salarial. El crecimiento de la industria que tuvimos, debido a esa alianza, estuvo basado en la expansión de la demanda existente y no en la creación de una nueva demanda basada en reducir los costos de los alimentos, de los bienes salario, para ampliar la capacidad productiva del país.

Durante el periodo en que tuvimos una tasa de inflación reducida (de menos de un dígito) la tasa de crecimiento del precio de los alimentos fue un 25% mayor que el crecimiento general de precios. ¿Cómo enfrentaron otros países esa situación? Pongamos el caso de Corea del Sur, que es bien pertinente porque este país exportaba en el año 1954-1955 ochenta millones de dólares y Colombia, que exportaba bienes primarios, llegaba alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares en la misma época. Hoy en día Corea (no tengo los datos de los últimos dos o tres años), debe estar exportando alrededor de ciento veinte o ciento treinta mil millones de dólares (casi la totalidad en bienes manufacturados) y nosotros, mal que bien, estamos exportando doce mil millones de dólares. Corea lo logra gracias a una agricultura muy moderna que produce alimentos muy baratos,

resultado de una innovación, de un cambio en la agricultura coreana a través de un proceso radical de reforma agraria. La reforma agraria de Corea del Sur y de Taiwan fue más radical que la reforma agraria de la China de Mao y de la Corea de Kim il Sung. Esto permitió ampliar considerablemente la demanda interna por bienes manufacturados porque la renta de la tierra se paso, vía alimentos baratos, al sector industrial.

En Colombia fue al contrario. El crecimiento interno de la demanda por bienes primarios y por bienes agrícolas se resolvió con crecimientos muy fuertes del precio de los alimentos; entonces esa alianza terrateniente, que no se dio en otras partes en América Latina, fue muy fuerte aquí. Desde ese momento se marcó claramente la tendencia del desarrollo futuro: no aumentar los ingresos salariales para aumentar la demanda. El resultado fue totalmente distinto. Partimos del crecimiento equitativo de la

demanda existente, que al principio iba a ser muy grande, y que fue muy rápido. La demanda que existía antes del proceso de sustitución de importaciones iba creciendo lentamente, pero las demandas para las fábricas que se establecieron crecían muy rápidamente porque íbamos sustituyendo importaciones que se hacían antes. Si antes se importaban cincuenta millones de dólares de confecciones, cuando se empiezan a producir confecciones en Colombia, se restringen las importaciones de confecciones; entonces, para las industrias establecidas en Colombia la demanda crecía muy rápidamente, aunque la demanda por confecciones creciera lentamente. A partir de mediados de los años sesenta nos encontramos con lo que se ha denominado la fatiga industrial, que llevó a nuestro amigo Mario Arrubla a considerar que el modelo no tenía salida, porque ya habíamos substituido todos los bienes de consumo; pasamos entonces a sustituir bienes intermedios y algunos de capital y esto nos lleva de nuevo, a finales de la década de los ochenta, a que el sector productor no estaba creciendo porque la demanda no crecía. Entonces, en ese proceso de lento crecimiento y de poca generalización de la relación salarial, con un consumo muy bajo de bienes manufacturados por los consumidores colombianos, se empezaron a mostrar las debilidades del modelo.

Una característica del proceso nos conduce a la idea del marxismo de que la gran contradicción entre salario y capital era insoluble y, en consecuencia, a lo Rosa Luxemburgo, iba a llegar el bloqueo total. Los países desarrollados especialmente, presentaban problemas con lo que se

conoce como modelo fordista de acumulación de capital. Incluso los países de América Latina sometidos a la sustitución de importaciones a través de lo que se conoce como modelos populistas, basados en altos niveles de gasto público, lograron enfrentar el problema del crecimiento de la demanda interior.

Nosotros en Colombia logramos llevar todos los problemas centrales de la sociedad colombiana a la zona de los conflictos no negociables; la tierra era un problema que no se tocaba, que no se negociaba y la gente, entonces, migraba a las zonas de colonización desde los años cuarenta o cincuenta. Como dice Pécaut: la "violencia" de los años cincuenta es una violencia política liberal -conservadora, pero en el trasfondo había un problema de acceso a la tierra de millones de campesinos. Este un problema que nunca tocamos, un problema que parece exótico, hablar de reforma agraria como hablaron la semana pasada las FARC. Nadie entiende eso porque el acceso a esos recursos, en todas partes del mundo, es un problema resuelto hace mucho tiempo. Creo que sólo se habla de reforma agraria en Colombia y en Zimbawe que son los países que no tienen resuelto este problema.

Colombia nunca ha querido resolver los problemas centrales. Siempre se lanza a la zona de no negociación. Los demás países resolvieron cierta parte de sus problemas a través de la inflación o a través de gastos del gobierno, a través de políticas populistas que lograban esa cohesión social. Nosotros decidimos por esa adicción elitista antiestatal que viene desde el siglo XIX, no enfrentar los problemas, no resolverlos; pero obviamente los problemas no resueltos se resuelven por otros canales. Nosotros simultáneamente tuvimos la menor tasa de inflación, la mayor tasa de crecimiento per cápita en América Latina, pero presentamos la tasa de violencia más grande. El problema no es la pobreza y la violencia; el problema es la no resolución de los problemas y la exclusión. Si la gente se siente excluida y marginada los problemas son mayores. Una de las características nuestras es la no resolución de los problemas que generan esa violencia.

3. Otro elemento fundamental, resultado de los años de la sustitución de importaciones, fue la creación del manejo monetario a través del Banco Central. Para resolver los problemas del crédito se apelaba a tasas de interés subsidiadas para que los terratenientes se convirtieran paulatinamente en empresarios agrícolas. Eso generó todo tipo de tensiones inflacionarias en la década de los sesenta, durante la cual el Estado, para darle legitimidad al final del Frente Nacional y en el marco de

la nueva situación internacional, tuvo que aumentar su gasto público, ya no solamente para atender la construcción de obras de infraestructura sino para aumentar el gasto público social, sobre todo en educación y salud. Aquí es donde se presenta la situación que alguien llamó esta mañana una "democracia plebeya". El clientelismo, en buena medida, logra canalizar parcialmente las aspiraciones y las necesidades de la población. Y una práctica que ha sido tan criticada y tan vilipendiada y que no es, obviamente, una manera eficiente de asignar los recursos, se convierte en la única forma como los sectores populares logran tener acceso a los recursos del Estado. El gran problema del clientelismo consiste en la no separación de lo público y lo privado, lo que da lugar a que se presenten desviaciones importantes.

El manejo monetario a través del crédito y la emisión para financiar la formación de capital y los altos niveles de protección que dieron lugar a un ahorro forzoso (balances extraordinarios muy altos por parte del sector manufacturero, del sector agrario) o el crecimiento de la demanda interna que no varía a la misma velocidad significa que empezamos a ver procesos de concentración en la acumulación de capital desde los años cincuenta. Del negocio de la cervecería en los años treinta finalmente quedaron tres cervecerías: Bavaria, que absorbió casi todas las cervecerías después de la crisis de los años treinta; Cervecería Unión en Medellín, que es la fusión de dos empresas cerveceras; y Cervecería Aguila, que era también fusión de dos empresas cerveceras

de la Costa. Lo mismo podemos decir en el caso de los textiles, las confecciones, etc. Entonces la política de protección y la política de financiamiento de la formación de capital dio lugar a un enorme proceso de centralización y concentración de capital que fue el eje que permitió la conformación de conglomerados económicos muy grandes entre el año setenta y el año noventa.

Esto nos lleva a que al final de la década de los ochenta se presentaron profundos cambios en la sociedad colombiana. El proceso de sustitución de importaciones se había debilitado muchísimo desde los años setenta, pero se mantenían sus dos elementos centrales: los altos niveles de protección y el manejo de los precios en la compra del café. Pero ya la participación en las exportaciones de los cafeteros (el cincuenta por ciento de las divisas del país las generaban los cafeteros) a finales de la década de los ochenta, con el carbón y petróleo, habían descendido radicalmente y en consecuencia los

cafeteros habían dejado de ser fracción hegemónica. Cuando se inicia el proceso de apertura, los cafeteros ya han perdido la centralidad, ya no generan las divisas del país; en el año noventa menos del veinte por ciento de los ingresos eran por concepto de café. Hoy en día, con los precios internacionales del petróleo, las exportaciones de café deben presentar menos del doce por ciento del total de las exportaciones colombianas.

Entonces surge una nueva posibilidad. La valorización del capital no se podía hacer en las mismas condiciones en el sector manufacturero y el crecimiento enorme de los conglomerados económicos buscaba una salida. Allí es donde se presenta el proceso de apertura, con dos elementos centrales: primero, un proceso de privatización de las empresas estatales (fundamentalmente telecomunicaciones, vías, etc.), y segundo, un modelo de apertura económica y desregulación financiera.

En las universidades somos muy dados a achacar el proceso de apertura al Fondo Monetario y al Banco Mundial. El primero de éstos siempre había tenido la idea de impulsar un proceso de apertura, desde el año cuarenta y cinco en que se crea, hasta el año dos mil; eso no es nuevo ya que siempre ha sido una constante en el Fondo Monetario; lo que es nuevo es ¿por qué las burguesías latinoamericanas, que hasta mediados de los ochenta o finales de los noventa siempre se opusieron al modelo, se casaron luego con él?. Simplemente el modelo de sustitución de importaciones ofreció posibilidades de obtener altas tasas de beneficio, y los excedentes generados durante mucho tiempo habían generado unos volúmenes de ahorro en las empresas, que estaban muy interesadas en invertir en nuevos sectores que hasta ese momento, habían estado vedados al sector privado, como las comunicaciones, la refinación y

producción de petróleo, la generación de energía eléctrica, el manejo de los puertos, de los aeropuertos, etc, El modelo de apertura brinda a esta burguesía, muy trasnacionalizada ya, una nueva posibilidad de obtener altos beneficios. Casi todos los grupos colombianos tenían muy poco interés ya en los sectores industriales.

En Colombia, a diferencia de otros países que hicieron la apertura económica en medio de dictaduras militares o terminando esas dictaduras (con tasas de inflación muy elevadas), hicimos un proceso de apertura

simultáneamente con la promulgación de una nueva constitución. Y de allí surgen los problemas. La nueva constitución tiene dos elementos contradictorios. Por una parte, consagra una serie de derechos sociales y económicos para la población colombiana pero, por otra, consagra al mismo tiempo los elementos de la apertura económica. El modelo de apertura, para poder tener éxito, exige tres cosas: una gran flexibilidad, es decir, una gran competencia en el mercado de bienes y servicios; una gran flexibilidad laboral; y una enorme capacidad en el Estado para generar excedentes en las cuentas fiscales con el objeto de reducir las presiones inflacionarias, en caso de exceso de gasto del sector privado. El sector público debe ser profundamente flexible, no para aumentar el gasto, sino para disminuirlo y poder aumentar el excedente.

En el caso colombiano, en lo que tiene que ver con los bienes y servicios, la flexibilidad más o menos se ha logrado. Pero, en el mercado laboral, independiente de la Ley 50, todos los compromisos institucionalizados creados durante largos procesos de sustitución de importaciones (derechos de huelga, derechos de presentar pliegos de peticiones, convención colectiva de trabajo, prestaciones sociales, obligación del patrón de pagar el SENA y las cajas de compensación familiar, etc.), van en contra de los fundamentos del modelo neoliberal de la apertura. Entonces, no tenemos flexibilidad laboral. Esos compromisos institucionalizados habían sido creados en cierta medida para aumentar la demanda interna, pero al nuevo modelo no le interesa la demanda interna sino articularse con el mercado mundial. No vamos a entrar en los detalles pero, dada la herencia que tenemos en América Latina de un proceso altamente protegido, la apertura económica tiene serias dificultades para implantarse.

Menos factible aún es el otro elemento, es decir, que el Estado tenga excedentes. La constitución de 1991 crea nuevos derechos sociales y económicos pero, como lo dice Théret, un teórico francés en problemas del Estado, todo derecho social es una deuda pública en potencia; cuando a las personas se les reconocen derechos a la educación

y a la salud, automáticamente el Estado está contrayendo una deuda pública que tiene que ser pagada en el futuro cuando esa persona exija sus derechos³.

Tenemos, pues, allí una serie de problemas en dos formas: primero el modelo de sustitución de importaciones no había generado las competencias para un proceso de apertura, (las normas de producción propias a nuestro modelo de sustitución de importaciones estaban muy alejadas de las normas internacionales en buena medida porque el proceso de renovación tecnológica había sido muy reducido debido al lento crecimiento de la demanda interna); y segundo, el crecimiento del gasto público era inevitable debido, primero, a los compromisos institucionalizados creados en los años cincuenta pero, al mismo tiempo, a los desarrollos constitucionales. Eso ha llevado a que el Estado después de la apertura económica, o mejor aún, después de la constitución del año 1991 haya aumentado enormemente el gasto público. Hoy en día, alrededor del 32 al 34 % del PIB total es gasto público, cuando hace veinte años escasamente llegábamos al 7 u 8 %. Y la tendencia es a que siga creciendo. Al mismo tiempo, dadas las tendencias internacionales, hemos reducido los aranceles y hemos reducido los impuestos de renta, en consecuencia el Estado cada vez depende más del crédito interno y del crédito externo y los anuncios que se hacen de reducir el gasto público son muy difíciles de llevar a cabo.

El gasto público tiene que enfrentar tres problemas: crear las estructuras físicas sociales y las bases tecnológicas para valorizar el capital privado pero, al mismo tiempo, crear las condiciones de legitimidad; un gobierno que la población no sienta que se está gastando buena parte del dinero en el bienestar de la gente no tiene legitimidad. A finales del año dos mil tenemos un problema derivado del viejo modelo pero, al mismo tiempo, tenemos problemas nuevos creados por el nuevo modelo, que está en contradicción con las normas constitucionales con que contamos. Todo ello agrava mucho los problemas que tenemos, como el problema de desempleo, que venía desde antes.

³ De este autor se puede consultar: Théret B. [1992], *Régimes économiques de l'ordre politique : esquisse d'une théorie régulationniste des limites de l'État*, Paris, PUF; Théret B. [1998], "De la Dualité des Dettes et de la Monnaie dans les Sociétés Salariales", en Aglietta M. y Orléan A. (bajo la dirección) [1998], *La Monnaie Souveraine*, Paris, Éditions Odile Jacob; y Théret B. [1999], "L'effectivité de la Politique Économique: De la Autopoiése des Systèmes Sociaux à la Topologie du Social", *L'Année de la Régulation*, volume 3, Paris, La Découverte.

En conclusión, el modelo de sustitución de importaciones no era un modelo profundamente incluyente y, en consecuencia, una parte de la población económicamente activa del país, una buena parte de la población, en términos

generales no estaba incluida en ese proceso de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. Pero ese modelo no era por definición excluyente, sólo lo era por su manejo. Pero el modelo de hoy en día es por definición excluyente; excluye a todas aquellas personas que no tengan las capacidades, las competencias para ser competitivos en los mercados internacionales. Entonces, no solamente no incluimos los antiguamente excluidos, sino que muchos de los que estaban incluidos en el proceso, hoy en día están excluidos. Por eso pasamos de tasas de desempleo antes del proceso de apertura del 10 o 12 % en las principales ciudades, a tasas de desempleo del orden del 20 o 21 % sin contar los miles de obreros del campo que perdieron el empleo al perderse más de 700.000 hectáreas de las áreas sembradas en el país.

Venimos de un modelo excluyente de hecho y entramos en un modelo excluyente, no solamente de hecho, sino también desde el punto de vista teórico. La situación es bastante complicada. En estas circunstancias tratamos de hacer con un modelo profundamente excluyente, negociaciones de paz que pasan necesariamente por un proceso de mayor gasto social.

OPCIONES DE DESARROLLO Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Carlos Humberto Ortiz Quevedo¹

Poder político y ventajas comparativas

Parto del hecho de que el poder político en Colombia ha estado concentrado por unas elites que se relacionan fundamentalmente con la gran propiedad terrateniente y el gran capital industrial y financiero. No insistiré en el argumento porque la disertación de Gabriel Misas lo ilustra con claridad. En esta exposición propondré que la opción de desarrollo que escogió esta elite le permitió consolidar su poder económico y político, pero el desarrollo económico, social y político se resintió. Nuestro planteamiento central es que la escasa inversión del Estado en la formación de capital humano, especialmente entre las capas pobres de la población, implica una forma de exclusión social que ha redundado en un menor crecimiento económico y en un atraso en la modernización del país.

Empezaré por considerar el modelo de desarrollo de Colombia en una perspectiva internacional. Para realizar esta comparación me basaré en la teoría del comercio internacional que mejor explica el patrón del comercio entre las naciones subdesarrolladas del sur y las naciones industrializadas del norte: la teoría de las ventajas comparativas (sobre esto volveremos adelante). Desde esta perspectiva lo que podemos decir del desarrollo económico colombiano es que se ha basado más en la abundancia de recursos naturales que en el desarrollo del potencial humano. Esto es algo más o menos evidente. Basta tener ojos y andar por Colombia para palpar la carencia de educación.

Esta elección de desarrollo, por que en cierta medida fue una elección, ha sido nefasta para Colombia. El desarrollo que se basa en la abundancia de recursos naturales ha implicado un menor nivel de crecimiento económico con relación al desarrollo que se basa en la creación de ventajas comparativas por medio de la inversión en capital humano.

Las cifras están ahí para ser examinadas. Si tomamos a Colombia en el siglo XX, la tasa del crecimiento promedio anual del ingreso real per cápita fue apenas del 2%. Es una cifra positiva pero pequeña. Implica un

¹ El autor es profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales Económicas de la Universidad del Valle.

desempeño mediocre en comparación con el de las economías recientemente industrializadas cuyo ingreso real per cápita ha crecido anualmente a tasas entre 7% y 10%.

El impacto en el bienestar social de esa diferencia en las tasas de crecimiento es impresionante. Para captarlo voy a expresar estas tasas en términos del número de años requeridos para duplicar el ingreso. Cuando el producto per cápita crece a una tasa anual del 2% se duplica el ingreso real per cápita en 35 años: se necesita más de una generación para duplicar la capacidad de compra. Pero si el producto per cápita crece a tasas del 7% se necesitan aproximadamente 10 años para duplicar el ingreso real per cápita; o sea, en 10 años, menos de una generación, usted puede estar disfrutando de una capacidad de compra dos veces mayor de la que disfruta hoy.

Evidentemente, las consecuencias económicas y sociales de una mayor dinámica económica son impactantes. Para ponerlo en otra dimensión preguntémosnos cuanto tiempo necesitaríamos para alcanzar el nivel actual del ingreso real per cápita de los países desarrollados si seguimos como vamos. La situación es la siguiente: el ingreso real per cápita de los países desarrollados es aproximadamente 10 veces el de Colombia. Un cálculo sencillo arroja que para llegar a ese nivel de ingreso con una tasa de crecimiento del 2% anual necesitaríamos 116 años. Demasiado tiempo...

La teoría de las ventajas comparativas, para los no iniciados en la teoría del comercio internacional, es una teoría muy sencilla y robusta que plantea básicamente lo siguiente: un país tiende a especializarse en aquellas actividades productivas que son intensivas en los factores abundantes del país. De modo que si nosotros tenemos abundancia de recursos naturales y de fuerza de trabajo nos especializamos en las actividades que son intensivas en estos factores de producción, y otros países, con mayor dotación de capital, se especializan en actividades que requieren capital en forma intensiva. Esa es la idea.

La teoría de las ventajas comparativas fue desarrollada por David Ricardo (1821) y fue retomada por la teoría económica neoclásica. Según David Landes (1998), la teoría de las ventajas comparativas permite explicar las tendencias estructurales del desarrollo latinoamericano.

Quiero resaltar en esta disertación que para el caso colombiano las ventajas comparativas tienen implicaciones muy importantes. Como nuestra fortaleza ha estado en la abundancia de recursos naturales y en la abundancia de fuerza de trabajo poco calificada, la economía colombiana se especializó en actividades primarias (agricultura y minería), actividades que son intensivas en los factores mencionados. Por esta razón Colombia es buena para exportar café, somos buenos para exportar petróleo, somos buenos para exportar carbón, níquel, esmeraldas, flores, azúcar y, últimamente, somos buenos para exportar marihuana, cocaína y heroína.

No sobra decir que con la apertura económica el país se ha encasillado todavía más en las actividades primarias. Se confirma así que es ahí donde se encuentran sus fortalezas competitivas. De hecho, no sería exagerado plantear que la apertura económica indiscriminada de la década de los noventa, junto con una tendencia a la revaluación del peso, indujo una desindustrialización relativa del país y un proceso que podríamos llamar de “reprimarización” de la actividad económica.

Ventajas comparativas y exclusión social

Nuestras ventajas comparativas explican por qué el Estado colombiano no se ha preocupado por la educación de la gente con la intensidad que debía. Sencillamente esta opción de inversión pública no se consideró necesaria para el desarrollo de las actividades básicas de la economía. Pero el encasillamiento resultante en las actividades primarias y, por consiguiente, el escaso desarrollo de la industria manufacturera, encarriló al país por una senda de crecimiento inferior en el contexto internacional.

Que un país siguiendo sus ventajas comparativas de corto plazo se encasille en actividades primarias a costa de sacrificar sus posibilidades de crecimiento de largo plazo es una posibilidad que los teóricos del desarrollo han reconocido. Los desarrollos teóricos recientes sobre el crecimiento endógeno y las nuevas teorías del comercio internacional han mostrado nuevamente esta posibilidad (Lucas, 1988; Krugman, 1990; Young, 1989; Matsuyama, 1992). La idea esencial es que el encasillamiento en actividades económicas cuyas tecnologías se caracterizan por un limitado aprendizaje en la práctica o limitada innovación tecnológica puede implicar una vía de desarrollo de bajo crecimiento económico.

Además de los teóricos del desarrollo económico contamos con la evidencia documentada por los historiadores económicos. Alice Amsden, quien estudió a fondo el desarrollo económico de Japón y Corea del Sur, mostró cómo la orientación hacia el aprendizaje y hacia la adopción de tecnologías foráneas potenció el desarrollo industrial de estos países y su promoción económica (Amsden, 1989). David Landes, cuya historia económica del mundo es un aporte fundamental para la comprensión de la riqueza y la pobreza de las naciones, muestra el impacto retardatario en el desarrollo económico de los países que resulta del encasillamiento en actividades primarias (Landes, 1988). Este autor es especialmente crítico de aquella visión que hace del mercado internacional el demiurgo del desarrollo. Me permito leer el siguiente texto que es tomado precisamente de la parte de su obra que Landes le dedica al desarrollo económico de América Latina: “La teoría económica [de la ventaja comparativa] es estática y se basa en las condiciones del presente, (...) ciertas cosas no sucederán si uno no hace que sucedan. Si los alemanes hubieran escuchado a John Bowring... Aquel viajero inglés que se dedicaba a la economía lamentó profundamente que los tontos alemanes quisieran fabricar hierro y acero en lugar de continuar con el trigo y el centeno y seguir comprando las manufacturas a los británicos. De haberle hecho caso, habrían complacido a los economistas y reemplazado a Portugal, con su vino, su corcho y su aceite de oliva, como modelo de economía racional. También habrían terminado siendo más pobres” (Landes, p. 404). Toda una lección para nuestros radicales aperturistas criollos.

¿Qué tiene que ver esto con la exclusión? Todo. Nosotros hemos tenido en Colombia un estado elitista, como ya se dijo, pero también excluyente, precario, corrupto y reactivo. Lo de elitista ya lo explicó Gabriel Misas. Excluyente: creo que la figura más impactante es la del Frente Nacional, un pacto político de los partidos del poder para excluir a los demás del ejercicio del poder. Precario: la presencia del Estado en muchos espacios de la nación es escasa, especialmente en el campo. Corrupto: se ha consolidado una democracia limitada por el poder de la riqueza para financiar campañas e imponer la agenda de intereses privados. Reactivo: el Estado colombiano ha tendido a reaccionar a las demandas de la población -algunas veces con violencia- más que a proponer autónomamente las soluciones. Por tanto, las elites colombianas perdieron el siglo XX como directoras del Estado; se desaprovechó la oportunidad de invertir en la gente, consolidar la democracia e inscribirnos en los procesos de modernización de la economía y de la sociedad.

Puesto en otra forma: la especialización de Colombia en actividades primarias fue el resultado de una utilización del Estado que excluyó la promoción de la gente por la promoción de los intereses privados de los grupos económicos más poderosos. De hecho, los objetivos fundamentales de los gobiernos bipartidistas han sido dictados por los intereses de quienes financian las campañas. Lo social siempre ha venido en segundo o tercer lugar en la agenda del Estado. Sobre esto volveremos después.

Es conveniente aclarar que no estamos interesados en construir una interpretación maniquea de lo que ha sido el Estado en Colombia. En el transcurso del Siglo XX hubo avances importantes, se desarrollaron las clases medias, la mujer se educó y se proyectó a la vida pública, los centros urbanos se consolidaron como centros de la vida nacional, los indicadores de bienestar han mejorado, etc. Lo que planteamos es que los avances pudieron ser mayores. Tampoco pensamos que todos los políticos han sido o son reaccionarios o corruptos. Colombia sí ha tenido (algunos) políticos progresistas. No obstante, creo que podríamos ponernos de acuerdo fácilmente en que los progresistas han sido derrotados. Estoy pensando en Lleras Restrepo del partido Liberal, derrotado por Turbay y López; pienso en Gaitán con su programa populista de clara orientación social; pienso en las reformas sociales del General Rojas a pesar de la dictadura; y también pienso en Galán como heredero ideológico de Lleras. Todos ellos y algunos otros derrotados de una forma u otra, incluyendo el asesinato.

La apertura económica y la consolidación de las ventajas comparativas

A principios de los años noventa nos montamos en la última moda neoliberal con fervor renovado. Reincidimos en la lógica de la ventaja comparativa con la apertura económica de Gaviria. No fuimos nada originales; de hecho, nos contagiamos de una epidemia ideológica continental. Impulsados por los economistas neoliberales del norte los gobernantes latinoamericanos se desbocaron a abrir sus economías. La lista es significativa: Salinas de Gortari en México, Menem en Argentina, Collor de Melo en el Brasil, y Fujimori en el Perú. No se debe olvidar que antes de ellos Pinochet hizo lo propio en Chile.

La evaluación de la apertura para Colombia es relativamente desfavorable. En diez años de apertura económica se ha generado un proceso de desindustrialización del país y un proceso de “reprimarización”. Cada vez dependemos más del petróleo, del carbón, del níquel, y de ciertos productos

agrícolas, como la caña en el Valle del Cauca. La agricultura nacional fue perjudicada pues muchos productos agrícolas desaparecieron de los campos colombianos arrasados por la aplanadora del mercado mundial.

En 1998 el PIB creció en términos reales a la irrisoria tasa del 0.6%. Dado el estancamiento del conjunto de la economía todo ese crecimiento se explicó exclusivamente por el crecimiento del sector minero, especialmente del sector petrolero. En el año 1999, como ustedes saben, tuvimos la peor recesión del siglo, una caída del PIB de 4.5%. Si comparamos el periodo de la sustitución de importaciones, con el periodo posterior a la apertura comercial, el balance de la última década es negativo. Entre 1970 y 1989 el PIB creció en términos reales a una tasa anual del 4.6%; por otra parte, excluyendo el año 1999 que es un año de recesión, y calculando el crecimiento anual promedio entre 1990 y 1998, se obtiene una tasa de crecimiento del PIB de 3.7%. O sea que tuvimos apertura comercial y empezamos a crecer más lentamente, cuando obviamente las expectativas eran diferentes. Además, el ingreso se concentró aún más, la pobreza aumentó, el desempleo se disparó, la corrupción campea y los grupos alzados en armas tienen en jaque al país.

Ahora bien. Lo anterior no debe interpretarse como un reclamo por autarquía y protección a ultranza. La apertura económica era probablemente inevitable. El régimen de sustitución de importaciones y las alianzas políticas que apoyaron el diseño de una política proteccionista tendieron a favorecer a sectores industriales que se caracterizaban por estructuras de mercados altamente concentradas. Además, entre la elite empresarial del país se daba por sentado que los recursos del Estado estaban ahí para financiar los proyectos de inversión a bajos costos y cubrir todos los riesgos posibles. Tal política implicó una escasa renovación tecnológica y un estancamiento de la productividad industrial. De hecho, el atraso tecnológico fue uno de los factores que motivó un crecimiento inusitado de la inversión industrial durante los primeros cinco años de la década de los noventa. El problema de la apertura comercial es que se realizó de manera neoliberal, o sea minimizando el papel del Estado, cuando en realidad se necesitaba más Estado. Se necesitaba una mayor presencia del Estado para realizar inversión en infraestructura, para modernizar las instituciones, especialmente aquellas dirigidas a promover las exportaciones, para invertir más en educación y en salud. Como resultado el proceso de transformación estructural de la economía siguió estancado e inclusive retrocedió por la desindustrialización que siguió a la apertura.

Este estancamiento de la estructura económica colombiana ya había sido caracterizado desde la década de los ochenta por Chenery, Robinson y Syrquin (1986).

La transformación estructural consiste básicamente en el proceso por medio del cual los países van diversificando su sistema productivo, van densificando sus relaciones intersectoriales y van generando nuevas industrias con mayor tecnología incorporada. En Colombia, ya lo había mencionado Gabriel Misas, pasamos de la producción de bienes de consumo a la producción de bienes intermedios, pero realmente no hemos logrado desarrollar una industria de bienes de capital y mucho menos una industria de desarrollo tecnológico avanzado. ¿Por qué ha sucedido esto? Creo que en cierta medida eso lo explica el papel excluyente del Estado.

Volvamos a los hechos. La riqueza está fuertemente concentrada en Colombia. Después de Brasil tenemos el nivel de concentración del ingreso mas alto en Latinoamérica. Conocemos los problemas de cobertura y de calidad de los servicios públicos en salud y educación. En la prueba TIMMS, la cual midió la capacidad de nuestros estudiantes para resolver problemas matemáticos, Colombia ocupó el penúltimo lugar entre veinticuatro países desarrollados y en desarrollo. Sólo superamos a Sudáfrica. Además me gustaría referirme a nuestra propia memoria. Desde que era niño recuerdo que los maestros del sector público hacían huelga porque las mesadas llegaban atrasadas o no les pagaban. También recuerdo las largas colas de los pensionados y sus protestas por el atraso en los pagos. Muchos de mis propios estudiantes de la Universidad del Valle llegan a la universidad con graves problemas de lectura y escritura y en esta apreciación me acompañan probablemente muchos colegas de la Universidad del Valle. Y se supone que a la Universidad pasan los que prueban una mejor preparación. No creo que debamos abundar más en nuestras miserias. Tenemos suficiente para establecer que la inversión social ha sido escasa y la despreocupación del poder abundante.

Por ello se estancó el proceso de transformación estructural del país. No hemos generado una industria de bienes de capital ni mucho menos sectores industriales de punta (electrónica, informática, biotecnología, etc.) Tampoco hemos sido capaces de consolidar nuestra democracia. Creo que estos son resultados que se explican entre otras cosas por la carencia de capital humano en el país. Y esto se explica a su vez por la escasa inversión pública en la gente.

Condiciones geopolíticas de las opciones de desarrollo

¿Qué es lo que determina que un país escoja una senda de desarrollo? ¿Por cual razón Corea del Sur y Japón escogen la opción de invertir en la gente y Latinoamérica no? Aquí en Latinoamérica tuvimos una experiencia que sería interesante recordar. Me refiero a la “Alianza para el Progreso” del presidente Kennedy. Ustedes recordarán que después de la Revolución Cubana vino el miedo de los Estados Unidos y de las elites latinoamericanas a la propagación de la revolución. Eran los tiempos de la guerra fría y el dominio geopolítico del planeta no estaba de ningún modo decidido como en la actualidad. En forma inteligente Kennedy decidió convertirse en abanderado de las transformaciones sociales del subcontinente latinoamericano. La “Alianza para el Progreso” era un programa de desarrollo humano basado en la educación, la salud y la reforma agraria. Pero se desmontó después del bloqueo comercial que le impuso Estados Unidos a Cuba. Las elites latinoamericanas se sintieron más protegidas y una a una echaron para atrás los avances logrados, especialmente en términos de reforma agraria. Lo mismo sucedió con las otras aspiraciones. Esto se logró cuando los sectores más retardatarios de las elites locales retomaron el poder y desmontaron los programas sociales de la “Alianza para el Progreso”. Así, Latinoamérica volvió a confiar en su ventaja comparativa: sus recursos naturales.

En el caso de los “tigres asiáticos” la opción de desarrollo escogida fue la respuesta óptima a un entorno internacional hostil; todos ellos estaban rodeados de las grandes potencias comunistas -Rusia y China-, las cuales nunca disimularon sus objetivos expansionistas. Los “tigres” no podían confiar en sus recursos naturales para su desarrollo; estos países son prácticamente “peladeros” si los comparamos con las exuberantes naciones latinoamericanas. Para su legitimación y sostenimiento las elites de los países del sudeste asiático tuvieron que invertir en lo único que tenían: su gente. El resultado fue una senda de crecimiento superior, pues indujo la industrialización y el desarrollo tecnológico. En Latinoamérica, por el contrario, siguió predominando la producción primaria -extractiva y agrícola- que requiere muchos recursos naturales y trabajo extensivo de escasa formación educativa. Por tanto, nuestra industrialización ha sido limitada, no se ha diversificado suficientemente la oferta hacia actividades con mayor demanda de inteligencia y capital humano, ni se ha consolidado un mercado interno por los bajos ingresos de la población, los cuales se explican a su vez por la baja productividad económica.

Por eso seguimos pobres. Una de las grandes lecciones del desarrollo económico es que los países que han logrado superar su situación de pobreza, excluyendo obviamente a los grandes productores petroleros, han sido aquellos que han pasado por un proceso de industrialización (Murphy, Schleifer y Vishny, 1989; Landes, 1998).

El último éxito de las ventajas comparativas en Colombia: el narcotráfico

Quiero finalizar esta disertación con un breve comentario sobre uno de los últimos éxitos de las ventajas comparativas en Colombia: el narcotráfico. Thoumi (1993, 1997, 1999) ha mostrado claramente que Colombia es un país con ventajas comparativas y absolutas que lo han llevado a concentrar la actividad del narcotráfico. Las cifras recientes de las Naciones Unidas sobre la denominada década perdida en la lucha contra el narcotráfico así lo confirman. Entre 1990 y 1998 el número de hectáreas sembradas en Colombia más que se duplicó: la cifra pasó de 40.000 hectáreas a más de 100.000. En Bolivia el área sembrada se ha mantenido en 38.000 hectáreas. Y en el Perú el área sembrada disminuyó de 210.000 hectáreas a 51.000. Esta concentración de los cultivos, más el incremento en la productividad de los mismos, explican por qué Colombia se quedó con el “negocio”: se estima que Colombia provee el 75% de la oferta internacional de cocaína.

Colombia entonces ha venido concentrando el negocio en razón de sus ventajas comparativas. Algunas de ellas son de orden natural: clima, suelos, grandes bosques para esconder la actividad, y localización -Colombia es un espacio natural de tránsito entre las materias primas del sur y los mercados del norte a los cuales les provee el producto terminado-. Pero otras “ventajas” son de orden cultural y político. La precariedad de la presencia del Estado en las zonas rurales es una ventaja para cualquier actividad ilícita. También lo es la escasez de mecanismos de promoción social: muchos trabajadores, no sólo campesinos, dependen del narcotráfico para su subsistencia y no tienen alternativa. La ausencia relativa de controles sociales y éticos derivados de la generalización de la corrupción administrativa favorece la disposición a ganarse la vida en lo más rentable. Adicionalmente, la protección armada que le ha dado la guerrilla y el paramilitarismo a la actividad del narcotráfico ha sido otro factor decisivo para que Colombia concentre la actividad de producción y distribución de los estupefacientes.

Si no fuera por la prohibición y la persecución de los estupefacientes, la concentración de esta actividad en Colombia no pasaría de ser otro episodio de las ventajas comparativas. Pero la represión de la oferta dictada desde los centros del poder mundial ha sido desastrosa para Colombia. Desde el punto de vista económico se puede plantear que la política de interdicción y confiscación de la oferta de estupefacientes, combinada con la persecución y la criminalización de la actividad, ha generado dos efectos: una disminución directa de la oferta que se traduce en mayores precios de los estupefacientes, y un incremento de los riesgos del negocio que se traduce en un incremento de los márgenes exigidos de ganancia. Ambos efectos actúan en la dirección de incrementar la rentabilidad de la actividad y por tanto inducen su reproducción, en ocasiones sobre una escala ampliada. Este fenómeno no es extraño si se considera que la represión a la oferta de estupefacientes se presenta en un contexto de demanda mundial creciente. De hecho, el narcotráfico ha mostrado una asombrosa capacidad de reproducción. Como la famosa hidra de la mitología griega, cuyas cabezas se reproducían tan pronto eran cercenadas, las cabezas del narcotráfico caen y son inmediatamente reemplazadas por otras. Así, pues, la política de represión a la oferta no sólo ha sido inútil sino contraproducente.

Además, dados los riesgos crecientes que implica la política de represión a la oferta, las organizaciones armadas por fuera de la ley en Colombia se han encontrado en una situación ventajosa para concentrar la actividad. Precisamente porque los grupos armados están armados es que están protegidos contra los riesgos y ello les da una ventaja estratégica en la actividad narcotraficante. Ustedes recordarán que hasta hace unos pocos años el narcotráfico era un negocio de comerciantes arrojados; hoy en día estos comerciantes están cada día más fragmentados (para eludir la acción de las autoridades) mientras la guerrilla y el paramilitarismo concentran la actividad en zonas bajo su control. Es por ello, entre otras cosas, que Colombia se ha convertido en un escenario de enfrentamientos entre todos los actores armados ilegales y el Estado por el control territorial del país. Las consecuencias para Colombia en términos de violencia e inseguridad han sido desastrosas.

En vista de la absurda y contraproducente política internacional de represión a la oferta de estupefacientes es que Robert Barro, famoso economista norteamericano, declaraba recientemente que la política de su país en ese campo era un desastre y abogaba por la legalización. Por consiguiente, mientras los gobiernos colombianos sigan acatando las políticas diseñadas por el centro del poder mundial y este persista en el error, persistencia que

tiene por otra parte sus beneficiarios, estaremos condenados a la violencia que se deriva de una actividad excesivamente rentable y que tiene todos los recursos para defenderse y mantenerse. Mientras tanto los colombianos seguiremos perdiendo la guerra además de poner la mayor parte de los muertos.

Para resumir creo que la exclusión social en Colombia ha sido funcional a los objetivos de consolidación del poder político pero la nación ha pagado un costo alto en términos de crecimiento económico y desarrollo político y social. El resultado ha sido una inversión social escasa que ha redundado en una lenta acumulación de capital humano, escaso desarrollo económico y pérdida de competitividad internacional. Pienso por tanto que es necesario un nuevo arreglo político nacional, un nuevo pacto social para construir partidos políticos estructurados alrededor de programas, cuyos objetivos fundamentales sean la satisfacción de las necesidades sociales. Sólo un pacto sobre esa base podría acabar con el sistema de clientelas y corrupción que impera en la actualidad. De esta forma los objetivos de promoción política individual podrán pasar por una acción pública en función del bienestar general antes que por la búsqueda del lucro individual.

Bibliografía

AMSDEN, Alice (1989), *Asia's Next Giant*, Oxford University Press. Traducido como *Corea, Un Proceso de industrialización Tardía*, Ed. Norma, 1992.

CHENERY, H.B.; S. ROBINSON y M. SYRQUIN (1986), *Industrialization and Growth: A Comparative Study*, Washington, World Bank.

KRUGMAN, Paul (1990), *Rethinking International Trade*, The MIT Press, Cambridge, London.

LANDES, David (1998), *The Wealth and Poverty of Nations*, W.W. Norton and Company.

LUCAS, Robert (1988), "On the Mechanics of Economic Development", *Journal of Monetary Economics* 22, julio.

MATSUYAMA, K. (1992), "Agricultural productivity, Comparative Advantage and Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*.

MURPHY, Schleifer y VISHNY (1989), "Industrialization and the Big Push", *Quarterly Journal of Economics*, 106, 2 (mayo).

RICARDO, David (1921), *Principios de Economía Política y Tributación*, Londres.

SMITH, Adam (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Londres.

STERN, N. "The Economics of Development: A Survey", *The Economic Journal*, Vol. 99, septiembre, 597-685

SUMMERS, R. y HESTON, A. (1991), "The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950-1988", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 106, mayo, p. 327-368.

THOUMI, Francisco E. (1993), *Economía Política y Narcotráfico*, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

_____. (1997), "Colombia: del Espejismo del Desarrollo a la Crisis Política y Social", en *Ibero-Amerikanisches Archiv*, 23: 1-2, 1997. Reimpreso en *Revista de Economía del Rosario*, 1:1, enero, 1998.

_____. (1999), "La Relación entre Corrupción y Narcotráfico: Un Análisis General y Algunas Referencias para Colombia", *Revista de Economía del Rosario*, Vol. 2, No. 1, junio, p.11-33.

YOUNG, A. (1991), "Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade", *Quarterly Journal of Economics*, 106.

MODELOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Carlos Alberto Mejía S.¹

Breve introducción: el agotamiento de un modelo

Al parecer, los años sesenta del siglo que recién terminó establecieron los límites y el punto de agotamiento del modelo de organización de la producción que predominó en las regiones de mayor desarrollo capitalista del planeta. Este modelo que corresponde a un régimen de acumulación de capital ampliamente conocido como fordismo exhibía, de acuerdo con Robert Boyer, cinco rasgos básicos comunes a cualquier otro modelo que intente definir la forma de organización industrial y empresarial de una nación o un conjunto de naciones. Veamos.

- 1- Un tipo de *organización de la producción* dentro y entre las empresas que define la organización del trabajo y el uso de los medios de producción.
- 1- Un *horizonte temporal* que sirve de referencia en las decisiones de los empresarios respecto a la inversión, y que se traduce en un conjunto de reglas y/o criterios.
- 1- Una *distribución de las rentas* (ganancias diría Marx) entre salarios, beneficios e impuestos, que permite la reproducción de los diferentes grupos o clases sociales.
- 1- El *volumen y la composición de la demanda efectiva*, que expresan el modo de vida y el proceso de socialización.
- 1- Finalmente, las relaciones entre los *modos de producción precapitalistas* y el capitalismo (Boyer, 1994: 186-187).

Desde los años treinta del Siglo XIX hasta los años sesenta del Siglo XX, los grupos sociales que diseñaron el modelo de desarrollo industrial que predominó durante el siglo anterior, escogieron una senda organizacional y tecnológica que, orientada por procesos de estandarización en la organización del trabajo, el diseño de las máquinas, las herramientas, las manufacturas y los procesos de distribución condujo a la industria y a la

¹ Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, investigador del CIDSE, Universidad del Valle, Cali.

empresa a sucesivas fases de racionalización que revolucionaron la producción elevando de modo dramático las productividades. Se trataba del advenimiento del taylorismo, en su forma clásica de medición de tiempos y movimientos y del fordismo con su característica cadena de montaje, adaptados para la producción en masa de grandes series de productos estandarizados.

Ello condujo a particulares formas de organización del proceso productivo en donde, a causa de la creciente división y desmenuzamiento de las tareas realizadas en planta, el grueso de los trabajadores desempeñaban labores mecánicas, repetitivas y empobrecedoras que recordaban las famosas páginas que sobre la alienación del trabajo asalariado escribió Marx en los *Manuscritos Económico-filosóficos* de 1844.

Pero los años sesenta presenciaron un creciente malestar por el modelo prevaleciente, expresado en grandes movimientos sociales como los de Mayo del 68, las luchas sindicales y el hipismo.

No obstante, como anota Coriat, no eran los únicos factores. No se trataba solamente del papel de los movimientos de protesta y de la resistencia dentro de las fábricas a la cadena de montaje y al taylorismo, sino de la creciente certeza de los ingenieros y las direcciones empresariales de que estos métodos habían llegado a un *límite técnico* que impedía seguir elevando las productividades, pues la cada vez mayor parcelación del trabajo en tareas muy desmenuzadas exigía la creación de nuevos puestos de trabajo con el consiguiente aumento de las distancias físicas entre ellos, lo que implicaba que los productos semiterminados tuvieran que “viajar” durante un tiempo muerto durante el cual no se ejecutaba ninguna labor sobre ellos, de modo que los minutos ahorrados en un paso del proceso productivo, terminaban perdiéndose en otra fase del mismo (Coriat, 1991: 133-136).

Aunque el agotamiento del fordismo como modelo predominante, intentó ser contrarrestado a través de expansiones y de procesos de deslocalización industrial, situando plantas en distintos rincones del planeta, ya no fue posible resolver con los mismos métodos los problemas de productividad de la fuerza de trabajo, haciéndose por tanto necesario buscar nuevas respuestas a la crisis, a través de diversas formas de organización del trabajo.

Emergencia de nuevos modelos productivos

De acuerdo con John Humphrey, a partir de la puesta en cuestión del fordismo *existe una enorme variedad en la oferta de nuevos modelos*² muchos de los cuales partieron de consideraciones optimistas sobre el “fin de la división del trabajo” (Kern, Schumann) o de la aparición de una “nueva clase obrera” (Mallet), hasta otros que partiendo de apreciaciones de Marx en torno a las urgencias de expansión del capitalismo, concluyen que no hay tal nuevo modelo sino una recombinação de todos los anteriores (Harvey, 1990).

a) La especialización flexible

De acuerdo con Sabel y Piore, los empresarios, los políticos y los ingenieros que tomaron las decisiones que condujeron a la primera ruptura industrial -referida a los breves momentos en que está en cuestión el rumbo que tomará el desarrollo tecnológico-, (Sabel, Piore, 1990: 14), optaron por la producción estandarizada y el fordismo como la mejor y la única vía de desarrollo productivo.

Con esa decisión, dejaron de lado un modelo de organización empresarial y del trabajo basado en la producción artesanal, en vastas redes de relaciones con la comunidad y en tecnologías que ampliaban las calificaciones de los trabajadores, que habiendo sido conceptualizado por Pierre Proudhon y ampliamente ridiculizado por Marx, no solo sobrevivía sino que se mostraba pujante en los distritos industriales de distintas regiones de América y Europa. La expresión *distrito industrial* había sido acuñada por el economista inglés Alfred Marshall con ocasión de sus estudios sobre la industria de Lancashire y Sheffield³.

Bajo este modelo operaban y se destacaban distintas ciudades y comunidades de Francia en la producción de textiles y lanas de algodón, sedas, cintas, productos metálicos y aceros especiales; de Inglaterra y Alemania en la fabricación de aceros especiales, cuchillería y herramientas cortantes; en el norte de Italia y Estados Unidos en la manufactura de textiles de lana y algodón, quedando por mencionar la variada producción

² Humphrey, John (1994): «Nuevas cuestiones en la sociología del trabajo». En *Revista de Economía y Sociología del Trabajo*. No. 23/24, marzo-junio. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pag., 24.

³ Marshall, Alfred (1919): *Industry and Trade*. Londres, MacMillan & Co, pags 283-288.

artesanal de los países menos desarrollados en donde también se constituían esos distritos (Sabel, Piore, 1990: 43).

El éxito del modelo dependía de una dinámica basada en innovación social y técnica permanente y solo podía garantizarse si iba acompañado de un conjunto de instituciones sociales que enumeramos a continuación: el municipalismo, que desde el poder político local coordinaba desde un centro urbano una producción dispersa, regulando el mercado, los contratos y las jornadas de trabajo; el capitalismo familiar o paternalismo, que desde la fachada aparente de grandes fábricas, reunía bajo un solo techo grupos de talleres de artesanos relativamente autónomos, fomentaba la investigación y la innovación, recalificaba a los operarios, construía vivienda para trabajadores, hogares de ancianos, centros de salud, etc.; y el familiarismo, que establecía vastas redes de lazos familiares para la producción y comercialización de determinados bienes.

Sobre la base de estos antecedentes, Sabel y Piore anuncian el advenimiento de un nuevo paradigma productivo llamado de especialización flexible, cuyos rasgos se definen por una estrategia que consiste en innovación permanente, adaptación a los incesantes cambios en lugar de intentar controlarlos, maquinaria y equipo flexible y polivalente, trabajadores cualificados, y creación por medio de la política, de una comunidad industrial que solo permita las clases de competencia que favorecen la innovación: En suma, resurgen formas artesanales de producción ligadas a complejas tecnologías y a gran flexibilidad en torno a la organización de la producción en planta, la mano de obra y las legislaciones laborales (Sabel, Piore, 1990: 29).

En la región vallecaucana existe evidencia empírica de la combinación de compleja tecnología microelectrónica con trabajadores calificados vía experiencia en oficios artesanales industriales, en ramas de la metalmecánica, la producción de azúcar y aceites vegetales (Mejía, 1998: 85-86).

El paradigma descrito de especialización flexible parece ejercer ya especial influencia en el intento de configurar un nuevo modelo de organización de la producción; desde hace tiempo la sociología del trabajo explora e intenta identificar la existencia de distritos industriales al estilo de los de Silicon Valley, la Tercera Italia, Bangalore en la India, La Cartuja en Madrid o

Campinas en Brasil en la producción de programas de computador, para mencionar solo algunos.

La especialización flexible pondría fin a la ruptura existente entre las labores de concepción y ejecución de manufacturas causada por la rigurosa división que estableció el taylorismo, facilitaría el reencuentro del hombre con la máquina, que ya no se enfrentaría a él robándole sus destrezas y sumiéndolo en la alienación respecto del proceso y el producto fabricado, sino que contribuiría a ampliar sus cualificaciones. Como señalan algunos investigadores, el solo hecho de prometer el regreso de la producción artesanal y de anunciar el reencuentro del trabajador con la máquina, convierte al modelo en una propuesta seductora.

b) *Lean production* o producción ligera o ajustada

Con el advenimiento de nuevas prácticas de productivas como la llamada *lean production* o producción ligera o ajustada (Womack, Jones, Roos, 1992) difundida a partir de los métodos adoptados por Toyota en Japón, los procesos productivos parecieron superar las inflexibilidades del fordismo y fundar un nuevo modelo denominado por algunos postfordismo o toyotismo, que acompañado de diversas herramientas de racionalización de la producción, generó productividades desconocidas en la industria automotriz que funge como orientadora del resto de la actividad industrial moderna.

Este modelo, que parte de un concepto flexible de “fábrica mínima”, se expresa organizacionalmente en la mencionada *lean production*, basada en equipos de trabajo y en el llamado “*justo a tiempo*” y técnicamente en la microelectrónica bajo la forma de máquinas-herramienta de control numérico computarizado, sistemas CAD/CAM y robotización.

La filosofía de éste «modo de producción», expresión que recogemos de Manuel Castells, se nutre de la organización del trabajo implementada por el ingeniero Taiichi Ohno en las plantas de ensamble de Toyota en Japón y que, de acuerdo con Coriat, *constituyen un conjunto de innovaciones técnicas y organizacionales tan importantes como el taylorismo y el fordismo*, que significan interpretar a la inversa los procedimientos empleados por Taylor y Ford en el proceso de trabajo (Coriat, 1995:13,14,22).

La superación del paradigma de la producción masiva de bienes estandarizados por la producción de pequeños lotes de piezas o productos terminados altamente diversificados, propia del llamado postfordismo, se puede caracterizar, de acuerdo con Coriat, como un “*pensar al revés*” la producción de automóviles en el caso que analiza y la producción en general, de modo que solo se produce una vez que se cuenta con un pedido efectivo, adaptándose la oferta a la demanda, al contrario del modelo anterior que solía acumular grandes inventarios y generar desperdicio de recursos como trabajo, capital, materia prima y tiempo.

Este método parte del último eslabón de la cadena, del último paso del proceso, es decir, procede a la inversa de las formas clásicas de producción: una vez que un cliente ha hecho un pedido, se organiza el equipo de trabajo que lo ejecutará, rompiéndose la inflexibilidad de la cadena de montaje; se define la materia prima a emplear, el equipo y las herramientas correspondientes evitando desperdicio de materiales, tiempo y acumulación de inventarios; todo ello dentro del concepto del “*just in time*” (*justo a tiempo*⁴), un deber ser que nunca se alcanza pero que orienta la acción de gerentes, ingenieros y operarios hacia el logro de mayor eficiencia y productividad.

El “*justo a tiempo*” (JAT) se caracteriza como la tendencia productiva a alcanzar la meta de los «cinco ceros»: cero defectos, cero averías de máquina, cero inventarios, cero desperdicios de materia prima, tiempo y espacio y cero papel, expresado en mínimos trámites burocráticos (Coriat, 1996: 87-91). Se trata de partir de las existencias de los insumos necesarios para definir los efectivos que se van a usar en producir un bien solicitado y de ésta manera racionalizar aún más la producción (Coriat, 1995: 24).

También conocido como Kan-Ban, el procedimiento fue ideado a partir de observaciones realizadas en Estados Unidos por el fundador de Toyota, cabeza de la familia Toyoda, acerca de la forma de abastecer supermercados, consistente en que a medida que se terminan las existencias en los estantes, se reemplazan los productos vendidos por otros nuevos. Esto dio origen a una fórmula consistente en que “*lo ideal sería producir justo lo necesario y hacerlo justo a tiempo*” y estaba implementado en lo esencial de las plantas de Toyota en el Japón hacia 1962 (Coriat, 1995: 29, 30).

⁴ Reconocidos por las siglas JIT/JAT.

De acuerdo con Coriat, en materia de administración de la producción, “*el Kan-Ban es la innovación mayor en la organización de la segunda mitad del siglo*” (Coriat, 1995: 44). Su práctica solo se difundirá en Occidente a finales de los años setenta con la consiguiente desventaja para la industria norteamericana.

c) El modelo de corte marxista de David Harvey

Harvey concluye que, aunque la sociedad de los ochentas se inscribiera dentro de cierta postmodernidad, las tendencias económicas guardaban gran continuidad. Partiendo de una idea esbozada por Marx en el *Manifiesto Comunista*, según la cual el capital solo puede existir a condición de revolucionarse permanentemente, postula que por ello, el capitalismo promueve de manera dinámica tanto el cambio tecnológico como el cambio organizacional y que se encuentra en una fase de hiperacumulación propia del capitalismo tardío, que puede defenderse de las clásicas crisis periódicas, sobre la base de la diversificación, la coexistencia, la combinación o la hibridación de diversos modelos productivos que van desde el viejo fordismo hasta la especialización flexible, que combina formas de trabajo familístico y paternalista, con subcontratación, dentro de un esquema de alta desregulación y flexibilización de las relaciones laborales.

d) Un modelo de desarrollo para el Valle del Cauca

El Valle del Cauca, zona relativamente industrializada, no fue ajeno a los avatares del viejo paradigma productivo. Desde fines del siglo XIX se hallaba empeñado en la construcción de su ventaja comparativa que resultó al fin de la conjunción de una serie de factores que iban desde la fertilidad de la tierra cultivable, la existencia de formas artesanales de producir azúcar en las haciendas, el trato paternalista a la mano de obra esclava o libre asalariada, la construcción de puertos y ferrocarriles relativamente modernos a comienzos de siglo, la presencia de empresarios innovadores (schumpeterianos) en términos de destrucción creadora o del descubrimiento de nuevos mercados, cuyo paradigma fue don Santiago Eder el fundador del Ingenio Manuelita.

Desde los años cuarenta, el arribo de varias oleadas de multinacionales, introdujo cierto cosmopolitismo, permitió transferir modelos de relaciones industriales propios de las grandes corporaciones norteamericanas, autoritarios, altamente jerarquizados y enmarcados dentro del taylorismo y el fordismo y creó un estilo de gestión de la fuerza de trabajo en donde se hibridaban formas estamentales de relación basadas en lealtad al patrón y deber de protección, con estilos racionalizados de relación obrero patronal propios del moderno mundo laboral norteamericano.

Florecieron, junto a un estilo de gestión de la fuerza de trabajo autoritario y paternalista, el trabajo a tiempo completo y de por vida, las formas de sindicalización radicales y moderadas, la negociación de convenciones colectivas, los mercados internos de trabajo, las prestaciones sociales propias del Estado benefactor y de la empresa providencia, los planes de vivienda, etc., junto a la producción en masa de productos estandarizados.

Alberto Mayor ha documentado el proceso de adaptación del taylorismo a la empresa colombiana con especial mención al Valle del Cauca en empresas fabricantes de llantas y las resistencias de los trabajadores a esas formas de organización. Están por ilustrarse las luchas que las comunidades emprendieron y emprenden en defensa de lo público y en torno al control de las fuentes de agua, la propiedad de la tierra o el uso del aire que fueron y son objeto de apropiación privada por parte de empresarios amparados en la ideología del progreso y en una débil concepción de lo público (Urrea, Mejía, 2000). La contaminación del aire mediante la quema de caña para facilitar su corte, cubre las ciudades y poblados de pavesas también llamadas “nieve de los pobres”.

En los últimos meses la elite empresarial regional intenta configurar un modelo de desarrollo industrial para el Valle del Cauca centrada en la identificación de clusters⁵ o agrupamientos de empresas que coincide con la

⁵ Porter define que “los clusters son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en determinado campo: Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos críticos -como componentes, maquinaria y servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada: Con frecuencia también se extienden aguas abajo -hasta canales y clientes- y, lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías e insumos comunes. Finalmente, muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones -universidades, agencias encargadas de fijar normas, centros de estudio, proveedores de capacitación y asociaciones de comercio- que proveen entrenamiento, educación, información, investigación y apoyo técnico”. (Porter, 1999) En el Valle se habla de clusters del azúcar, del alcohol, de los textiles, etc.

noción de distrito industrial. Se habla entonces de los clusters del azúcar y el alcohol adoptando los enfoques elaborados por Michael Porter acerca de “la ventaja competitiva de las naciones”, que se complementa con estrategias de orden tecnocrático expresadas en la idea de mejorar la infraestructura vial , de carreteras y ferroviaria, ampliar el aeropuerto, impulsar la construcción del túnel de La Línea, mejorar el puerto de Buenaventura, etc.

No obstante, la perspectiva social que debiera ser el motor de la propuesta en cuanto desarrollo del capital humano en términos de formación, capacitación y transferencia de tecnología, para contrarrestar la exclusión de los desempleados de todos los niveles, aparece opaca en estos planes de corte productivista, quizá por que lo social se concibe en términos de asistencia a los necesitados.

Desregulación y flexibilización laboral

Con los nuevos modelos productivos basados en la flexibilidad, el trabajo, pese a constituir desde tiempo inmemorial el centro de la actividad de los individuos, ha sido sometido a intensas transformaciones y a las más diversas reconceptualizaciones en las últimas tres décadas. Su papel en la sociedad contemporánea ha sido puesto en tela de juicio por voces apocalípticas que hablan de su desaparición como Rifkin, (1996: 23, ss), por analistas que llaman a “salir de la sociedad salarial”, a superar el salariado para adentrarse en el paraíso del disfrute del tiempo libre y de la creatividad, sin definir con claridad las formas de supervivencia individual como Gorz (Gorz, 1998: 83-84) como por notables figuras de la sociología - Offe y Castel- que afirman que el trabajo ya no constituye el centro de la actividad de los individuos (Offe, 1992: 23, 24; Castel, 1997: 389) o que la condición salarial basada en él se ha derrumbado (Castel, 1997: 389).

Otros como Braverman afirman que la nueva tecnología, junto a la obsesión de los empresarios por el control del proceso productivo del que dependería la plusvalía ha conducido al trabajo y a quienes lo ejecutan por la senda de la degradación y el empobrecimiento de sus destrezas y habilidades (Braverman, 1983: 219- 238, 248- 269).

Frente a quienes analizan la crisis, el fin o el derrumbe de la sociedad salarial, se elevan voces optimistas que documentan el arribo de la sociedad del trabajo al reencuentro de las tareas de concepción y ejecución anunciando, con la llegada de la era de la información y de la microelectrónica, el comienzo de formas de actividad laboral enriquecedoras desde el punto de vista de las destrezas y la calificación, bien remuneradas y generadoras de satisfacción laboral (Humphrey, 1994: 24-25; Sabel y Piore).

Uno de los rasgos claves de los nuevos modelos productivos consiste en la forma de gestión de la fuerza de trabajo. Si bien en los países en donde imperó el viejo modelo tiende a mantenerse lo que algunos autores llaman el núcleo duro de la fuerza de trabajo (Japón, Francia, Alemania) otros funcionan sobre formas muy desreguladas (Inglaterra, Estados Unidos), acentuándose la tendencia al establecimiento de contratos a término fijo menores a un año, escasa estabilidad, subcontratación y pérdida de las antiguas prestaciones.

De acuerdo con Beck, el contrato de trabajo, el lugar de trabajo y el tiempo de trabajo, regulados luego de duras confrontaciones, han entrado en un proceso de flexibilización que pone en cuestión la continuidad de la sociedad salarial como la conocemos, en razón a que las empresas han descubierto que pueden elevar su productividad y su ganancia reduciendo personal, basándose en cambios técnicos y organizacionales (Beck, 1998: 178, 182) dentro de los que la reingeniería, entendida como el rediseño radical de los procesos productivos, se revela como pieza clave de la flexibilización laboral y el despido de trabajadores. En síntesis alcanza cada vez mayor credibilidad el argumento fuerte de la desregulación laboral según el cual, a mayor flexibilidad laboral mayores índices de productividad,.

La gestión de la fuerza de trabajo en el Valle del Cauca

En un mundo globalizado, El Valle del Cauca no escapa a las tendencias globales: las últimas estadísticas del DANE sitúan a Cali dentro de las ciudades con mayores tasas de desempleados, lo que se atribuye principalmente a la recesión económica que vive el país y la región, pero que enmascara otro tipo de desempleo llamado tecnológico, que como su nombre lo indica, tiene origen en la introducción de tecnologías, duras bajo

la forma de maquinaria y equipo, y blandas, bajo la forma del rediseño de las estructuras organizacionales de las empresas.

Se escuchan llamados a la industria y los empresarios para que remedien el desempleo, pero declaraciones emitidas por capitanes de empresa del Valle, generan desencanto sobre la capacidad generadora de empleo de la industria regional, Un destacado dirigente gremial afirma que: *“La gran industria no puede ser el generador del empleo y de la reactivación que Cali necesita, porque la gran industria está sometida a una hipercompetencia global implacable, que obliga a ser muy eficiente pero que en muchos casos significa reducción de empleo...”*⁶. En ese orden, la mayor parte de las empresas importantes del sector moderno del Valle ha rediseñado sus organizaciones a través de reingenierías⁷ con el concurso de reconocidas firmas internacionales expertas en el tema⁸, mientras descubren que pueden elevar productividades reduciendo el empleo o institucionalizando un tipo de trabajo precario, desregulado, a tiempo parcial y sin prestaciones, es decir flexibilizado.

Por vía de ejemplo, los ingenios azucareros que recientemente anunciaron treguas en la ola de despidos, deberán disminuir costos y hacerse más competitivos, continuando procesos de racionalización iniciados hace tiempo que les permitirán permanecer en un mercado cada vez más competido. Por vía de ejemplo citamos la nueva tecnología de corte de caña, que ya tiene presencia importante en algunos ingenios azucareros, y que en el corto y mediano plazo hará desaparecer el tradicional oficio del cortero y reingenierías que rediseñan plantas reduciendo el personal empleado.

La introducción de la cosecha mecanizada ha hecho desaparecer buen número de puestos de trabajo, las superficies de caña cultivada han crecido con gran rapidez hasta cubrir unas 180.000 hectáreas, mientras la mano de

⁶ Declaraciones de Carlos Arcesio Paz, expresidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca. *“Hay que hacer un pacto anticorrupción”*, El País, La Entrevista, B-2, Cali, Domingo 31 de Mayo de 1998.

⁷ De acuerdo con Hammer y Champy, «La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de proceso para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez» y generalmente trae como consecuencia destrucción de puestos de trabajo a través de racionalización de los procesos productivos. Hammer & Champy (1995): *Reingeniería*. Santafé de Bogotá: Editorial Norma. Pag, 34.

⁸ McKinsey, London Consulting Group, Landell Mills, Tate & Lyle, Asteq, etc.

obra se mantiene estacionaria en cerca de 22.000 trabajadores, buena parte de los cuales laboran ahora bajo sistemas de subcontratación a través de cooperativas y empresas asociativas.

El diseño de zonas especiales de localización de empresas como las cobijadas por la Ley Páez, cumple similar criterio racionalizador en el marco de tendencias a realizar inversión intensiva en capital y tecnología, generadora de pocos empleos, calificados unos y precarios y desregulados otros. Estas estrategias parecen inevitables si las firmas quieren seguir participando en el desarrollo de las fuerzas productivas y de la riqueza regional, pero se hace al precio de la exclusión social de quienes pierden sus empleos.

En todo caso existe amplia evidencia empírica en la empresa e industria regional de un largo proceso de transferencia, adaptación, modificación e hibridación de modelos organizacionales propios de la empresa japonesa y norteamericana como el “justo a tiempo”, el “control total de calidad”, los “círculos de calidad y de participación”, el “kaizen”, los “programas de mejoramiento continuo” (PMC), el “mantenimiento productivo total” y, en lugar destacado, la reingeniería, en rigor una de las herramientas básicas de adelgazamiento de las empresas, causante de despidos y exclusión social en distintos niveles jerárquicos.

En declaraciones recientes de ASOCAÑA, el gremio que agrupa a los productores de azúcar, se sostenía que en materia de tecnología no tenían ya nada que copiar en el extranjero y que las productividades alcanzadas en la región eran las más altas del planeta⁹.

Las tecnologías duras relativas a maquinaria y equipo tienen un relativo desarrollo en campos que van desde la biotecnología y la microelectrónica, y tecnologías mecánicas que constantemente están causando sesgos ahorradores de mano de obra que se manifiestan en desaparición de puestos de trabajo en las plantas de los ingenios azucareros y en las labores de corte, alce y transporte de caña.

Las empresas han venido externalizando el recurso humano que requieren y que vinculan bajo condiciones de precarización, sin primas ni

⁹ El cluster del azúcar. Seminario Tecnicaña, Asocaña, marzo 16 de 2000.

prestaciones, sometidos a contratos a término definido y con salarios inferiores a los que todavía conservan el viejo estatuto de la convención colectiva. De esta manera, los subcontratados al recibir menores salarios, y someterse a jornadas de trabajo más intensas, debilitan la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales.

En síntesis la nueva tecnología, los rediseños organizacionales de las plantas de personal forzados por la competencia y el afán de ganancia, han convertido a las empresas en lo que Robert Castel denomina “*máquinas de excluir*” que generan empleos precarios, resultando impensable constituir una sociedad compuesta por *baby sitters*, camareros de MacDonalds y empacadores de supermercado.

En los últimos años se ha discutido con intensidad sobre la función del Estado. En la creciente generalización de la exclusión social causada por el desempleo, se hace necesario repensar su papel, ya no en términos del viejo estado benefactor que se derrumba, ni del nuevo estado neoliberal instrumento de las leyes del mercado, sino en términos de un estado estrategia que reconstruya o recree la equidad social en consonancia con la eficacia de la economía.

Bibliografía

BECK, Ulrich (1998)[1986]: *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Editorial Paidós.

BOYER, Robert (1994): "Las alternativas al fordismo. De los años 80 al siglo XXI". En, BENKO, Georges; LIPIETZ, Alain: *Las regiones que ganan*. Edicions Alfons El Magnánim, Generalitat valenciana, Valencia.

BRAVERMAN, Harry (1983): *Trabajo y capital monopolista: La degradación del trabajo en el Siglo XX*. México: Editorial Nuestro Tiempo, sexta edición.

CASTEL, Robert (1997)[1995]: *Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

CORIAT, Benjamin (1982) [1979]: *El taller y el cronómetro: ensayos sobre el fordismo, el taylorismo y la producción en masa*. México: Siglo XXI Editores.

CORIAT, Benjamin (1995)[1991]: *Pensar al revés: trabajo y organización en la empresa japonesa*. México: Siglo XXI Editores.

GORZ, André (1998)[1997]: *Misérias del presente, riqueza de lo posible*. Buenos Aires: Ediciones Paidós.

HAMMER, Michael & CHAMPY, James (1995): *Reingeniería*. Santafé de Bogotá: Editorial Norma.

HARVEY, David (1998)[1990]: *La condición de la post modernidad*. Buenos Aires, Amorrortu editores.

HUMPHREY, John (1994): «Nuevas cuestiones en la sociología del trabajo». En *Revista de Economía y Sociología del Trabajo*. No. 23/24. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Pags, 22-36.

KERN, Horst; SCHUMANN, Michael (1988): *El fin de la división del trabajo*. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

MAYOR, Alberto (1992): «Institucionalización y perspectivas del taylorismo en Colombia: conflictos y subculturas del trabajo entre ingenieros, supervisores y obreros en torno a la productividad, 1959-1990». En *Boletín Socioeconómico CIDSE*, No. 24-25. Agosto-Diciembre. Facultad de

Ciencias Sociales y Económicas Universidad del Valle. Pags. 203-242.

MEJÍA, Carlos Alberto (1999): «Saber-hacer artesanal y alta tecnología microelectrónica en la industria metalmecánica del Valle del Cauca: un estudio de caso». *Boletín Socioeconómico* No. 31 CIDSE, mayo, pags 69 a 94.

OFFE, Claus (1992)[1984]: *La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspectivas de futuro*. Madrid: Alianza Editorial.

PORTER, Michael (1999): “Los clusters y la competencia”. En *Revista Gestión*, Vol. 2, enero-febrero 1999. Santiago de Chile.

RIFKIN, Jeremy (1996): *El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era*. Barcelona: Ediciones Paidós.

URREA, Fernando; MEJÍA, Carlos Alberto (2000): «Innovación y cultura de las organizaciones en el Valle del Cauca». En *Innovación y cultura de las organizaciones en tres regiones de Colombia*. Santafé de Bogotá: Edición de Corporación Calidad - Colciencias.

WOMACK, John D.; JONES, Daniel T.; Roos, Daniel (1992)[1990]: *La máquina que cambió al mundo*. Massachusetts Institute of Technology. México: Editorial McGraw Hill.

INTEGRACIÓN, EXCLUSIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL: LOS DIFÍCILES CAMINOS DE LA EDUCACIÓN

Dolores Juliano Corregido

Cuando en este panel se plantean los temas de la educación, la cultura y la comunicación, de alguna manera se resumen algunas de las inquietudes que se vienen presentando a lo largo de todo el Coloquio. Cuando hablamos de “*exclusión social y construcción de lo público en Colombia*”, es evidente que estos elementos (educación, cultura y comunicación) son las claves con que se forman, desarrollan y transmiten diferentes tipos de interpretaciones del mundo y de su ordenamiento.

En mi caso en particular, voy a hablar del sistema educativo. Pido disculpas de entrada ya que no me centraré en el sistema educativo colombiano; sencillamente, porque no soy especialista en el tema y no podría pretender asumirlo en mi presentación. En líneas generales, quisiera más bien preguntarme sobre cómo se desarrollan los sistemas educativos y por qué pienso que puede resultar de interés una aproximación de este tipo. El argumento, expresado de una manera sencilla, es que creo que hay una tendencia muy clara a tratar de derivar al campo educativo lo que podríamos considerar que son sobre todo *responsabilidades políticas* y *responsabilidades económicas*. Con cierta reiteración se hace referencia, al encarar la solución de los problemas económicos, a qué sucedería en el caso de que fuera más alto el nivel educativo de la población colombiana. En este mismo coloquio, en el panel sobre economía, se hacía una alusión de este tipo en este mismo recinto. Pero no es simplemente una derivación que se hace desde el campo de la economía, o que se hace sólo en Colombia; recuerdo que hace bastantes meses, en Chiapas, en pleno periodo de negociaciones del Gobierno mexicano con el EZLN, había pintadas en las paredes de San Cristobal de las Casas, firmadas por el ELZN, que decían “menos soldados y más maestros”; es decir, que allí también se planteaba que el problema tenía que solucionarse en términos de escuela.

Sin embargo, y desde un análisis detenido de los procesos educativos, esta correlación o derivación no resulta tan clara ni es tan autoevidente. Parece que la constatación en el discurso de una relación causal real es más bien una derivación de lo que podríamos llamar *procesos de legitimación*: ¿es cierto que si el nivel educativo del colombiano subiera unos diez puntos, la

situación de la economía colombiana subiría también diez puntos o, simplemente, estarían mejor calificados aquellos que están desempleados? Cuando uno ve determinados casos, como por ejemplo la actual situación económica de Argentina, en la que desde una época temprana se hizo un esfuerzo importante y continuado de alfabetización para toda la población (luego veremos el por qué) y observamos que ello no hace que su crisis sea diferente a la de cualquier otro país de América Latina con niveles educativos más bajos, debemos empezar a preguntarnos si realmente existe una relación causal de este tipo o, más bien, si no podemos demandar su propia responsabilidad a las disposiciones económicas.

Podemos decir, entonces, que deben dejar de derivarse a otros campos de responsabilidades los problemas que pueden solucionarse en cada uno de los ámbitos particulares. Y ello pese a que –en lo que podríamos ver como un gran efecto de la providencia divina– se trata en este caso de un dios sin ateos, pues hoy se puede no creer en la religión pero no se puede no creer en la educación; se trata de algo en lo cual estamos realmente muy implicados. Es cierto que el sistema educativo tiene posibilidades y responsabilidades y que actúa de todas formas en esos otros campos; es decir, no voy a plantear aquí la ineficiencia del sistema educativo sino que, al contrario, considero que tiene muchas cosas recuperables. Pero también es cierto que esta especie de confianza o de legitimación social en él depositada evita de alguna manera un análisis crítico de qué es y qué es lo que se está haciendo realmente, dando la sensación de que más escuelas o más escolaridad fueran, en sí mismas, soluciones evidentes. Mi ponencia va en el sentido de plantear que lo que hay que desarrollar es un *control social* de qué es lo que se está dando dentro del sistema educativo para garantizar que hacia este sistema educativo no se esté pasando de contramano una parte importante de los problemas sociales que, teóricamente, tendríamos de todas formas que mirar. En otras palabras, lo que me gustaría proponer es la necesidad de repensar el problema dejando de lado esas visiones demasiado optimistas que, en última instancia –insisto–, son maneras de demorar largo tiempo la solución de los problemas y, por otra parte, son maneras de responsabilizar directamente a la población que, en últimas, padece los resultados de políticas sociales y económicas incorrectas: es decir, como si ellos tuvieran la responsabilidad absoluta de sus propios males. Se trata de evitar decir que si la gente hubiera hecho más esfuerzos en lo cultural y en lo educativo, su situación sería mejor. Pienso que, de alguna manera, es muy cómodo para la estructura social este tipo de derivación.

Voy a ir avanzando, más o menos a partir de un análisis quizás parcial, sobre algunos de los elementos que he señalado en términos de un análisis que sería bastante típico en el ámbito de la *antropología de la educación*.

Al parecer, las teorías del *capital humano* consideran al sistema educativo como a un multiplicador de recursos económicos y como a un capacitador económico. Ese fue el eje de las *propuestas desarrollistas* de la década de los sesenta. Dicha propuesta sostenía que la situación económica de un país sería tanto mejor cuanto más capacitada estuviera la población; igualmente, sostenía que la educación en sí misma debería analizarse en términos de criterios de eficacia –de eficacia cuantitativa: cuantos más años de educación, mejor adecuación a lo que podríamos llamar las demandas del mercado económico, etc., etc.–; por último, se asumía que un avance del sistema educativo produciría, como ya lo había señalado antes, un avance del sistema económico.

Es evidente que la práctica no lo corrobora. Podría poner, además del ejemplo argentino ya comentado, el caso de Cuba. Así, Cuba tiene un muy alto nivel educativo y, sin embargo, tiene una capacidad productiva muy baja, más evidente aún si consideramos la competitividad de Cuba en términos de su sistema productivo. Por estos y por otros motivos, en términos no solamente de suspicacia sino de su consistencia apriorística, estos modelos desarrollistas van a ser el objeto de la crítica de los *reproductivistas* de la década de los años setentas.

¿Qué es lo que marca la crítica reproductivista? En primer lugar, la ubicación del sistema productivo como proyecto del Estado. Se señala que todas las sociedades tienen formas de autoproducción, en el tiempo, de sus valores y de sus conocimientos. Estas formas han funcionado con bastante eficacia a lo largo de los tiempos pero, con el surgimiento de los Estados modernos –a partir de la Revolución Industrial– esa autoproducción se desplaza desde los que podríamos llamar *ambientes familiares* o *ambientes sociales* hacia las *políticas de Estado*; desde este punto de vista, el Estado asume dicha responsabilidad no por mero altruismo, sino porque el sistema educativo participaría de lo que Louis Althusser (*Pour Marx*, 1965; *Lénine et la philosophie*, 1969) consideraba “el sistema ideológico del Estado” o lo que Michel Foucault (*Surveiller et punir*, 1975) denominaba “aparatos de control”. Foucault señalaba que al mismo tiempo se desarrollan ejércitos poderosos, sistemas policíacos más o menos represivos y sistemas

educativos a partir de los cuales se condiciona a la gente para que no se salga de la normalidad. Se trata, en otras palabras, de *sistemas de reproducción* que incluyen tanto a los sistemas penales como a los sistemas psiquiátricos instaurados para tratar a los “desviantes”. Todos ellos formarían parte de un gran proyecto destinado a adecuar a las masas de población a lo que se pueden llamar *nuevos proyectos políticos*.

Otros autores señalan, además, que a través del sistema escolar se desarrollan las funciones de autoproducción no solamente de la sociedad en tanto que tal, sino de la *sociedad jerarquizada* en tanto que sociedad jerarquizada. Es decir, se construye todo un nuevo sistema de distribución de prestigios y de recursos; por ejemplo, el lugar (social) de nacimiento se reemplaza por otros sistemas de valoración a partir de los cuales los recursos, el prestigio y, de alguna manera, la legitimidad, se distribuyen a través de un sistema educativo. Desde ese punto de vista, se puede observar como ello a su vez legitima las *inclusiones* y *exclusiones* que se realizan también fuera del ámbito de los marcos académicos.

En cierta forma los marcos académicos se transforman en los mayores legitimadores de lo que se podría llamar la “desigualdad social”: cobrar un sueldo diferente se legitima si esa persona ha tenido más o menos años de estudio. No se legitima por ningún otro tipo de cuestiones. Pero es una simulación, dado que el sistema educativo dista de ser o de estar igualmente distribuido entre los distintos sectores sociales. En última instancia se termina legitimando el mejor acceso a los recursos de aquellas personas que ya venían mejor colocadas dentro de la estructura social. Una frase que es provocadora, pero que pienso que describe bien este tipo de críticas, dice: “a la cuna se entra por bebé y se sale por montón”. La persona que entra al sistema educativo con un déficit desde el punto de vista económico –que puede ser, como tal, objeto de una crítica e incluso objeto de una devolución destinada a igualar los recursos económicos– termina, a través del fracaso escolar, deslegitimado en sus pretensiones de ascenso social y, por tanto, viéndose obligado a aceptar un destino que, en última instancia, termina transformándose en cristalización de su *incapacidad individual*. Es decir, que lo que era una deficiencia social y como tal criticable, se termina asumiendo como una incapacidad privada particular que, por tanto, termina por hacernos preguntar a quién vamos a criticar si el problema en verdad es que no tenemos las capacidades suficientes. Es una forma dura de legitimación y, por tanto, podemos decir que el sistema educativo es varias cosas a la vez. Obras como aquel

célebre trabajo titulado “Cartas a una maestra”, del padre Bolaños, están dentro de este tipo de funciones.

Por otra parte, la otra gran crítica que hacían los reproductivistas es que la escuela tiene funciones de legitimación de la desigualdad en términos de una adecuación de las conductas. La dimensión simbólica, de la que habla Pierre Bourdieu (con Jean-Claude Passeron, *La reproducción. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, 1970), hace que las personas acepten determinada disciplina, se familiaricen con determinados tipos de jerarquización y, de alguna manera, se transformen así en ciudadanos más aptos para la convivencia, más aptos para aceptar las presiones del medio.

Es evidente que estas críticas tienen su punto de verdad y que, de alguna manera, en su momento produjeron un impacto importante y significativo. Pero en la década de los años ochenta se hace a su vez una crítica a los reproductivistas. ¿Por qué? Porque el modelo reproductivista era realmente muy estático y, en cierta forma, era un modelo atemporal: la escuela funcionaba así y concedía su legitimación al sistema social que invertía en ella recursos y llenaba por tanto su prioridad en el manejo social con lo que, a su vez, la escuela legitimaba al sistema social. Con todo ello se construía un círculo cerrado de pura reproducción social y ofrecía un modelo estático que era, en última instancia, desmovilizador desde el punto de vista político, planteando como solución cosas de tanta trascendencia, e igualmente problemáticas, como la desescolarización y el abandono del sistema escolar. Pero ¿se puede realmente abandonar un sistema escolar? Pues un sistema escolar, además de estas limitaciones, produce realmente una gran cantidad de circulación de conocimientos, así como una inmensa circulación de sociabilidad, entre otras varias cosas, que quizás puede ser importante mantener. En otras palabras, ¿nuestras críticas en los ochentas afectaban a la totalidad del sistema educativo o se centraban en algunos de sus aspectos? Y, por consiguiente, ¿qué es lo que se podía hacer al respecto?

Es a partir de todo esto que se producen las que podríamos llamar *propuestas productivas* que, apoyadas en algunos trabajos pioneros como los del brasileño Paulo Freire (*Pedagogía del oprimido*, 1968), hablan de una autonomía relativa de los distintos sectores sociales en el ámbito escolar, de las estrategias de contestación existentes dentro del sistema y, en última instancia, del sistema educativo como un ámbito social de confrontación, negociación y avance. Es decir, se plantea que no es verdad que la escuela en sí misma sea un mal. Lo que sí es cierto es que es un

ámbito social en el cual se juegan muchas cosas y, por consiguiente, un ámbito en el cual la negociación de la redistribución es bastante interesante.

¿Cómo se da todo esto en el contexto de América Latina? Aquí, como en el resto del mundo, el proyecto de la escuela pública se relaciona íntimamente con el proyecto de *construcción de los Estados* a partir de procesos de independencia. ¿Qué sucede entonces? Pues que según en qué se pusiera el énfasis, el proyecto educativo se encuentra más o menos presente. Así, cuando la estrategia de los nuevos Estados era el control o la integración de las poblaciones sin cambiar la estructura productiva y cuando la cantidad de población era suficientemente grande –como en esos lugares donde había gran cantidad de población indígena– la tendencia fue a no innovar y a dejar el sistema educativo en manos de quien ya tenía experiencia previa en manejar “natural” e “incondicionalmente” a las poblaciones indígenas: la Iglesia. En estos Estados hay escasez y precariedad en los desarrollos de un proyecto educativo laico-estatal y se mantiene por largo tiempo una enseñanza predominantemente religiosa con muy poco énfasis en lo que podríamos llamar la “educación moderna”; por el contrario, en aquellos casos en que el proyecto nacional implicaba la industrialización, o en otros casos particulares que veremos más adelante, se da un proceso de lo que podríamos llamar la “escolarización intensiva”.

Por otra parte, podemos ver que en un mismo país dos proyectos políticos distintos podían dar como resultado dos estrategias educativas completamente diferentes. En el caso de Paraguay, por ejemplo, el proyecto de José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840) –que fue dictador durante las primeras décadas del siglo pasado– implicaban mantener una estructura productiva tradicional y, por consiguiente, se hizo escasísimo énfasis en la escolarización; pero el proyecto de Francisco Solano López (1827-1870), que se dió después, era un proyecto más o menos utópico de un Paraguay industrializado con un desarrollo económico próspero: para eso se necesitaba una escolarización por lo que se desarrollaría un proyecto de escolarización importante y muy significativo. Por ciertas lógicas de la historia, el primer proyecto no encontró ninguna oposición internacional y se lo pudo mantener mientras el dictador vivió, mientras que el proyecto de Solano López habría de terminar con la derrota e invasión de Paraguay por parte de Argentina, Brasil y Uruguay en la guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Es decir, en todos estos procesos y políticas educativas estaban presentes las lógicas de los Estados y las lógicas de las competencias económicas: por supuesto, en aquel caso se contaba con un proyecto mucho más beneficioso probablemente para el futuro del Paraguay, pero quizás por eso es que lo atacaron.

Con respecto a las áreas con proyectos de sustitución de población –las que más conozco son las del Cono Sur de América Latina–, los proyectos de los grupos dirigentes consistieron en apoderarse de las riquezas básicas, fundamentalmente de la tierra, haciendo emigrar a la población nativa y reemplazándola por población inmigrada. En estos casos el proyecto implicaba un fuerte estímulo al desarrollo del sistema escolar, porque esta población inmigrante, que venía de distintos lugares, tenía que ser legitimada y tenía que desarrollar una especie de memoria común fabricada en la escuela. ¿Por qué señalo enfáticamente este punto? Porque en la evaluación de estos dos tipos de estrategias educativas diferentes, las que se dieron en las áreas de emigración y las que se dieron en las áreas de población indígena, en lugar de ceñirse a estimar las diferencias de los proyectos políticos de los sectores gobernantes, se han venido atribuyendo de manera racista a las características de la población en una ecuación que reza así: los países con población emigrante tienen un más alto nivel educativo, mientras que los países con población nativa tienen menos nivel educativo. Bueno, digamos entonces que unos y otros tienen el nivel educativo que se les brinda desde un Estado que los desarrolla a partir de su propio proyecto. Sin embargo, todo ello se transforma luego en legitimaciones de tipo esencialista que, todavía, de alguna manera se encuentran presentes en esos países.

La educación estatal en los países de sustitución de población, entre los que estaría también Brasil, era continuada, extensa, gratuita, obligatoria y laica. ¿Por qué? Porque se trataba de incorporar a la nación a importantes sectores de población. Pero, de todas maneras, esta educación que, teóricamente, era para todos tenía también límites con respecto al acceso a la educación de distintos sectores marginales –y ello fue así aún en los lugares de América donde se desarrollaron más ampliamente estos proyectos. No se hicieron leyes de educación sistemática de las poblaciones indígenas, pues se las dejó completamente al margen, ni se tuvo en cuenta la diversidad de los aportes lingüísticos existentes, ni se dio la misma calidad de formación en todos los sectores. Fundamentalmente, se trataba de un proyecto que alternaba este abandono con la asimilación prioritaria de los últimos contingentes migratorios, considerados como más importantes. En la década de los cincuenta del siglo veinte se abandonarían estos proyectos, a partir de la crisis neoliberal, y se produciría una fuerte desescolarización.

Podríamos decir, entonces, que, desde el punto de vista de los sectores dominantes, los proyectos educativos han estado muy fuertemente unidos a aquello que, en cada momento específico, se ha tratado de lograr y a cuales han sido las prioridades establecidas. Pero todo esto, que en última instancia coincidiría con el planteamiento crítico que hacen los reproductivistas –que, recuerden, habla de la dependencia de los proyectos educativos con respecto a estrategias políticas más generales–, no tiene en cuenta el hecho de que, a su vez, los sectores marginales o los sectores carentes de poder a su vez utilizan el sistema educativo de una manera diferente y, por decir lo mínimo, conflictiva.

Es evidente, como vimos, que el sistema educativo se presenta al imaginario como una puerta de acceso al ascenso social y a la legitimidad. Eso se da, sin embargo, con cuenta gotas. Es decir, con mucha frecuencia los que acceden al sistema educativo son aquellos cuyos padres ya estaban en el sistema educativo y sólo muy lentamente se van incorporando otros. Pero además, curiosamente, cuando se van incorporando al sistema educativo sectores que antes no estaban incluidos, esta ampliación implica una desvalorización del sistema educativo como tal: los títulos pasan a tener menos prestigio, se los paga menos, y se habla de problemas tales como el de la masificación de la enseñanza o el problema de la falta (o la pérdida) de calidad. En otras palabras, cuando entran al sistema educativo los sectores que antes estaban excluidos, es cierto que esto produce cierto ascenso social, pero limitado por el hecho de que a su vez baja el prestigio social de los sectores o entidades a los que acceden. Es algo semejante a lo que pasa con el acceso de las mujeres a determinadas profesiones consideradas anteriormente masculinas: se produce la *feminización de las profesiones* y, al mismo tiempo, estas profesiones se devalúan socialmente –se paga menos sueldo, tienen menos prestigio, etc. Es el proceso según el cual el intento y el logro del ascenso social particular se compensa con la desvalorización general que se produce del logro que se ha obtenido.

De todas maneras, los distintos sectores subordinados a su vez desarrollan dos estrategias respecto al sistema educativo. Uno es el rechazo del sistema educativo como tal: en un trabajo pionero de Paul Willis (*Learning to Labour*, 1977) se señala como, entre los jóvenes de las familias obreras de Inglaterra, los adolescentes tienden a considerar a la escuela como una “mariconada” (por decirlo en términos nuestros), es decir, como algo que desarrolla intereses que no son los propios; ellos asumen que están obligados a tomar una determinada cantidad de asignaturas y a aceptar una serie de imposiciones disciplinarias que los coartan y que lo que

verdaderamente es propio de los hombres es abandonar el sistema educativo y dedicarse a trabajar y a ganar dinero. De esta manera se construye en este caso la exclusión, curiosamente por la vía de la autoexclusión. Puede pensarse así que uno de los contenidos o uno de los objetivos de la enseñanza sistemática es mantener a cada uno de ellos en su hogar: abandonan el sistema educativo, con lo cual siguen siendo trabajadores manuales. Una posición clínicamente crítica que termina reproduciendo la misma lógica.

En otros casos hay sectores enteros de la población, como es el caso de los gitanos en Europa, que se llevan mal, digamos, con el sistema educativo: asisten muy poco a la escuela, la abandonan muy pronto, consideran que la escuela no va con ellos ni les dice nada significativo. A partir de este rechazo terminan legitimando la discriminación social que padecen, porque a su vez entonces no están capacitados para ocupar los puestos mas altos.

Aún en otros casos este rechazo del sistema educativo se produce por situaciones que no se pueden considerar voluntad de la población: por ejemplo, las poblaciones indígenas que hablan lenguas diferentes a las del sistema educativo que se les está ofreciendo y que, por consiguiente, tienen excesivas dificultades en el manejo del sistema educativo lo que los lleva a tener mayores tasas de abandono escolar.

Pero, frente a esta estrategia de rechazo, también es cierto que hay sectores importantes o significativos de la sociedad que utilizan sistemáticamente el sistema educativo como parte de su legitimación o de su proceso de ascenso social, independientemente de los contenidos del sistema educativo. Se trata de aquellos casos en que estos grupos tienen claramente establecido que el sistema educativo abre puertas legitimadas de ascenso social y, por consiguiente, lo utilizan como vehículo de movilidad. El caso quizá más conocido de una comunidad o grupo étnico es el de los judíos que, sistemáticamente y en todas partes, dedican una parte importante de sus esfuerzos familiares e individuales a los estudios y a alcanzar los niveles universitarios. Ellos tienen normalmente niveles de formación buenos, y a menudo muy buenos, en comparación con los niveles de las sociedades en que viven, con lo que de alguna manera contrarrestan la hostilidad antisemita, tan frecuente en muchas sociedades. Aunque por otra parte ello les genera a su vez nuevos prejuicios y racismos.

Hay igualmente algunos sectores de emigrantes que se suben al carro de los sistemas educativos. Creo que el caso más amplio y más interesante es el de las mujeres –de las cuales hablábamos ayer. En un principio fueron estrictamente excluidas del modelo general del sistema educativo, estableciéndose una enseñanza especial para las mujeres que quedaba a menudo en manos de la Iglesia. Pero apenas el sistema educativo abre sus puertas a las mujeres, ellas tienden a entrar en él ocupando todos los huecos que van quedando. En otras palabras, las mujeres utilizan el sistema educativo como elemento de promoción social, pero insisto en que lo hacen de una manera problemática en la medida en que no siempre sus logros son valorados. Si nosotros miramos en términos de discriminación salarial, podemos ver que la discriminación salarial por género, que se da en todos los niveles, es más fuerte cuanto más alto es el nivel educativo de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hablamos de los sueldos más bajos, la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer es relativamente escasa porque estamos con márgenes pequeños de ganancia, pero que cuando llegamos a los puestos altos y vemos, por ejemplo, lo que gana una mujer con un título universitario y lo que gana un hombre con el mismo título, observamos con mucha frecuencia que el hombre está asignado a tareas con mayor prestigio y mayor sueldo, mientras que las mujeres están trabajando por debajo de su nivel de capacitación, en trabajos con menor prestigio y menor sueldo. Por consiguiente, con la misma formación la diferencia de ingresos por género es más elevada en tanto que se trate de personas con mayor capacitación. ¿A dónde nos lleva esto? Lo que estoy tratando de señalar es que el sistema educativo, lejos de ser un promotor de bienes atemporales, de una forma independiente a los proyectos políticos o que funcione con determinados niveles de autonomía y que se legitime por tanto a sí mismo, está más bien íntimamente relacionado con los distintos proyectos políticos. Cada cambio político implica una reformulación del modelo.

El sistema educativo no sólo ni simplemente capacita. Muchas veces se habla de la distancia de la educación respecto de la demanda laboral y nos preguntamos por cuáles son los ejes que se están priorizando en las enseñanzas que se están proponiendo y quién está determinando qué tipo de enseñanza debe ofrecerse. Es cierto que a veces las propuestas educativas resultan separadas de la demanda social. Pero la función de la escuela no es solamente capacitar (bien o mal), sino que a través del sistema educativo –como señalaba Alberto Valencia en su intervención dentro de este panel– el Estado se convierte en un constructor de

identidades sociales, y fundamentalmente, pero entre otras cosas, lo hace a partir del sistema educativo. Por consiguiente, el sistema educativo es un amplio generador de lo que podríamos llamar "identidad" y, desde ese punto de vista, los problemas, las fallas o fracturas de la identidad son temas que también deben discutirse en términos de los contenidos del sistema educativo.

Por otra parte, la escuela es también una gran generadora de conductas adecuadas a las estructuras jerárquicas. Hay algunas interpretaciones que, por ejemplo, se preguntan por qué se da tanto peso a ciertos tipos de formación. Así, dentro de los estudios primarios y secundarios, la prioridad en la enseñanza de las matemáticas. Yo no sé cómo son los problemas aquí, pero, por ejemplo en España, cosas tales como sacar la raíz cuadrada, el cálculo diferencial etc., forman parte de lo que tiene que saber cualquier alumno que esté en la secundaria. ¿Responde esto a una necesidad real? ¿Acaso nosotros hemos mirado, en tanto que adultos, qué pensamos de las matemáticas? Usamos realmente muy poca cosa –si acaso sumar, restar, multiplicar y hasta dividir. Y yo les juro que estoy realmente esperando a que me llegue el momento de decir '¡ahora tengo que sacar una raíz cuadrada!'. No me ha llegado nunca esa oportunidad. Supongo que los que estudian economía sí que tendrán que hacerlo, pero a nosotros que estudiamos dentro del área de las ciencias sociales o dentro de las letras, estos aprendizajes no nos tocan nunca. Son, en definitiva, cosas que van a tener tan escasa aplicación social, pero que sin embargo forman una parte importante de los programas educativos. Pues bien, hay algunas explicaciones que sugieren que es precisamente porque adecúan a los alumnos a un tipo de actividad y a una vida pesada cuyo alcance está por fuera de su horizonte: es una forma de obligarlos a aceptar una determinada disciplina que posteriormente van a utilizar, se supone, en otras cosas. Evidentemente, si lo que se trataba era de aprender a pensar, pues podríamos hacerlo de una manera más atractiva, por ejemplo, jugando ajedrez o desarrollando cualquier otro tipo de actividad. Lo que estoy tratando de decir es que se trata de un fuerte elemento condicionador.

Para finalizar, ¿cuál es el desafío que nos queda? Yo creo que en una perspectiva de tiempo largo la discusión sobre la educación ha sido bastante útil, pero en el sentido de que en la actualidad ya no se plantean críticas radicales a la escuela con la idea de reemplazarla por otro tipo de organizaciones o, simplemente, de desvalorizarla. El desafío que se plantea en la actualidad, y que se está planteando en todas partes, es reemplazar el

modelo vigente y aumentar *los mecanismos de participación en su diseño*. Es decir, la idea de que la familia, el barrio, los grupos laborales o los sindicatos puedan de alguna manera opinar, por ejemplo, sobre los contenidos de la educación. Tanto la idea de que los maestros deben tener determinado nivel de autonomía para mejorar el trabajo como, y fundamentalmente, la idea de que tienen que hacerse evaluaciones para controlar la funcionalidad social de aquellos contenidos que se están dando, forman parte de lo que podríamos llamar el modelo clérico que se está utilizando en todas partes con relación a la escuela.

Sin embargo, la posibilidad de acceder y de aplicar este tipo de planteamientos se ve hoy dificultada por el hecho de que, con el nuevo giro de la economía –fundamentalmente a partir de los años noventa con la implementación de políticas neoliberales–, hay una especie de retirada del Estado del campo educativo. Con ello, en lugar de asumir el Estado sus responsabilidades y transformarse en un interlocutor al cual se le pueda interpelar, él se encuentra mucho más condicionado por cosas tales como los recursos económicos que están en juego, con lo que se produce un abandono del campo educativo sin haber cubierto lo que podríamos llamar las *expectativas sociales* y la *demandas de servicios que la sociedad tiene derecho a exigir* al respecto. Esta retirada, que en algunos casos –como en España– se presenta como propiciadora del “aumento de la libertad de enseñanza”, es antes bien la privatización de la enseñanza: una cosa bastante diferente. Esta retirada dificulta *el control social*, lo cual no quiere decir, aunque en algunos casos así se asuma, que de ninguna manera ello debe tomarse como la defensa de la *antigua escuela pública*, puesto que aquella escuela pública tenía todos esos límites que hemos marcado antes. Lo que tiene que hacerse –o lo que quizá podría proponerse como objetivo– es más bien una redefinición más dialogada de los objetivos de la escuela y no apoyarse simplemente, a la hora de las evaluaciones de la escuela, en cosas tales como las “tasas de alfabetización” que, en sí mismas, pueden resultar poco significativas.

HACIA UNA BUSQUEDA DEL INTERES PUBLICO EN LA COMUNICACIÓN MASIVA EN COLOMBIA: CRITERIOS Y LINEAS DE ACCION¹

Fabio López de la Roche²

Las formas de determinar el interés público en la acción de los medios y en las políticas de comunicación

Los teóricos políticos han cuestionado fuertemente la idea de la existencia del “bien común”, del “interés público” o del “interés general” como nociones efectivamente compartidas por todo el conjunto de una sociedad. Si aplicamos estas nociones a la comunicación de masas veremos una gran diversidad de intereses a la hora de determinar concretamente en qué consiste ese “interés público”. Es diferente la percepción que cada uno de los grupos sociales que intervienen en el proceso comunicativo tiene del bien común: los anunciantes, los dueños de las programadoras, los conductores de medios, los jefes de redacción, los reporteros, los miembros de las audiencias, los críticos de medios o los investigadores de la comunicación probablemente encuentren notorias discrepancias a la hora de determinarlo. Esto para no hablar de las diferencias de percepción del “interés general”, ancladas en las distancias de clase o estrato social, de etnia, de género, generacionales o estético-sociales, fortalecidas adicionalmente por los procesos contemporáneos de reconocimiento de nuevas identidades, de estallido de las viejas nacionalidades homogéneas y cerradas, y por la globalización cultural y comunicativa.

¹ El presente trabajo se apoya, para el análisis del caso colombiano, en la propuesta formulada desde la tradición teórica de "evaluación de la acción social de los medios" por Denis Mc Quail en su trabajo *La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público*. El trabajo integra, además, reflexiones derivadas de otras tradiciones de investigación en comunicación, como la de los estudios culturales británicos, la tradición latinoamericana de investigación en comunicación-cultura, y los estudios sobre el periodismo y las rutinas profesionales en la producción de la información.

² El autor es Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Denis Mc Quail ha planteado la cuestión de los distintos criterios y parámetros que se tienen a la hora de medir el “interés público” en las políticas de comunicación o en la acción social de los medios masivos. Desde su perspectiva, habría tres formas de determinarlo:

Una primera estaría basada en el criterio de la preponderancia o de la preferencia de la mayoría. La fortaleza de este criterio radicaría fundamentalmente en los métodos de medición: el voto popular, las encuestas y el rating o la elección del mercado. Su debilidad radicaría en su incapacidad de discriminar sobre aspectos y asuntos sustantivos asociados a distintas alternativas de política comunicativa, de una manera lógica y argumentativa. Si bien el criterio de la mayoría estimula políticas populistas al estilo de “hay que darle a la gente o al pueblo lo que ellos demandan” o visiones consumistas de las políticas de comunicación masiva, es un criterio que de todas maneras tiene que tenerse en cuenta, mucho más ahora, cuando en Europa -desde la segunda mitad de los años ochenta-, y más recientemente en América Latina -desde comienzos o mediados de los años noventa-, asistimos a la apertura a sistemas privados de medios que han multiplicado y diversificado significativamente las ofertas de programación. Adicionalmente, tendríamos que considerar que esa apertura comunicativa al libre mercado ha llevado también, en Europa como en América Latina, a modificaciones fuertes en la jerarquía de valores comunicacionales que orientaban las políticas de medios.

Otra forma extrema de determinación del interés público (que McQuail denomina la “teoría unitaria”), consistiría en partir para su evaluación del criterio de correspondencia de la práctica de los medios con alguna noción de un bien último al que toda la sociedad en principio debería aspirar: la propiedad pública total sobre los medios, un ideal educativo de los medios masivos formulado desde la preferencia por las versiones letradas y racional-iluministas de la cultura (la “alta cultura”, por ejemplo), o el liberalismo desregulador que aboga por la libertad y por la propiedad privada total. Sobre esta última nos dice Mc Quail que “la teoría unitaria más resonante en la actualidad posiblemente sea la defensa de la máxima libertad de mercado para todos los medios”³.

³ McQuail, Denis, opus cit., pag 54.

Una tercera forma de determinación del interés público en políticas de comunicación, se desprende de la teoría del interés común. Mc Quail retoma la propuesta de Held⁴ quien propone pensarlo recurriendo a la noción de *reivindicaciones* rivales: “las reivindicaciones que apelan al “interés público” son afirmaciones normativas en el sentido de que algo (por ejemplo una acción o un objetivo) es *justificable* en razón de beneficios mayores, dentro de los términos de cierto sistema político y de cierto marco normativo. Los principales elementos de esa reivindicación son, por lo tanto: un conjunto de principios y normas, (sobre las cuales no tiene por qué haber unanimidad); una propuesta o reivindicación (hechos con referencia a estas normas) a favor de algo (x) en tanto tiene un mérito mayor que el de satisfacer anhelos individuales (por separado o en conjunto); y una maquinaria para verificar la reivindicación y ponerla en vigencia, si así se decidiera”⁵.

Mc Quail propone desechar las teorías “unitaria” y de la preponderancia, -lo que no necesariamente implica no tenerlas en cuenta a la hora de evaluar el “interés público” en la acción de los medios-, para optar, con un criterio más pragmático, por la vía propuesta por la teoría del interés común. Comparto con Mc Quail su adhesión a esta teoría del interés común en la determinación del interés público, concepción que el autor considera una especie de “camino intermedio (...) entre los conceptos de lo mayoritario y lo unitario”, y que tendría que ver con la capacidad de detectar intereses comunes determinados de manera pragmática, sobre la base de la capacidad de identificar diversos “reclamos de interés público” en cuanto a políticas de comunicación (manejo de adjudicaciones de frecuencias, pautas de publicidad, acceso de los partidos políticos a los medios, subsidios a productores independientes, etcétera).

Retomando de Mitnick la noción de “preferencias”⁶ como un concepto cercano a la idea de interés pero probablemente más neutral, Mc Quail parte de la suposición que los reclamos de interés público deben ser realizados por *reclamantes* identificables o “agentes de preferencias” en su propio nombre o en nombre de una entidad colectiva, y argumenta adicionalmente así la pertinencia de la teoría del interés común como criterio de determinación del interés público en la comunicación:

⁴ Held, V. (1970) *The Public Interest and Individual Interest*, New York: Basic Books, citado por Mc Quail (pags. 55-56).

⁵ Mc Quail, Denis, opus cit., pags. 55-56

⁶ Mitnick, B.M. (1980) *The Political Economy of Regulation: Creating, Designing, and Removing Regulatory Forms*, New York: Columbia University Press, citado por Mc Quail (p.57)

“Varios actores o “agentes de preferencias” plantean reclamos dentro de un sistema político en nombre de objetivos (estados finales que se desean alcanzar) que supuestamente –a la luz de ciertos valores fundamentales o compartidos- representan un beneficio general para toda la sociedad, comunidad o público, por encima de anhelos, satisfacciones o conveniencias individuales. Estos reclamos se especifican como preferencias sobre un sistema de comunicación o su desempeño, que se corresponden con la meta definida”⁷.

Los reclamos de interés público en el manejo de los medios de comunicación se pueden encontrar en las regulaciones de los organismos estatales de control sobre la prensa, la radio y la televisión, en los códigos éticos, manuales de estilo u otro tipo de documentos autoregulatorios producidos por los medios, las empresas periodísticas o las asociaciones de anunciantes, en la jurisprudencia emitida por las altas cortes sobre la materia, en los documentos programáticos de grupos organizados de lectores, radioescuchas o televidentes, así como en las declaraciones y escritos de los críticos de medios y otras voces autorizadas en virtud de su manejo de un saber experto sobre aspectos sociales o técnicos de la comunicación. Más adelante veremos cómo se expresan algunos de estos reclamos de interés público en el caso colombiano.

La construcción de lo público se juega también en el sistema privado de medios

Un aspecto relevante que es importante subrayar con respecto a la construcción del interés público desde las políticas de manejo de la comunicación y los medios masivos, es que ese proceso involucra no sólo a los medios de comunicación público-estatales desde el punto de vista de su propiedad (como Inravisión, Señal Colombia o la Radiodifusora Nacional de Colombia, en nuestro caso), sino al conjunto de los medios masivos y dentro de ellos a los privados, que no obstante su propiedad privada, juegan funciones públicas fundamentales que implican responsabilidades y deberes para con la sociedad.

⁷

En medios de comunicación, con excepción de aquellos países y ordenamientos políticos donde todos los medios de comunicación son de propiedad estatal, la construcción de lo público tiene que pensarse y asumirse *también* desde lo privado y por ende la categoría kantiana de "publicidad" no puede concebirse al margen del sistema privado de medios. La esfera pública comunicativa contemporánea, aquello que algunos autores han denominado el *ágora* electrónica, en épocas de fuerte desregulación de los sistemas de medios como la actual, no puede imaginarse sin asumir concienzudamente lo público que se juega en lo privado.

No está de más recordar que un factor adicional que ha favorecido el manejo privado de los medios de comunicación ha sido el desprestigio de los modelos estatales de manejo de medios en virtud de los abusos y manipulaciones llevados a cabo por los gobiernos populistas, los regímenes militares derechistas de los años setenta y los socialismos burocráticos cubano y este-europeos.

Es conveniente precisar que este desprestigio de los modelos de propiedad pública sobre los medios de comunicación, no implica necesariamente la descalificación de algunas entidades y proyectos comunicativos público-estatales (como Inravisión, la Radiodifusora Nacional, el canal "Señal Colombia", los canales regionales o las "oficinas de comunicaciones" de las instituciones estatales), como potenciales "agenciadoras" de políticas de construcción democrática de lo público. El hecho de que en el actual ordenamiento clientelista de la política en Colombia estas instituciones hayan estado o estén sujetas a menudo a los apetitos y vaivenes burocráticos liberal-conservadores, no implica que ellas no puedan ser reformuladas y reorientadas sobre la base de nuevos criterios democráticos, pluralistas y transparentes de construcción del interés público. Tampoco implica descalificar sus méritos históricos como instituciones público-estatales de la comunicación masiva.

Quisiera añadir que cuando me refiero a la necesidad de ver al sector privado de medios como un lugar importante para el diseño y desarrollo de políticas vinculadas a la promoción del interés público, lo hago desde una mirada políticamente optimista sobre los *procesos de campo* que tienen lugar al interior de las empresas periodísticas y con una valoración de las

posibilidades que pueden incubarse desde aquellos sectores del periodismo y la comunicación social que laboran desde parámetros de profesionalismo y de compromiso con los deberes democráticos del oficio. Este optimismo

no es sin embargo ingenuo. En un panorama de desinstitucionalización, de corrupción y de subordinación de lo público a los intereses particulares como el que vivimos actualmente en el país, no podemos ser ingenuos, pero tampoco apocalípticos e incapaces de ver los gérmenes de la renovación de las costumbres y de la transformación de la cultura política dominante.

Tal vez lo más sensato en cuanto al papel del sector privado en la construcción de sentidos democráticos y pluralistas de lo público, sea el desarrollo de una política pública de doble vía, que estimule por un lado, la promulgación de pautas de autoregulación por parte de los propios medios y los periodistas, y por otro, una regulación estatal no autoritaria pero dotada de autoridad, firmeza y criterios claros, fundada en normas discutidas y pactadas consensualmente con los actores y públicos interesados.

El escamoteo del interés público en la comunicación

Cuando los analistas de medios estudiamos las normativas de las sociedades europeas y la norteamericana y la canadiense, para regular el funcionamiento de sus medios masivos, nos vemos abocados a movernos, de un lado, entre el desconcierto y el pesimismo a la hora de evaluar nuestra realidad nacional y la posibilidad de construir en una sociedad periférica, fragmentada, polarizada por el conflicto y clientelizada de manera perversa por los politiqueros, ordenamientos verdaderamente democráticos y plurales de la comunicación, y, de otro lado, la necesidad de construir un modelo propio de regulación social o de autoregulación de los medios, que apoyándose en el conocimiento de esas experiencias foráneas de construcción de lo público en las políticas de comunicación, se corresponda al mismo tiempo con nuestra historia y con ciertas características (por lo menos con las más saludables y democráticas) de la cultura política colombiana y del desarrollo histórico particular de nuestro sistema de medios. Por ejemplo, con los aspectos significativos y los valores comunicacionales que habría dejado como herencia –junto a sus aspectos inconvenientes y negativos– el sistema mixto configurado históricamente para el manejo de la televisión en Colombia.

Es claro que no podemos trasladar mecánicamente a nuestro suelo normativas, principios y valores que son producto de otra historia político-participativa, social e institucional. Pero debe ser también clara nuestra obligación de dialogar con la experiencia europea, norteamericana y

latinoamericana de formulación y puesta en práctica de políticas de comunicación y de medios, las cuales desconocemos flagrantemente. Nuestros grupos dirigentes, tan proclives a subrayar la premodernidad de la insurgencia armada colombiana y los anacronismos de los sindicalistas y otros actores distintos a ellos, deberían prestar más atención a sus propios anacronismos, premodernidades e insuficiencias democráticas. Y éstas están muy presentes en la ignorancia de los grupos gobernantes en torno a las posibilidades y potencialidades de un manejo moderno y democrático de los medios de comunicación de masas. Aquí sigue primando el provincianismo y la ausencia de referentes externos del viejo país montañoso y mediterráneo que agónicamente incorpora y filtra las ideas y movimientos de la modernidad.

Frente a las normas sobre apoyo a la diversidad política y a diarios financieramente débiles en Suecia; las de respeto y fomento de la diversidad lingüística y del multiculturalismo en Suiza y Canadá; las restricciones a la emisión de publicidad en la transmisión televisiva de cine de autor en Italia; las de defensa de las identidades nacionales en la transición de sistemas públicos de emisión a sistemas abiertos a la competencia comercial, o las de salvaguarda de los intereses de niños y adolescentes en cuanto audiencia ante ciertos fenómenos de homogeneización de las industrias globales del entretenimiento, la situación colombiana contrasta por su desconocimiento de esas experiencias y la precaria deliberación ciudadana sobre las políticas de comunicación⁸.

En los departamentos de ciencia política, si bien está naciendo una preocupación por la relación medios-democracia-ciudadanía, la comunicación política no ha sido un tema central del interés académico. En las propias conversaciones de paz con la insurgencia armada de las FARC y el ELN, en las propuestas de reforma política y en las plataformas de movimientos sociales y partidos políticos, parece ser un tema de segundo o tercer orden. Dentro de la clase política, con contadas excepciones, prima la práctica que hace que los medios de comunicación y las licitaciones para

⁸ Blumler, Jay G., *Televisión e interés público*, Bosch, Barcelona, 1993. Véase especialmente el capítulo 3: "Valores vulnerables en juego".

acceder a espacios dentro de ellos en Señal Colombia y en los canales del sistema mixto, se otorguen como pago de favores políticos o personales.

Acerca de la participación ciudadana en organismos reguladores de medios como la Comisión Nacional de Televisión, un reconocido analista ha subrayado cómo, si de un lado, "hay dificultades en el enfoque de la

representación comunitaria, en los procedimientos para elegir a sus representantes (así como) en la posibilidad de pedir rendición de cuentas", de otro, "ha faltado más motivación y presencia de la sociedad, mucho más veeduría y control político, más presión social sobre los elegidos y sus decisiones. Uno quisiera ver más activa a la academia, a los maestros, a los sindicatos, a los padres de familia. Así, a los mecanismos criticables de selección se les ha sumado muchas veces la apatía social"⁹.

Sobre la Comisión Nacional de Televisión, organismo al que en teoría le compete formular políticas de televisión y de regulación del funcionamiento del medio, hay que anotar que muy poco tiene que ver con comisiones como la británica *Royal Commission on the Press* o la *Federal Communications Commission* norteamericana: los criterios para su nombramiento son político-clientelistas y no la idoneidad, la experiencia o el saber jurídico, técnico o académico en el campo; su representatividad social es muy dudosa (recordemos el candidato a comisionado que hace unos años construía aceleradamente organizaciones piratas de televidentes) y la vocación de construir un sentido del interés público, del bien común y de reglas del juego consensuadas, casi inexistente.

El manejo clientelar y patrimonialista del canal de interés público "Señal Colombia" por la CNTV y otras instituciones estatales ha sido descrito así por otro reconocido analista de televisión:

"La apropiación de lo público por parte de particulares y con fines privados amenaza permanentemente al país. De ahí se derivan mafias completas de clientelismo y corrupción que han entrado a formar parte de la cultura nacional y contra las cuales la sociedad poco puede hacer, porque hay una inmensa solidaridad entre los

⁹ Rey, Germán, "Mala señal en la televisión pública", en entrevista del periódico UN Periódico, de la Universidad Nacional de Colombia a Germán Rey, Javier Darío Restrepo y Germán Yances, No. 9, Bogotá, abril 9 de 2000.

corruptos para protegerse. Los contratos de producción de Señal Colombia son repartidos con criterio puramente clientelista entre los amigos de los comisionados, del gobierno, del Congreso y de la administración de Inravisión. Es increíble, pero hasta el sindicato de Inravisión, que dice defender intereses nacionales y de los trabajadores, participa en el saqueo de lo público"¹⁰.

Este mismo crítico de televisión nos da otra clave importante para ver los obstáculos a la participación ciudadana en la CNTV:

"Dado el arraigo de ciertas costumbres y el triunfo de una cultura mafiosa, la participación ciudadana es una entelequia. Y mucho más en la televisión, donde se mueve tanto poder y dinero. Ni los gobiernos ni los partidos políticos ni la clase dirigente que por años han usufructuado lo público como un bien privado, están dispuestos a permitir que el pueblo se le meta en esos espacios"¹¹.

Algunos eventuales valores comunicacionales para la Colombia actual

Denis Mc Quail ha definido a los valores comunicacionales fundamentales como unos "principios generales ampliamente reconocidos acerca de un bien general o individual que pueda esperarse de la comunicación o buscarse en ella"¹².

Esos valores comunicacionales deben responder a retos que se le presentan a las distintas sociedades nacionales y deben responder simultáneamente a ciertas tradiciones políticas, culturales y comunicativas presentes en cada país.

Algunos de los valores comunicacionales y acciones comunicativas que podrían tener un gran sentido en la actual situación nacional podrían ser los siguientes:

- Tratamiento cuidadoso y respetuoso de la gente -de las víctimas como de las audiencias-, en el cubrimiento de las múltiples violencias que nos afectan.

¹⁰ Germán Yances en "Mala señal en la televisión pública".

¹¹ Ibidem

¹² Mc Quail, Denis, opus cit., pag .59

- Construir una relación comunicativa con el fenómeno de la muerte en Colombia, que evite su banalización, que elabore de forma adecuada los duelos y redimensione simultáneamente el valor de la vida humana en Colombia.
- Cubrimiento cuidadoso, matizado y equilibrado de los conflictos y de la diversas posiciones y argumentos de las partes.
- Ampliar la representación de la diversidad y la pluralidad política e ideológica de la sociedad colombiana, más allá de las filiaciones político-partidarias liberal-conservadoras.
- Superar el actual empobrecimiento del debate público y cualificar el derecho de las audiencias a ser bien informadas (ante fenómenos actuales como la precaria discusión de importantísimos asuntos públicos como el Plan Colombia, la política de paz del ejecutivo y del Comisionado de Paz, la política militar ante la insurgencia y ante los paramilitares, etc).
- Manejo cuidadoso y responsable del proceso de paz. En el espíritu de un escrito de William Ospina, desarrollar "esfuerzos por contrariar las inercias mentales del conflicto"¹³.
- Fortalecimiento y cualificación de la tradición de libertad de prensa (crear un mayor sentido de responsabilidad social, si reflexionamos sobre lo que significaron las filtraciones de expedientes judiciales a la prensa por la Fiscalía durante el proceso 8000 o la justicia desde los titulares de prensa y televisión, la aquiescencia de la prensa a ese tipo de prácticas, o la atribución apresurada de la autoría de hechos como el del "collar-bomba" en Chiquinquirá, con graves implicaciones para la marcha del proceso de paz).
- Asumir la construcción de identidades nacionales en contextos de multiculturalismo y propiciar espacios de diálogo intercultural que eludan los fundamentalismos políticos, étnicos y religiosos. En el espíritu de la Carta Constitucional de 1991, desarrollar políticas no sólo de reconocimiento de la diversidad cultural, sino además, de acceso por parte de etnias y subculturas a la emisión de sus opiniones y perspectivas en medios masivos. Asumir adicionalmente la expresión de la diversidad geográfico-territorial y cultural del país.

¹³ Ospina, William, "Espacios para el entendimiento", en El Antivirus, Plegable informativo de la Corporación Medios para la Paz, No. 001, Enero del 2000

- Producción de una información "movilizadora" que estimule la participación creativa de la sociedad civil en distintas iniciativas sociales y comunitarias.

A título de cierre: otras posibles líneas de acción

A título de cierre, precisaremos a continuación algunos lineamientos de acción que podrían también contribuir al desarrollo del interés público en políticas de comunicación.

Desde organismos como la Comisión Nacional de Televisión e Inravisión se requiere superar la improvisación y la falta de planeación y de políticas. Como bien lo ha expresado Germán Rey,

"definir políticas es convocar a los diferentes sectores sociales a imaginar y proponer qué tipo de televisión cultural desean, cómo esa televisión representa el interés público, de qué modo se conectan los medios de comunicación con las realidades de un país lleno de intolerancia y de injusticia. Un país de regiones, secularizado, con pluralidad de etnias, con diferencias de género. Por eso definir políticas requiere concertación, investigación, sentido de realidad, conocimiento del medio. Y sobre todo una voluntad política para hacer cumplir los acuerdos, no ceder a los cantos de sirena de las prebendas y el amiguismo y tener libertad crítica para evaluar con seriedad el cumplimiento de la política definida"¹⁴.

A estos mismos organismos de definición de políticas de comunicación hay que demandarles el desarrollo de procesos de adjudicación transparentes, el apoyo a productores independientes, a colectivos sociales y grupos de jóvenes creadores, el apoyo a la investigación en comunicación con miras a la formulación de políticas con conocimiento de causa, la promoción de la constitución de asociaciones de televidentes, de veedurías ciudadanas y otras formas de participación social y comunitaria en la formulación de políticas comunicativas.

¹⁴ Rey, Germán, "Mala señal en la televisión pública", UN Periódico, edición citada

Desde el periodismo y los comunicadores sociales es importante avanzar en la promulgación y observancia de códigos internos de autoregulación y en prácticas autoreflexivas sobre el papel del periodismo y la comunicación masiva en una sociedad como la colombiana contemporánea con sus rupturas, conflictos, tragedias y dilemas.

La academia está llamada en estas circunstancias a fortalecer el diálogo entre la investigación social y humanística y el periodismo, superando las incomprendiones y recriminaciones mutuas, situación que podría contribuir a la producción de un académico más capaz de comunicarse con la sociedad y más comprensivo de la actividad periodística, un intelectual-comunicador, y a un periodista más crítico de su oficio, menos coyuntural y más capaz de dar cuenta de las cuestiones estructurales a la hora de informar sobre la realidad, y más autorreflexivo acerca de su oficio y sus rutinas ocupacionales.

Resulta conveniente así mismo, fortalecer la investigación crítica de los medios masivos desde orientaciones teóricas como las que hoy día plantean las relaciones entre narrativas y control social¹⁵, o desde aquellas que desde el análisis del discurso noticioso o de ficción nos develan racismos, sexismos y otras formas de discriminación social¹⁶.

Se requiere así mismo estimular la producción de investigaciones históricas sobre los medios masivos y sobre la evolución del campo del periodismo. Ellas pueden conferirle solidez y fondo a la investigación sobre comunicación, mostrar momentos y períodos importantes en la construcción de lo público en políticas de comunicación, así como una mayor conciencia en torno al papel jugado por los medios en la construcción de nuestra modernidad..

En esa misma dirección, requerimos de revistas especializadas en temas de comunicación social y periodismo que aproximen la reflexión académica sobre la comunicación social, con el conocimiento de los saberes,

¹⁵ Véase el trabajo de Mumby et al., *Narrativas y control social*, Amorrortu, Buenos Aires, 1998

¹⁶ Véanse los libros de Teun van Dijk, *La noticia como discurso*, Paidós, Barcelona, 1996 y *Racismo y análisis crítico de los medios*, Paidós, Barcelona, 1997.

destrezas y tradiciones del oficio periodístico, logrando interesar a los propios periodistas en este tipo de investigaciones y reflexiones.

En fin y para concluir, habría que decir que en el campo de la comunicación, al igual que en otras esferas de la vida colombiana donde el interés público brilla por su ausencia o por su envilecimiento, hay que aunar esfuerzos entre políticos demócratas, académicos, periodistas conscientes de las responsabilidades democráticas del oficio, y públicos y audiencias interesados en ser tenidos en cuenta en las políticas de comunicación, para hacer de la comunicación y de los medios masivos un espacio de reconstrucción democrática, pacífica, pluralista y participativa de la nacionalidad.

Ese reto es imposible de ser llevado a cabo sin el estímulo paralelo de un tipo de participación política y social nuevo que coloque por encima de cualquier interés particular un conjunto de bienes y valores referidos al interés público. Muchos colombianos discuten y trabajan hoy en esa perspectiva, y este escrito intenta ser apenas un modesto y preliminar aporte en esa dirección.

Bibliografía

BLUMLER, Jay G., *Televisión e interés público*, Bosch Comunicación, Barcelona, 1993

ENTEL, Alicia (comp.), *Periodistas: entre el protagonismo y el riesgo*, Paidós Estudios de Comunicación, Buenos Aires, 1997.

MC QUAIL, Denis, *La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público*, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1998

MUMBY, Dennis (comp.), *Narrativa y control social*, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1997.

REY, Germán, *Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas políticas*, FESCOL, Cerec, Fundación Social, Bogotá, 1998

VAN DIJK, Teun, *La noticia como discurso*, Paidós, Barcelona, 1996

VAN DIJK, Teun, Racismo y análisis crítico de medios, Paidós, Barcelona, 1997.

LA VIOLENCIA Y LA MEMORIA COLECTIVA

Alberto Valencia Gutiérrez¹

El punto de partida de estas reflexiones es un interés práctico. No creo que la situación de conflicto y violencia que vive Colombia actualmente tenga una solución en el corto plazo. La negociación con los grupos guerrilleros o paramilitares, o la terminación (bastante improbable por cierto) del negocio del narcotráfico, que constituyen factores propiciadores fundamentales del conflicto actual y cuya desactivación sería importante para la salida de la encrucijada, no serían suficientes para poner fin a la situación que vivimos. Creo, por el contrario, que la posibilidad de que Colombia supere y deje atrás la violencia que padece es un asunto de largo plazo. Y es sólo a partir de la educación y de la transformación radical de las formas y las prácticas de la cultura, como unas nuevas generaciones, que apenas están naciendo, podrán tener un nuevo país. Esta actitud es aparentemente pesimista, pero en el fondo es supremamente realista. Los problemas que quiero plantear en las líneas siguientes van en esta dirección.

La dificultad de encontrar una explicación satisfactoria para las múltiples violencias que nos aquejan ha llevado a algunas persona a formular la idea de que existe en Colombia una “cultura de la violencia”. Estas mismas personas no nos explican muy bien en que consiste esta denominación, pero podríamos suponer que se refiere a la idea de que el colombiano es violento por naturaleza, en el sentido de que su índole propia sería violenta, independientemente de las circunstancias que viva, de los períodos históricos o de las coyunturas por las que atraviere el país.

La expresión “cultura de la violencia” ha desatado toda clase de reacciones y producido toda clase de críticas, casi siempre con razón. La expresión misma es una contradicción en los términos y corresponde a aquello que en preceptiva literaria se podría llamar un “oximorón”, es decir, la unión de dos palabras que por su sentido se excluyen, como se puede ver en el ejemplo del “hielo frito”. Cuando se habla de cultura se hace referencia a una situación en la que la violencia se encuentra excluida. Violencia y cultura serían, pues, dos términos antitéticos y excluyentes. Freud, para dar cuenta de la manera como la agresividad humana constituía una amenaza para la cultura, diseñó la expresión, “malestar en la cultura”. Nosotros hemos ido más lejos y hablamos de una “cultura de la violencia”.

¹ Profesor Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de dicha institución.

Las principales críticas a la noción de “cultura de la violencia” apuntan a señalar que con dicha expresión se hace referencia a una especie de atavismo que cargaríamos en la sangre los colombianos de manera hereditaria y genética. Al usar esta expresión estaríamos, pues, ubicándonos por fuera de la sociología y de las ciencias sociales, al tratar de explicar por factores no sociales un fenómeno social como es la violencia colombiana. Podemos, pues, estar de acuerdo fácilmente en que la expresión “cultura de la violencia” es desacertada e inadecuada. Pero –aquí viene el pero- podríamos afirmar también que la intención que inspira el uso de esta denominación no es equivocada como trataré de explicar a renglón seguido.

El investigador, por lo general (cómo le ocurre a mucha gente también), suele “reificar” –para utilizar una expresión cara al marxismo- los fenómenos que estudia. Donde observa un enfrentamiento entre dos partes contendientes, y más aún si se trata de un enfrentamiento violento, va a la búsqueda de razones tangibles observables y medibles que den cuenta o justifiquen el hecho observado. De esta manera, frente a un hecho violento se busca cuales son los intereses en juego en el terreno económico, político, o incluso social. Y sólo se da por satisfecho si encuentra disputas por el poder político local, conflictos de propiedad, negocios del narcotráfico, que le permitan explicar lo ocurrido. Dicho en otros términos, el investigador convencional lo que trata de hacer es instrumentalizar la violencia. La acción social, como diría Weber, opera en la relación medios fines. De esta manera la violencia se convierte en un medio, en un instrumento para la realización de unos fines, y la labor del investigador es tratar de entender cuales son los fines que se buscan con el comportamiento violento. Con eso queda satisfecho y tranquilo.

El análisis de la violencia en términos instrumentales no es ilegítimo; todo lo contrario: permite describir una serie de situaciones y de contextos por fuera de las cuales el acto es incomprensible. Pero si es insuficiente para dar cuenta del fenómeno violento. La dimensión instrumental de la violencia podría ser considerada como las “ventajas secundarias” del acto, así como se habla de los “efectos secundarios” de una enfermedad. En estricto sentido la dimensión instrumental constituye una simple coartada, que es esencial al acto, pero que es coartada al fin de cuentas.

La expresión “cultura de la violencia”, repito, es inadecuada, pero tiene tras de sí una intención valerosa que consiste, precisamente, en una invitación a ir más allá de la instrumentalidad de los actos violentos. El acto violento no son solamente los fines comprometidos, aquello que el victimario busca realizar eliminando su víctima; el acto violento comprende muchas otras cosas: unos actores que tienen una identidad que a través del acto violento buscan afirmar, negar o construir; unas representaciones; una imagen de sí y una imagen del otro, el acto mismo, etc.

A todo aquello que vaya más allá de la instrumentalidad de un fenómeno, vamos a llamarlo, en esta ponencia, la dimensión expresiva del fenómeno en cuestión. Por consiguiente, en lugar de hablar de una “cultura de la violencia” vamos entonces a hablar de una dimensión expresiva de la violencia. Si nosotros aprendemos a “desinstrumentalizar” el acto violento, si desarrollamos una sensibilidad para ver en él su dimensión expresiva, podemos entonces plantearnos otra clase de problemas. Y precisamente podremos entonces comprender cómo la violencia no se resuelve fácilmente porque se desactiven los intereses en juego, sino que su solución sólo es posible en el largo plazo. Estas diferencias entre la dimensión instrumental y la dimensión expresiva de la violencia nos va a servir en las líneas siguientes de criterio orientador para plantearnos una serie de problemas.

Y para comenzar quisiera referirme a un tema al que no se le ha dado la importancia debida en los estudios sobre la violencia en Colombia. Me refiero a las formas de continuidad o discontinuidad existentes entre la violencia de los años cincuenta (1947-1965) y la violencia contemporánea (1985 en adelante). En mi opinión este problema es crucial para descifrar las violencias actuales. Creo que si queremos medianamente entender el presente de la violencia en Colombia, no podemos limitarnos a analizar lo que tenemos en frente en términos de pura actualidad. En otros términos, quiero afirmar aquí que las violencias actuales sólo son comprensibles en perspectiva histórica.

Muchas personas seguramente estarían de acuerdo con esta afirmación, obviamente. Pero el problema consiste en que no tenemos los instrumentos conceptuales para pensar la violencia en perspectiva histórica. Cuando el sociólogo va a pensar la violencia en su dimensión histórica, y quiere establecer continuidades entre diferentes épocas, se le atraviesa la noción

de “cultura de la violencia” y hasta allí llega porque la noción, como ya lo he dicho, es inadmisibile.

Durante los últimos cincuenta años Colombia ha vivido dos períodos intensos de violencia, separados por un interregno no-violento o de relativa calma, bastante relativa es cierto, pero que no se puede de todas maneras desconocer. El primer período, comprendido entre 1946 y 1965, aproximadamente, es el período conocido como la época de la “Violencia” con mayúscula. El segundo período “despega” definitivamente más o menos alrededor de año 1985 y aún estamos en él. Estas fechas son obviamente relativas y aproximadas, porque no podemos ubicar acontecimientos que les sirvan de punto de partida o de desenlace, como ocurriría por ejemplo en una guerra civil convencional.

El análisis de las cifras relativas al número de muertos durante los últimos 54 años nos permite llegar a algunas conclusiones. Entre 1947 y 1958, período para el cual no existen cifras oficiales, se han calculado por procedimientos estadísticos una cifra de aproximadamente 200.000 mil muertos; entre 1947 y 1952, el período más álgido del conflicto, existiría una tasa de 225 muertos por cada 100.000 habitantes. A partir de 1959 contamos con las cifras de la policía nacional que son altamente confiables. Entre 1958 y 1977 se observa una estabilización de las cifras absolutas alrededor de los 5.000 muertos por año. A partir de este año las cifras comienzan a crecer progresivamente. En 1988 superamos la barrera de los 20.000 muertos por año, y desde 1991 hemos estado entre los 25.000 y 30.000 muertos, rango en el nos encontramos desde entonces con una gran estabilidad. Se podría decir, entonces, que Colombia ha vivido dos agudos problemas de violencia en dos momentos distintos, separados por un ligero interregno.

Ahora bien, ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre ambos períodos? Los investigadores, que por lo general sólo tienen ojos para el carácter instrumental de las violencias, muy a menudo sólo ven diferencias y, además, las definen bien. Señalemos al menos tres. En primer lugar, el país de los años cuarenta y cincuenta no es el mismo de los años noventa. Muchas cosas han cambiado. Los niveles educativos son superiores; el país se ha urbanizado, la religión ha perdido su arraigo; los partidos políticos ya no significan lo mismo que en esa época; Colombia está ahora en un proceso de apertura económica que ha trastornado por completo el modelo de desarrollo anterior; en fin. La idea sería entonces que dos sociedades

distintas, la de los años cincuenta, y la de los años ochenta y noventa, producirían, pues, dos fenómenos de violencia distintos. En segundo lugar, las formas de las luchas han cambiado. La violencia ya no tiene ese tono bipartidista de antes, ni asume la forma de una “cruzada religiosa” como ocurría en los años cincuenta. En tercer lugar, encontramos ahora ingredientes nuevos que le dan a la violencia un carácter completamente distinto, como es el caso por excelencia de la presencia del narcotráfico, o la extraordinaria sofisticación que tiene la violencia hoy en día.

Planteadas las cosas en estos términos el investigador se imagina estar, entonces, a pesar de vivir en la misma sociedad, frente a dos fenómenos radicalmente distintos. La mayor parte de los investigadores así lo han entendido como lo prueba el siguiente hecho. Entre 1977 y 1985 comenzaron a aparecer múltiples estudios sobre la violencia de los años cincuenta; no obstante, cuando irrumpe la violencia de los años ochenta, a mediados de esa década, el interés por este tipo de estudios pasa a un segundo y tercer plano, y todos los esfuerzos se desplazan al estudio de la violencias contemporáneas. Se conocen incluso casos individuales en los cuales el cambio de tema ha sido evidente. No deja de resultar extraña esta situación. ¿Es posible acaso que se presente una discontinuidad tan radical entre dos épocas, en un período tan breve? Cincuenta años es el espacio para el desarrollo escaso de tres generaciones, que en algún momento, durante este lapso, han convivido juntas. Tenemos incluso el caso de personas comprometidas con las violencias actuales, como es el caso de Tirofijo, que han sido actores de todas las guerras y las violencias desde 1948. La mayor parte de las zonas donde se estableció la guerrilla en los años sesenta son zonas donde anteriormente había existido violencia: norte de Antioquia y sur de Bolívar con el EPL, Santander con el ELN, y ni se diga de las FARC que proceden en línea directa de la violencia años cincuenta. Sabemos además que las formas de la memoria colectiva son de largo plazo, y no simples fenómenos coyunturales. El propio Marx en *El 18 Brumario de Louis Bonaparte* lee y descifra las revoluciones de medio siglo en Francia en 1948-51 a la luz de la revolución francesa ocurrida sesenta años antes, pero para nosotros parece que las cosas funcionan de otra manera, cuando se trata de un período de escasos cincuenta años.

Pensar la violencia en su dimensión histórica, de tal manera que podamos establecer continuidades entre diversos períodos, muy cercanos en el tiempo, exige abandonar la concepción estrictamente instrumentalista de la violencia, que sólo busca intereses en juego, y pensar en las dimensiones expresivas de los fenómenos violentos. Y para ello necesitamos apelar a

una teoría de la cultura, que deslinde su campo con la noción de “cultura de la violencia”, y en la cual tengan sentido categorías sociológicas distintas como las siguientes: procesos de socialización, dinámica de las generaciones, imaginarios colectivos, sociología del acto criminal, violencia como discurso, la teoría de la memoria colectiva, etc. Algunas de estas categorías están presentes en las reflexiones que siguen.

No obstante, la imposibilidad de establecer continuidades entre la violencia años cincuenta y la violencia actual no se refiere solamente a un problema de la formación intelectual de los investigadores o de la precariedad de las categorías utilizadas en los análisis; tiene que ver con las características mismas del fenómeno que se estudia. La violencia de los años cincuenta corresponde a un período que se ha buscado a toda costa soslayar en la vida política nacional por parte de los actores políticos. Traigo a cuento aquí la excelente descripción que hace Daniel Pécaut de la manera cómo la violencia años cincuenta ha sido vivida y asimilada por los actores políticos: “No es casual que en las décadas siguientes la *Violencia* no haya sido invocada de modo alguno como un mito de los orígenes, donde pudiera estar contenida en potencia la historia posterior. Ninguno de los participantes ha logrado instalarse en una posición desde la cual le sea posible colocarse por fuera de sus efectos, y dar un sentido al conjunto de los acontecimientos. Los vencedores se han cuidado de no hacer alarde de su éxito; los vencidos no han encontrado allí la promesa de una futura compensación. Las generaciones posteriores no han descubierto en ella un momento de creación de una nueva representación de lo político, y no han buscado apropiarse, por un proceso de identificación, la figura de uno u otro de los protagonistas”².

El Frente Nacional contribuyó a convertir la violencia de los años cincuenta en una especie de “interrupción” del desarrollo ordinario de la vida nacional. Con la fórmula de alternación de los partidos en el poder se trataba de regresar a un arreglo que ya se había ensayado en los años cuarenta. El pacto del Frente Nacional era sobre todo una política convenida de impunidad y de “perdón y olvido” frente a los crímenes cometidos a nombre del bipartidismo. Frente a un “traumatismo” social de tal magnitud, como lo fue la violencia de los años cincuenta, la terapia oficial fue el olvido, puro y simple. A este respecto, es muy interesante estudiar la reacción que produjo la publicación del libro *La Violencia en Colombia* en 1962. Creo que las reacciones suscitadas por la publicación de este libro nos permite definir claramente uno de los eslabones que nos permiten ligar esas violencias con las contemporáneas.

² Pécaut, Daniel, Orden y Violencia, Siglo XXI-Cerec, Bogotá, 1987, pag. 496.

El hecho de soslayar la violencia de los años cincuenta quiere decir que no se ha construido un discurso y una narración de estos acontecimientos, como si ha ocurrido con otros acontecimientos de la llamada “historia patria”. Los sociólogos, historiadores y economistas que han estudiado este fenómeno no han logrado aún producir una narración que permita integrar ese “trauma” colectivo, por decirlo de alguna manera, en la secuencia de unos acontecimientos, e integrarlo, de manera coherente, a una memoria colectiva. Lo que ha ocurrido es un proceso de denegación, en el sentido freudiano del término, en el cual se reconoce la existencia de un hecho, pero se rechaza su significado. No obstante, la “Violencia” con mayúscula existe en la memoria colectiva del país, así se haya querido “denegar” su significado.

La noción de memoria colectiva no tiene tradición ni trayectoria en la sociología colombiana, ya que sólo hemos sido formados para detectar intereses en juego. La noción de memoria colectiva pertenecería a una “sociología de la cultura” y ya sabemos que la sociología de la cultura es el “cuarto de San alejo” de la sociología, donde se arrojan todos los “residuos” que no caben en los parámetros de los estudios económicos, sociales y políticos. Además, los procesos sociales tienen un diferente nivel de temporalidad y los procesos de la memoria colectiva sólo tienen sentido en el largo plazo. Un buen ejemplo del estudio de la memoria colectiva lo podemos encontrar en Marx de quien cito textualmente un párrafo que todos conocen: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionarias es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con ese disfraz de vejez venerable representar la nueva escena de la historia universal”³. Esta cita es una invitación a ver los procesos sociales con otros ojos. ¿Por qué no pensamos nuestra propia violencia con estos criterios? Las líneas siguientes son un intento de hacerlo.

Formulemos entonces una hipótesis: existe en Colombia una memoria colectiva de la violencia de los años cincuenta, que se remonta incluso a la tradición de las guerras civiles del siglo XIX, y que se encuentra presente en la violencia que padecemos actualmente, y es eficaz para producir comportamientos. La posibilidad de pensar la continuidad entre las formas

³ Marx, Karl, 18 Brumario de Louis Bonaparte, múltiples ediciones.

de la violencia contemporánea y las violencias pasadas pasa por el hecho de colocar la memoria colectiva en el centro del análisis.

La memoria colectiva no es un mero fenómeno de representaciones sociales. La memoria colectiva esta compuesta por unas prácticas que vamos a llamar inerciales, unas representaciones (o un contenido) y unos procesos de comunicación que hacen posible que esas prácticas y esos contenidos se comuniquen y se transmitan de generación en generación y adquieran un arraigo, una dinámica y una temporalidad propias, distintas a los que tienen los procesos económicos, sociales y políticos. La memoria colectiva tiene su substrato en los procesos de socialización política y en la dinámica de las generaciones, que constituyen los mecanismos que garantizan su reproducción.

Entendida, pues, la violencia en su dimensión expresiva, podemos encontrar que entre la violencia de los años cincuenta y la violencia contemporánea, existen al menos tres grandes continuidades.

Los que hablan de la discontinuidad entre la violencia de los años cincuenta y la violencia contemporánea aluden por lo general al hecho de que en las violencias actuales no existe un enfrentamiento bipartidista, que es la característica fundamental de la violencia años cincuenta. Aquí también existe un error de perspectiva. Ya no tenemos enfrentamiento bipartidista, pero la misma lógica de la exclusión de los años cincuenta, que definía en ese momento la diferencia entre el liberal y el conservador, permanece, así haya cambiado de contenido.

Para los años cincuenta como afirma Daniel Pécaut, la división social expresada a través de los partidos no se refería a "una oposición entre los valores que cada uno de los dos partidos representaba", sino a "*dos tipos de naturaleza*", entre las cuales sólo una era reconocida como humana: existía una naturaleza conservadora, asociada al reconocimiento del fundamento sobrenatural de la naturaleza humana, y una naturaleza liberal derivada de la denegación de este fundamento sobrenatural"⁴. Entre ambos tipos de naturaleza no existía mediación posible, en tal forma que la única salida era la violencia y el exterminio del otro.

⁴ PECAUT, Daniel, Orden y violencia, Siglo XXI, Bogotá, 1987, pag. 535.

A pesar de que en los años ochenta el bipartidismo liberal conservador ya no desempeña el papel de elemento único de definición de la división social, una afirmación similar de la diferencia, con otro contenido, aparece en las más diversas formas de relación social. "En muy diversos ámbitos de la vida colombiana (en la ideología de los grupos paramilitares, en los discursos políticos, en las formas educativas, en las violencias de "limpieza", etc.) observamos que se conforma un modelo de relación social -la imagen de la "buena sociedad", el "mundo de las gentes de bien", etc.- que se considera a si misma como el marco de referencia que constituye lo social instituido: la figura de un "adentro", de un "interior bueno". Sin embargo, esta imagen se constituye siempre con relación a un "por fuera", conformado por todo aquello que el modelo de referencia no puede reconocer como propio y arroja fuera de si, al exterior. El contenido de ambos términos de la relación varía de acuerdo a los momentos históricos y los ámbitos sociales de que se trate; no obstante, lo más importante no son los contenidos, sino la permanencia de la división misma. Una escisión profunda se establece así entre dos imágenes entre las cuales no hay síntesis posible. Lo social está conformado por dos "substancias" distintas, la una definitoria de un "ser" y la otra de un "no ser", abocados a la más absoluta lógica de exclusión: la afirmación de la identidad de uno de los actores tiene como condición la negación absoluta de la identidad del otro, o viceversa"⁵.

El predominio de este tipo de relación social va de la mano con el hecho de que existe en Colombia una anulación, relativa pero eficaz, de todo aquello que prefigure una instancia normativa. La interpretación que más éxito ha tenido sobre la violencia, años cincuenta y años ochenta y noventa, es aquella que señala que el fenómeno está relacionado con una crisis del Estado y sus instituciones. No obstante, una vez más, se tiene del Estado una visión casi estrictamente instrumental. Aquí una vez más se entra a "reificar". Los indicadores que se usan para afirmar la ausencia o la presencia del Estado, o el derrumbe bajo el supuesto de que alguna vez existió, son indicadores como la presencia de las fuerzas del orden, los aparatos de justicia, o las obras públicas. Pero el Estado es mucho más que una presencia física y tangible. El Estado, más que un aparato es una forma de autoridad. El Estado es el representante simbólico de la unidad de un grupo en un territorio, y tiene una dimensión expresiva fundamental. La ausencia del Estado se refiere fundamentalmente al hecho de que, más allá de si está presente o ausente, las gentes no lo reconocen, no lo acatan, y por el contrario, lo asumen como un elemento más en el conflicto. La precariedad de la presencia del Estado como ente regulador y mediador, o

⁵ Valencia, Alberto, Violencia en Colombia años ochenta y reforma constitucional, Editorial Universidad del Valle, Cali, 1997. Ver cap. 3.

como constructor de identidades sociales, o como representante simbólico de la integración de un grupo, no lo inventó la violencia de los años ochenta y noventa. La noción de autoridad que aquí está implícita es uno de los componentes fundamentales de una memoria colectiva, que tiene una dinámica y una temporalidad muy distinta a la del desarrollo económico, los conflictos sociales, o el juego de la mecánica política.

Otro elemento de continuidad entre la violencia de los años cincuenta y la violencia actual es el crimen atroz. Casi todo el mundo conoce de memoria los horrores de la violencia de los años cincuenta, y muy pocos quieren que se los recuerden. Para muchos describir los crímenes sería una especie de “masoquismo”, como decía el sociólogo Fals Borda en los años sesenta. No obstante, la descripción detallada de estos “horrores” es una tarea fundamental del estudio de la violencia. La manera específica como opera la violencia no es gratuita. En un pequeño libro que publicaré próximamente enumero al menos ocho características: el descuartizamiento del cuerpo del adversario como fin primordial, la muerte prolongada en el tiempo para hacer sufrir a la víctima que debía ser consciente de su propia destrucción, la búsqueda privilegiada de los significantes relacionados con la sexualidad y la reproducción, las prácticas de ensañamiento sobre los cadáveres, las grandes matanzas colectivas e indiscriminadas, la presencia del insulto como acompañamiento indispensable del acto, la fantasía que agrega dimensiones nuevas a los hechos reales, el desdoblamiento de los comportamientos y el carácter horizontal de la lucha. Y todo ello orientado a convertir el crimen en un espectáculo, en un lenguaje y en una forma de comunicación.

Pero cuando venimos a la época actual encontramos una continuidad innegable. El hecho de que el machete haya sido remplazado por la sierra eléctrica o que las escopetas de fisto hayan sido reemplazadas por la mini-ingram no marca mucha diferencia cuando se trata del ritual de la muerte. En una tesis de grado de la maestría de sociología en la cual fui director, pudimos observar que en diferentes espacios sociales (la familia, el paramilitarismo, la guerrilla, las violencias de limpieza, la delincuencia común, etc.) el crimen atroz es la constante. Un grupo de jóvenes llevan a cabo un asalto con el fin de obtener fondos para casarse y terminan destrozando las secretarías del lugar, una mujer golpea a su esposo que la arremete borracho y termina despedazándolo y enterrándolo en el jardín de su casa, y así sucesivamente para no hacerme interminable⁶.

⁶ Rodríguez, Alba Nubia, Los excesos de la violencia en Colombia. La voz de sus actores. Tesis de grado para obtener el título de Maestría en sociología, Universidad del Valle, enero de 1999.

La forma del crimen no es un asunto del azar, o la expresión de un instinto no-social o de un atavismo primitivo o animal. Si el crimen es la forma como se disuelve una relación social, en la forma misma de su disolución se puede observar las características de su conformación llamada normal. A ruptura de una relación social no necesariamente conduce al crimen; pero si lo hace habría que entender por qué y cómo lo hace. El hecho es que en Colombia hemos tenido un tipo de relación social, cuya disolución conduce al crimen, y eso no es un invento de la violencia años noventa.

Otro elemento de continuidad entre la violencia años cincuenta y la violencia de los ochenta y noventa habría que buscarlo en el discurso como tal. La violencia no es sólo un conjunto de actos, o un juego de intereses; la violencia es también un discurso. No puedo explayarme en detalles al respecto, pero quisiera poner un ejemplo. Cuando leemos la defensa de la implantación de la pena de muerte que hace un conocido dirigente nacional perteneciente a una de las más influyentes y tradicionales familias del país, no encontramos allí acaso la misma referencia que conocimos en los años cincuenta? Al respecto escribe: "Fuera con la hipocresía y la falsa piedad por unas bestias salvajes en vía de proliferación; gastemos nuestros esfuerzos en defender las especies animales amenazadas, no a los degenerados morales ni a los sanguinarios que persiguen con saña a las gentes de bien. Recuperemos a Colombia para los buenos"⁷. Con este tipo de afirmaciones no se trata sin embargo del simple desvarío de un hombre notable, sino más bien, independientemente de quien sea su emisor, de la expresión de un sentido común presente en la vida colombiana. El grado de aceptación y de generalización de esta forma particular de "descifrar" las divisiones sociales nos permitiría entender por qué Colombia ha podido convivir con tales dosis de violencia, sin que el país se reviente. Es en el marco de este tipo de "imaginario" que la violencia encuentra el espacio de su desenvolvimiento.

La transmisión de estos contenidos opera por la vía de unas formas de socialización política y a través de la dinámica propia a las generaciones. El tema de las generaciones ha sido puesto sobre el tapete por el filósofo español Ortega y Gasset, pero no ha tenido mucho eco en Colombia, porque no es acorde con los modelos de análisis en los que nos hemos formado. Todo el mundo sabe en Colombia que la socialización política no opera como socialización secundaria, es decir, por fuera de la familia, sino como socialización primaria, en el marco de la familia, pero nunca se ha dado la importancia debida a este factor. En la violencia en Colombia se juegan

⁷ El Tiempo, septiembre 17 de 1992, pag. 5A, resaltado nuestro.

intereses económicos, sociales y políticos, nadie lo duda, pero su substrato fundamental, cuando se piensa en la dimensión expresiva de la violencia, se encuentra en el espacio de lo privado.

Todo estas reflexiones han estado orientadas a defender la importancia de una sociología de la cultura como espacio fundamental para la comprensión del fenómeno violento en Colombia. Y es por esto, precisamente, que sólo a través de la educación podemos salir de la encrucijada. Los intelectuales y los científicos sociales tenemos una tarea que cumplir en el estudio de los procesos violentos en un doble sentido: reconstruyendo la trama del desarrollo histórico, para lograr entender la violencia en la trama de nuestra propia historia; y haciendo un aporte la comprensión de que la violencia que padecemos, si bien no es un resultado de una “cultura de la violencia”, no es tampoco “un rayo caído en cielo sereno”, según la célebre expresión que utiliza Marx en el 18 Brumario.

“Colombia paga actualmente un precio por la manera como sus elites pretendieron arreglar el problema de la violencia de los años cincuenta”, dice el profesor Pécaut. Esta frase se podría complementar con una frase de Freud: “Lo que permanece incomprendido retorna una y otra vez sin descanso como un alma en pena, hasta hallar comprensión y redención”.